

Índice

DESPLAZADOS AMBIENTALES

- 5 INTRODUCCIÓN
Equipo de coordinación

OPINIÓN

- 9 ENTREVISTA A MOLLY CONISBEE: ¿DESPLAZADOS O REFUGIADOS AMBIENTALES?
Ecología Política
- 11 LOS REFUGIADOS DEL CONSERVACIONISMO
Carlos A. Vicente
- 13 LA CRÍTICA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DESDE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y LAS PROPUESTAS DE DECRECIMIENTO
Jordi Roca Jusmet
- 18 SOBRE ECOLOGÍA Y LUJOS SENCILLOS
Jorge Riechmann

EN PROFUNDIDAD

- 21 LOS REFUGIADOS AMBIENTALES Y SUS CONSECUENCIAS EN EL FUTURO
Rafael Reuveny y Ashley Peterson Allen
- 37 LA EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES COMO GENERADORA DE REFUGIADOS AMBIENTALES
Nicholas Hildyard
- 51 ¿POR QUÉ LA CHINA RURAL ES IMPORTANTE PARA EL MUNDO?
Rafael Poch de Feliu

ESPAÑA

- 59 ¡MODERNIZACIÓN O EMIGRACIÓN!: DESPLAZADOS AMBIENTALES Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN GALICIA DESDE 1950
Francisco Seijo
- 62 EL DECLIVE DE LA POBLACIÓN RURAL Y AGRARIA
Roser Nicolau
- 65 MIGRACIONES: EL IMÁN DE LA ESPECULACIÓN TURÍSTICA Y RESIDENCIAL
Joan Buades

EUROPA

- 69 LA NORMATIVA JURÍDICA APLICABLE A LOS DESPLAZADOS POR CAUSAS MEDIOAMBIENTALES
Nuria Arenas
- 72 MIGRACIONES Y DESERTIFICACIÓN EN PORTUGAL
André Vizinho
- 75 EL COMERCIO DE EMISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA: JUEGO SUCIO
Kevin Smith

AMÉRICA DEL NORTE

- 81 MIGRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
Nashelly Ocampo, Ana Alicia Peña, Octavio Rosas-Landa
- 84 LAS CRECIENTES AMENAZAS DE DESASTRE Y SU POTENCIAL RIESGO DE DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN
Zoë Chafe

ASIA E INDONESIA

- 89 LA DESECACIÓN DE UN MAR: DE CÓMO EL ALGODÓN DEJÓ AL ARAL SIN AGUA Y SIN GENTE
Juliette Williams
- 93 DESPLAZADOS POR EL TSUNAMI EN ASIA
Michael Renner*
- 98 VIAJE A ORISSA
Joan Martínez-Alier y Leah Temper*
- 102 SALUD AMBIENTAL EN ISRAEL
Avi Blau



ÁFRICA

- 105 LOS BOSQUIMANOS GANA Y GWI DEL KALAHARI
Ana M. Machado
- 108 MARINEROS A LA MAR O PESCADORES DESPLAZADOS
Ecodesarrollo Gaia
- 111 CONSIDERACIONES AMBIENTALES SOBRE LOS DESPLAZAMIENTOS HUMANOS EN LIBERIA
Grant Wroe-Street

AMÉRICA LATINA

- 115 ENTRE LA INUNDACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO
Juan Pablo Soler y Danilo Urrea
- 118 PASCUA-LAMA: EL ORO BAJO LOS GLACIARES
Alba Sánchez Corominas y Leire Urkidi Azkarraga
- 121 EL INTERCAMBIO ECOLÓGICAMENTE DESIGUAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO
Mario Alejandro Pérez-Rincón
- 124 LAS RESISTENCIAS AL ETNOCIDIO PETROLERO. ESTRATEGIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA SOBREVIVIR EN UN TERRITORIO INVADIDO
Marc Gavaldà
- 127 LOS DESPLAZADOS DE ENDESA
Pedro Cayuqueo Millaqueo

REDES DE RESISTENCIA

- 133 FORO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, NUEVAS ALIANZAS
Esther Vivas
- 139 EL CONFLICTO EN TORNO AL PUERTO DE GRANADILLA
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción
- 142 «GUERRAS DEL AGUA» EN SUDÁFRICA: MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Josep Maria Antentas
- 145 AUDIENCIA PRELIMINAR PETROLERA. TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. SESIÓN COLOMBIA

CRÍTICAS

LIBROS

- 151 SOBREVIVIR AL DESARROLLO. DE LA DESCOLONIZACIÓN DEL IMAGINARIO ECONÓMICO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTERNATIVA
- 153 RAÍCES ECONÓMICAS DEL DETERIORO ECOLÓGICO Y SOCIAL

WEBS

- 154 GEO DATA PORTAL - MAPAS DE PETRÓLEO DE OILWATCH - EARTH TRENDS. ENVIRONMENTAL INFORMATION - WORLD MAPPER. THE WORLD AS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE

INFORMES

- 155 LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EL MUNDO
- 156 INFORME SOBRE URBANISMO ESPAÑOL DEL PARLAMENTO EUROPEO



AV Monografías

Abaco

Academia

ADE Teatro

Afers Internacionals

Africa América Latina

Ajoblanco

Álbum

Archipiélago

Archivos de la Filmoteca

Arquitectura Viva

Arte y Parte

Atlántica Internacional

L'Avenç

La Balsa de la Medusa

Bitzoc

La Caña

CD Compact

El Ciervo

Cinevídeo 20

Clarín

Claves de Razón Práctica

CLIJ

El Croquis

Cuadernos de Alzate

Cuadernos Hispanoamericanos

Cuadernos de Jazz

Cuadernos del Lazarillo

Debats

Delibros

Dirigido

Ecología Política

ER, Revista de Filosofía

Experimenta

Foto-Vídeo

Gaia

Generació

Grial

Guadalimar

Guaraguao

Historia, Antropología y Fuentes Orales

Historia Social

Insula

Jakin

Lápiz

Lateral

Leer

Letra Internacional

Leviatán

Litoral

Lletra de Canvi

Matador

Ni hablar

Nickel Odeon

Nueva Revista

Opera Actual

La Página

Papeles de la FIM

El Paseante

Política Exterior

Por la Danza

Primer Acto

Quaderns d'Arquitectura

Quimera

Raíces

Reales Sitios

Reseña

RevistAtlántica de Poesía

Revista de Occidente

Ritmo

Scherzo

El Siglo que viene

Sintesis

Sistema

Temas para el Debate

A Trabe de Ouro

Turia

Utopías/Nuestra Bandera

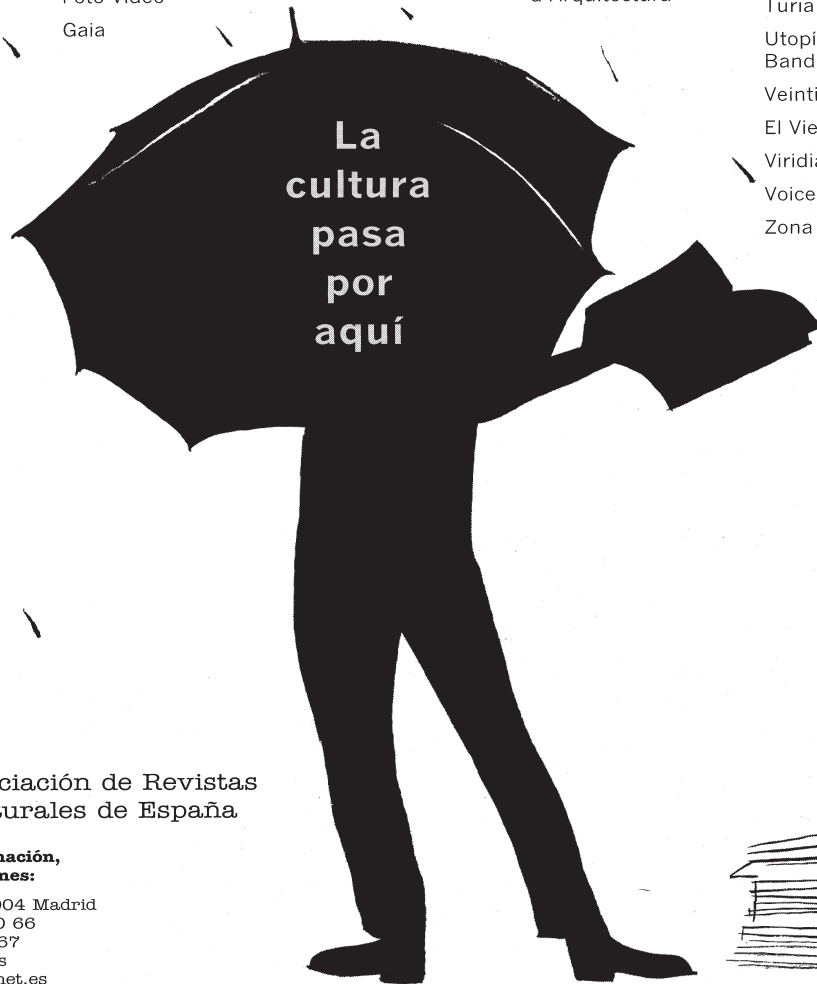
Veintiuno

El Viejo Topo

Viridiana

Voice

Zona Abierta



Asociación de Revistas Culturales de España

Exposición, información, venta y suscripciones:

Hortaleza, 75. 28004 Madrid
 Teléf.: (91) 308 60 66
 Fax: (91) 319 92 67
 http://www.arce.es
 e-mail: arce@infor.net.es



MINISTERIO
DE CULTURA

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades en España.

Coordinación:

Joan Martínez Alier, Ignasi Puig Ventosa, Anna Monjo Omedes, Miquel Ortega Cerdà
coordinacion@ecologiapolitica.info

Secretariado técnico:

Ent, medio ambiente y gestión: www.ent-consulting.com
Marta Jofra: secretariado@ecologiapolitica.info

Administración:

Icaria editorial, Arc de Sant Cristòfol, 11-23 - 08003 Barcelona
Tels. 93 301 17 23 - 93 301 17 26 - Fax 93 295 49 16
icaria@icariaeditorial.com - www.icariaeditorial.com

Web de la revista: www.ecologiapolitica.info

Edita: **Icaria** ✿ editorial

Consejo de Redacción:

Gualter Barbas Baptista, Janekke Bruil, Gustavo Duch, Núria Ferrer, Eduardo García Frápolli, Marc Gavaldà, Gloria Gómez, Eva Hernández, David Llistar, Neus Martí, Patricio Igor Melillanca, Ivan Murray, Marta Pahissa, Jesús Ramos Martín, Albert Recio, Carola Reintjes, Jorge Riechmann, Tatiana Roa, Jordi Roca Jusmet, Carlos Santos, Carlos Vicente, Núria Vidal, Joseph H. Vogel.

Consejo Asesor:

Federico Aguilera Klink (Tenerife), Elmar Altaver (Berlín), Nelson Álvarez (Montevideo), Manuel Baquedano (Santiago de Chile), Elisabeth Bravo (Quito), Esperanza Martínez (Quito), Jean Paul Deléage (París), Arturo Escobar (Chapel Hill, N.C.), José Carlos Escudero (Buenos Aires), María Pilar García Guadilla (Caracas), Enrique Leff (México, D.F.), José-Manuel Naredo (Madrid), José Augusto Pádua (Río de Janeiro), Magaly Rey Rosa (Guatemala), Silvia Ribeiro (México, D.F.), Giovanna Ricoveri (Roma), Víctor Manuel Toledo (México, D.F.), Juan Torres Guevara (Lima), Ivonne Yanez (Lima).

Diseño: Iris Comunicación

Fotografía de la cubierta: Environmental Justice Foundation

Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir igual. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Esto es un resumen legible del texto legal (la licencia completa) se encuentra disponible en
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es>

Impreso en Barcelona
Romanyà/Valls, s.a. - Verdaguer, 1 - Capellades (Barcelona)

ISSN: 1130-6378
Dep. Legal: B. 41.382-1990



El papel de este libro es 100% reciclado, es decir, procede de la recuperación y el reciclaje del papel ya utilizado. La fabricación y utilización de papel reciclado supone el ahorro de energía, agua y madera, y una menor emisión de sustancias contaminantes a los ríos y la atmósfera. De manera especial, la utilización de papel reciclado evita la tala de árboles para producir papel.

Introducción

Equipo de coordinación

Durante el primer semestre de este año hemos asistido al repunte político y mediático, de las discusiones sobre cambio climático. Diversos informes: el informe Stern, el cuarto informe presentado por el IPCC, o el oscarizado reportaje de Al Gore, han facilitado que organizaciones político-económicas como la Unión Europea (presidida en este período por Alemania) y el G-8 (entre otras) se posicionen de nuevo sobre la materia. En *Ecología Política* se ha criticado en diversas ocasiones algunas orientaciones generales de las políticas actuales de cambio climático, a nuestro entender excesivamente centradas en la eficiencia económica y descuidando, en buena medida, los principios de justicia ambiental y responsabilidad del emisor. En este mismo número Kevin Smith (del Transnational Institute) nos ofrece un nuevo análisis centrándose en el comercio de emisiones de la Unión Europea.

Pero si traemos a colación el resurgimiento de la temática del cambio climático es para destacar un aspecto fundamental que de nuevo se nos hace presente: la necesidad de ser capaces de transmitir al conjunto de la población los aspectos más problemáticos para la vida de las personas de la relación entre el modelo económico y el medio ambiente.

En el caso del cambio climático esta relación poco a poco se hace más presente para la opinión pública (aunque ya existían indicios y evidencias suficientes desde hace años); en otros ámbitos como en el caso de la existencia de desplazados ambientales la problemática aún no ha sido asumida ni por los medios de comunicación, ni mucho menos en el ámbito político. No obstante, los desplazados ambientales existen, se encuentran en todo el mundo y son una realidad

palpable pero ignorada. Por ello hemos decidido dedicar este número a esta temática.

Las dos cuestiones (cambio climático y desplazados) van juntas. Algunas causas del cambio climático, como la minería de carbón y la extracción de petróleo, son causas también de desalojos locales. Algunas políticas predicadas contra el cambio climático como la minería de uranio, las plantaciones de agro-combustibles, y las plantaciones de árboles para absorber carbono, causan daños locales, «desiertos verdes» y más desalojos. Por último, el cambio climático, por la subida del nivel del mar y otros efectos, llevará a un enorme crecimiento de los refugiados ambientales tal como se explica en este número. La industria nuclear también es responsable de algunos desalojos, ya sea en territorios contaminados por ensayos militares o en casos como en Chernobyl donde la zona que circunda la central que explotó en 1986 fue evacuada de residentes en unos cincuenta kilómetros a la redonda.

La Organización de Naciones Unidas en el informe *La situación de los refugiados en el mundo. Desplazamientos humanos en el nuevo milenio*, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce la existencia de desplazados ambientales (ver apartado de crítica de informes en esta revista), al tiempo que señala como un problema importante la inexistencia de la figura del *Refugiado Ambiental* en el ámbito jurídico internacional. Molly Conisbee y Núria Arenas (Universidad de Huelva) tratan de la necesidad de dar respuestas a esta realidad en sendos artículos.

Los desplazados ambientales se originan por diversas causas; millones de personas son desplazadas directa o indi-

rectamente a causa de la degradación ambiental o desastres naturales o provocados por el hombre. Según la Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja, un promedio de 211 millones de personas anuales han sido afectadas durante la última década por desastres naturales —triplicando el promedio de la década anterior y siendo cinco veces la cifra de personas afectadas por conflictos armados. Muchas de ellas se han visto obligadas a un desplazamiento forzado. Rafael Reuveny (de la Universidad de Indiana) nos explica en su artículo, del apartado *En profundidad*, cómo este fenómeno afectará aún a un mayor número de personas en un futuro inmediato debido al creciente efecto del cambio climático y cómo ya tenemos ejemplos de que si se ignora la existencia de desplazados ambientales pueden generarse conflictos importantes.

Pero no sólo se producen desplazamientos ambientales debido a los desastres naturales. Una buena parte de los desplazados lo son debido a la extensión de una multitud de grandes infraestructuras mal (o simplemente no) planificadas, donde se externalizan los impactos ambientales y se ignoran los derechos de los habitantes donde se realizará la actividad. El mismo Banco Mundial calcula que unos 10 millones de personas anualmente son desplazadas y reasentadas forzosamente debido a grandes proyectos de infraestructuras, ya sean represas, urbanizaciones, canales de irrigación, etc. Dada la capacidad manifiesta del Banco Mundial de infravalorar sus impactos, podemos visualizar fácilmente que estamos hablando de cifras importantísimas. En esta revista exponemos algunos casos relacionados con represas (por ejemplo a través del artículo de Juan Pablo Soler y Danilo Urrea —CENSAT— sobre desplazados y represas en Colombia o el artículo de Pedro Cayuqueo referente a las represas chilenas) y con la minería (por ejemplo a través del artículo sobre los bosquimanos desplazados por la extracción de diamantes en Botswana escrito por Ana Machado —Survival—, los desplazados adivasis en Orissa-India, escrito por Joan Martínez Alier y Leah Temper, o el artículo sobre desplazados ambientales e industria extractiva que nos propone Nicholas Hildyard (de la organización inglesa Corner House), entre otras grandes infraestructuras.

También se originan desplazados ambientales por una mala gestión de los recursos naturales, ya sean éstos marinos o terrestres. El caso de los pescadores africanos desplazados por la sobreexplotación de sus recursos —en este caso realizada principalmente por empresas transnacionales— que acaban en España vendiendo CD ilegales, escrito desde la organización Ecodesarrollo, es un ejemplo de cómo una sobreexplotación pesquera transnacional acaba desplazando a pescadores locales que son —para mayor ofensa— posteriormente perseguidos en el país desde el que se controla la sobreexplotación. El caso de los desplazados por el cultivo de algodón en Uzbekistán, escrito por Juliette Williams —Environmental Justice Foundation—, nos muestran claramente cuán determinante puede ser en términos de desplazamientos una mala gestión en el ámbito agrícola cuando se fundamenta en un modelo orientado a la exportación que requiere el uso intensivo de agua.

Las políticas agrarias y del territorio son fundamentales en la aceleración o frenado de los desplazamientos (en ocasiones forzados, en ocasiones voluntarios) del entorno rural a las ciudades. Por ello esta temática es tratada en varios artículos, entre los que destaca el análisis que Rafael Poch de Feliu hace de las políticas agrarias en China y su influencia en los desplazamientos de población y en el futuro de esta potencia emergente.

La temática de los desplazados ambientales es amplia, y en la revista tratamos únicamente de abrir un espacio de información y reflexión que esperemos contribuya, en la medida de lo posible, a la incorporación en la discusión política y económica de este tema de máxima actualidad.

Al igual que en números anteriores aprovechamos esta presentación para informaros que continuamos tratando que la revista llegue al mayor número de personas posible. En parte esto ya va siendo posible gracias a las nuevas entidades colaboradoras que se han incorporando en los últimos meses (podéis ver la lista actualizada en el apartado de colaboradores de www.ecologiapolitica.info). Igualmente esperamos que las nuevas ofertas de suscripción y promoción que se presentan en este número de la revista, a través de los correspondientes formularios de inscripción, sean de vuestro interés y nos ayuden a ampliar

la difusión que todos deseamos. Gracias desde ahora por vuestra colaboración.

El próximo número, que se publicará en diciembre de 2007, tratará sobre los biocombustibles, una temática

compleja. Desde ahora mismo esperamos vuestras aportaciones. Para cualquier duda podéis contactar con Marta Jofra, responsable del secretariado de la revista a través del correo electrónico secretariado@ecologiapolitica.info.



ecología política

en América Latina

Números actuales y atrasados disponibles en las **Entidades Colaboradoras** (véase listado en ww.ecologiapolitica.info) y en los siguientes puntos comerciales:

ARGENTINA
Ediciones del Aguazul
Av. Independencia, 1860
Tel. 43 81 57 08 - Fax 43 82 36 93
1225 Buenos Aires
aguazul@007ciudad.com.ar

COLOMBIA
Siglo del Hombre
Carrera 31A, N° 25B-50
Tel. 337 94 60 - 344 00 42 - Fax 337 76 65
Santa Fé de Bogotá
info@siglodelhombre.com

ECUADOR
Libri Mundi
Juan León Mera, 23-83 y Wilson - P.O. Box 17-01
Tel. 252 16 06 -3029 Quito
librimundi@librimundi.com

GUATEMALA
Sophos
Avenida La Reforma 13-89, Zona 10
Local 1 Centro Comercial El Portal
Tel. 23 34 67 97 - Fax 23 63 24 69
Guatemala
sophos@sophosenlinea.com

MÉXICO
Editorial Juventud SA de CV
Herodoto, N° 42 - Tel. 203 97 49
Colonia Anzures
11590 México, D. F.
juventud.mex@ghmmexico.com

VENEZUELA
Euroamericana de ediciones
Avda. Francisco Solano
Edif. Lourdes, piso 4, ofc. 11 - Sabana Grande
Tel. 761 22 80 - Fax 763 02 63
Apto. de Correos 76296
1070 Caracas - Venezuela
angelsuc@cantr.net



Opinión

Entrevista a Molly Conisbee: ¿Desplazados o refugiados ambientales?

Ecología Política

Los refugiados del conservacionismo

Carlos A. Vicente

La crítica al crecimiento económico desde la economía ecológica y las propuestas de decrecimiento

Jordi Roca Jusmet

Sobre ecología y lujos sencillos

Jorge Riechmann

Entrevista a Molly Conisbee

Ecología Política

Molly Conisbee es la Directora Asociada de Comunicaciones del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Inglaterra, pero en esta entrevista realiza sus aportaciones a título individual. Es coautora del documento *Environmental Refugees: The Case for Recognition*¹ junto a Andrew Simms, Director de Políticas en la New Economics Foundation (nef). En esta entrevista responde a las preguntas de Ecología Política.



EP. *¿Por qué deberíamos preocuparnos de la temática de los desplazados ambientales? ¿Se trata de un conjunto de problemas locales o un problema global?*

Algo que está claro es que muchos expertos creen que la desertificación, la elevación de los niveles del mar, la disminución de disponibilidad de agua, etc. conllevará una explosión de desplazados/refugiados ambientales; Janos Bogardi del Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas, Bonn, sostiene que el deterioro ambiental desplaza ya hoy día a unos 10 millones de personas al año, y que la tendencia es a aumentar. Así pues esta es una temática claramente global, los desplazados tendrán que ir a algún sitio.

EP. *En el documento «Environmental Refugees – the case for recognition» apostaban por el reconocimiento de la figura del «refugiado ambiental» ¿Por qué?*

En el documento que ha citado utilizamos la idea «refugiado ambiental» más para atraer la atención pública que para examinar las sutiles diferencias entre «desplazado» y «refugiado». Algunos escritores critican la idea de «refugiado ambiental» porque creen que desnaturaliza la idea de refugiado, pero nuestra opinión es que la definición del estatus de refugiado —realizada en la Convención de Ginebra— fue contingente a la situación política, social y económica de la Europa de posguerra, y que una definición contemporánea debería reconocer los cambios en nuestro entorno social. Sin duda deberían incluirse grupos de población que son desplazados, en algunas ocasiones deliberadamente —piensa por ejemplo en aquellos que pierden sus casas porque el gobierno construye una represa—, cuyos casos puedan ser interpretados como un abuso de poder mediante acciones opresivas, al igual que lo son otras actividades como arrestos arbitrarios o abusos de autoridad.

EP. *¿Qué aportaría el reconocimiento del «refugiado ambiental»?*

¹ El documento puede leerse en <http://www.neweconomics.org/gen/uploads/lpce0g55xjx5eq55mfjxbb5523102003180040.pdf>.

El Dr. Bogardi y otros apoyan la idea del reconocimiento del estatus de refugiado ambiental por la simple razón que esto ayudaría a planificar y priorizar los recursos necesarios para afrontar esta problemática. También significaría que los estados deberían comprometerse formalmente a ayudar a estos colectivos, de la misma manera que lo hacen con otros refugiados. Él sugiere que debería crearse un panel intergubernamental para tratar esta problemática. La Cruz Roja también está de acuerdo, recordándonos que los problemas ambientales desplazan a más gente que la propia guerra.

EP. ¿Cómo se relaciona consumo y desplazados ambientales? ¿Y deuda ecológica y desplazados ambientales?

Tenemos una relación clara entre los niveles de consumo y la degradación ambiental, por ello no supone ninguna dificultad reconocer que el desplazamiento de población es parte del debate de la deuda ecológica. Todos estos elementos están interrelacionados, y pueden ser solo afrontados holísticamente. De hecho «los impactos» asociados a los refugiados también recaen sobre los más pobres. La inmensa mayoría de los refugiados se desplazan a países vecinos, lo que significa que se quedan en África o Asia.

Igualmente, es artificial sugerir que los desplazamientos de las comunidades rurales a las zonas urbanas o son debidos a las políticas nacionales, o son debidos al crecimiento internacional de los mercados y el comercio. Ambos están intrínsecamente ligados debidos a la globalización. Podríamos argumentar que en los siglos XVIII y XIX el desplazamiento de población del ámbito rural al urbano en Inglaterra fue forzado por la revolución industrial. Pero esta a su vez fue acelerada por la existencia del Imperio Británico. Así pues fue un fenómeno nacional, vivido y realizado en un ámbito muy local, pero al mismo tiempo reflejaba un cambio en

las relaciones internacionales, en la esfera del poder y en los mercados.

Las actuales estructuras económicas dependen hasta cierto punto de los desplazados, de la existencia de jerarquías, de la disparidad entre los que tienen y los que no tienen. La narrativa colectiva ha decidido interpretar los desplazamientos como parte del «progreso» – el movimiento del ámbito rural al urbano, la lucha por la supervivencia en las ciudades, etc. se interpretan como pasos para un mayor bienestar. Pero no tenemos por qué verlo de esta manera. No es una cuestión de falta de recursos si no de distribución de recursos y esto es lo que deberíamos estar poniendo en duda.

EP. ¿Cuáles son las principales demandas en vuestro informe?

En nuestra opinión deben afrontarse dos aspectos.

Por un lado es necesario la actualización de la Convención de Ginebra, o la redacción de una nueva Convención. Deben incorporarse aquellos que han sido desplazados por crisis ambientales. Debe proteger a aquellos cuyos gobiernos no tienen el deseo o los recursos para protegerlos.

Por otra parte deben compensarse las deudas ecológicas —el mundo debe reconocer la existencia de deudas ecológicas— definidas como la deuda adquirida por la comunidad global cuando los ciudadanos de un país se apropian de una parte mayor de lo que le corresponde de los «commons» como la atmósfera. Los ciudadanos de los países menos consumidores son acreedores de la comunidad internacional pues están sufriendo el peso de una deuda de carbono. Igualmente se debería llegar a un consenso para medir la deuda ecológica – por ejemplo un nivel por cápita en el consumo de combustibles fósiles. Esto ayudaría a clarificar las obligaciones ecológicas y financieras del sobreconsumo de nuestros países, en particular en el ámbito relacionado con las problemáticas del cambio climático.

Los refugiados del conservacionismo

Carlos A. Vicente*

La paradoja de que ONG dedicadas a la conservación sean las responsables del desplazamiento de millones de personas en todo el mundo muestra hasta que punto ciertas visiones ligadas a la ecología han perdido el rumbo y han sido definitivamente cooptadas por el mismo sistema de muerte y destrucción que amenaza toda la vida planetaria.

Claro que mucho más fácil es comprenderlo si uno observa los vínculos que estas organizaciones dedicadas a la «conservación de la naturaleza» tienen con grandes corporaciones que las financian con montos que resultan pavorosos de solo escucharlos. Todo resulta más claro al ver que organizaciones como Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF) y la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (Wildlife Conservation Society, WCS) reciben el apoyo financiero de grandes fundaciones como la Ford, MacArthur y Gordon y Betty Moore, así como el Banco Mundial, su FMAM, otros gobiernos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), una serie de bancos bilaterales y multilaterales, y empresas transnacionales (Dowie, 2006).

Para los pueblos indígenas que a lo largo de miles de años han convivido y construido diversidad en las selvas, bosques, montañas y llanuras del mundo debe resultar

incomprensible el mensaje que plantea que para conservar la biodiversidad deben alejarse a las comunidades de sus territorios ancestrales.

Sin embargo ese es el eje sobre el que diversos proyectos en Asia, África y América Latina intentan conservar los nuevos Parques Nacionales que se han creado merced a esta nueva inyección de fondos que han recibido estas grandes ONG. De esta manera sociedades enteras como los Batwa, los Maasai, los Ashaninka de Perú, los Gwi y Gana de Botswana, los Karen y Hmong del sudeste de Asia, y los Huaorani de Ecuador están perdiendo sus territorios y convirtiéndose en comunidades pobres y profundamente dependientes.

En todo caso la paradoja es doble: por un lado es inadmisibles que en nombre de la preservación de los ecosistemas se realice el desplazamiento de comunidades exponiéndolas a la marginalidad y la pobreza. Por otra parte el principio que sustenta estas políticas es falso: sin duda han sido las comunidades locales y los pueblos indígenas quienes mejor han sabido preservar sus entornos y ellas son la garantía de su mantenimiento para las futuras generaciones.

Por supuesto que el marco global en el que surgen estos proyectos es claro y brutalmente directo: las organizaciones conservacionistas se proponen conservar el 10% de los ecosistemas planetarios en Parques Nacionales y otros sistemas de reservas mientras el resto se dedica a la agricultura y la producción (Dowie, 2006). Por supuesto que el 90% restante será parte de las tierras que, ya sean dedicadas a la agricultura, la ganadería, la minería u otras industrias,

1 Responsable de información para América Latina de GRAIN (carlos@grain.org)

estarán bajo la explotación del mercado global; esto es en manos de las grandes corporaciones y su explotación depredatoria.

Nadie con un mínimo de sentido común puede pensar que este modelo es «sustentable»; y mucho menos justo. Sin embargo en esa dirección están embarcados y parece bastante difícil que se produzca un cambio que altere el rumbo de las cosas.

Pero el modelo se completa cuando vemos que todos estos procesos va de la mano de varias estrategias complementarias que se están imponiendo bajo el paraguas de los ahora llamados «servicios ambientales»: la privatización de los Parques Nacionales, el ecoturismo, y la entrega de estos espacios para la bioprospección.

Esta vez, el concepto clave se fue desarrollando en torno a la privatización de las áreas naturales, y salió con fuerza a la luz pública en el año 1997, a través de un artículo publicado en *Nature*, («El valor de los servicios ecosistémicos y el capital natural del planeta», escrito por un numeroso equipo de investigadores de diversas universidades de Estados Unidos) y el libro «Los servicios de la naturaleza», editado por Gretchen Daily. Los términos inicialmente utilizados fueron «servicios ecosistémicos» o «servicios naturales», pero finalmente el término que se ha popularizado es el de «servicios ambientales». (GRAIN, 2004).

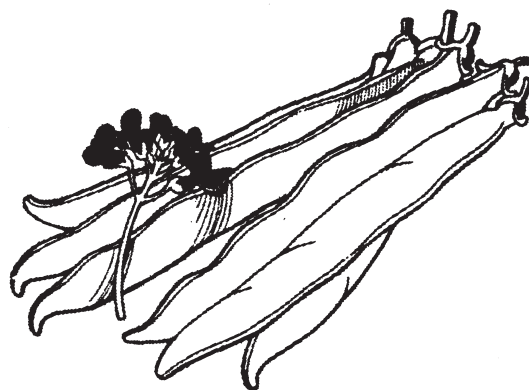
Quizás la única opción posible sea comenzar a escuchar

a esas voces sabias que durante miles de años cuidaron y criaron biodiversidad en todas las regiones del planeta. Los pueblos indígenas han tenido un renacer en las últimas décadas que los ha colocado una vez más en un lugar protagonista en el debate sobre el futuro. Y es sin duda sobre la base de la recuperación de sus territorios ancestrales que están reconstruyendo sus identidades, sus formas de organización y sus culturas. Por todas partes sus voces se hacen escuchar y sus luchas en lo local desafían los intentos de desplazarlos y acallarlos.

Por eso, son los pueblos indígenas los que pueden expresar con mayor claridad los desafíos que hoy enfrentamos. En sus propias palabras: «No queremos ser como ustedes. Queremos que ustedes sean como nosotros. Estamos aquí para cambiar su manera de pensar. Ustedes no pueden lograr la conservación sin nosotros» (líder Maasai Martin Saning'o, Congreso Mundial de Conservación, Bangkok, Tailandia) (Dowie, 2006) .

REFERENCIAS

- Dowie M. (2006), «Los refugiados del conservacionismo», *Revista Biodiversidad, sustento y culturas*, N° 49, pp. 1-6
GRAIN (2004), «Aire no te vendas», *Revista Biodiversidad, sustento y culturas*, N° 42, (2004), pp. 1-7.



La crítica al crecimiento económico desde la economía ecológica y las propuestas de decrecimiento*

Jordi Roca Jusmet**

LOS INDICADORES ACTUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El objetivo del crecimiento económico no es un concepto abstracto de crecimiento económico. Cuando los políticos y economistas se refieren actualmente a él lo miden mediante unos indicadores cuantitativos muy específicos; por lo tanto, para armarse de argumentos en el debate hay que conocer

estos indicadores y sus deficiencias y a ello me referiré en primer lugar centrándome sobre todo en las críticas que tienen que ver con los problemas de agotamiento de recursos y degradación ambiental.

El principal indicador de crecimiento hoy es el Producto Nacional Bruto (PNB). Este indicador por supuesto no ha existido siempre sino que se consolidó tras la segunda guerra mundial a partir de determinadas convenciones establecidas por las Naciones Unidas. Inicialmente su objetivo era puramente descriptivo: medir el nivel actividad económica como un todo.

El PNB parte de una definición muy estrecha de actividad económica: con algunas excepciones básicamente registra las actividades que cuestan dinero y generan ingresos sean mercantilizadas o pagadas por el sector público. Producir es, pues, generar ingresos. Un profesor contratado por el sector privado o público es productivo porque cuesta dinero como también es productivo un militar o una empresa de publicidad; en cambio, la actividad de cocinar o de cuidar a personas —que sobre todo hacen las mujeres— no lo es si se hace a nivel doméstico.

Producto Nacional (PN) equivale entonces a Renta (o Ingreso) Nacional.¹ EL PN o RN rápidamente se utilizó como indicador de éxito económico, de si las cosas van mejor o peor económicamente —crecer un 3% se considera sin duda mejor resultado que crecer un 1%— y, además, los países tienden a ordenarse según su Renta Nacional per capita para tener una primera idea de si están mejor o peor económicamente.

Las críticas al PN, y sobre todo a su uso normativo-valorativo, son muchas y aquí me centraré en tres consideraciones que tienen que ver con el hecho de que la economía pertenece a un sistema más amplio, la naturaleza o biosfera.

En primer lugar, el Producto Nacional suma igual actividades basadas en la explotación de recursos naturales

* Este artículo es una versión revisada —y traducida del catalán— de la charla titulada «La crítica al creixement econòmic des de l'economia ecològica» realizada en el marco de Las Jornadas sobre decreixement, Barcelona, 7-11 marzo 2007, www.decreixement.net.

** Universidad de Barcelona (jordiroca@ub.edu)

¹ Y Producto Interior a Renta Interior. La pequeña diferencia entre Renta Interior y Nacional es que la primera se refiere a los Ingresos obtenidos en un territorio independientemente de quien los obtenga; en cambio, la perspectiva «Nacional» se refiere a los ingresos obtenidos por los residentes en un territorio independientemente de donde los obtengan.

no renovables o en la de recursos renovables y hablamos, por ejemplo, de producir petróleo como de producir trigo o patatas aún cuando toda extracción de petróleo tiene como contrapartida una menor disponibilidad futura. Tampoco hay ninguna distinción entre explotar recursos naturales renovables de forma sostenible o no sostenible: la contribución de la pesca al PN sólo depende del valor monetario de las capturas con independencia de si están disminuyendo o no las poblaciones de peces, que es la base de la actividad.

Quien ha estudiado economía sabe que la Contabilidad Nacional se preocupa de distinguir entre Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. La diferencia es que para calcular el Producto Neto se descuenta la amortización —el valor estimado del desgaste, la depreciación, de las máquinas, los edificios, las herramientas de trabajo,... Implícitamente se está suponiendo que la única condición para mantener el nivel de producción indefinidamente es hacer frente a esta depreciación. Esto es lo que dice cualquier manual de macroeconomía: si haces frente a la depreciación del capital la producción puede continuar indefinidamente al mismo nivel; si la inversión bruta supera la depreciación, la producción crecerá. Se supone que el flujo de recursos naturales está asegurado, que es un recurso «libre»: curioso supuesto cuando es posible, por ejemplo, que el petróleo que ya hemos extraído quizás sea o no se aleje mucho de la mitad de todo el que llegaremos a explotar. Pero no debe extrañarnos cuando reputados manuales de crecimiento económico ni siquiera contienen la voz energía o recursos naturales.

Una segunda consideración es que en el PN sumamos el valor de los bienes y servicios que producimos y consumimos, pero nos olvidamos que a menudo la contrapartida de las actividades de producción y consumo es la degradación ambiental que también afecta a nuestra salud y calidad de vida, y a la de las generaciones futuras, e incluso puede poner en peligro la supervivencia. Contamos los bienes y servicios «económicos» (que se suponen bienes porque generan dinero sin entrar a analizar para qué se utilizan) pero olvidamos los «males asociados». Esto no quiere decir que lo mejor sea restar dichos males. Ello sólo podríamos hacerlo midiéndolo todo en dinero y el remedio podría ser peor que la enferme-

dad. Pero sí quiere decir que hay unos «costes ocultos» que no debemos olvidar sino poner en primer plano.

Pero aún hay una tercera línea de crítica. Se trata de que los propios problemas ambientales generan a menudo gastos monetarios para intentar evitarlos o reducirlos, gastos que se han denominado compensatorios o defensivos. Así, más residuos y más problemáticos pueden comportar más dinero gastado en su gestión; más accidentes petroleros, más dinero gastado en limpieza y restauración. Estos gastos no son para estar mejor sino para no empeorar, para protegerse de los propios males de las actividades económicas, y, por tanto, conceptualmente son costes de las actividades de producción y consumo. Sin embargo, cuando son asumidos por las administraciones públicas o por los ciudadanos aparecen en el activo y no en el pasivo: como nuevos servicios que antes no teníamos y que generan ocupación e ingresos y, en consecuencia, aumentan el PN y la RN.

LA CRÍTICA AL OBJETIVO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL

Como podemos concluir del apartado anterior, la primera crítica a la identificación de más crecimiento con más bienestar económico es el olvido de los costes asociados al crecimiento que afectan al nivel de vida actual y futuro. Costes ecológicos, económicos y también otros costes sociales: quizás el crecimiento a veces sea a costa más horas de trabajo, de mayor movilidad, de mayor competencia agresiva entre las personas...

Hay, además, otro aspecto esencial. Cuando se busca el crecimiento de la renta a toda costa no sólo se olvidan los costes que lleva asociados, también se exageran muchísimo los beneficios que comporta. En las sociedades ricas el consumo creciente no satisface en general las desmesuradas aspiraciones que genera. En estas sociedades tan volcadas hacia el consumo el elemento económico que más parece influir en la mayor o menor sensación de satisfacción o de felicidad no es tanto el consumo absoluto como el relativo respecto a las otras personas. Esta evidencia está ahora bastante moda entre algunos economistas —incluso se habla

de la «economía de la felicidad»— pero ya hace muchas décadas que algunos autores lo habían señalado: como Fred Hirsch quien a comienzos de los años setenta hablaba de la creciente importancia del consumo posicional —un complejo concepto que abarcaba entre otros aspectos esta idea de la importancia del nivel relativo de consumo.²

No creo en los intentos de resumir en un número el bienestar, y los resultados de las encuestas se han de tomar con cierta prevención. Pero la evidencia histórica parece concluyente por poco que las respuestas se aproximen a la realidad: por ejemplo en los EE UU desde los años 1950 hasta la actualidad no parece haber ninguna mejora en la percepción subjetiva del nivel de felicidad sino más bien lo contrario a pesar del enorme aumento en los ingresos medios. La comparación entre países tampoco muestra —una vez superado un nivel de renta— ninguna correlación clara entre nivel de felicidad y renta per cápita.

La desigualdad —y por supuesto la publicidad— es uno de los factores que acrecienta la competencia por el consumo. Se trata de una carrera dónde gastamos energía y materiales pero no ganamos posición relativa (o si unos la ganan otros la pierden). Además, la meta también se va desplazando porque el consumo tiene mucho de adaptativo: buscamos más consumo pero el nuevo estándar rápidamente se convierte en nuevo punto de referencia.

EL CONCEPTO «DESARROLLO SOSTENIBLE» Y SU IDENTIFICACIÓN CON «CRECIMIENTO SOSTENIBLE»

El concepto «desarrollo sostenible» adquirió relevancia hace ahora justamente 20 años con el famoso Informe Brundtland de las Naciones Unidas —*nuestro futuro común*— y

desde entonces ha tenido una difusión extraordinaria. Esto es positivo en la medida que refleja la creciente preocupación por el agotamiento de recursos y por la degradación ambiental.

Sin embargo, gran parte del éxito del término desarrollo sostenible se debe a su ambigüedad y, aún más, al hecho de que tradicionalmente se había identificado «desarrollo económico» con «crecimiento económico» de forma que el término desarrollo sostenible se identificaba —y se identifica— a menudo con crecimiento sostenible. Incluso sostenible se asemeja a sostenido y era fácil pensar que entre el objetivo del desarrollo sostenible y el tradicional del crecimiento sostenido no habían grandes contradicciones cuando en realidad nada hay más contradictorio con poner en primer plano los problemas de sostenibilidad ambiental que mantener el objetivo de mantener las tasas de crecimiento. Esta frecuente identificación entre los términos desarrollo sostenible y crecimiento sostenible tiene dos consecuencias muy negativas.

La primera consecuencia negativa es que impide ver cuáles son las auténticas raíces de la actual crisis ecológica. La crisis ecológica actual tiene una dimensión que no puede entenderse en absoluto si no se tiene en cuenta el factor escala. La economía ha crecido ocupando cada vez más espacio de la naturaleza; para utilizar la metáfora de Herman Daly hemos pasado de un mundo relativamente vacío de actividad humana a mundo un relativamente lleno de ella.³ Ocupación de espacio en sentido estricto (espacio urbanizado, de infraestructuras, espacio transformado para cultivos y plantaciones,...) pero también espacio en sentido más figurado (mayor parte del flujo de agua que mueve el ciclo hidrológico canalizado para usos humanos, mayor apropiación de la producción primaria de las plantas, mayor ocupación de la atmósfera con residuos...).

Del aumento de ocupación del «espacio ambiental» hay muchos indicadores cuantitativos que, sin embargo, creo imposible resumir en una única cifra a pesar de los bienintencionados —pero poco convincentes metodológicamente— intentos de calcular la «huella ecológica» de las diferentes sociedades. Este índice ha tenido un enorme papel para divulgar la idea de que nuestras sociedades han

² F. Hirsch, *Social Limits to Growth*, Harvard University Press, 1977 (existe traducción: *Los límites sociales al crecimiento*, Fondo de Cultura Económica, México).

³ Daly, H. E. (1999), «Steady-state economics: avoiding uneconomic growth» en J.C.J.M. van den Bergh (ed), *Handbook of Environmental and Resource Economics*, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

superado los límites ecológicos pero como máximo se debe considerar un muy imperfecto indicador junto a otros.

Sólo en referencia al aumento de escala, podemos entender el carácter global y no sólo local de las alteraciones ambientales (y, en lugar destacado, la capacidad de cambiar la composición atmosférica con su efecto sobre el clima global). Este aumento del tamaño del sistema económico ha sido debido al crecimiento demográfico de la población pero también —o sobre todo— al creciente consumo de recursos por capita sobre todo en una parte del mundo que ha acompañado al crecimiento económico. Podríamos decir que el problema no es sólo la población de personas sino también la población de coches, de ganado, de aires acondicionados, de máquinas, de bienes de consumo,...

La segunda consecuencia negativa de la identificación entre desarrollo sostenible y crecimiento sostenible es la que mantiene lo que un autor ha denominado en un reciente libro «el fetiche del crecimiento económico».⁴ Lo urgente es revisar el papel del crecimiento económico (es decir, del aumento de magnitudes como el PN o la RN) como indicadores básicos de éxito económico.

¿Quiere ello decir que debemos renunciar totalmente al concepto desarrollo? En mi opinión, no necesariamente. Desarrollarse es un término que puede querer decir muchas cosas y se puede también equiparar a evolucionar a mejor, cubrir las necesidades básicas de los que no las tienen cubiertas y aumentar las capacidades humanas. Esto, desde luego, implicará normalmente que la gente muy pobre consuma más alimentos, disponga de más agua potable, utilice más energía, acceda a más medicamentos... pero los ricos podemos tener las necesidades básicas satisfechas y nos podemos desarrollar como personas consumiendo mucha menos energía, agua, materiales,.... Es imperativo hacerlo si pensamos que ya utilizamos demasiados recursos, especialmente si pensamos que debemos dejar «espacio» para que otros mejoren su situación.

Sobre las relaciones teóricas y empíricas entre crecimiento económico tal y como lo medimos y la presión ambiental.

Las relaciones entre crecimiento económico —tal y como se mide— y la sostenibilidad ambiental son, por lo

tanto, tremendamente conflictivas pero son también complejas, y no debemos olvidarlo. Las economías cambian a lo largo del tiempo —en tecnologías y peso de los diferentes sectores económicos— de forma no se puede descartar a priori que el crecimiento del PN vaya acompañado en algunos lugares y momentos históricos de menor uso de recursos naturales y menores impactos ambientales. Veamos dos ejemplos en este sentido.

Supongamos que aumentan los impuestos de forma que un conjunto de personas ve disminuir su renta disponible y supongamos que con este dinero el gobierno contrata trabajadores para atención domiciliaria a la población de mayor edad. El PN aumentará ya que habrá un nuevo servicio, pero no necesariamente aumentarán los problemas ambientales. Las personas contratadas quizás gastarán en consumo una cantidad similar a la que los afectados por los nuevos impuestos detraemos de nuestro consumo. Los impactos del nuevo consumo no serán idénticos pero no sabemos en qué dirección se moverán.

Vamos al segundo ejemplo. Si se me estropea un aparato y decido arreglarlo en vez de comprar uno nuevo, ello también generará ingresos que se suman en el PN; de hecho si la reparación fuese más cara que la producción de nuevo aparato (lo que, desde luego, hace improbable la reparación) la reparación comportaría mayor PN que la nueva producción.

La conclusión es que el nivel del PN es un determinado clave de los impactos ambientales pero también es extremadamente importante su composición y las tecnologías utilizadas. Dicho esto, es totalmente verdad que la experiencia histórica muestra que el crecimiento suele en general más que contrarrestar las posibles mejoras parciales; en otras palabras, las mejoras en eficiencia son fácilmente compensadas por el factor escala.

Un ejemplo «sectorial» es el de los coches. Los coches actuales son en promedio menos consumidores de energía (aunque también han proliferado los 4x4...) que los de hace

⁴ Hamilton, C., *El fetiche del crecimiento económico*, ediciones Laetoli, 2006.

décadas pero el aumento del parque automovilístico y de los kilómetros recorridos ha comportado que el consumo energético y las emisiones de CO₂ del sector transporte no han dejado de aumentar (a veces la propia mejora de eficiencia en el uso de un recurso natural es uno de los factores que estimula su mayor uso debido a que el precio del servicio que obtenemos disminuye: es el llamado «efecto rebote»).

La evidencia empírica a nivel agregado es también contundente: no hay signos de que las economías ricas se estén «desmaterializando». Las toneladas de materiales que se movilizan como base de estas economías no disminuyen en términos absolutos sino que en general pasa lo contrario (aun cuando a veces los movimientos de materiales que generan quedan «ocultos» por la globalización al producirse en otros países). Cuando la gente es más rica podría gastar el dinero en cosas no materiales pero el hecho es que va más en coche, viaja más en avión, tiene más segundas y terceras residencias, come más carne, tiene más aires acondicionados, etc... y esto provoca más impactos que raramente son totalmente compensados por mejoras tecnológicas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL «DECRECIMIENTO» COMO OBJETIVO

Concluiré con unos breves comentarios sobre cómo veo el término «decrecimiento» (sostenible) aplicado a los países ricos.

Por una parte, la idea del decrecimiento (y mucho más la de «objectores del crecimiento») me provoca mucha

simpatía, por lo que supone de oposición radical a la ideología actual sobre la bondad del crecimiento, ideología que comparten los que hablan de «crecimiento sostenible». La respuesta es: ¿por qué no el decrecimiento si nuestros niveles de consumo de muchas cosas son claramente excesivos? Me gustó oír en estas mismas jornadas al propio Serge Latouche⁵ decir que el término más que un modelo o una teoría es un eslogan mediático que tiene como objetivo la provocación. Me gustó oírlo porque éste es el aspecto del término que me despierta simpatía.

Pero también tengo un cierto distanciamiento respecto a la consigna del decrecimiento porque si lo que quiere decir es decrecimiento del PN no deja de ser una consigna atrapada en cierta forma en el mismo universo de la contabilidad macroeconómica donde unos indicadores muy agregados y parciales se convierten en indicadores sobre si las cosas van bien o van mal. No estoy nada seguro de que la respuesta más radical a la ideología del crecimiento del PN sea la defensa del decrecimiento.

La respuesta más radical quizás es decir que en realidad no nos importa si el PN crece o no crece. Lo que nos importa es cubrir las necesidades básicas de todo el mundo, que las actividades económicas nos hagan más felices y no menos y que no hipotequemos la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y de otras poblaciones. Para ello los países ricos debemos reducir radicalmente el «espacio ambiental» que ocupamos y a nivel económico muchas cosas deben decrecer —la propiedad y uso de coches, la construcción, la publicidad,...— pero otras deben crecer —los servicios de transporte público, la atención a la gente mayor, las reparaciones, el reciclaje...

¿Sería menor el PN en una sociedad menos insostenible que pusiese en primer plano las necesidades humanas y no la obtención de beneficios? Con toda probabilidad, pero en todo caso ello es lo de menos. El PN puede crecer por buenas o malas razones y también puede decrecer por buenas o malas razones.

⁵ Me refiero a la conferencia impartida en el mismo marco de Las Jornadas sobre decrecimiento, Barcelona, 7-11 marzo 2007, www.decreixement.net. Ver crítica del libro *Sobrevivir al desarrollo*, en este mismo número.

Sobre ecología y lujos sencillos

Jorge Riechmann*

En dos días consecutivos del pasado febrero, dos novelistas que no se han caracterizado hasta ahora por la intensidad de sus preocupaciones ambientales publicaron en el diario *El País* sendos escritos de opinión donde abordaban la terrible crisis ecológica en que nos hallamos: José Ángel Mañas («Ecological way of life», 18 de febrero de 2007) y Eduardo Mendoza («Lujo», 19 de febrero). Me parece significativo —un indicio de que la conciencia de la crisis llega a estratos sociales antes muy reacios a mirar de frente la realidad— y a la vez preocupante, por la orientación de ambos textos.

Dejemos de lado lo accesorio (el flirteo de Mañas con las tesis negacionistas —respecto del calentamiento climático antropogénico— de Claude Allègre: no es científicamente serio, no perdamos tiempo en ello) y vayamos a lo esencial. Uno puede simpatizar con la vaga tesis antropológica de Mendoza (en el caso de los seres humanos, lo lujoso es lo verdaderamente necesario: ya lo dijo Ortega hace tres cuartos de siglo, y yo me lo creo) y negarse al triple salto mortal que supone concluir, a partir de esa tesis, que nada puede hacerse para reconciliar economía y naturaleza, porque resulta no sé si metafísicamente imposible, o al menos contrario a la naturaleza humana, «ahorrar energía a base de cambiar el minipimer por el pasapurés o el aire acondicionado por un paipay».

Nos hacemos humanos rebasando el nivel de las necesidades básicas hacia lo lujoso, de acuerdo: pero hay que reparar en que tan lujoso —o más— resulta gozar de la ceremonia japonesa del té como desplazarse en un automóvil de lujo de tres toneladas de peso. La cuestión

no es si deberíamos censurar los «lujos» —más allá de las necesidades básicas de subsistencia y relación— que nos humanizan y hacen que la vida valga la pena (pues queremos vivir bien, y no meramente sobrevivir). La cuestión de importancia, a mi entender, es si debemos o no discriminar entre diferentes clases de lujos, de acuerdo con criterios de sostenibilidad.

El movimiento ecologista no defiende un puritanismo enemigo de la vida refinada y los placeres razonables, pero desde luego cuestiona que la persecución de lujos insostenibles para unos pocos cercene las posibilidades vitales de la mayoría, ahora y en el futuro. Refinamiento existencial no es sinónimo de sobreconsumo de materiales y energía: lo último se asocia más bien con la irresponsable actitud de «nuevos ricos» que por desgracia se halla tan difundida en nuestro país.

La cuestión, a mi entender, es que algunos lujos podemos permitirnoslos en un mundo cuya atmósfera se va saturando de dióxido de carbono, y otros no: el refinamiento del cante flamenco sí, pongamos por caso, pero el refinamiento del exceso de vuelos interoceánicos no. Se puede vivir bien —lujosamente, si se quiere: con lujos más sencillos pero no menos intensos— con menos, a condición de producir, trabajar y consumir de otra manera. Y ello no va a producir ninguna debacle económica, Mañas puede tranquilizarse al

* Poeta, presidente de Científicos por el Medio Ambiente, investigador en ISTAS y autor de *Biomimesis* y de *Gente que no quiere viajar a Marte* (jriechmann@istas.ccoo.es)

respecto.¹ Escribí hace poco un poema que me animo a citarles (enlaza con la desdichada sugerencia de Mendoza sobre abanicos y aparatos de aire acondicionado):

Los humoristas gráficos/ parecen incapaces de abordar la conflictiva/ política de aguas del país/ sin hacer chistes malos a costa del botijo// Humilde barro/ pariente de la carne/ humilde:/ humus de lo humano// Pero también/ una proeza técnica: la solución/ al problema de mantener fresca el agua/ bajo calores tórridos, sin gasto alguno eléctrico,/ sin contaminación/ ni durante el proceso productivo/ ni cuando acaba la vida útil del objeto/ que acompaña al sujeto// Irreflexivamente dibujan el botijo/ como un símbolo del atraso/ sin reconocer la insuperada maravilla técnica/ que

realmente es// El día/ que los hoteles de lujo ofrezcan agua en botijo/ en vez de embotellada en minibar/ estaremos de verdad aproximándonos/ a la sociedad ecológica³

¹ Lo argumenta espléndidamente Manfred Linz, investigador del Instituto Wuppertal, en <http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP157.pdf>; para los no lectores de alemán he traducido este texto, ahora en prensa —junto con otros capítulos— en *Vivir (bien) con menos*, editorial Icaria (N. del a.)

² Óscar Carpintero ha reunido mis poemas de temática ecológica en *Con los ojos abiertos* (Ed. Baile del Sol, Tenerife, en prensa). (N. del a.)

Pueblos
Revista de Información y Debate

www.revistapueblos.org

revista
trimestral
de información
y debate

precio suscripción anual
(5 números): 32,5 €

PA2
CON DIGNIDAD

Gran Vía, 40, 5ª Of. 2
28013 Madrid
Telf. y fax: (34) 91 523 38 24
redaccion@revistapueblos.org



En profundidad

Los refugiados ambientales y sus consecuencias en el futuro

Rafael Reuveny y Ashley Peterson Allen

En extracción de combustibles fósiles como generadora de refugiados ambientales

Nichollas Hildyard

¿Por qué la China rural es importante para el mundo?

Rafael Poch de Feliu

Los refugiados ambientales y sus consecuencias en el futuro

Rafael Reuveny y Ashley Peterson Allen*

En el otoño de 2005, el huracán Katrina inundó gran parte de Nueva Orleans, en Louisiana y destruyó otro tanto de Biloxi-Gulfport, en Mississippi, EEUU. Como consecuencia de ello, cerca de un millón de personas abandonó la región. Hasta mayo de 2007, mucha de esa gente no había retornado. ¿Podemos definir a esas personas como refugiados ambientales, gente que abandona su lugar de residencia debido a la degradación ambiental y que se traslada a otras zonas? Desconocemos las intenciones de la gente que abandonó las regiones costeras de Louisiana y Mississippi, pero creemos plausible que muchos de ellos no regresarán. ¿Es este un caso único? El huracán Katrina es representativo de un tipo de degradación ambiental: un desastre natural. ¿Influye la degradación ambiental a la hora de decidir emigrar? Más aun, ¿puede la llegada de refugiados ambientales provocar conflictos violentos en la zona que los acoge? ¿al hablar de conflictos violentos incluimos una

amplia gama de actos, desde las amenazas de baja intensidad hasta las insurgencias de alta intensidad y las guerras?

El fenómeno de los refugiados ambientales y la posibilidad de conflictos entre los recién llegados y los habitantes de la zona que los acoge son los temas centrales de este artículo, pero sin duda la problemática es mucho más amplia. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) predice que el cambio climático provocará una degradación ambiental considerable durante el presente siglo (IPCC, 2007a, 2007b). ¿Cuáles serán las consecuencias de tales predicciones sobre las migraciones? Concientes de que el cambio climático es un fenómeno en evolución cuyos efectos todavía no se han manifestado plenamente, creemos poder hacernos una idea anticipada analizando los efectos de la degradación ambiental sobre las migraciones acontecidas en las últimas décadas. Si la degradación ambiental ha jugado un papel causal sobre las migraciones, puede volver a tenerlo en el futuro. Si la llegada de refugiados ambientales ha generado conflictos en las regiones receptoras, tal cosa puede volver a acontecer.

Para nuestra investigación, hemos estudiado tres casos: el huracán Katrina en 2005, El Salvador-Honduras en los años sesenta y Filipinas a partir de esa misma década. En síntesis, nuestras investigaciones sugieren que la degradación ambiental puede originar grandes desplazamientos de refugiados ambientales y la llegada de esas personas puede provocar tensiones y conflictos en las zonas que las acogen. Si se confirma que el cambio climático causará una mayor degradación ambiental en el futuro, nuestro análisis sugiere que los refugiados ambientales serán habituales y que su llegada a las zonas de acogida podría incrementar la inestabilidad política y los conflictos. Estos efectos tendrán importantes implicaciones sobre las políticas públicas.

* Rafael Reuveny es Profesor de Políticas Públicas en la School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, Bloomington, Indiana, EEUU y Ashley Peterson Allen es estudiante graduada del programa Master of Public Affairs de la SPEA. Contacto: rreuveny@indiana.edu

REFUGIADOS AMBIENTALES Y CONFLICTOS VIOLENTOS

Es conveniente iniciar nuestro análisis explicando por qué la gente emigra en respuesta a los problemas ambientales y cómo esas migraciones pueden promover los conflictos en las regiones de acogida de los emigrados. Analicemos a la gente que considera emigrar comparando las condiciones en su lugar de residencia y las que caracterizan al lugar hacia donde piensan trasladarse. Sus decisiones se basarán en establecer cuál es el lugar más favorable teniendo en cuenta todos los factores relacionados. Las teorías convencionales sobre migraciones clasifican esas fuerzas de impulso y atracción según sean económicas, sociopolíticas o psicológicas. Las fuerzas de impulso provocan que la gente marche, las de atracción hacen que la gente venga. Por ejemplo, las fuerzas económicas de impulso incluyen factores como bajos salarios, desempleo elevado y subdesarrollo; las fuerzas de atracción serían los sueldos altos, abundancia de trabajo y prosperidad. Los factores psicológicos pueden ser la sensación de extrañeza, ver a otro país como el lugar de los ancestros o el deseo de reunirse con los familiares. Los factores sociopolíticos de impulso pueden ser las guerras o persecuciones, mientras que los de atracción serían la paz, la reunificación familiar y un trato preferencial. Otra categoría de fuerzas incluye las ayudas proporcionadas a los inmigrantes, entre otras: dinero, facilidades para encontrar trabajo o para cruzar fronteras ilegalmente (Cohen, 1996; Martin y Widgren, 2002).

Pese a que esa teoría no considera al medio ambiente, nosotros afirmamos que los problemas ambientales pueden causar migraciones, especialmente si los medios de subsistencia de la gente dependen directamente del entorno natural. Problemas como las situaciones climáticas extremas son habitualmente peculiares y localizados en un sitio. Los problemas como la subida del nivel del mar, la degradación del suelo y la disminución del agua potable disponible tienden a tener efectos relativamente más permanentes y dispersos. Las sociedades subdesarrolladas son más vulnerables a ambas clases de problemas ambientales, especialmente si dependen directamente del medio ambiente

para su subsistencia inmediata; tales sociedades están más predispuestas que las sociedades desarrolladas a marchar de las regiones afectadas, en lugar de quedarse e intentar adaptarse o mitigar el problema.

Los refugiados ambientales pueden cruzar fronteras internacionales, pues los problemas ambientales no necesariamente respetan las fronteras. Los emigrantes atraviesan la «línea ambiental» donde la degradación se detuvo. Esta es una lógica que comparten todos los tipos de migración. Por ejemplo, las personas que marchan debido a la depresión económica cruzan los límites económicos de la depresión, y la gente que huye de la violencia étnica cruza las fronteras étnicas, ninguna de las cuales se ajusta necesariamente a las fronteras políticas. Todos emplean similares criterios de decisión, comparando los costes y beneficios de permanecer o migrar, ya sea dentro o fuera de su propio país.

Los refugiados ambientales pueden cruzar fronteras internacionales, pues los problemas ambientales no necesariamente respetan las fronteras.

Los problemas ambientales que pueden ocasionar migraciones difieren en velocidad y en previsibilidad. Por ejemplo, desastres naturales como tormentas, accidentes industriales o la destrucción ambiental provocada por una guerra tienden a provocar cambios ambientales rápidos. En cambio, los proyectos de desarrollo y degradaciones como el aumento de contaminantes, la erosión del suelo, los problemas con el agua o la deforestación tienden a provocar cambios relativamente más lentos. Mientras que los cambios rápidos son impredecibles (aunque algunas zonas y épocas puedan ser más propensas que otras a estos cambios), los factores más lentos son más previsibles. Creemos que sumadas a las fuerzas inicialmente citadas e independientemente de la clase, los factores ambientales desempeñan un papel importante como causa de migraciones.

En relación a los conflictos, estos pueden originarse con la llegada de emigrantes e involucrar a los recién llegados, a los residentes en las zonas de partida y a los

habitantes de las zonas de recepción (Weiner, 1992). En general, los desplazamientos pueden aumentar la presión sobre la economía receptora y su base de recursos, llevando a una competencia entre nativos y recién llegados y también afectar el equilibrio étnico previo. Los residentes anfitriones pueden rechazar a los que llegan por considerarlos intrusos. Los emigrantes pueden desear reunificarse con su país de origen o los anfitriones pueden verlos como una amenaza. Los respectivos gobiernos pueden intervenir en defensa de sus connacionales. La región anfitriona puede sospechar que los desplazados han sido enviados para desestabilizar su régimen y la región de origen puede sospechar que los anfitriones pretenden utilizar a los desplazados en su contra. Los conflictos pueden también responder a problemas ya existentes, como los que se dan entre pastores y agricultores, campesinos y terratenientes, o entre gente de diferentes identidades étnicas, nacionales o religiosas. Otra fuente de conflicto menos obvia puede darse cuando los desplazados son absorbidos por un conflicto ya existente en esa región y lo intensifican, volviendo a sentirse tan descontentos o desmoralizados como lo estaban antes de emigrar. Son entonces presas fáciles para ser captadas por los rebeldes de la zona anfitriona. El gobierno reacciona para neutralizar el creciente poder de los rebeldes y estalla el conflicto.

Las sociedades ricas pueden estar en condiciones de absorber a los desplazados sin excesivos problemas.

Las condiciones de desigualdad y pobreza en las zonas de origen y en las receptoras pueden facilitar las situaciones de conflicto, ya que incrementan los agravios y dificultan la contención de las presiones. Las sociedades ricas pueden estar en condiciones de absorber a los desplazados sin excesivos problemas, pero las sociedades pobres están más limitadas en este aspecto, haciéndolas más sensibles a los conflictos. Cuanto mayor sea el flujo migratorio y menor el tiempo en que se desarrolla, mayor será la posibilidad de conflictos.

Esta teoría es aplicable tanto a los emigrantes comunes como a los refugiados ambientales. No obstante, mientras las migraciones normales son casi siempre espaciadas en el tiempo, los problemas ambientales pueden provocar que mucha gente se desplace en un período breve. Por ejemplo, una erosión intensa del suelo o las sequías pueden asolar a las sociedades agrícolas, provocando grandes olas migratorias que facilitan el estallido de conflictos.

Algún antecedente de nuestro argumento puede encontrarse en Malthus (1798), quien sostuvo que el crecimiento de la población podía conducir a la escasez de recursos, el declive económico, el hambre y los conflictos. Más recientemente, Kaplan (2000) y otros han recuperado ese paradigma, destacando que los problemas ambientales ya están causando conflictos en los países menos desarrollados (PMD). Sin embargo, esa teoría no carece de críticos. Estos argumentan que los mercados, la innovación tecnológica, la reforma de las instituciones y la cooperación internacional pueden aliviar esos problemas, alejando la posibilidad de conflictos (Deudney, 1999; Simon, 1996). Pese a esos críticos, diversas personalidades políticas destacadas de los países desarrollados (PD) han apoyado la reafirmación de las tesis de Malthus (Gore, 1992; Matthew, 2002; Schwartz y Randall, 2003).

En síntesis, consideramos que las condiciones ambientales pueden desempeñar un papel importante a la hora de decidir emigrar y que la llegada de refugiados ambientales puede desatar conflictos en las zonas de acogida. No obstante, no afirmamos que el conflicto es inevitable. Durante años, muchos países desarrollados han prosperado admitiendo inmigrantes, entre ellos EE UU, Australia y Canadá. Pero creemos que los conflictos originados por los refugiados ambientales son también posibles, como lo demuestran los siguientes casos.

EL SALVADOR, HONDURAS Y LA GUERRA DEL FÚTBOL

Este apartado presenta nuestro primer análisis de caso sobre refugiados ambientales y conflictos, centrado en la historia

de El Salvador y Honduras. En El Salvador se estaba ensanchando la brecha entre producción agrícola y necesidades alimentarias como resultado del aumento de la producción para la exportación y la desigual distribución de la tierra. Como resultado del colonialismo español, una inmensa mayoría de las tierras de El Salvador estaba en manos de unas pocas familias (Cooper y Coelich, 2003; Morello, 1997). Por tal razón, gran parte de los salvadoreños carecían de tierras de cultivo, padeciendo pobreza y desempleo. Con una de las mayores tasas de crecimiento de la población en todo el mundo, del orden del 3,5% anual entre 1961 y 1971, la sobrepoblación y la presión sobre los recursos en El Salvador eran motivo de gran preocupación (Durham, 1979). El país vecino, Honduras, con una superficie cinco veces mayor —112.492 kilómetros cuadrados comparados con 21.040 km² (CIA, 2007)— y una densidad de población aproximadamente ocho veces menor, se presentaba como una tentadora válvula de escape para los salvadoreños y su problema de falta de tierras. Enfrentándose a un desgaste ambiental cada vez mayor, la escasez de tierras y la pobreza provocó que aproximadamente 300.000 salvadoreños sin tierra emigraran hacia el sur de Honduras entre los años treinta y los sesenta del pasado siglo (Durham, 1979; ACED, 2000).

Los refugiados ambientales salvadoreños, cuyo número llegó a representar una octava parte de la población total de Honduras, vivían pacíficamente en el sur de este país, la mayoría arrendando tierras de la élite de terratenientes hondureños (Cooper y Coelich, 2003), pero en el país se estaba gestando un enfrentamiento entre campesinos y terratenientes que le pasaría factura a los refugiados salvadoreños. Cada vez con mayor intensidad, los campesinos hondureños exigían una reforma de los derechos a la propiedad de la tierra, cuya distribución era tan desigual como en El Salvador. Con la intención de reducir esa presión, el gobierno hondureño y los terratenientes ricos vieron la posibilidad de desviar el descontento campesino responsabilizando a los refugiados salvadoreños, definiendo la inmigración como una invasión de tierras y utilizándola como cortina de humo para disimular el problema de la distribución de la tierra (Morello, 1997; Durham, 1979).

En 1968, Honduras se negó a renovar un acuerdo bilateral que permitía la inmigración de salvadoreños y anunció que comenzaría a expulsar inmigrantes. Las tensiones y los fervores nacionalistas fueron en aumento a medida que se acercaba la fecha, en junio de 1969, de un decisivo partido de fútbol clasificatorio para la Copa Mundial de ese año y en Honduras, las refriegas entre salvadoreños y hondureños eran cada vez más frecuentes (ACED, 2000).

Después del encuentro de fútbol, las animosidades contra los inmigrantes salvadoreños en Honduras fueron en aumento y las agresiones cada vez más violentas. Miles de desplazados regresaron a El Salvador, incrementando la presión sobre la economía y el medio ambiente del país. Estos acontecimientos llevaron al gobierno salvadoreño a declarar la guerra contra Honduras el 15 de julio de 1969, un conflicto que llegaría a conocerse como la Guerra del Fútbol. Pese a que la guerra duró sólo cinco días, tuvo graves consecuencias para ambos bandos. Entre 60.000 y 130.000 desplazados salvadoreños fueron expulsados por la fuerza o huyeron, el comercio entre los dos países se interrumpió, la conflictiva frontera entre El Salvador y Honduras fue cerrada, murieron aproximadamente 2.000 personas y varios miles quedaron sin hogar (ACED, 2000).

**Después del encuentro de fútbol,
las animosidades contra
los inmigrantes salvadoreños
en Honduras fueron en aumento y las
agresiones cada vez más violentas.**

Sin duda, la presión de la sobrepoblación en El Salvador jugó un papel importante en este conflicto, pero sus orígenes eran mucho más complejos. Es bien cierto que en el momento del conflicto El Salvador tenía la tasa de población más elevada entre todos los países continentales del Hemisferio Occidental y una tasa promedio de crecimiento de población del 3,5% (Durham, 1979). No obstante, el factor población no era el único que contribuyó a la guerra. Fue en realidad una compleja interacción entre

sobrepoblación, degradación ambiental, escasez de recursos y distribución de la tierra en ambos países la que auspició el conflicto. Durante la década de 1960, se destruyó en El Salvador casi la mitad de los espacios de vida silvestre (Daugherty, 1969) y el 77% de las tierras de cultivo estaban ya erosionadas (OAS, 1974). Por otra parte, mientras que en el siglo XIX la cubierta forestal abarcaba entre el 60 y el 70% de la superficie del país, en 1946 sólo quedaba un 8% (Bourne et al., 1947). La destrucción de hábitats, la erosión y degradación de suelos, la deforestación y la escasez de alimentos a ellas asociadas tal vez pueda atribuirse al hecho de que en 1961 el 75,2% de las tierras cultivables habían sido convertidas en haciendas, propiedad en su mayor parte de las élites que las explotaban intensivamente para producir cultivos destinados a la exportación, como café y algodón (Durham, 1979).

Ya en los años sesenta, los cultivos para la exportación monopolizaban el 41,9% de las tierras agrícolas. Solo el café disponía de 140.100 hectáreas, casi el 12% de la superficie del país (Indicadores, 1973). Considerando la desigual distribución de la tierra, ese énfasis en un determinado cultivo beneficiaba principalmente a las élites, dejando a un lado a gran parte del campesinado. En 1971, la mitad de las tierras agrícolas eran propiedad del 1,5% de las haciendas y la superficie de las grandes propiedades de la élite era, de promedio, mil veces mayor que la de las propiedades destinadas a la agricultura de subsistencia (ESDGEC, 1975). Como resultado de esos factores, cerca del 80% de los agricultores salvadoreños sufrían de escasez de tierras muy por encima de lo atribuible al mero crecimiento de la población (Durham, 1979).

Los efectos conjuntos de la sobrepoblación y la desigual distribución de la tierra dieron como resultado un número elevado de campesinos sin tierra o de pobres con tierra (los que poseían menos de media hectárea), llevando a que su número creciese de 159.000 en 1950 a 321.000 en 1971, es decir, más de la mitad de la población agrícola (ESDGEC, 1953, 1954, 1975, 1977). Desde la década de 1930, esos campesinos sin tierra o bien se desplazaban a los centros urbanos o emigraban a Honduras. Para los años sesenta, cerca de 280.000 agricultores salvadoreños se habían

radicado en los centros urbanos y unos 300.000 habían emigrado a Honduras (ESDGEC, 1942, 1953, 1967, 1974). De una serie de entrevistas con emigrantes y un estudio del gobierno salvadoreño (CONAPLAN, 1969), se desprende que la mayoría de los desplazados eran campesinos sin tierra o pobres con tierra.

En Honduras, los refugiados ambientales salvadoreños hallaron problemas similares a los que les habían impulsado a salir de su país. La escasez de tierras no era muy diferente a la de El Salvador. Aunque la superficie de Honduras era cinco veces mayor que la de su vecino y la superficie promedio de las propiedades agrícolas era el doble mayor, también en Honduras la distribución de la tierra era muy desigual. Pero a pesar de la falta de tierras y de la pobreza, los campesinos hondureños no manifestaban resentimiento ante los salvadoreños que vivían entre ellos. Fueron los terratenientes ricos quienes, ante las exigencias a favor de una reforma agraria e intentos organizados para recuperar latifundios, se ensañaron con los refugiados ambientales como fuente del problema. Fueron ellos quienes publicaron declaraciones definiendo a los inmigrantes como invasores de tierras y se esforzaron por expulsar a los salvadoreños de Honduras. Esas expulsiones motivaron la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y que el gobierno salvadoreño presentase una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El partido para la Copa Mundial de Fútbol que debía jugarse en esos momentos fue tan solo la gota que desbordó el vaso y llevó al estallido de la guerra (Durham, 1979).

MIGRACIONES INTERNAS EN FILIPINAS

Nuestro segundo estudio de caso se centra en Filipinas. Al igual que en El Salvador y Honduras, el período colonial había condicionado una muy desigual distribución de las fértiles tierras de cultivo, que ya estaban siendo plenamente explotadas en la década de 1970 (Livernash y Rodenburg, 1998). Por ejemplo, en 1985 el 10% más rico de la población controlaba el 37% de la renta nacional (Kessler, 1989). A principios de los años noventa, el 20% de la población se

repartía el 50% del ingreso nacional (Banco Mundial, 1993, 1994). A mediados de los años setenta, la proporción de campesinos sin tierra, muchos de los cuales trabajaban por menos del ingreso mínimo de subsistencia, era ya del 56% del total de la mano de obra agrícola (Livernash y Rodenburg, 1998). Una tasa elevada de crecimiento de población de entre el 2,5 y el 3% anual, además de políticas gubernamentales que favorecieron la agricultura comercial intensiva en capital, llevaron a un aumento del desempleo agrícola (Amacher et al., 1998). Como consecuencia, la pobreza creció en Filipinas de manera desenfrenada durante los años setenta y ochenta, llegando al 50 y 60% en las áreas rurales y urbanas, respectivamente (Banco Mundial, 1988).

Enfrentados a la intensa pobreza, la escasez de tierras y las políticas gubernamentales que favorecían una agricultura orientada a la exportación e intensiva en capital, practicada en grandes haciendas propiedad de las élites, millones de trabajadores agrícolas y campesinos sin tierra emigraron hacia las ya superpobladas ciudades de Filipinas. La mayor marea inmigratoria se produjo desde la zona central de la isla de Luzón, una provincia populosa e industrial, hacia 22 provincias de la sureña isla de Mindanao (Amacher et al., 1998). En total, uno de cada 400 filipinos emigró. Más de la mitad de esos desplazados interregionales se estableció en Manila, pero también hubo un incremento de la emigración hacia las escarpadas colinas de las tierras altas (Saith, 1997). El número de personas que se desplazó hacia las tierras altas durante la década de 1980 fue tres veces mayor que en los años sesenta, provocando una tasa de aumento de la población en esa región que doblaba la del resto del país (Bilsborrow, 2004). Ese flujo migratorio es un elemento central en nuestra tesis.

Ya en los años cincuenta del pasado siglo la población de las tierras altas crecía a un ritmo del 3% anual (Amacher et al., 1998). La cifra neta de desplazados hacia las tierras altas aumentó de aproximadamente 427.000 entre 1970 y 1975 hasta más de 2,5 millones entre 1980 y 1985, alcanzando una tasa de crecimiento del 14,5% sólo en este último período (Saith, 1997). La población de las tierras altas creció de los 17,8 millones en 1988 hasta superar los veinte millones unos pocos años después (Cruz y Cruz,

1991). Poffenberger y McGeen (1993) calcularon que la población total de las tierras altas era de entre 25 y 30 millones a comienzos de la década de 1990 y que crecía a un ritmo de un millón de personas al año debido a la inmigración y el crecimiento demográfico natural.

La agricultura a gran escala, de cortar y quemar, utilizada por los recién llegados, sumada a las talas realizadas por empresas nacionales y extranjeras han provocado una rápida deforestación.

Estos intensos desplazamientos interregionales tuvieron implicaciones profundas para las tierras menos productivas y más ecológicamente vulnerables. Aproximadamente el 55% de Filipinas son tierras altas de colinas o montañas, de las cuales un 46% presenta laderas con una inclinación de 18 grados o más, haciéndolas muy vulnerables a la erosión si no se adoptan medidas protectoras (David, 1987). La agricultura a gran escala, de cortar y quemar, utilizada por los recién llegados, sumada a las talas realizadas por empresas nacionales y extranjeras han provocado una rápida deforestación. En los años setenta y ochenta, la conversión de zonas boscosas en tierras de cultivo destruyó un promedio anual de 200.000 hectáreas de bosque nativo y el cultivo en laderas con más de 18 grados de inclinación creció en más de 225.000 hectáreas anuales (NARP, 1991). Dado que el 72% de la región fue convertida en tierra de cultivo, el total de cubierta forestal en las tierras altas descendió un 24% desde 1970 (Amacher et al., 1998). A mediados de la década de 1980, las selvas vírgenes y las de segunda generación se habían reducido de los 16 millones de hectáreas originales a sólo siete millones de hectáreas. Mientras que en 1900 Filipinas tenía diez millones de hectáreas de selvas vírgenes, a fines de la década de 1990 sólo quedaba un millón de hectáreas (Porter y Ganapin, 1988; Kummer, 1992). La acelerada deforestación causó una erosión masiva de los suelos. En muchas regiones de las tierras altas, la tasa de erosión excedió las 300 toneladas por hectárea y año, muy por encima de la

tasa sostenible de veinte toneladas por hectárea y año (Porter y Ganapin, 1988; Broad y Cavanagh, 1993).

Esa deforestación intensa de las tierras altas favoreció las inundaciones y la pérdida de biodiversidad. Además, antes de ser taladas, las selvas retenían el agua que alimentaba ríos, canales de irrigación y proyectos hidroeléctricos en las tierras bajas. Como resultado de la deforestación y debido a que la capa de tierra de las laderas era delgada, aumentó la sedimentación y la erosión del suelo, los deslizamientos se volvieron más frecuentes, disminuyó el caudal de los ríos y, por consiguiente, se redujeron los embalses y la disponibilidad de agua para irrigación. Por lo tanto, declinó la productividad de los suelos y en las tierras bajas se redujo la superficie de tierras cultivables, generando así un ciclo de mayor emigración hacia las tierras altas que a su vez provocó un incremento de la degradación ambiental (Cruz et al., 1992; Kennedy, 2001).

Ante tan terribles consecuencias ambientales, podría uno preguntarse por qué tanta gente se desplazó hacia las tierras altas. Amacher et al. (1998) determinaron que la propiedad pública de las tierras altas, la baja densidad de población y las vastas zonas boscosas fueron las principales fuerzas de atracción, mientras que la cada vez mayor escasez de tierras de cultivo y otras carencias actuaron como principales factores de alejamiento. Desafortunadamente, el hecho de que el sistema de tenencia de la tierra en esas zonas fuese tan inseguro también desalentó un desarrollo sostenible y jugó un papel importante en el proceso que condujo a los conflictos.

Ante tan terribles consecuencias ambientales, podría uno preguntarse por qué tanta gente se desplazó hacia las tierras altas.

Remotas y pobres, las tierras altas han estado sujetas a vagas e inseguras leyes de tenencia de la tierra, si es que las ha habido. Ese relativo estado de ausencia de leyes permitió a los concesionarios (propietarios de tierras otorgadas por las autoridades a cambio de servicios) y a los propietarios dis-

tantes reclamar las tierras por la fuerza. Mientras que algunos refugiados ambientales han practicado el sistema de cortar y quemar (despejar para el cultivo temporal) en las tierras altas, otros no tuvieron más opción que trabajar para las élites locales apoyadas por el estado, mal pagados y peor tratados. Desilusionados, los desplazados se convirtieron en objetivos a ser movilizados por los rebeldes locales. Durante mucho tiempo, las tierras altas habían sido base de operaciones de organizaciones rebeldes que combatían al gobierno bajo denominaciones como Nuevo Ejército Popular (NPA) y Frente Moro Islámico de Liberación (MILF). Los rebeldes hallaron a los recién llegados receptivos a sus ideas, les defendieron y les ofrecieron tierras, salarios más altos y arriendos más bajos. A cambio, muchos desplazados cooperaron con los rebeldes y algunos hasta se unieron a su causa. El conflicto entre gobierno y la insurgencia del NPA y del MILF se ha cobrado las vidas de 140.000 personas desde la década de 1970. Actualmente, el NPA cuenta supuestamente con 8.200 combatientes activos en gran parte de Filipinas, mientras que el MILF tiene 12.500 combatientes y cerca de 100.000 simpatizantes armados (Enciclopedia Británica, 2007; Britannica Book of the Year, 2007; Davis, 2002; Hawes, 1990; Jones, 1989).

EL HURACÁN KATRINA EN EEUU

Finalmente, consideraremos el caso del huracán Katrina, que azotó las zonas costeras de los estados de Louisiana y Mississippi, especialmente Nueva Orleans, en agosto de 2005. Nueva Orleans siempre ha sido vulnerable ante las tormentas, ya fuesen el resultado de su situación geográfica o de la acción humana. A lo largo del tiempo, la conversión del río Mississippi en una autopista acuática alteró considerablemente la sedimentación natural del suelo que mantenía a la región por encima del nivel del mar. El reemplazo de las ciénagas costeras por urbanizaciones y polígonos industriales eliminó un ecosistema que podía absorber en parte el impacto de las tormentas marinas. Para reducir su vulnerabilidad, la ciudad estaba rodeada de diques, canales y equipos de bombeo diseñados para defenderla de tormentas de categoría 2 y 3. Sintiendo seguros, las empresas

inmobiliarias intensificaron la construcción en áreas bajas vulnerables (Prugh, 2006; LaCoast, 2005; Colten, 2005; Barras et al., 2004; Kelman, 2003).

Al alcanzar la costa el huracán Katrina, de categoría 5, había disminuido su intensidad hasta convertirse en una tormenta de categoría 3, pero el aumento del nivel de las aguas que había provocado seguía siendo de categoría 5, como consecuencia se desbordaron numerosos diques, ocasionando cincuenta grietas. Cerca del 80% de la Nueva Orleans metropolitana quedó inundada por las aguas, que llegaron a alcanzar los seis metros de altura (*Times*, 2006; US Army Corps of Engineers, 2006) y más del 90% de los edificios de la línea costera del área metropolitana de Biloxi-Gulfport quedaron destruidos (McQuaid, 2006). Cuando la tormenta se desvaneció, cerca de 238.000 kilómetros cuadrados se habían convertido en zona de desastre (US House of Representatives, 2006). Un año después, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU (2006) reconocía el papel crítico que había tenido el agrietamiento de los diques en la destrucción de la ciudad, afirmando que era un *sistema de diques* sólo de nombre.

La devastación fue impresionante. Un informe de 2006 cifra en 2.180 los muertos por la tormenta, la mayoría en Louisiana (LDHH, 2006; *Sunherald*, 14 diciembre 2005). Un año después del Katrina, sólo el 50% de los hospitales de la ciudad, el 23% de los centros de atención infantil y el 17% del transporte público estaban nuevamente en funcionamiento (*Times*, 2006) y el 22% de la producción de petróleo y el 13% de la de gas en esa región estaba fuera de servicio (Minerals and Management Services, 2006). Aproximadamente 350.000 hogares quedaron destruidos (*Times*, 2006) y más de 200.000 personas perdieron su trabajo (Reuters, 24 agosto 2006). En abril de 2006, el gobierno federal destinó 105.000 millones de dólares para la reparación y reconstrucción (*Boston Globe*, 1º abril 2006), pero algunas estimaciones elevan el total de pérdidas materiales a 150.000 millones de dólares (McQuaid, 2006) y hasta a 225.000 millones (Wolk, 2005).

A medida que el huracán se aproximaba, cerca del 80% de la población huyó por sus propios medios y unas 100.000 personas, en su mayoría pobres y ancianos, fueron evacuadas

por efectivos gubernamentales (McQuaid, 2006). En enero de 2006, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) calculó que el Katrina y el subsiguiente huracán Rita desplazaron cerca de dos millones de personas (13 enero 2006, *Washington Post*; Louisiana Family Assistance Center, 2006).

Hasta ahora, muchos desplazados no han regresado a la zona. Aunque no se dispone de información sobre las intenciones de los evacuados, entrevistas realizadas en septiembre de 2005 a desplazados de Louisiana revelaban que había miles que no pensaban retornar (Reuters, 5 septiembre 2005). En diciembre de 2005 se estimaba que unas 500.000 personas aún no habían regresado (White House, 2006) y en enero de 2006, las zonas más afectadas de Louisiana y Mississippi echaban a faltar 385.000 personas (39%) y 42.000 personas (18%), respectivamente (US Census Bureau, 2006). En febrero, Nueva Orleans, originalmente una ajetreada metrópolis de 470.000 habitantes, era una agobiada ciudad de apenas 100.000 habitantes (US House of Representatives, 2006). En total, en agosto de 2006, el 60% de los evacuados de Nueva Orleans no había retornado (*Times*, 2006). Muchos evacuados buscaron refugio en regiones vecinas, pero otros se dispersaron por más de treinta estados (White House, 2006), incluyendo Texas (250.000 evacuados) y Arkansas (60.000) (PBS, 2005 a, 2005b; LAFD, 2005; Mongobay, 2005; Bloomberg, 2006).

Hasta ahora, muchos desplazados no han regresado a la zona.

En general, los evacuados fueron bien recibidos en las zonas de reasentamiento, pero no faltaron los signos de conflicto. La ciudad de Gretna, en Louisiana, frente a Nueva Orleans, envió policías para evitar que los desplazados entrasen en la ciudad, llegando a disparar para que se alejasen (NPR, 2005). Un mes después del huracán, el gobernador de Texas reclamó al presidente Bush que reembolsase los gastos que su estado había tenido al absorber a los evacuados y pidió al FEMA que distribuyese a la gente en otros estados, argumentando que Texas estaba agotando su capaci-

dad (Contact the Press Office, 2005; Gallery Watch, 2005; Associated Press, 2005). Algunos evacuados fueron recibidos con recelo y hasta con velada animosidad. Varios de los estados que recibieron evacuados, como Texas, Tennessee, Massachusetts y Pennsylvania, investigaron sus antecedentes criminales, pero encontraron pocas evidencias. Aún así, Rhode Island, South Carolina y West Virginia insistieron en que más del 50% de los evacuados que absorbieron tenía antecedentes penales. «Sería prudente que la gente que los alberga investigue si tienen pasados criminales», advirtió el Jefe de la División para el Cumplimiento de la Ley de South Carolina (Fox News, 2005).

La erosión, las inundaciones y la sedimentación empeoraron con la deforestación y el cultivo de las tierras marginales.

A pesar de que las investigaciones realizadas en Texas no hallaron a muchos delincuentes, durante ese período los delitos aumentaron en todo el estado. Comparando los casos de homicidio de febrero de 2005 con los de febrero de 2006, en Houston hubo un incremento del 28% y la suma de víctimas mortales de los meses de noviembre y diciembre fue un 70% mayor que la del mismo período de 2004. Sumando más evidencias de tensión, una encuesta de marzo de 2006 demostró que Houston estaba cada vez más cansada y vigilante ante sus nuevos 150.000 residentes. Cerca del 75% de los habitantes de la ciudad se sentían tensos, el 67% responsabilizaba a los recién llegados por el aumento de delitos y una proporción similar afirmó que Houston estaría peor si los evacuados se radicaban definitivamente allí (*Houston Chronicle*, 2006). Cada vez más preocupadas, las autoridades de la ciudad solicitaron fondos al FEMA para reducir el crimen y la violencia (Daily Telegraph, 2005; Bloomberg, 2006). El 12 de marzo de 2006, la tensión se trasladó a Washington cuando el gobierno federal denegó una solicitud de más fondos hecha por Texas. El senador Bond, de Missouri, pidió a Texas que fuera «un buen vecino y no un acompañante remunerado.»

El senador Hutchinson, de Texas, replicó que era una afrenta cuestionar la generosidad de su estado y el representante estatal Brady agregó: «No creo recordar al senador Bond abriendo el estadio St. Louis Dome para las víctimas del Katrina» (Associated Press, 2006).

SÍNTESIS DE LOS CASOS

Los tres casos estudiados comparten rasgos comunes. En primer lugar, las sociedades afectadas dependían muy directamente del entorno natural para su subsistencia. En El Salvador y Filipinas, esas sociedades eran agrícolas en gran medida. Las zonas costeras de Louisiana y Mississippi dependían de la extracción y el refinado de combustibles, la agricultura, el turismo y la vía fluvial del Mississippi. Puesto que las condiciones ambientales se deterioraron, mucha gente de esas tres regiones perdieron sus medios de subsistencia y abandonaron las áreas afectadas.

En segundo lugar, las actividades humanas exacerbaban los problemas ambientales. En El Salvador, la desigual distribución de la tierra y la expansión de la superficie agrícola destinada a cultivos para la exportación produjeron escasez de tierras, degradación de los suelos y deforestación. En Filipinas, las políticas gubernamentales que favorecieron la agricultura industrial intensiva practicada por las élites en las tierras bajas y a las empresas forestales en las tierras altas, obligaron a muchos a huir de las zonas ambientalmente menos vulnerables. La erosión, las inundaciones y la sedimentación empeoraron con la deforestación y el cultivo de las tierras marginales. En Nueva Orleans, la acción humana eliminó procesos naturales que podrían haber aminorado los efectos del Katrina y un obsoleto sistema de diques no logró proteger la ciudad.

Por último, los factores ambientales se sobrepusieron a otros que también influyeron en el desenlace. Los terratenientes hondureños utilizaron a los desplazados salvadoreños como chivos expiatorios para distraer la atención de los campesinos que exigían la reforma agraria. Las cosas empeoraron debido a las tensiones fronterizas existentes entre ambos países. Los insurgentes filipinos concentraron

sus esfuerzos en reclutar combatientes entre los refugiados ambientales descontentos, apelando a la opresión y los malos tratos de los que habían sido víctimas por parte de los terratenientes y de las autoridades locales. En el caso del Katrina, muchos de los desplazados eran parte de las minorías pobres. Además, los habitantes de algunas de las áreas receptoras se negaron a absorber desplazados por sospechar que eran delincuentes o aduciendo que su absorción era muy costosa.

También las diferencias entre esos tres casos son importantes. Ante todo, los patrones de conflicto eran diferentes. Muchos salvadoreños emigraron a Honduras, provocando conflictos violentos entre recién llegados y residentes y, posteriormente, entre ambas naciones. En cambio, en los casos del huracán Katrina y de Filipinas, muchos desplazados migraron internamente. En Filipinas, muchos emigrantes fueron reclutados por los rebeldes que se enfrentan al gobierno central. Los desplazados por el Katrina, en general, fueron acogidos cordialmente en las zonas receptoras, pero también padecieron cierto tipo de rechazo.

En segunda instancia, en lo relativo al Katrina, tanto desplazados como receptores compartían nacionalidad y no abrigaban hostilidades previas importantes. Eso ayudaría a explicar por qué las tensiones entre desplazados y residentes fueron relativamente pocas en este caso. Los desplazados salvadoreños y los campesinos hondureños no compartían nacionalidad y las relaciones entre sus países eran tensas desde antes de que comenzase la emigración, factores estos que influyeron en los posteriores actos de violencia militarizada. En Filipinas, los recién llegados y los receptores compartían nacionalidad, pero las tensiones fueron exacerbadas por años de diferencias de clase y marcadas desigualdades de ingresos.

Tercero, los tres casos sugieren que con políticas públicas adecuadas, las transiciones asociadas con los refugiados ambientales podrían desarrollarse sin problemas y evitarse los conflictos. En el caso del Katrina, los gobiernos federal y estatales han invertido miles de millones de dólares para absorber a los desplazados en otras regiones y rehabilitar las costas de Louisiana y Mississippi, evitando así conflictos

mayores. Los gobiernos de Honduras y El Salvador, con la ayuda de la mediación internacional, acabaron la Guerra del Fútbol después de pocos días de combates, evitando pérdidas mayores. A partir de entonces, ambas naciones han iniciado diversos proyectos conjuntos de desarrollo, que probablemente hayan contribuido a contener la emigración. En el caso de Filipinas, el gobierno no ha colaborado en la transición de los desplazados hacia sus nuevas zonas de residencia en las tierras altas, convirtiéndoles en presas fáciles de ser reclutadas por los insurgentes.

Finalmente, consideremos el nivel de desarrollo de las áreas receptoras. En el caso del Katrina, las zonas receptoras estaban desarrolladas, ofreciendo muchas oportunidades y recursos a los recién llegados. En Filipinas y Honduras, las áreas receptoras eran subdesarrolladas y pobres, padeciendo muchos de los problemas que las zonas de origen también sufrían. Esto hizo más probables los conflictos en las zonas de acogida.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

En las secciones anteriores establecíamos que la degradación ambiental provocó desplazados ambientales en el pasado y que la llegada de esos emigrantes condujo a conflictos entre residentes y recién llegados, así como entre las zonas de origen y las receptoras. Consideramos que ese punto es importante, pero el tema es mucho más amplio. Si la degradación ambiental tuvo un papel protagónico en las migraciones y los conflictos del pasado, puede volver a tenerlo en el futuro. Mirando hacia adelante, el cambio climático amenaza con convertirse en la principal causa de deterioro ambiental. Si esos augurios se materializan, creemos que el cambio climático puede causar migraciones ambientales que tal vez originen conflictos.

A manera de resumen, los últimos 150 años han sido testigos de patrones de cambio que concuerdan con el cambio climático, entre los que destacan el aumento de la frecuencia y la duración de los períodos cálidos, la subida

del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, la reducción de las capas de nieve invernal y del grosor de los casquetes polares y el incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Todos esos cambios son atribuibles a los gases de efecto invernadero que genera el consumo de combustibles fósiles (IPCC, 2007a). La predicción de los posibles efectos del cambio climático a lo largo del presente siglo varía según las diferentes suposiciones sobre el crecimiento económico y demográfico, la utilización de la energía y el avance de las innovaciones. Sin embargo, todos los escenarios coinciden en que, si no cambian las reglas de juego económico, la degradación ambiental irá en aumento. Subirá el nivel de los mares, las inundaciones serán más frecuentes y se producirá una disminución de la disponibilidad de agua potable y de la productividad de la tierra, además del aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales como tormentas y sequías. Los países menos desarrollados (PMD) son los más vulnerables a estos efectos, debido a su gran dependencia directa del entorno natural para asegurar su subsistencia y a su limitada capacidad de adaptación. Desafortunadamente, los efectos más intensos del cambio climático probablemente se concentrarán en África y Asia, que son las regiones donde se encuentra la mayoría de PMD (IPCC, 2007b). Por lo tanto, podemos anticipar que el problema de los refugiados ambientales será más intenso en esos continentes.

Los últimos 150 años han sido testigos de patrones de cambio que concuerdan con el cambio climático

En general, la mayoría de los especialistas está de acuerdo con estos pronósticos, pero su impacto económico no puede aun ser determinado con precisión. Por otra parte, mitigar el cambio climático sin duda será muy costoso. Ante esta situación, tanto se puede posponer cualquier acción como actuar cuanto antes, presuponiendo que el coste de no actuar será cada vez mayor. Si de lo que se trata es de minimizar los problemas de desplazamientos ambientales

y de conflictos inducidos por el cambio climático, ¿qué enfoque deberíamos adoptar?

Teniendo en cuenta nuestras previsiones de que gran parte de los potenciales refugiados ambientales serán originarios de los PMD, analicemos los actuales patrones migratorios correspondientes a esos países. Actualmente, muchos emigrantes de los PMD se desplazan de un país pobre a otro país pobre y la gran mayoría de desplazados internos de todo el mundo se hallan en los PMD (USCR, 2002; Martin y Widgren, 2002). No obstante, ciertos datos y estimaciones sugieren que muchos residentes de los PMD desean trasladarse hacia los países desarrollados. Por ejemplo, cerca del 90% de las personas que entran legalmente a EE UU cada año y casi todos los deportados de ese país como inmigrantes ilegales son originarios de PMD (UDHS, 2005). Ante tales presiones migratorias, en los últimos años los países desarrollados han dificultado la inmigración procedente de los PMD (Andreas y Snyder, 2001; Martin y Widgren, 2002). Creemos que esas medidas serán cada vez menos efectivas según se intensifique el cambio climático, aumentando la presión de los refugiados ambientales.

Puede ser tentador argumentar, como lo hacen algunos, que las innovaciones y los cambios institucionales aligerarán las presiones. Pero aunque eso fuese así, tales procesos demandarán mucho tiempo. Por ejemplo, el proceso de modificar el sistema energético mundial para que no se base en el consumo de combustibles fósiles es muy lento y, hasta ahora, los intentos institucionales para contener el cambio climático han fracasado. Quizás, como creen algunos, el crecimiento económico de los PMD podría llegar a resolver el problema, reduciendo su dependencia directa del medio ambiente y financiando sus esfuerzos de adaptación y de mitigación de riesgos. Tal vez así sea, pero con la tecnología actual, eso incrementaría la demanda de combustibles fósiles en los PMD y aceleraría el cambio climático en las próximas décadas.

Nuestro análisis sugiere que los PMD son más propensos que los países desarrollados a sufrir los efectos de los desplazamientos por cuestiones ambientales y los conflictos que incrementará el cambio climático; pero las consecuencias políticas probablemente se percibirán no

sólo en los PMD. Por ejemplo, en su momento, China podría argumentar que la extrema dependencia de los combustibles fósiles que caracteriza a los países industrializados ha sido la causa principal de los refugiados ambientales que deberán huir de las zonas costeras del país debido a la subida del nivel del mar. Las grandes oleadas de refugiados ambientales podrían también generar una atmósfera favorable al reclutamiento de seguidores por parte del terrorismo internacional, como puede estar sucediendo ya en el Cuerno de África, una región que en las últimas décadas ha padecido ese tipo de oleadas migratorias (Thibodeaux, 2005).

Ante esas sombrías posibilidades y recordando que nuestro análisis de casos sugiere que los gobiernos pueden contribuir a contener los flujos de refugiados ambientales, proponemos que ya hoy se tomen las iniciativas necesarias contra los problemas ocasionados por el cambio climático, antes de que lleguen a provocar desplazamientos masivos de población. Tal esfuerzo podría centrarse en aquellos PMD más proclives a generar refugiados ambientales, reduciendo su dependencia directa del medio ambiente para asegurar la subsistencia de sus habitantes y protegiéndoles de los esperados efectos negativos del cambio climático. Aun siendo factible, ese esfuerzo no dejará de ser complejo y prolongado. Además, será muy costoso. ¿Quiénes orientarán y financiarán dicho esfuerzo? Creemos que han de ser los países desarrollados, dado que su exagerada dependencia de los combustibles fósiles ha sido la primera causa del cambio climático que hoy nos amenaza; después de todo, los países desarrollados practican dentro de sus territorios el principio de «quien contamina, paga.»

No hay duda de que actualmente nuestra propuesta sería rechazada por los países desarrollados. Que finalmente sean capaces de aceptarla dependerá de sus actitudes ante los riesgos. Aunque las cifras exactas son difíciles de precisar, nuestras investigaciones sugieren que si se continúa con las actuales reglas de juego económico, los costes de los conflictos y de los desplazamientos provocados por el cambio climático aumentarán a un ritmo cada vez mayor. Tal vez esto haga ver la conveniencia de adoptar nuestras propuestas cuanto antes, en lugar de seguir demorándolas.

REFERENCIAS

- ACED (2000), «Soccer War 1969», Armed Conflict Events Database, <http://www.onwar.com/aced/data/sierra/soccer1969.htm>.
- AMACHER, G.S., W. CRUZ, D. GREBNER, y W.F. HYDE (1998), «Environmental Motivations for Migration: Population Pressure, Poverty, and Deforestation in the Philippines», *Land Economics*, 74 (1): 92–101.
- ANDREAS, P. y SNYDER, T. (2001), *The Wall Around the West*, Blue Ridge Summit, PA: Rowman and Littlefield.
- Associated Press (2005), «Governor: Texas Nearing Refugee Capacity», septiembre 3.
- Associated Press (2006), «Appreciation drying up for Texas' Katrina compassion», marzo 12, 2006.
- BARRAS, J. et al. (2004), *Historical and Projected Coastal Louisiana Land Changes: 1978-2050*, US Geological Survey, Washington DC.
- BILSBORROW, R. (2004), «Migration, Population Change, and the Rural Environment», *Population, Environmental Change, and Security Working Paper Series*, Number 2, Ann Arbor, MI: Population-Environment Fellows Program.
- BLOOMBERG (2006), «Louisiana Gangs That Fled Katrina Heighten Houston Murder Rate», marzo 3. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=az6n8C6gsqf0&refer=us#>
- Boston Glob (various), daily, Boston, MA, US.
- BOURNE, W.C., T.W. McKinley, O.P. Stevens, and U. Pacheco (1947), *Preliminary Survey of Conservation Possibilities in El Salvador*, San Salvador: Servicio Cooperativo.
- Britannica Book of the Year (2007), «Philippines», *Encyclopedia Britannica Online*, www.britannica.com/eb/article-9433268
- BROAD, R. y J. CAVANAGH (1993), *Plundering Paradise: The Struggle for the Environment in the Philippines*, Berkeley, CA: University of California Press.
- CIA (2007), *The World Factbook*, <https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/>
- COHEN, R. (1996), *Theories of Migration*, Brookfield, VT: Edward Elgar.
- COLTEN, C.E. (2005), *An Unnatural Metropolis: Wrestling New*

- Orleans from Nature, Baton Rouge, Louisiana University Press.
- CONAPLAN (1969), Consejo Nacional de Planificación (CONPLAN), Cuantificación y análisis de la población salvadoreña expulsada de Honduras. Documento DT/785. San Salvador.
- Contact the Press Office (2005), «Summary of Key State of Texas Actions in Response to Hurricane Katrina», Texas Governor Press Release, septiembre 3.
- COOPER, T. y M. COELICH (2003), «El Salvador vs Honduras, 1969: The 100-Hour War», Central and Latin America Database. Air Combat Information Group (ACIG). http://www.acig.org/artman/publish/printer_156.shtml
- CRUZ, M.C., C.A. MEYER, R. REPETTO y R. WOODWARD (1992), Population Growth, Poverty, and Environmental Stress: Frontier Migration in the Philippines and Costa Rica, Washington D.C.: World Resources Institute.
- CRUZ, W.D. y M.C.J. CRUZ (1991), «Population Pressure and Deforestation in the Philippines», ASEAN Economic Bulletin, 7: 200-212.
- Daily Telegraph (2005), «Murder soar in wake of Katrina refugees», diciembre 3, Londres.
- DAUGHERTY, H.E. (1969), Man-induced ecologic change in El Salvador, Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.
- DAVID, W.P. (1987), Soil Erosion and Soil Conservation Planning Issues and Implications, Los Banos, Philippines: College of Engineering and AGRO-Industrial Technology, University of the Philippines.
- DAVIS, A. (2002), «Attention Shifts to Moro Islamic Liberation Front», Jane's Intelligence Review, 14(4).
- DEUDNEY, D.H. (1999), «Environmental Security: A Critique», in D. H. Deudney and R. A. Matthew (eds.) Contested Grounds: Security and Conflict in the New Environmental Politics, Albany, NY: State University of Nueva York Press.
- DURHAM, W.H. (1979), Scarcity and Survival in Central America, Stanford, CA: Stanford University Press.
- Encyclopedia Britannica (2007), «Moro National Liberation Front», Encyclopedia Britannica Online, www.britannica.com/eb/article-9101706.
- ESDGEC (various), El Salvador Dirección General de Estadística y Censos. San Salvador.
- Fox News (2005), «Half Katrina Refugees Have Records», septiembre 22, <http://www.foxnews.com/story/0,2933,170134,00.html>
- Gallery Watch (2005), «Texas Nearing Capacity with Evacuees», septiembre 3, Austin.
- GORE, A. (1992), Earth in the Balance: Ecology of the Human Spirit, Boston: Houghton Mifflin.
- HAWES, G. (1990), «Theories of Peasant Revolution: A Critique and Contribution from the Philippines», World Politics, 42: 261-298.
- Houston Chronicle (2006), «Houstonians evacuee-weary, poll says», marzo 24.
- Indicadores (1973), Indicadores Economicos y Sociales, Consejo Nacional de Planificación. San Salvador.
- IPCC (2007a), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch.
- IPCC (2007b), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch.
- JONES, G. (1989), Red Revolution: Inside the Philippines Guerilla Movement, Boulder, CO: Westview Press.
- KAPLAN, D.R. (2000), The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War, Nueva York: Vintage Books.
- KELMAN, A. (2003), A River and Its City: The Nature of Landscape in New Orleans, Berkeley: University of California Press.
- KENNEDY B.Jr. (2001), Environmental Scarcity and the Outbreak of Conflict, Population Reference Bureau, Washington, D.C.
- KESSLER, R. (1989), Rebellion and Repression in the Philippines, New Haven, CT: Yale University Press.
- KUMMER, D. (1992), Deforestation in Postwar Philippines, Manila: Ateneo de Manila University Press.
- LACOAST (2005), Other Impacts From Coastal Wetland Loss, National Wetlands Research Center, US Geological Survey, Louisiana, www.lacoast.gov/watermarks/1999c-summer/4other/.

- LAFD (2005), Hurricane Katrina Situation Report, Homeland Security Intelligence Section, Los Angeles Fire Department Historical Archive, septiembre 7, www.lafire.com/famous_fires/2005-0829_Katrina/SituationReports/2005-0907_LAFD-Report-0800hrs.doc
- LDHH (2006), Reports of Missing and Deceased, Louisiana Department of Health and Hospitals, agosto 2, www.dhh.louisiana.gov/offices/page.asp?ID=192&Detail=5248.
- LIVERNASH, R. y E. RODENBURG (1998), «Population Change, Resources, and the Environment», *Population Bulletin*, 53 (1), Population Reference Bureau, Washington D.C., US.
- Louisiana Family Assistance Center (2006), Reuniting the Families of Katrina and Rita: Final Report, State of Louisiana, agosto 30, www.dhh.louisiana.gov/offices/publications/pubs-303/Full%20Report.pdf
- MALTHUS, T. (1798), *An Essay on the Principle of Population*, Penguin: Nueva York.
- MARTIN, P. y J. WIDGREN (2002), «International Migration: Facing the Challenge», *Population Bulletin*, 57(1).
- MATTHEW, R.A., T. GAULIN y B. McDONALD (2003), «The Elusive Quest: linking Environmental Change and Conflict», *Canadian Journal of Political Science*, 36: 857 – 878.
- MATTHEW, R.A. (2002), «In Defense of Environmental Security Research», *ECSP Report*, 8: 109-124.
- MCQUAID, J. (2006), «Katrina's Assault on New Orleans», *World Watch*, 19: 13-17.
- Mineral Management Service (2006), Hurricane Katrina and Rita Research, U.S. Department of the Interior, Washington D.C., www.mms.gov/tarprojectcategories/hurricaneKatrinaRita.htm
- MONGOBAY (2005), «State by State Estimates of Evacuatee Housing», septiembre 8, www.mongobay.com.
- MORELLO, D. (1997), «Soccer War», *International Conflict and the Environment*, American University, Washington D.C., <http://www.american.edu/ted/ice/soccer.htm>
- NARP (1991), «Final Report of Phase I Activities», Natural Resource Accounting Project, Filipino Department of Environment and U.S. Agency for International Development, Manila, Filipinas.
- NPR (2005), «Evacuees Were Turned Away at Gretna, La.», Katrina & Recovery, National Public Radio, septiembre 20, <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4855611>.
- OAS (1974), *El Salvador: Zonificación Agrícola*, Organization of American States, Washington, D.C.
- PBS (2005a), «Katrina Relocation Challenges», Public Broadcasting Service, www.pbs.org/newshour/bb/weather/july-dec05/relocation_9-12.html
- PBS (2005b), «Rebuilding Lives in Houston», Public Broadcasting Service, www.pbs.org/newshour/bb/weather/july-dec05/houston_9-8.html
- POFFENBERGER, M. y B. MCGEAN (1993), «Upland Philippine Communities: Guardians of the Final Forest Frontiers», Research Network Report, Number 4, Berkeley, CA: Center for Southeast Asia Studies.
- PORTER, G. y D. GANAPIN (1988), «Resources, Population and the Philippines's Future: A Case Study», World Resource Institute Paper, Number 4, Washington, D.C.: World Resources Institute.
- PRUGH, T. (2006), «Katrina: The Failures of Success, Editor's Introduction», *World Watch*, 19: 7.
- Reuters (various), Global News Agency, London, UK.
- SAITH, A. (1997), «Emigration Pressures and Structural Change: Case Study of the Philippines», *International Migration Papers*, Number 19, Migration Branch, International Labor Organization, Nueva York.
- SCHWARTZ, P. y D. RANDALL (2003), *An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security*, US Department Defense, Washington DC, www.ems.org/climate/pentagon_climatechange.pdf.
- SIMON, J.L. (1996), *The Ultimate Resource 2*, Princeton: Princeton University Press.
- Sunherald (various), daily newspaper, Biloxi, Mississippi, US.
- THIBODEAUX, R. (2005, 8 August). *Analysts Say East Africa Fertile Ground for Terrorist Groups. Voice of America.* <www.voanews.com>
- Times (2006), «Katrina: One Year Later», 168: 51-53.
- UDHS (2005), *Yearbook of Immigration Statistics*, US Department of Homeland Security (UDHS), Washington D.C., US.
- US Army Corps of Engineers (2006), *Performance Evaluation of the New Orleans and Southern Louisiana Hurricane Protec-*

- tion System, Volume I – Executive Summary and Overview, 1-68, www.asce.org/files/pdf/executivsummary_v20i.pdf.
- US Census Bureau (2006), Special Population Estimates for Impacted Counties in the Gulf Coast Area, Hurricane Data and Emergency Preparedness, Washington DC. www.census.gov/Press-Release/www/emergencies/impacted_gulf_estimates.html.
- USCR (2002), World Refugee Survey, US Committee for Refugees, Washington, D.C., US.
- US House of Representatives (2006), A Failure of Initiative: Final Report of the Select Bipartisan Committee to Investigate the Preparation for and Response to Hurricane Katrina, Washington DC, <http://origin.www.gpoaccess.gov/congress/index.html>
- Washington Post (various), daily, Washington D.C., US.
- WEINER, M. (1992), «Security, Stability, and International Migration», *International Security*, 17: 91-126.
- White House (2006), The Federal Response to Hurricane Katrina: The Lessons Learned, febrero 23, Assistant to the President for Homeland Security and Counter-terrorism, Washington DC.
- WOLK, Martin (2005), How Katrina's Costs are Adding Up, Eye on the Economy, MSNBC, www.msnbc.msn.com/id/9329293/
- World Bank (1988), *Philippines: The Challenge of Poverty*, Washington D.C.: World Bank.
- World Bank (1993, 1994), *World Development Report*, Washington, D.C.: World Bank.



ECOLOGISTAS

en acción

**300 grupos ecologistas
luchando por nuestro
medio ambiente**

Buena parte de sus actividades se financian con la **revista ECOLOGISTA**, una publicación trimestral, a todo color, que aborda en profundidad todos los asuntos relacionados con nuestro entorno desde el punto de vista de la ecología social.



Te mandamos gratis un ejemplar de la **revista ECOLOGISTA** con sólo pedirlo.

www.ecologistasenaccion.org/revista
C/Marqués de Leganés, 12, 28004 Madrid



La extracción de combustibles fósiles como generadora de refugiados ambientales

Nicholas Hildyard*

Si la multinacional petrolera británica British Petroleum (BP) no hubiese ido a Colombia, Marta Hinestroza no sería hoy una refugiada en Gran Bretaña y centenares de agricultores, cuyos intereses esta abogada representaba, no habrían perdido sus medios de subsistencia. El espantoso periplo que llevó a Marta desde Colombia a Londres comenzó en el pueblo de Zaragoza, en cuyo ayuntamiento se desempeñaba como defensora popular (ombudsman). La BP había iniciado la construcción del oleoducto de Orensa en las proximidades y no pasó mucho tiempo sin que Marta comenzase a recibir las quejas de agricultores cuyas tierras habían quedado inutilizables debido a las actividades de la empresa. Sus investigaciones y las de otros colegas de profesión pronto les hicieron destinatarios de amenazas de muerte. Los defensores populares de cuatro poblaciones vecinas fueron asesinados y la tía de Marta recibió la «visita» de un grupo de paramilitares que la sacaron de su casa y le amenazaron. Cuando Marta continuó presionando en defensa de los derechos de sus clientes, los paramilitares le hicieron una oferta: te retiras

o mueres. Marta sintió que no le quedaba otra opción que huir del país. «¿Cómo puedo ayudar a alguien si estoy muerta?» comentaría posteriormente (Hinestroza, 2003).

En todo el mundo, cientos de miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares para dejar sitio a las minas, campos petrolíferos y de gas, oleoductos, centrales eléctricas y refinerías que proporcionan la energía que la economía mundializada necesita. Algunos son desposeídos porque sus tierras son directamente ocupadas por las infraestructuras para la producción energética; otros lo son debido a que la contaminación resultante arruina sus tierras e imposibilita la subsistencia; otros más, como es el caso de Marta, se convierten en víctimas de intimidaciones y hostigamientos por intentar defender los derechos de los afectados. A todos ellos hay que sumarles las innumerables personas que acaban sin hogar debido a los impactos climáticos provocados por el consumo de los combustibles que se han extraído, o por los conflictos generados por esas actividades extractivas.

Tales «refugiados ambientales» no gozan de derecho de asilo según la legislación internacional. Peor aún, muchos



Habitantes del municipio afro-colombiano de Tabaco sobre las ruinas de sus casas. Las casas fueron demolidas en agosto de 2001 © Richard Solly.

(* The Corner House (nick@fifehead.demon.co.uk).

de los derechos de los que sí disfrutaban son frecuentemente ignorados. La compensación por los perjuicios que han sufrido generalmente es irrisoria y, lejos de beneficiarse de los proyectos que los han desplazado, acaban padeciendo sus impactos adversos.

Por contra, los sectores petrolero, minero y de gas continúan siendo receptores de enormes subsidios gubernamentales, sin los cuales muchos proyectos extractivos dejarían de ser viables económicamente. La eliminación de tales subsidios es un prerrequisito para cualquier cambio en favor de modelos más sostenibles de producción energética. También es de justicia exigir compensaciones para todos aquellos desplazados y por el legado estructural que han dejado los anteriores métodos de explotación de los recursos naturales.

¿CUÁNTOS?

Oficialmente, las Naciones Unidas (NU) definen como «desplazados ambientales» a unos 24 millones de personas de todo el planeta. Entre esos refugiados se cuentan los *temporalmente desplazados* por causa de terremotos, ciclones e inundaciones y los *permanentemente desplazados* debido a «cambios en su hábitat» (por ejemplo, debido a la creación de embalses al construirse grandes presas) o porque «su hábitat original no está en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas» (UNHCR / ACNUR, 2002). Cada año se suman diez millones de personas a las filas de los desplazados (Mehta y Gupta, 2003; UNHCR / ACNUR, 2003). Según investigadores de Naciones Unidas, el aumento del nivel de los océanos, la desertificación y la disminución de las fuentes de agua potable pueden llevar el número total de desplazados hasta los 50 millones a fines de la presente década (Adam, 2005).

Pese a que los daños ambientales ocasionados por la extracción y explotación de petróleo y gas y por la minería son ampliamente reconocidos, no existe ninguna cifra –ni siquiera una estimación– sobre la cantidad total de personas desplazadas para poder proporcionar los 80 millones de barriles de petróleo (EIA, 2007), 2.750 millones de metros

cúbicos de gas natural (BP, 2006b) y los 5.800 millones de toneladas de carbón (WCI, 2007) que se consumen anualmente en todo el mundo. La ausencia de esos datos contrasta notoriamente con la plétora de estadísticas disponibles en cualquier otro aspecto relacionado con las industrias petrolífera, minera o de gas. Abundan las bases de datos; por ejemplo, las que detallan las reservas mundiales estimadas de carbón recuperable (909.064 millones de toneladas), el crecimiento de la producción mundial de carbón (un 78% desde 1980), el principal país exportador (Australia: 250 millones de toneladas), el principal productor (China: 2.226 millones de toneladas), los principales consumidores (la región Asia-Pacífico: 68% de la producción mundial) (WCI, 2007) y el número de minas de carbón en cada país (China: 97.000; EE UU: 1.453) (IEA, 1994; EIA, 2002). Pero estas estadísticas no van acompañadas por las cifras equivalentes en lo relativo a la cantidad de personas afectadas por tales actividades. De igual modo, pueden conseguirse en internet (por cierto precio) mapas obtenidos por satélite que indican la ubica-

En los impactos sociales y ambientales de la explotación de petróleo, carbón y gas, no se ha cuantificado la magnitud de la desposesión que esas industrias han generado, tanto en el pasado como en el presente

ción de *todos* los pozos petrolíferos del mundo (40.000 en total) (O'Rourke y Connolly, 2003), *todos* los oleoductos y gasoductos (para EE UU: «355.800 millas de gasoductos existentes y proyectados, de todos los diámetros, diferenciados según propietario y según diámetro de la tubería») (Platts, 2007a), *todas* las instalaciones subterráneas para almacenamiento y procesamiento de gas, *todas* las instalaciones (tanto existentes como proyectadas) de gas natural líquido (GNL), *todas* las terminales de buques cisterna (Petroleum Economist, 2007) y *todas* las minas de carbón de América del Norte (Platts, 2007b). Pero los mapas, al igual que las bases de datos, no dan ninguna pista sobre aquellos que

una vez vivieron donde ahora se alzan las infraestructuras de las modernas industrias petrolífera, minera y de gas. En las bases de datos, las personas sólo figuran como cifras conjuntas de personal empleado. Sin embargo, quienes perdieron sus medios de supervivencia debido a las industrias extractivas son invisibles. A diferencia de los activos físicos (reservas de carbón, oleoductos y gasoductos y hasta el personal altamente capacitado), los desposeídos no forman parte de lo que Platt's, el «principal proveedor mundial de información sobre energía y metales», define como «información fidedigna que puede transformarse en actividades lucrativas» (Platts, 2007c).

Aun en estudios centrados explícitamente en los impactos sociales y ambientales de la explotación de petróleo, carbón y gas, no se ha cuantificado la magnitud de la desposesión que esas industrias han generado, tanto en el pasado como en el presente. Por ejemplo, en 2002, el Banco Mundial encargó al ex Ministro de Población y Medio Ambiente de Indonesia, Emil Salim, que hiciese una revisión de todos los préstamos que el Banco había concedido para proyectos en los sectores del petróleo, el gas y la minería, las habitualmente denominadas «industrias extractivas». Su informe, publicado en 2004, es honesto en lo relativo a los efectos del reasentamiento forzado (destacando el «grave y desastroso daño» causado por los reasentamientos involuntarios a «los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de un gran número de personas, tanto individual como colectivamente» (EIR, 2004)) pero no aporta cifras que confirmen la magnitud de tales desplazamientos en todo el mundo. Una de las razones, que demuestra claramente hasta qué punto la gente no existe en la mente de quienes financian y operan las industrias energéticas del planeta, es que el mismo Banco Mundial apenas se ha preocupado por investigar la suerte de los afectados por los proyectos que financia. Hablando claro: las cifras no existen. Un informe paralelo, financiado por la Global Mining Initiative (creada por las diez mayores empresas mineras) (GMI, 2002), es igualmente parco en lo relativo al número de personas afectadas por las actividades extractivas de petróleo, gas y carbón (MMSD, 2002).

DESPOSEÍDOS POR LA ENERGÍA

La ausencia de cifras no debe tomarse como evidencia de que las actividades extractivas de petróleo, carbón y gas no hayan generado desplazamientos forzosos, aunque ese argumento se ha utilizado cuando se investigó el impacto de la minería en Filipinas (Environmental Science for Social Change, 1999). De hecho, tanto los informes del Banco Mundial como de la Global Mining Initiative reconocen la capacidad de las llamadas «industrias extractivas» para causar daños ambientales y perturbaciones sociales. Según el Informe sobre Industrias Extractivas 2004 del Banco Mundial:

Las industrias extractivas pueden causar degradación ambiental. La exploración y explotación de industrias extractivas puede provocar la deforestación de terrenos y la pérdida de hábitats. La construcción de caminos de acceso puede abrir territorios vírgenes para que sean explotados. La eliminación de los desechos de la minería puede contaminar la zona circundante. Los fosos de residuos pueden desbordarse o filtrarse a los acuíferos. Otros pueden ser arrojados a vías de agua, contaminando los suelos y napas de la zona. Aun cuando los residuos son almacenados adecuadamente, los diques que los contienen pueden desbordarse. Los drenajes ácidos procedentes de las minas también contaminan el suelo y las aguas, al igual que los derrames de mercurio y cianuro. Los escapes de petróleo durante su transporte pueden contaminar tierras y costas. La combustión del gas puede causar contaminación atmosférica y generar gases de efecto invernadero. La extracción de recursos, especialmente de minerales, exige grandes cantidades de agua que pueden reducir su disponibilidad para las comunidades vecinas al hacer disminuir los acuíferos. La degradación ambiental puede, a su vez, destruir los medios de subsistencia que los recursos locales ofrecen.

Esas industrias pueden también provocar perturbaciones sociales y ocasionar conflictos entre comunidades. Las comunidades existentes pueden verse desplazadas

para dejar sitio a nuevas actividades industriales. Aun cuando esto no sucede, las nuevas actividades provocan con frecuencia una considerable afluencia de personas a la región, trastornando a la comunidad local. Las comunidades pueden padecer un incremento de problemas sociales como el alcoholismo, el juego de apuestas, la prostitución y la violencia contra las mujeres. La salud de los pobladores puede verse perjudicada por el flujo de los nuevos habitantes o por la contaminación que genera el yacimiento. La existencia de nuevos 'ganadores y perdedores' derivados del proyecto puede causar desavenencias en las comunidades. Las mujeres son las que con mayor frecuencia pueden padecer los problemas sociales ocasionados por nuevos proyectos. Las comunidades pueden tornarse totalmente dependientes de los beneficios que proporciona un proyecto extractivo y convertirse en «pueblos fantasmas» si no tienen fuentes alternativas de ingresos cuando el proyecto acaba (EIR, 2004).

La inexistencia de informes (un síntoma claro de la falta de interés por conocer el impacto humano de la explotación de fuentes de petróleo, carbón y gas) puede haber ayudado a la industria y los gobiernos a ocultar la magnitud de los desplazamientos relacionados con la extracción de combustibles en todo el mundo, pero la devastación causada por cada proyecto individual no puede ser ocultada. Sus historias demuestran los daños sociales y ambientales infligidos a las comunidades en cada una de las etapas del proceso de extracción de combustibles fósiles: desde los caminos abiertos a través de selvas y tierras agrícolas para hacer accesibles nuevas zonas a explorar hasta las voladuras, perforaciones y excavaciones necesarias para extraer el petróleo, el carbón y el gas del subsuelo; pasando por la contaminación del aire y del suelo provocadas por los desechos que esos procesos generan, hasta las fugas y los derrames que se producen durante su transporte, la contaminación química debida a accidentes durante su refinación y, finalmente, los desplazamientos y contaminación secundarios causados por el consumo de los combustibles fósiles que han sido extraídos (Leiderman, 1998; Harvard Medical School, 2002; Caruso et al., 2002).

A continuación señalamos algunos ejemplos que ilustran la problemática:

República Checa: Durante la década de 1950, amplias zonas del norte de Bohemia (actualmente en la República Checa) comenzaron a ser explotadas por el régimen comunista entonces vigente como minas de carbón de baja calidad. Durante las tres décadas siguientes, 116 aldeas y sectores de varias ciudades fueron borrados del mapa, haciendo que más de 200.000 personas perdiesen sus hogares (Leiderman, 2004). «Un hecho notoriamente nefasto fue la destrucción del centro histórico de la ciudad de Most, entre fines de los años sesenta y principios de los setenta, para explotar una rica veta de carbón», informa Eagle Glasheim, profesor de historia en la Universidad de British Columbia, en Canadá. «En la 'Nueva Most' se hicieron a decenas de miles de personas en edificios prefabricados baratos, con poca oferta de servicios, espacios verdes y actividades culturales. Most se convirtió en un caso emblemático de la obsesión del régimen por la producción, sin tener en consideración los costes humanos. Quienes visitaban Most y el norte de Bohemia después de mediados de los años sesenta, describían la región como un paisaje lunar, un campo de batalla o una tierra baldía» (Glasheim, 2004).

La inexistencia de informes (un síntoma claro de la falta de interés por conocer el impacto humano de la explotación de fuentes de petróleo, carbón y gas).

Colombia: Extendiéndose sobre una superficie de 38.000 hectáreas, Cerrejón Zona Norte es la mayor mina de carbón a cielo abierto de Sudamérica y una de las más grandes del mundo (Chomsky, Moody, Solly, 2003). Originalmente fue propiedad de la empresa minera estatal Carbocol y de Intercor, una subsidiaria de la Exxon. Entre 2000 y 2002 se hizo cargo de ella un consorcio europeo de los gigantes de la minería Anglo American (Reino Unido), BHP Billiton (Reino Unido/Australia) y Glencore (Suiza).

Actualmente está en proceso de duplicar su producción, de 22 millones a 40 millones de toneladas anuales. Gran Bretaña, Dinamarca y los Países Bajos están entre los principales compradores de carbón colombiano.

Las comunidades locales fueron desplazadas por la fuerza para dejar sitio a la mina, que inició sus actividades en 1977; muchos de los afectados nunca percibieron compensación. Simultáneamente, el tendido de una línea férrea que une la mina con Puerto Bolívar también ocasionó perturbaciones sociales masivas al atravesar el territorio tradicional del pueblo Wayuu y destruir parajes sagrados y cementerios.

Las poblaciones locales también deben enfrentarse a la contaminación que provocan los centenares de puntos donde se quema el gas que aflora cuando se extrae petróleo.

Las comunidades que cuestionaron la contaminación provocada por la mina también fueron reasentadas por la fuerza. Como resultado de acciones legales emprendidas en los años noventa, los residentes de Caracoli y Espinal lograron que una orden judicial obligase a la empresa a protegerles del polvo y otros agentes contaminantes producidos por la mina. La respuesta de la empresa fue desalojar violentamente de sus hogares a los pobladores y ubicarlos en un *resguardo*, es decir, una reserva indígena. Quienes se resistieron, fueron «trasladados durante la noche a una zona sin agua y agrícolamente improductiva situada a pocos kilómetros del nuevo asentamiento» (Chomsky, Moody, Solly 2003). En otro lugar, en 2001, la empresa que opera la mina destruyó la aldea de Tabaco, después de que sus habitantes se negaran a trasladarse sin un adecuado compromiso previo sobre el reasentamiento. Una resolución de la Corte Suprema de Colombia que obligaba a la empresa a reconstruir Tabaco en un nuevo emplazamiento ha sido ignorada.

Conforme la mina continúe expandiéndose, se pueden ya prever nuevos desplazamientos forzados.

Delta del Níger: Más del 80% de los ingresos del gobierno nigeriano, el 40% del PIB y el 90% de los beneficios en divisas provienen del petróleo (Rowell, Marriott y Stockman, 2005), obtenido en gran medida en el delta del río Níger. Sin embargo, poco se han beneficiado de esa riqueza los directamente afectados por la explotación petrolífera. En la tierra de los Ogoni, un área de unas 400 millas cuadradas en la zona oriental del delta, donde la multinacional Shell/BP halló y comenzó a extraer petróleo a mediados de los años cincuenta, muchas aldeas siguen careciendo de servicios básicos como la electricidad y el agua potable (Rowell, Marriott y Stockman, 2005).

Actualmente, Shell, conjuntamente con la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo, la italiana AGIP y EPNL (una subsidiaria de la multinacional francesa Total), explota una concesión de 31.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente la extensión de Cataluña y las islas Baleares) que incluye tanto zonas costeras como áreas de aguas poco profundas en la desembocadura del delta (Shell, 2007). Los 6.000 kilómetros de oleoductos de la empresa forman un tejido por todo el delta, conectando un millar de pozos de petróleo. Otras multinacionales que también operan en Nigeria son los gigantes estadounidenses Chevron y Texaco y la italiana ENI.

Por todo el delta, los escapes de petróleo de las tuberías corroídas han contaminado seriamente los ríos locales y las tierras de cultivo, imposibilitando la pesca y la agricultura y privando de agua potable a las aldeas. Además, los impactos son a largo plazo: diecinueve años después de un importante escape, un estudio confirmó que la vegetación río abajo «continuaba degradándose debido a la lenta filtración de petróleo crudo procedente del lugar del siniestro» (HRW, 1999).

No se sabe cuánto petróleo se ha derramado desde que comenzara su explotación a fines de la década de 1950, pero un estudio oficial considera que 1,7 millones de barriles «se perdieron en el medio ambiente» durante los veinte años que van de 1976 a 1996 (Groundwork, 2005). Según sus propios cálculos, Shell derramó 9.900 barriles de petróleo durante 2003 en 221 incidentes (Groundwork, 2005). Una vez liberada en el medio ambiente, la contaminación es muy difícil de contener: gran parte del delta está sujeto a inun-

daciones periódicas y el petróleo derramado es arrastrado río arriba y río abajo por las mareas, esparciéndose por las selvas, manglares y tierras de cultivo del delta. Al ser un crudo liviano, el petróleo también se evapora, incendiándose con frecuencia y provocando así nubes de humos tóxicos (Groundwork, 2005).

Las poblaciones locales también deben enfrentarse a la contaminación que provocan los centenares de puntos donde se quema el gas que aflora cuando se extrae petróleo. En 1999, el 95% de ese gas fue quemado, comparado con el 0,05% que se quema en las extracciones petroleras de EEUU (Groundwork, 2005). Sólo la Shell tiene 73 de esos puntos de combustión en el delta; si ese gas se envasase, podría proporcionar energía eléctrica a todas las aldeas próximas a los pozos (McGreal, 2007). No se han investigado los efectos sobre la salud de estas llamaradas -que emiten un cóctel de sustancias químicas entre las que destaca el benceno, un cancerígeno reconocido- pero los pobladores que padecen día y noche este rociado químico denuncian «molestias respiratorias, enfermedades cutáneas, abortos espontáneos, cánceres y otras dolencias» (Groundwork, 2007). En 2001, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictaminó que el gobierno nigeriano había violado el derecho a la salud «y a un medio ambiente satisfactorio y favorable al desarrollo» del pueblo Ogoni, al no prevenir la contaminación y la degradación ecológica (ESCR-Net, sin fecha). Cuatro años después, Johan Gbemre, de la comunidad Iwherekan, logró que la Corte Federal Suprema de Nigeria reconociera como inconstitucional la quema de gas y que las empresas petroleras debían dejar de provocar llamaradas en el delta (Federal Court of Nigeria, 2005). Shell apeló la decisión, que también afectaba a las demás petroleras que operan en Nigeria, pero posteriormente se le conminó a cesar de quemar gas en Iwherekan en 2007 (Milieudéfense, 2007). Hasta el momento, Shell no ha acatado dicha orden (Friends of the Earth Europe, 2007).

Los llamados para que se acabe con la degradación ambiental y para que las poblaciones locales tengan una mayor participación en los beneficios generados por la industria del petróleo han obtenido como respuesta una brutal represión militar. Se calcula que los «operativos de

desgaste» llevados a cabo por la Fuerza Policial Móvil de Nigeria (conocida por los lugareños como los «mata y huye») contra las aldeas de los ogoni han causado al menos 2.000 muertes y dejado sin hogar a 80.000 personas (Rowell y Wiwa, 2000). En 1995, nueve activistas ogoni -Ken Saro Wiwa, Baribor Bera, Saturday Doobee, Nordu Eawo, Daniel Gbokoo, Barinem Kiobel, John Kpuiuen, Paul Levura y Felix Nuate- fueron juzgados y condenados a la horca por el gobierno nigeriano en lo que John Major, entonces Primer Ministro británico, definió como un «asesinato judicial». En los meses que siguieron a las ejecuciones, un millar de ogonis se vieron obligados a exiliarse en Benin (HRW, 1996).

Sin embargo, los proyectos más recientes siguen estando bastante alejados de las «mejores prácticas» a las que se han comprometido (al menos sobre el papel) los principales líderes empresariales.

Pese a ciertos intentos de la Shell y otras empresas de sanear sus operaciones, la represión y la degradación ambiental han continuado, no sólo contra los ogoni, sino contra otros grupos étnicos del delta. Entre 1996 y 1998, cerca de doscientas personas fueron asesinadas como consecuencia de las reclamaciones del pueblo ijaw para que acabasen las actividades petrolíferas (Remember Ken Saro Wiwa Project, 2005). «Estamos hartos de las llamaradas de gas, las fugas de petróleo, las explosiones y ser tachados de saboteadores y terroristas», han declarado los ijaw. En 1999, los militares destruyeron Odi, una población de 15.000 personas en la zona ijaw «demoliendo todos los edificios, excepto el banco, la iglesia y el centro sanitario» (Rowell y Wiwa, 2000). Cientos de civiles desarmados fueron masacrados. En 2005, la Fuerza Especial de Tareas del ejército incendió la aldea de Odiana, matando al menos a 17 personas y arrasando el 80% de las viviendas, después de una disputa por tierras entre los pobladores y la Shell (Amnesty, 2005). El presidente del consejo local de jefes, L.D. I Orumieagha-Bari, relata la atrocidad:



Habitantes del municipio afro-colombiano de Tabaco sobre las ruinas de sus casas. Las casas fueron demolidas en agosto de 2001 © Richard Solly.

Cerca de las diez de la noche llegaron los soldados en 15 embarcaciones. Eran unos cien hombres. Comenzaron a derramar gasolina en las viviendas. No podría calcular la cantidad de bombas incendiarias que utilizaron, eran demasiadas. Disparaban armas de grueso calibre, no utilizaron granadas de humo. Los niños de dos y tres años y los ancianos permanecieron dentro de sus casas, un niño de doce años murió por los disparos (Amnesty, 2005).

Tras décadas de resistencia no violenta en el Delta, cada vez más las comunidades e individuos han pasado a tratar de defenderse de esta situación de injusticia mediante medios violentos. Desde el año 2000 se ha producido un creciente número de secuestros —dirigidos a trabajadores extranjeros de la industria petrolera—, voladuras de conducciones petroleras, y confrontaciones armadas con el estado, que son reclamadas por una gran variedad de grupos. En el momento de escribir este texto el grupo más importante es el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger. En varias ocasiones la insurgencia ha forzado a Shell a parar la mitad de sus operaciones en el interior de la zona, igualmente han forzado la parada de la extracción petrolera a otras empresas (McGreal, 2007).

Ecuador: Entre 1962 y 1992, las actividades petrolíferas de la multinacional estadounidense Texaco (actualmente pro-

piedad de Chevron) dieron como resultado la deforestación de cerca de un millón de hectáreas de selva en la Amazonia ecuatoriana y el derrame de unos ocho millones de litros de petróleo crudo (Oil Change, 2007). Una investigación realizada en 2006 por varias organizaciones no gubernamentales comprobó que Chevron había «arrojado sistemáticamente más de 9.000 millones de litros de subproductos cancerígenos (llamados 'aguas de formación' o simplemente 'aguas residuales') directamente al medio ambiente selvático» a través de una red de tuberías que conectan los 350 pozos de la empresa (Amazon Defense Coalition, 2006). Además, «Chevron cavó cerca de un millar de balsas a cielo abierto en medio de la jungla, donde la empresa almacenó fangos y desechos tóxicos generados por las perforaciones y el mantenimiento de las instalaciones. La mayoría de esas balsas están allí desde comienzos de los años setenta y hasta el día de hoy liberan toxinas a las aguas subterráneas, los suelos y el aire.» En esa zona, las tasas de leucemia infantil son cuatro veces más altas que en cualquier otro lugar de Ecuador y se calcula que cientos de lugareños han muerto por causas relacionadas con la contaminación de petróleo.

En 2003, treinta mil pobladores ecuatorianos presentaron una demanda colectiva contra la empresa. Pese a que existen tecnologías que podrían haber evitado la peor parte de la contaminación volviendo a inyectar las aguas residuales en los pozos —una técnica que es habitual en los yacimientos de EE UU— la empresa optó por ahorrar dinero arrojando los desechos directamente al medio ambiente, incrementando así sus beneficios en unos 4.500 millones de dólares durante el tiempo que lleva operando en Ecuador. Las comunidades afectadas exigen ahora que Chevron pague los 6.000 millones que costarán las tareas de limpieza (ChevronToxico, 2005).

MÁS DE LO MISMO

Como respuesta a la devastación ambiental y los descalabros sociales provocados por la explotación de petróleo, carbón y gas, los grupos industriales y las instituciones financieras internacionales que los avalan (tanto bancos multilaterales

de desarrollo, como el Banco Mundial, y bancos del sector privado), han introducido directrices de «nuevas prácticas» y otras medidas para reducir el impacto del sector extractivo. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene ahora una serie de medidas de salvaguarda que pretenden asegurar el reasentamiento justo de los afectados por los proyectos que financia y reducir su impacto ambiental. Las medidas del Banco Mundial han sido adoptadas también, parcial o íntegramente, por algunas Agencias de Crédito a la Exportación (OCDE, 2003; ECGD, 2004) – instituciones gubernamentales o semi gubernamentales que utilizan el dinero de los contribuyentes para que las empresas del país incrementen sus actividades de exportación e inversión (Hawley, 2003; ECAwatch)- y por aquellos bancos privados que han adherido a los llamados «Principios de Ecuador» (Equator Principles).

Sin embargo, los proyectos más recientes siguen estando bastante alejados de las «mejores prácticas» a las que se han comprometido (al menos sobre el papel) los principales líderes empresariales. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), gestionado por BP, es un claro ejemplo. Respaldo por las Agencias de Crédito a la Exportación de Francia, Gran Bretaña, Alemania, EEUU e Italia, junto con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, el oleoducto transporta petróleo desde los yacimientos de BP en el mar Caspio, a través de Azerbaiyán y Georgia, hasta la costa mediterránea de Turquía. A pesar de que la IFC lo describe como «un hito en nuestra constante búsqueda de la excelencia en los aspectos ambientales, sociales, financieros y de gobernanza» (IFC, 2007), el proyecto ha generado considerable preocupación entre diversas organizaciones, incluyendo a Amnistía Internacional y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en lo concerniente a sus impactos sociales, ambientales y sobre los derechos humanos.

En 2003, un estudio sobre el impacto ambiental en el sector turco del oleoducto, encargado por varias ONG internacionales, demostró que el proyecto incumplía la mayoría de las políticas de salvaguarda establecidas por el Banco Mundial. En total, el informe identificó al menos 153 violaciones totales o parciales de las Políticas Operacionales del IFC y del EBRD, además de 18 violaciones totales o parciales de la

Directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Comisión Europea y al menos dos violaciones directas de la legislación turca, lo que da un total de 173 violaciones a normas de aplicación obligatoria (Baku Ceyhan Campaign, 2003). Una revisión de la EIA hecha por el Departamento para el Desarrollo Internacional británico, establecía diversas instancias donde la empresa no había cumplido en absoluto con las directrices del Banco Mundial (DfID, 2003).

Las personas críticas sufrieron también arrestos arbitrarios y, en el caso de Ferhat Kaya, un defensor de los derechos humanos en Turquía, presuntas torturas

Los estudios ambientales preliminares fueron extremadamente inadecuados (por ejemplo, en los 1.000 kilómetros de oleoducto que pasan por territorio turco sólo se estudiaron 23 sitios, muchos de ellos en un solo día, ignorando así los efectos estacionales y migratorios y dando muy poco tiempo para un análisis adecuado) y no se consideraron proyectos alternativos, pese a que las normativas internacionales que condicionan el proyecto así lo establecen (Baku Ceyhan Campaign, 2003).

Entre las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los pobladores durante la construcción del BTC se cuentan: uso ilegal de la tierra sin pago compensatorio ni expropiación, pagos inferiores al valor de la tierra, intimidaciones, ausencia de consulta a la población, reasentamiento involuntario y daños a la propiedad y a la tierra. En Turquía se apeló a poderes de emergencia, reservados normalmente para situaciones de desastres naturales, para adquirir tierras saltándose el habitual procedimiento de expropiación e iniciar así rápidamente la construcción del oleoducto. Las personas críticas sufrieron también arrestos arbitrarios y, en el caso de Ferhat Kaya, un defensor de los derechos humanos en Turquía, presuntas torturas.

Durante la construcción, el equipo externo de seguimiento de la propia empresa —el Panel Asesor para el Desarrollo del Caspio (CADP)— advirtió que la presión sobre los

contratistas en Turquía para no incurrir en faltas financieras generaba un incentivo institucional para reducir gastos y acelerar los trabajos, especialmente en lo concerniente a la adquisición de tierras y al control de calidad (CADP, 2003). Testimonios de expertos en oleoductos que trabajaron en la sección turca denunciaron un completo incumplimiento de las más elementales medidas de seguridad. Entre ellas destacaban: no permitir el acceso de los ingenieros a los lugares de construcción, ausencia de los especialistas necesarios (por ejemplo, geólogos especializados en sismos), ningún control de calidad, ignorar y eliminar las advertencias de los profesionales y no respetar las especificaciones de los ingenieros. Un profesional con más de veinte años de experiencia en la construcción de oleoductos lo describió como «el peor proyecto en el que jamás haya trabajado» (Baku Ceyhan Campaign, 2003b).

Las grandes multinacionales de la energía y la minería también han sabido utilizar su incuestionable poder de negociación para asegurarse acuerdos inmensamente favorables a sus inversiones en los países del Sur.

Otras preocupaciones relacionadas con la seguridad tienen que ver con la elección de un revestimiento anticorrosivo que nunca se había utilizado en oleoductos similares. En 2002 —dos años antes de que las ECA y los bancos multilaterales de desarrollo aprobasen la financiación del proyecto— el asesor de la propia BP, Derek Mortimore, advirtió que el revestimiento elegido era «totalmente inadecuado para proteger la tubería». Tal como lo predijo Mortimore, los sectores de oleoducto revestidos con SPC 2888 se han agrietado considerablemente. La empresa no informó de esto a sus patrocinadores, que sólo se enteraron cuando el periódico británico *Sunday Times* dio a conocer el problema. Posteriormente, se descubrió que más de una cuarta parte del sector del oleoducto que atraviesa Azerbaiyán estaba también afectada. En enero de 2006, a pesar de que BP declaró haber resuelto el problema, una investigación realizada por Bloomberg, la agencia de

noticias financieras, confirmó que el agrietamiento había continuado. Bloomberg también informó que BP había contratado para el control de sus bienes en Azerbaiyán a Rasco International Ltd., una empresa constructora con sede en Bakú sin ninguna experiencia previa en el mantenimiento de oleoductos (Clark y Voss, 2007). Un mes después, debido a una reclamación presentada por la ecologista georgiana Manana Kochladze, la Oficina de Responsabilidad de la OPIC (Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero) recomendó un control más minucioso del revestimiento del oleoducto para evitar la corrosión y posibles escapes (OPIC, 2007).

SUBSIDIANDO A LAS MULTINACIONALES

El BTC es tan solo uno de los muchos proyectos petrolíferos que han recibido dinero público a través del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales de desarrollo. Por cierto, el antiguo presidente de BP, Lord Browne, declaró que el proyecto BTC no hubiese sido posible si los gobiernos no les hubiesen ofrecido ese «dinero público gratuito» para construir el oleoducto.

A pesar de que el mismo Banco Mundial, en su Estudio de las Industrias Extractivas 2003 (EIR, 2004), recomendase eliminar la subvención de proyectos de explotación de petróleo y gas, las ayudas han continuado. Más aun, según estimaciones de Lawrence Summers, ex Secretario del Tesoro de EE UU, «los subsidios a la industria energética mundial se acercan a los 250.000 millones de dólares» (Summers, 2007). Los análisis sobre los préstamos del Banco Mundial realizados por el Instituto para Estudios de Política, con sede en Washington, indican que la financiación de proyectos para la extracción de combustibles fósiles durante la pasada década supera a los destinados a las energías renovables y a la eficiencia energética en una relación de 17 a uno (Vallette, Wysham y Martínez, 2004). Es más, en los diez años posteriores a la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, en 1992 —conocida como *Cumbre por la Tierra*— el Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto

sobre combustibles fósiles cada catorce días (Vallette, Wysham y Martínez, 2004).

Otros subsidios han provenido de las agencias de crédito a las exportaciones, cuyo apoyo a los proyectos sobre combustibles fósiles hace que cuando se lo compara con los subsidios a las energías renovables, estos últimos resulten insignificantes. Entre 1993 y 2002, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) concedió 7.600 millones de dólares a 53 proyectos extractivos de combustibles fósiles y 32 proyectos carboníferos en Asia, mientras que en el mismo período sólo financió seis proyectos de energías renovables. (Baker y Horsman, 2005). Del mismo modo, la política energética del Departamento de Garantías a los Créditos para la Exportación de Gran Bretaña, se muestra tendenciosamente favorable al desarrollo de las industrias del petróleo y el gas, habiendo confirmado recientemente su apoyo financiero para nuevas instalaciones y equipamiento asociado en Irán, Brasil, México, Nigeria, Azerbaiyán, Kazajistán, Argelia y Turquía (WWF, 2006). Por otra parte, las empresas extractoras de petróleo, gas y carbón han recibido el apoyo de las delegaciones comerciales de las embajadas de sus respectivos países, ejerciendo presión a favor de sus proyectos y asegurando los contratos.

Las grandes multinacionales de la energía y la minería también han sabido utilizar su incuestionable poder de negociación —basado no sólo en su riqueza sino también en las alianzas que han forjado con las élites locales— para asegurarse acuerdos inmensamente favorables a sus inversiones en los países del Sur, especialmente en forma de ventajas impositivas y legislación favorable a sus operaciones, sobre todo eximiéndolas de cumplir con costosas regulaciones ambientales y sociales. En los últimos veinte años, por ejemplo, más de setenta países han modificado su legislación sobre minería con la intención de hacerla más «amistosa» con los inversores extranjeros. En ciertos casos, como en Filipinas y Colombia, quienes tenían intereses creados en los sectores del petróleo y del gas han sido los redactores de las nuevas regulaciones (Caruso et al., 2003). Para el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, la BP y sus empresas asociadas lograron un acuerdo que eximía al proyecto de

cualquier legislación local que no fuesen las Constituciones de los tres países por los que pasa el oleoducto. Según tales acuerdos, que están especialmente diseñados para garantizar la «libertad de tránsito del petróleo», una fórmula que le otorga derechos al petróleo mismo (Reyes, A, 2005), los tres gobiernos no han hecho otra cosa que ceder al consorcio petrolero la soberanía sobre la ruta del oleoducto (Carrion, 2002); Leubuscher, 2003; Amnesty International, 2003). Los acuerdos establecen también un compromiso de compensar a BTC Co por cualquier nueva legislación ambiental o social que pueda afectar el «equilibrio económico» (léase beneficios) del proyecto.

CUANDO UN REFUGIADO NO ES UN REFUGIADO

Mientras las multinacionales disfrutaban del colchón de plumas que le proporcionan las exenciones financieras y legales adecuadas a sus necesidades, a los desplazados por las industrias del petróleo, el gas y el carbón con frecuencia se les niegan sus más fundamentales derechos. La compensación por los daños sufridos es casi siempre inadecuada, si es que la reciben, y aunque algunos han ganado procesos legales contra las empresas responsables (Veraik, 2006), esa posibilidad con frecuencia se les deniega debido a la complejidad de las cuestiones jurisdiccionales y contractuales en juego o debido a la dificultad de acceso a los tribunales.

Los desplazados por la degradación ambiental o por proyectos de «desarrollo» tampoco disfrutaban de derechos como refugiados según el Convenio de 1951 de Naciones Unidas Relativo a la Condición de Refugiado, que establece que «refugiados» son aquellos «incapacitados o no dispuestos a regresar debido a un bien fundado temor a persecución por alguna de estas cinco razones: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política» (Naciones Unidas, 1951). En caso de que un refugiado ambiental pretenda establecerse en un país que no es el suyo, será considerado un «inmigrante económico», a pesar del claro fracaso de su propio gobierno para proteger sus

derechos y, frecuentemente, de la activa participación de otros gobiernos y empresas multinacionales en crear las condiciones que forzaron su desplazamiento. Mientras algunos han abogado por que se amplíe la definición de «refugiado», otros (en una deprimente muestra del sentimiento racista y contra los inmigrantes que predomina en todo el mundo) argumentan que eso brindaría la ocasión a los sectores contrarios a la inmigración para restringir aún más la definición de refugiados.

Si de lo que se trata es de asegurar los derechos de los refugiados ambientales, es prioritario oponerse a esos sectores contrarios a la inmigración, tanto a escala nacional como internacional. Resaltar el papel de las multinacionales y de los gobiernos occidentales como generadores de migraciones forzadas es una forma de favorecer alianzas entre los movimientos sociales que trabajan con temas de desarrollo, derechos humanos, medio ambiente y refugiados.

CONCLUSIÓN

Los refugiados ambientales y del desarrollo son actualmente el precio humano de las actividades extractivas de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, la prevención de futuros desplazamientos no dependerá solamente del establecimiento de nuevas normas ambientales y sociales. Demandará también corregir los desequilibrios de poder que permiten a una parte de la sociedad (las multinacionales y las élites) aprovecharse de la otra (los afectados por las actividades de aquellas) y exigir que las empresas y los gobiernos rindan cuenta de sus actos. La eliminación de los subsidios y cualquier otra forma de apoyo que hoy disfrutan las industrias del petróleo, el gas y el carbón sería un gran paso en la dirección correcta. Otro gesto importante sería el de afrontar el legado estructural de los desplazamientos pasados, mediante reparaciones financieras y de otros tipos. Pero, sobre todo, si no queremos que la historia vuelva a repetirse, es urgente y necesario fortalecer esos movimientos que en todo el mundo están defendiendo los derechos de las comunidades locales a su entorno natural y a sus medios de subsistencia.

REFERENCIAS

- ADAM, D. (2005), «50 million Environmental Refugees by end of the decade, UN warns», *The Guardian*, 12 de octubre, <http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1589898,00.html>
- Amazon Defense Coalition (2006), «Rainforest Catastrophe – Chevron’s Fraud and Deceit in Ecuador, An Investigative Report», <http://www.amazonwatch.org/amazon/EC/toxico/downloads/FraudInvestReportNov8.pdf>
- Amnesty International (2003), *Human Rights on the Line – The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline project*, Londres.
- Amnesty International (2005), *Ten Years on: Injustice and violence haunt the Delta*, <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR440222005>
- BAKER, M. y HORSMAN, P. (2005), «Burning our future: Coal, Climate Change and Renewable Energy in Asia», *Greenpeace*, http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/en/press/reports/burn_our_future.pdf
- Baku Ceyhan Campaign (2003a), *Review of the BTC Environmental Impact Assessment – Turkey Section*, www.baku.org.uk
- Baku Ceyhan Campaign (2003b), *Whistleblowers expose Turkey pipeline failings*, <http://www.bakuceyhan.org.uk/news.htm>
- BP, *Statistical Review of World Energy (2006a)*: <http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6842&contentId=7021390>
- BP, *Natural Gas Consumption (2006b)* http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_assets/downloads/pdf/table_of_natural_gas_consumption_2006.pdf
- CARUSO, C., COLCHESTER, M., MACKAY, F., HILDYARD, N. y NETTLETON, G. (2002), ‘Synthesis Report: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank’ in Tebtebba and Forest Peoples Programme, *Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank*, Tebtebba Foundation.
- CARRION, M. (2002), *Preliminary Analysis of the Implications of the Host Government Agreement between Turkey and BTC*

- Consortium, Baku Ceyhan Campaign, www.baku.org.uk
- CADP (Caspian Advisory Development Panel) (2003), Caspian Development Advisory Panel Report, www.caspiandevopmentandexport.org
- ChevronToxico, Chevron's Rainforest Chernobyl (2005), <http://www.chevrontoxico.com/article.php?id=172>.
- CHOMSKY, A., SOLLY, R. y MOODY, R. (2003), «British-based mining companies displace communities in Colombia» En Refugee Project, The Corner House and Peace in Kurdistan, Listen to the Refugee's Story: How UK Foreign Investment creates Refugees and Asylum Seekers, <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=52207>.
- CLARK, S. y VOSS, S. (2006), 'BP Ignores Warnings About Potential Leaks in Caspian Pipeline», Bloomberg, enero, <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aDbYpRvhzoHA&refer=home>.
- DfID [Department for International Development] (2003), DfID, Compliance Review of the Environmental Assessment of the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Pipeline, www.dfid.gov.uk/pubs/files/baku-pipeline-report.pdf.
- ECAwatch: www.ecawatch.org
- ECOAL (2006), Country Profile: A focus on India, http://www.worldcoal.org/assets_cm/files/PDF/ecoal_focus_on_india.pdf
- ECGD [Export Credits Guarantee Department] (2004), Case Impact Analysis Process, http://www.ecgd.gov.uk/print/ecgd_case_impact_analysis_process_-_may_2004.doc
- EIA [Energy Information Administration], International Energy Outlook 2006, 2007, www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html
- EIA, Number of Coal Mines by State, 1991, 1996-2000, 2002, <http://www.eia.doe.gov/cneaf/coal/cia/html/t2p01p1.html>
- EIR [Extractive Industry Review] (2004), «Striking a Better Balance», <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112-menuPK:336936-pagePK:148956-piPK:216618-theSitePK:336930,00.html>.
- Environmental Science for Social Change, Mining Revisited (1999), Quezon City.
- EPSTEIN, P.R. y SELBER, J. (2002) (eds), Oil – A Life Cycle Analysis of its Health and Environmental Impacts, Centre for Health and Global Environment, Harvard Medical School, Boston, <http://chge.med.harvard.edu/publications/documents/oilfullreport.pdf>
- Equator Principles, <http://www.equator-principles.com/>
- ESCR-Net, Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v Nigeria, cited as Communication No. 155/96, sin fecha, http://www.escri-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404115.
- Federal Court of Nigeria (2005), Jonah Gbembre vs Shell Petroleum Development Company Nigeria, <http://www.climatelaw.org/media/media/gas.flaring.suit.nov2005/ni.shell.nov05;judgment.pdf>
- Friends of the Earth International (2007), Shell still flaring gas, defying Nigerian courts.
- GLASSHEIM, E. (2004), 2004: Ethnic Cleansing, Communism and Environmental Devastation in Post-War Czechoslovakia, www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACFC27.doc
- GMI [Global Mining Initiative] (2002), The MSSD Project, http://icmm.com/gmi_mmsd_project.php
- Groundwork (2005), Whose Energy Future? Big Oil against people in Africa, Pietermaritzburg, www.groundwork.org.za.
- HAWLEY, S. (2003), Underwriting bribery – Export Credit Agencies and Corruption, The Corner House, <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51986#fn015>
- HINESTROZA, M. (2003), 'What use am I to anyone dead?' in Refugee Project, The Corner House and Peace in Kurdistan, Listen to the Refugee's Story: How UK Foreign Investment creates Refugees and Asylum Seekers, <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=52207>.
- HRW [Human Rights Watch] (1996), Nigeria: Permanent Transition», Human Rights Watch Africa, Vol. 8, No. 3(A), septiembre, p.42.
- HRW [Human Rights Watch] (1999), The Price of Oil: Corporate responsibility and human rights violations in Nigeria's oil producing communities.
- IEA [International Energy Agency] (1994), Global Methane and the Coal Industry, Coal Industry Advisory Board, <http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/ciab1994.pdf>
- IFC [International Finance Corporation] (2003), IFC Board Approves Investments in Caspian Oil and Pipeline Projects Expected high development impact with environmental,

- social, and transparency safeguards, <http://ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=87B904CEA7A55BF585256DD4004FFBA3>
- KHANYILE, S. y LOSIER, T. (2005), «Solidarity in Africa – One Step at a Time: Nigeria Solidarity Exchange», *groundWork Newsletter*, Vol. 7, No. 2, junio.
- LEIDERMAN, S.M. (1998), *Environmental Refugees from Energy Projects*, <http://legalminds.lp.findlaw.com/list/ecol-econ/msg00403.html>
- LEIDERMAN, S.M., 'The dimensions of environmental refugees' in *Refugee Project, The Corner House and Peace in Kurdistan, Listen to the Refugee's Story: How UK Foreign Investment creates Refugees and Asylum Seekers*, 2003, <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=52207>.
- LEUBUSCHER, Susan (2003), *The privatisation of justice: international commercial arbitration and the redefinition of the state*, <http://www.fern.org/pubs/reports/dispute%20resolution%20essay.pdf>
- MCGREAL, C. (2007), 'Delta Force', *The Guardian*, 10 mayo.
- MEHTA, L. y GUPTE., J. (2003), *Whose needs are right? Refugees, oustees and the challenge of rights-based approaches to forced migration*, Working Paper T4, Institute of Development Studies, Brighton, diciembre, www.migrationdrc.org/publications/working_papers/WP-T4.pdf.
- Milieudéfense (2007), *Information Paper Nigeria: Oil Spills and Gas Flaring*, <http://www.milieudéfense.nl/globalising/publicaties/diversen/gas-flaring-and-oil-spills.pdf>
- MMSD [Mining, Minerals and Sustainable Development] (2002), *Breaking New Ground*, Earthscan Publications, Londres, <http://www.iied.org/mmsd/finalreport/index.html>
- OECD (2003), *Recommendation on Common Approaches on Environment in Officially Supported Export Credits*, Working Group on Export Credits, <http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/21684464.pdf>.
- OilChange (2007), *Local Pollution – Health Impacts*, <http://priceofoil.org/thepriceofoil/local-pollution>
- OPIC (2006), *Office of Accountability Compliance Review of OPIC's Environmental Due Diligence and Monitoring of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline Project*, OPIC, http://www.opic.gov/doingbusiness/accountability/documents/compliance_review_opic_environmental_due_diligence0107.pdf
- O'ROURKE, D. y CONNOLLY, S. (2003), 'Just Oil? The Distribution of Environmental and Social Impacts of Oil Production and Consumption', *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 28, pp.587-617.
- Petroleum Economist (2007), *World Energy Atlas 2007*, <http://www.worldenergyatlas.com/>
- Platts (2007a), *Natural Gas Maps*, http://www.platts.com/infostore/product_info.php?cPath=53_56&products_id=191
- Platts (2007b), *2006/2007 US Coal Activity Map*, http://www.platts.com/infostore/product_info.php?cPath=53_54&products_id=147
- Platts (2007c), *Maps*, <http://www.platts.com/infostore/index.php?cPath=53>
- Refugee Project (2003), *The Corner House and Peace in Kurdistan, Listen to the Refugee's Story: How UK Foreign Investment creates Refugees and Asylum Seekers*, <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=52207>.
- Remember Ken Saro-Wiwa Project (2005), *All for Shell: A Brief history of the struggle for justice in the Niger Delta*, http://s3.amazonaws.com/priceofoil/ALL_FOR_SHELL_2005_.pdf.
- REYES, A.S. (2006), 'Protecting the «Freedom of Transit of Petroleum»: Transnational Lawyers Making (Up) International Law in the Caspian', *Berkeley Journal of International Law* 24, junio.
- ROWELL, A. y WIWA, O., 'Some things never change', *The Guardian*, <http://www.guardian.co.uk/guardiansociety/story/0,,393913,00.html>
- ROWELL, A. MARRIOTT, J. y STOCKMAN, L. (2005), *The Next Gulf – London, Washington and Oil Conflict in Nigeria*, Constable, Londres.
- VALLETTE, J., WYSHAM, D. y MARTINEZ, N. (2004), *A Wrong Turn from Rio*, Research and Policy Brief Tenth Session of the Conference of Parties, Climate Change Convention, diciembre 2004, Sustainable Energy and Economy Network, Institute for Policy Studies and Transnational Institute, http://www.seen.org/PDFs/Wrong_turn_Rio.pdf
- Shell (2007), *The Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC)*, http://www.shell.com/home/Framework?siteId=nigeria&FC2=/nigeria/html/iwgen/about_shell/what_we_do/

- zzz_lhn.html&FC3=/nigeria/html/iwgen/shell_for_businesses/exploration_production_shared/dir_spdc_1203_1027.html.
- SUMMERS, L. (2008), 'We need to bring climate idealism down to earth', *The Financial Times*, 30 de abril, <http://www.ft.com/cms/s/d176db4c-f6b6-11db-9812-000b5df10621.html>
- United Nations (1951), *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm
- UNHCR [UN High Commission for Refugees] (2003), *Basic Definitions*, http://www.unhcr.org.uk/info/briefings/basic_facts/definitions.html
- UNHCR [UN High Commission for Refugees] (2002), 'The Environment: A Critical Time', *Refugee Magazine*, Issue 127, <http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d3fed057.pdf>.
- Update.UNU.EDU (2004), 'Two billion will be in flood path by 2050, UNU expert warns', Issue 32: julio-agosto, http://update.unu.edu/archive/issue32_2.htm
- VERAIK, R. (2006), 'BP pays out millions to Colombian farmers', *The Independent*, 22 de julio, <http://news.independent.co.uk/world/americas/article1190528.ece>.
- WCD [World Commission on Dams] (2000), *Overview in Dams and Development: A New Framework for Decision-Making – The Report of the World Commission on Dams*, Earthscan, London, http://www.dams.org/report/wcd_overview.htm.
- World Coal Institute (2007a), *Fact Sheet*, <http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=188>
- World Coal Institute (2007b), *India*, <http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=402>
- World Coal Institute (2005), *The Coal Resource: A Comprehensive Overview of Coal*, <http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=37>
- WWF [World Wildlife Fund] (2006), *Flying Low – The UK Export Credit Guarantees Department and Climate Change*, <http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/ecgdcc.pdf>

¿Por qué la China rural es importante para el mundo?

Rafael Poch de Feliu*

La novedad del año 2006 en China es la aprobación del programa de reforma integral del campo. Me pregunto si ese programa no es un «síntoma» importante, de un cambio de línea política e incluso, a largo plazo, de modelo económico. Anuncio de un cambio de recetario.

El motivo de mi pregunta es que; los campesinos son la mayoría de la población de China, lo seguirán siendo dentro de 20 o 30 años, han sido siempre determinantes para el rumbo del país, y parece que ahora su futuro no tiene solución dentro del actual modelo económico. Y todo eso afecta a la misma esencia del proyecto chino, común a Mao Tse Tung, Deng Xiaoping y sus sucesores.

Para explicar esa sospecha tendremos que responder primero a dos preguntas. Primera: ¿Qué está ocurriendo en China? Segunda: ¿En qué consiste el «milagro chino»?

EL MAYOR PROCESO DE URBANIZACIÓN DE LA HISTORIA

Lo que está ocurriendo en China es el mayor proceso de urbanización de la historia.

* Intervención en el Congreso, «China's Rise: Global Perspectives», organizado por la Universidad Tsinghua de Pekín, el proyecto «Globalization and China» de la Academia China de Ciencias Sociales, y el «Centre of Asian Studies» de la Universidad de Hong Kong. Hong Kong, 15 y 16 de septiembre, 2006.



© Santi Carrión.

Por primera vez en la historia de la humanidad, en el siglo XXI los habitantes de las ciudades serán mayoría. China está en el centro de esa gran transformación planetaria. En los últimos veinte años, 200 millones han dejado de ser rurales para convertirse en urbanos. En los próximos años los planes oficiales para el 2020, prevén que entre 300 y 400 millones de campesinos más, dejen de serlo. Como cada habitante urbano chino consume tres veces y media más energía que su compatriota campesino, el problema de la sostenibilidad —que, naturalmente, no es un problema chino, sino global— se nos plantea con toda su crudeza... China está en el centro de todo eso.

Veamos ahora la segunda pregunta; ¿en qué consiste el «milagro chino»?

«MUCHA GENTE Y POCA TIERRA»

La respuesta habitual define ese «milagro» como un asunto de los últimos 25 años. Lo reduce al período post Mao en el que las autoridades chinas optaron por el capitalismo. En realidad el «milagro» comenzó con la Revolución China. No es un milagro de 25, sino de 57 años, que combina una fase comunista y otra capitalista, y que incluye desastres tan evidentes como; los del Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural, y la enorme degradación medioambiental cuya exacerbación estamos presenciando ahora. O sea, es un «milagro» no muy divino y bastante humano.

Para los chinos, después de sumarlo y restarlo todo, la revolución fue ante todo el inicio de la restauración de la paz, la unidad nacional y el orden. También el renacimiento de una gran nación milenaria que había estado postrada más de un siglo a los extranjeros. Cuando Mao murió había, por primera vez en la historia para una gran parte de los chinos, suficiente comida, vestido y techo, acceso a educación básica y asistencia médica rudimentaria. Mejoró la condición de la mujer de forma radical, se acabó con el juego, el opio y la prostitución. El crecimiento económico medio anual fue del 6%, se construyeron diques, ferrocarriles, industrias, hospitales, escuelas, la población se dobló en treinta años. Pese a todos los sufrimientos y barbaridades del maoísmo, al pueblo chino le fue mejor, en parámetros como consumo medio de alimentos, mortalidad y esperanza media de vida, que a la inmensa mayoría de países del Tercer Mundo. China entró en la ONU y en su Consejo de Seguridad, siendo reconocida como un gran factor internacional.

Sin la Revolución de 1949 y la estatalización económica de los cincuenta, Deng Xiaoping no habría podido realizar su propio «gran salto adelante», aprovechando con inteligencia determinadas posibilidades de la globalización. Por eso, cuando hablan de su actual renacer nacional, los chinos no comienzan la cuenta en 1979, sino en 1949,

hablan de, «los esfuerzos continuados de varias generaciones de chinos» y ponen a Deng en una serie iniciada por Mao y Sun Yatsen.

Así pues, situados en esa perspectiva más amplia de 57 años. ¿Cuál es el verdadero «milagro chino»? La respuesta es: la resolución del problema «muchas gente/poca tierra» («Ren duo – Tian shao»). Es decir, un dilema básico de recursos. Ese problema es el principal quebradero de cabeza del proyecto chino desde la Revolución. Veamos;

Mucha gente

- Hoy tienen 1300 millones de habitantes. Para el 2020 China tendrá unos 1520 millones.
- No se llegará a la estabilización demográfica hasta el 2043, con el tope de 1550 millones de habitantes, es decir: rozando el límite de 1600 millones que es lo que se dice que el país puede sostener.
- Si se cumplen los actuales planes de urbanización, en el 2020 tendremos otros 300 o 400 millones más de campesinos urbanizados, pero seguiremos teniendo 800 millones de chinos rurales, la misma cifra que hoy. Aunque su proporción se haya reducido del actual 67% a un 53% del total, esa masa humana seguirá allá.

¿Cuál es el verdadero «milagro chino»? La respuesta es: la resolución del problema «muchas gente/poca tierra».

Poca tierra

- Con sólo el 6% de la tierra cultivable del mundo, China da de comer al 22% de la población mundial.
- La proporción de tierra cultivable per cápita es ridícula; menos de la mitad de la media mundial, ocho veces menos que en Estados Unidos y la mitad que en India.
- La mitad de los campesinos chinos cultivan más para comer que para comercializar porque apenas les sobra

nada, es decir: varios centenares de millones de chinos dependen vitalmente (en el sentido más literal) de la tierra.

Este delicado milagro se ha mantenido durante los 57 años, con diversas fórmulas. Todas esas fórmulas han tenido en común dos cosas que no han cambiado independiente de comunismo o capitalismo; 1. La consideración de que la tierra no es instrumento de producción, sino de supervivencia. Y 2. que su escasez se compensa mediante la igualdad y proporcionalidad del reparto.

Si se rompe ese equilibrio, aparecen la miseria y la inestabilidad.

En su última versión la fórmula ha consistido en un sistema genuino que distingue entre derecho de usufructo (familiar) y propiedad (colectiva), en el que la colectividad asigna la tierra a las familias, según el número de bocas de cada una de ellas. Si se rompe ese equilibrio, aparecen la miseria y la inestabilidad.

Históricamente ese equilibrio se logró a un precio enorme. Costó tres guerras, una revolución (cuya distribución disolvió la extrema pobreza del 38% de los campesinos sin tierra, o con tan poca que no les alcanzaba para comer) y mucha violencia con millones de muertos, pero su resultado ha mantenido durante más de medio siglo la «ventaja comparativa» de China con otros grandes países en desarrollo.

Si de Brasil se dice que es, «un país muy rico en el que solo se ven pobres», en China podemos decir que, «es un país pobre en el que se ven relativamente pocos pobres». En México la población rural pobre se estima en un 34%, en India un 36%, en China los pobres de ese tipo son muy pocos. Es verdad que hay 400 millones de personas (más del 30% de la población) viviendo con menos de dos dólares diarios, sin embargo, hasta ahora la cuestión rural en China está mejor que en la mayoría de los grandes países en desarrollo, pese a que sus condiciones objetivas, como hemos visto, sean más difíciles. Y no hay «favelas», ni caóticas megápolis de estilo indio. Ese es el milagro.

Para acabar de entenderlo, es necesario decir cuatro palabras sobre lo que ha pasado en el Tercer Mundo en materia de urbanización en los últimos setenta u ochenta años.

URBANIZACIÓN EN EL TERCER MUNDO

En el Tercer Mundo la urbanización comenzó a partir de 1920 y hasta el día de hoy mantiene el aspecto de un desastre. La razón es que el flujo masivo de campesinos hacia las ciudades tuvo lugar en el Tercer Mundo en ausencia de todo aquello que había presidido la urbanización en el mundo occidental-desarrollado en el siglo XIX.

La urbanización del Tercer Mundo se hizo; sin desarrollo económico, sin industrialización, y sin progreso en la productividad agrícola. Entre 1920 y 1980 los niveles de urbanización superaron en el Tercer Mundo entre un 60% y un 70%, a los de crecimiento del PIB per cápita. En los ochenta, las tasas de paro urbano en el Tercer Mundo, incluyendo subempleo precario, fueron del 30% al 40%. Desde los años sesenta, los barrios de chabolas adquirieron grandes proporciones; el 35% / 40% de la población urbana del Tercer Mundo vivía en ellos en 1970, entre el 40% y el 45% en los ochenta. La conclusión de Paul Bairoch, un gran especialista en urbanización, era contundente en 1985: «Tal como se ha producido en el Tercer Mundo durante medio siglo, la urbanización no ha contribuido al desarrollo, la ciudad ha contribuido al subdesarrollo, es un serio obstáculo y la agricultura ofrece la única solución». (Bairoch, 1988; *Cities and Economic Development*).

En ese mismo período, China, que reunía las mismas condiciones de partida que los demás países del Tercer Mundo, incluso todavía más acusadas (una alta densidad de población rural, una rápida disminución de la mortalidad, con consecuencias directas en la demografía, y una considerable diferencia de nivel de vida entre campo y ciudad), evitó las consecuencias de la explosión urbana porque realizó algo completamente diferente: una «industrialización sin urbanización». La producción no agrícola, que en 1962 representaba el 52% del ingreso nacional, ascendió al 64%

en 1978, sin cambios en la proporción de población urbana. (Friedman, 2005; China's Urban transition.)

Pero, ¿qué ha pasado en el Tercer Mundo desde la concluyente afirmación de Bairoch de 1985. Lo que ha pasado es que las cosas han ido a mucho peor. Hoy, «no hay nada del dolor que narraron Dickens, Zola o Gorki, que no exista en las ciudades del Tercer Mundo», dice un autor. Desde el trabajo infantil hasta el tráfico de mujeres y niños, la prostitución y la venta de órganos para transplantes, todo está ahí, a la vista de quien lo quiera ver. La masa estigmatizada como redundante aumenta año tras año, como un pesado fardo que no puede ser asumido, ni hoy ni en el futuro, por la economía global. (Davis, 2006. Planet of Slums).

El mundo de los barrios de chabolas, «un mundo humano feo, mayormente aislado de las solidaridades de subsistencia del campo e igualmente desconectado de la vida política y cultural de la ciudad tradicional», crece como una mancha de aceite. En 2001 había 921 millones de personas viviendo en esos barrios, el año pasado eran más de 1000 millones, es decir uno de cada tres habitantes urbanos del planeta.

Son el 6% de la población en los países desarrollados, pero el 78% en los países en desarrollo (el 99% de la población de Etiopía y Chad, el 98% en Afganistán, 92% en Nepal). Bombay tiene de 10 a 12 millones de habitantes en esos barrios, México y Dhaka entre 9 y 10, Lagos, El Cairo, Karachi, Kinshasa, Sao Paolo y Delhi, de 6 a 8 millones. La población global en chabolas aumenta en 25 millones de personas más al año, sobre todo en África. Para el 2030 o 2040, quizá serán 2000 millones. Esta es la crisis real del capitalismo. (ONU- Habitat. Informe sobre el estado de las ciudades del mundo 2006/2007.)

Veamos qué ha pasado en China desde los ochenta para acá. Recordemos que en 1978, los dirigentes chinos optan por el capitalismo y con el compran también la receta estándar de desarrollo.

En los ochenta y noventa, China fue el único país del mundo en desarrollo que logró llevar a cabo un gran programa de construcción de viviendas. La estrategia de urbanización fue múltiple; ampliar las ciudades grandes, desarrollar las medianas y las pequeñas y crear ciudades

nuevas. A pesar de todo, no fue suficiente para albergar a todos los emigrantes y en los últimos años han aparecido los primeros síntomas de la típica «urbanización enferma» general, a la que, decíamos, China había logrado escapar en la primera fase de su desarrollo.

Veamos ahora cómo la actual crisis pone en cuestión todo el modelo.

LA CRISIS PONE EL MODELO EN CUESTIÓN

- La urbanización hace que la poca tierra que hay en China se convierta en menos: la ampliación de las ciudades, la construcción de otras nuevas, las infraestructuras, cuyo avance es frenético (41.000 kilómetros de autopistas en los últimos 16 años, otros 24.000 en los próximos cinco)... restan anualmente a la agricultura enormes cantidades de tierra: 6,6 millones de hectáreas en 24 años con más de 30 millones de campesinos afectados.
- Esa tierra restada a la agricultura es expropiada a gente que la necesita para comer. Gente que, en general, no puede ser absorbida por el mercado laboral industrial/urbano. Gente que ve cómo, frecuentemente, el dinero de las indemnizaciones se lo quedan los funcionarios y sus parientes nuevos ricos.
- Esos 6,6 millones de hectáreas a precios de mercado son medio billón de euros en indemnizaciones de los que, según una estimación, el 90% ha sido robado a campesinos que han engordado a una minoría de nuevos ricos urbanos.
- Así que la gente sale a la calle y protesta. Oficialmente en diez años, las protestas violentas se han multiplicado por 8, cada año son más, (87.000 en 2005, 6% más que el año precedente) implicando a millones en tumultos cada vez más políticos. (Zhou Tianyong; Breaking Through the Obstacles to Development. Guangzhou, 2005).

El recetario occidental de mercado dice que la agricultura china no es rentable (porque el 47% de la población laboral solo genera el 15% del PIB) y que hay que privatizar y rentabilizar. La receta desarrollista occidental ignora que

esa escasa «productividad» ha «producido» la estabilidad general del país durante medio siglo y que la privatización acaba con el reparto equitativo que es su fundamento.

El postulado central de esa receta afirma la progresiva extinción del campesinado: un país desarrollado no tiene más de un 5% de campesinos en su población activa. Es desarrollado, precisamente, porque ha logrado urbanizar a toda esa masa, dejando en el campo a una minoría a cargo de una agricultura que se ha hecho superproductiva.

Pero en China, y en el mundo, donde más de la mitad de la población es rural, ésta receta no funciona. La mitad de la población mundial practica y depende de la agricultura campesina. En China un poco más (recordémoslo; el 67%; 800 millones sobre 1200 millones en el año 2000). Es imposible urbanizar a toda esa masa sin romper el «milagro» de medio siglo. Si ese excedente se ve forzado a emigrar a las ciudades solo podrá convertirse en población marginal establecida en suburbios, como es el caso de las grandes ciudades de África, América Latina, India, y Manila y Yakarta en Asia Sudoriental.

- Recordemos que esa agricultura superproductiva de Europa América del Norte y zonas de América del Sur, se logra a base de enormes «inputs» energéticos no renovables. Y que, tanto a nivel chino como a nivel mundial, no hay recursos energéticos para alimentar una agricultura superproductiva como la de los países centrales en los que vive el 15% de la población mundial. Incluso si los hubiera, ¿qué habría que hacer con los centenares de millones de campesinos «superfluos»?

Históricamente, Occidente solucionó el problema haciendo dos cosas; 1. Acaparando el grueso de los recursos energéticos globales (el modo de vida de los países más desarrollados se basa en eso) y, 2. Transfiriendo sus excedentes demográficos al «nuevo mundo». Ese esquema no sirve ni para China ni para el mundo en desarrollo en general. (O sea; no sirve para el 75% de la población mundial), porque no hay ninguna de las dos cosas; ni hay recursos para que todos vivan como nosotros, ni hay «nuevos mundos» donde mandar a los centenares de millones de campesinos superfluos.

Una solución es la violencia a gran escala, el genocidio y la guerra, la forma clásica en la que los hombres han solucionado históricamente sus problemas de mucha gente/escasos recursos, pero no parece que los chinos vayan a aceptarla. Además, en el mundo moderno, con su nueva capacidad técnica de socializar las armas de destrucción masiva, se han acabado las guerras coloniales fáciles de fusiles contra lanzas. Vemos que esas «guerras fáciles» continúan produciéndose (en Irak, en Afganistán o Yugoslavia), pero con la importante novedad que representa la creciente posibilidad y simpleza técnica de respuestas de destrucción masiva a cargo de los vencidos, los desesperados o los criminales... (el mensaje profundo, e ignorado, del 11-S neoyorkino).

Dicho esto, permítanme hacer una digresión sobre el «comunismo chino».

PERPLEJIDAD ANTE EL «COMUNISMO CHINO»

Una de las preguntas más comprensibles que se hace la gente cuando viene a China y ve; el capitalismo neoliberal desatado que hay allá, la voracidad del consumismo urbano, la explotación en las fábricas y el darwinismo social en asuntos como educación y sanidad, es, «¿qué tiene que ver esto con el socialismo?».



© Santi Carrión.

La respuesta más simple que podemos ofrecer es recordar que el régimen define su sistema como «socialismo con características chinas» y en que un país con tanto pasado esa apostilla contiene el grueso del concepto. Podemos añadir el consejo de no sobreestimar los decorados ideológicos y concentrarse en la esencia.

Y la esencia es que en los años 20 y 30 del pasado siglo, los chinos «compraron» el socialismo por las mismas razones por las que «compraron» el capitalismo en los ochenta: porque era lo más eficaz y exitoso que había en el mercado de las recetas de modernización.

Ahora ya casi lo hemos olvidado pero en los años treinta, la URSS salía prácticamente indemne de la crisis del 29 que asoló los Estados Unidos y otras potencias occidentales, y lograba crecimientos y avances muy notables. Hay documentos del Departamento de Estado norteamericano de aquella época en los se habla de las economías de planificación central, dando por supuesto su superioridad. Así que los chinos compraron lo más moderno que había en la tienda en aquellos momentos.

El «comunismo» era un producto que cada cual cocinaba a su manera y todos sabemos que la cocina china tiene bastante personalidad. Para nosotros es una cocina desconcertante, no sólo por la manera de prepararla, por sus sabores y olores, sino por la forma en que se sirve y se come (hasta el instrumento para llevársela a la boca es diferente), por sus prioridades (no se acaba con fruta, sino con una sopa de fideos) y por su «filosofía interna». El comunismo chino no tuvo relación directa con Marx, con Europa, sino que llegó traducido del ruso, procedente de Stalin alguien más cercano a Iván el Terrible que a los socialistas europeos. Así que, siguiendo con la analogía culinaria, podríamos decir, que lo de Mao, fue el «refrito de un refrito».

Para nosotros, occidentales, que observamos el mundo desde nuestro ombligo, capitalismo y comunismo son como la noche y el día, pero desde el punto de vista de un país en desarrollo, obsesionado por salir del agujero de la miseria y el retraso, esos dos sistemas están unidos por la misma lógica de modernización. En los ochenta, toda aquella evidencia de eficacia del comunismo se había acabado, y lo que el vendedor de la tienda de recetas decía que funcionaba (y lo

que la experiencia sugería observando a los «tigres asiáticos» del entorno de China y la decadencia del bloque del este en Europa) era el capitalismo, así que los chinos lo compraron en los ochenta, sin ninguna ruptura interior, porque su impulso, ansia y objetivo en los ochenta, seguía siendo el mismo que el de los años treinta y cuarenta, y el mismo que el actual: construir un país fuerte y próspero.

Llegamos así a una definición simplista.

DEFINICIÓN DE «COMUNISMO CHINO»

En 1918, Lenin definió el comunismo ruso de una forma tan extraña como, «el poder de los soviets, más la electrificación de todo el país». Ahora podríamos decir algo aun más exótico sobre China; «el comunismo chino es construir una China fuerte y próspera más el Da Tong».

El «comunismo» era un producto que cada cual cocinaba a su manera y todos sabemos que la cocina china tiene bastante personalidad.

El «Da Tong», es el ideal confucioniano de la cohesión social derivada de una economía próspera y una sociedad estable.

Es una definición muy amplia, en la que cabe todo. Todo... siempre que contribuya a los objetivos de fortaleza, prosperidad, armonía y estabilidad.

RECAPITULACIÓN

Así que esta crisis pone en relación todo lo que aquí hemos ido enumerando como esencial: lo que hemos quedado era lo más importante que está ocurriendo (la urbanización/ industrialización en clave occidental) pone en peligro el milagro sostenido desde hace 57 años (el frágil equilibrio «muchas gente/poca tierra»), lo que a su vez compromete lo

que hemos definido como verdadera esencia del comunismo chino (un país fuerte y próspero más el Da tong). De todo eso podemos, razonablemente, deducir, que vamos a presenciar una nueva búsqueda de recetas, como la de Mao en los años 20 o Deng en los setenta.

Desde 2002, se asiste a un cambio considerable en la estrategia del Partido Comunista Chino. El discurso oficial está comenzando a introducir enmiendas a la estrategia de desarrollo. En 2002 fue el concepto de creación de una «sociedad modestamente acomodada» (Xiaokang), que sugería preocupación ante la polarización social. Dos años después, en 2004, se introdujo el concepto de «desarrollo científico», que sugiere que el desarrollo/crecimiento puede no ser «científico» y estar mal concebido. En 2005 se acuñó el proyecto de construir una «sociedad armoniosa», que abunda en todo lo anterior, y en el 2006 se declara como primera prioridad del XI Plan Quinquenal 2006-2010, la «Edificación de un nuevo agro socialista», un programa de subvenciones, inversiones y ayudas al abandonado sector agrario.

En su formulación, estas enmiendas no tienen que ver directamente con el tipo de argumentos y datos expuestos aquí, sino que, naturalmente, son fruto de una percepción mucho más tecnocrática y administrativa de la realidad. Pero en esa percepción, la crisis rural es el factor decisivo, porque con un desarrollo rural estancado y sin perspectiva, no crece el mercado interno y China depende, cada vez más, de la demanda externa, que no puede sostener al país mucho tiempo sin exponerle a los serios riesgos intrínsecos de la incierta «economía global», el alias del capitalismo transnacional.

Desde un punto de vista histórico podemos constatar la centralidad de los campesinos en la historia moderna de China:

- **Años treinta y cuarenta:** Aunque la revolución no la hicieron ellos, porque los comunistas se la impusieron, los comunistas no habrían triunfado si por lo menos no hubieran tenido su consentimiento pasivo o parcial colaboración.
- **Años cincuenta y siguientes:** con la explotación campesina a cargo del estado comunista, precios agrarios bajos y venta obligatoria al estado para abastecer a las ciudades,

se realizó la acumulación originaria de capital que sostuvo la primera industrialización socialista, sin la cual no habríamos tenido la reforma de Deng Xiaoping.

- **Años ochenta:** la reforma de mercado y la nueva prosperidad de Deng Xiaoping comienza, precisamente, en el campo: con la disolución de las comunas y la liberalización de la economía agraria familiar.

Y ahora podemos añadir que la actual crisis de China, una crisis de población/recursos en la que la urbanización/industrialización está disparando la insostenibilidad, se manifiesta, sobre todo, en el campo y desde el campo.

CONCLUSIÓN

¿Qué hacer? ¿Qué harán los chinos?: Como he dicho, mi impresión es que están volviendo a mirar qué hay en la tienda, como hizo Mao en los veinte y Deng en los setenta. Pero la simple realidad es que esta vez no hay gran cosa en los estantes de esa tienda. De ahí algunas preguntas:

- ¿Cuál es la receta, el nuevo paradigma socio-económico, la ideología, más moderna hoy?, ¿la que más se adapta a las necesidades y preguntas existenciales de la humanidad en un mundo con mucha gente y recursos energéticos agotables?
- ¿Dónde está el «plano» de ese sistema económico del futuro dotado de una racionalidad y una moral superiores, colectivista pero no dictatorial, mucho más pobre para los actuales ricos, pero más seguro a nivel global, responsable, ecológico y sostenible, capaz de realizar el «Da tong» la armonía universal confucioniana...?

De momento sólo tenemos una situación que empuja. La propia presión de la necesidad.

Con su crítica relación entre población y recursos, China está ahí, en el primer puesto de la situación, pero detrás estamos todos. Por eso me parece que es crucial el mundo rural en el debate sobre China, y por eso ese debate es, de alguna forma, el debate sobre el mundo de mañana.



España

¡Modernización o emigración!: Desplazados ambientales y repoblación forestal en Galicia desde 1950

Francisco Seijo

El declive de la población rural y agraria

Roser Nicolau

Migraciones: el imán de la especulación turística y residencial

Joan Buades

¡Modernización o Emigración!: Desplazados Ambientales y Repoblación Forestal en Galicia desde 1950

Francisco Seijo*

El fenómeno de los «desplazados ambientales» ha captado la atención de numerosos analistas recientemente debido a su aparente agravamiento como consecuencia del cambio climático. Cuando se reflexiona sobre este problema se suelen citar entre sus causas la sequía, la erosión, la deforestación, el agotamiento de los recursos, o los desastres naturales. Algunos expertos han llegado a estimar que para el año 2050 puede llegar a haber hasta 200 millones de «desplazados ambientales» a nivel global (Myers, 2005).

Aunque la preocupación sobre los «desplazados ambientales» es relativamente reciente, existen numerosos precedentes de fenómenos de este tipo a través de la historia. Un «desplazado ambiental» puede ser definido como, «...una persona que se ha visto obligada a abandonar su hábitat tradicional... debido a un cambio ambiental natural o provocado por seres humanos... Por 'cambio ambiental' nos referimos a una transformación física, química o biológica del ecosistema, o su base de recursos, que provoca

que este sea incapaz de mantener la vida humana» (UNEP, 1985). En este artículo, describiré uno de estos procesos ocurridos dentro del territorio del Estado Español, concretamente en Galicia, a partir de 1950. Atípicamente, la crisis del ecosistema en cuestión no fue provocada por una de las causas anteriormente citadas, sino por la repoblación masiva y forzosa por parte del Estado de una gran parte del territorio gallego con especies forestales de crecimiento

rápido como el *eucalyptus globulus* o el *pinus pinaster*. Estas repoblaciones tuvieron como consecuencia ecológica, en parte intencionada, el colapso de la economía agrícola y ganadera tradicional de numerosas comunidades rurales gallegas y contribuyeron a la emigración de muchos de sus habitantes a zonas urbanas del Estado Español, Europa y América Latina.

La política forestal de repoblaciones forestales llevada a cabo por el Estado en Galicia no puede ser comprendida sin hacer referencia a los grandes proyectos de desarrollo económico del régimen Franquista, puesto que ésta formaba parte integral de ellos. Galicia fue seleccionada como uno de los objetivos prioritarios del plan de repoblación forestal de 1939 por varios motivos. Por una parte, Galicia era, por aquel entonces, una de las regiones más pobres del Estado. Esta pobreza se vinculaba, tradicionalmente, al carácter agrario de la economía de la región. Por otra parte, y ya desde un punto de vista estrictamente forestal, el norte peninsular era percibido por la administración forestal como el lugar más adecuado para llevar a cabo una repoblación intensiva con especies forestales de crecimiento rápido de gran potencial productivo (Aspichueta & Mesanza, 1968). Este proyecto tenía un profundo arraigo dentro de la administración forestal española. Ya bajo la dictadura de Primo de Rivera, algunos montes de la provincia de Pontevedra sirvieron como una suerte de laboratorio técnico, social, y político para este tipo de repoblaciones (Areses, 1950).

* Middlebury College in Spain (fseijo@hotmail.com).

A partir de 1939 el Ministerio de Agricultura, por lo tanto, a través del Patrimonio Forestal del Estado (PFE), auspicio un ambicioso programa de repoblación forestal con especies de crecimiento rápido en todo el Estado Español y particularmente en Galicia. Este plan de repoblación, a su vez, fue supeditado a los objetivos de los proyectos de desarrollo económico para todo el Estado. El plan, en lo que concierne a Galicia, buscaba contribuir a dos grandes objetivos de desarrollo. Por un lado, se perseguía un aumento de la productividad del rural gallego mediante su industrialización. La plantación de especies de crecimiento rápido contribuiría al desarrollo industrial mediante el suministro de la materia prima necesaria para la creación de una potente industria pública de celulosa. Por otro lado, se buscaba reducir el número de campesinos que habitaban el medio rural para así facilitar el suministro de mano de obra a los nuevos sectores industriales urbanos en vías de desarrollo (García Delgado, 1976). El resultado de esta doble estrategia fue contradictorio. Uno de sus logros fue el incremento de la productividad del sector rural gallego y la creación de una, no siempre competitiva, industria pública de celulosa. Este desarrollo se consiguió, sin embargo, sin la modificación de algunas de las graves deficiencias estructurales del sector rural gallego tales como el pequeño tamaño de la mayoría de sus explotaciones agrarias (García Delgado, 1976). El segundo objetivo de esta estrategia fue logrado de una manera más efectiva. Desde 1951 hasta 1991 emigraron 817.382 gallegos a áreas urbanas del Estado Español, el norte de Europa, y América Latina (Carbajo, 1996). Se estima que un 40% de la nueva clase trabajadora industrial urbana española surgida tras los años cincuenta y sesenta estaba formada por individuos provenientes del medio rural (Fusi, 1986). La contribución gallega a este último porcentaje fue sin duda importante.

Desde un punto de vista ideológico el grado de compromiso de los responsables políticos de la política forestal del Estado con este segundo objetivo estratégico era muy alto. En 1957 en un discurso ante las Cortes con motivo de la promulgación de la Ley de Montes, Paulino Martínez Hermosilla, por entonces director del PFE, argumentó que la política forestal ofrecía dos alternativas al campesinado,

«...la modernización o la emigración» (Martínez Hermosilla, 1957: 167). Obviamente, esta «emigración» ocurrió de una manera coercitiva y se provocó mediante la destrucción de ecosistemas tradicionales a través de las repoblaciones forestales forzadas en montes vecinales bajo la fórmula legal de la declaración de «utilidad pública». Con este expeditivo método, el Estado captó 902.869 hectáreas de montes vecinales pertenecientes al campesinado gallego que pasaron a convertirse en terrenos susceptibles de repoblación. Los efectos de las repoblaciones en el rural gallego como consecuencia de este masivo «acotamiento» del territorio para usos forestales fueron de gran magnitud. El impacto cuantitativo de las repoblaciones y su influencia sobre la emigración gallega es, desafortunadamente, difícil de calcular debido a la falta de estadísticas fiables. Este impacto se vio atenuado en algunas poblaciones y exacerbado en otras por el peculiar sistema político clientelista existente en Galicia. Sin embargo, no cabe duda de que, desde un punto de vista cualitativo, el efecto de las repoblaciones para la economía tradicional agraria gallega, basada en la agricultura y la ganadería extensiva en estos terrenos, fue devastador.

Así nos lo indica, por ejemplo, una investigación realizada en el ayuntamiento de As Nogais, Lugo donde un 32% de la superficie municipal se encuentra actualmente ocupada por repoblaciones forestales de este tipo (Seijo, 2005: 395). En este municipio, todavía se recuerda la década de los 50 con tristeza. Tal y como relata un campesino, «Empezando con no sé qué ley empezaron a plantar pinos y todos tuvieron que vender las cabras y las vacas. Sería por 1950 o así cuando empezaron con la repoblación y, claro, tuvieron que desaparecer porque antes no hacían daño, era monte raso, pero con la repoblación todas las aldeas se tuvieron que deshacerse de ellas y ahí empezó la mala sangre con el ICONA porque mucha gente se vio obligada a marcharse a Barcelona y a Bilbao para no volver». El impacto demográfico de las repoblaciones, por lo tanto, fue muy importante. Muchas aldeas del municipio perdieron hasta un 70% de su población llegando incluso algunas a ser completamente abandonadas (Seijo, 2005: 393). Como se puede observar por el caso de Galicia, no hay que irse muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio, para encontrar casos dramáticos de

«desplazamientos ambientales». Basta tan solo con echar un vistazo a nuestros montes y ciudades.

REFERENCIAS

- ASPICHUETA, I.; DE MESANZA, B. (1968), «España puede y debe ser la reserva forestal que necesita la pequeña Europa», *Montes*, n. 139, 144, pp. 180-215.
- ARESES, R. (1950), «La provincia de Pontevedra y la restauración forestal de sus montes», *Montes*, n. 50, pp. 53-60.
- CARBAJO, P. (1996), «El estancamiento demográfico de Galicia se debe a la emigración», *El País*, 16 de abril.

- EL HINAWI, E. (1985), «Environmental refugees», UNEP, Nueva York.
- FUSI, J. (1986), «El boom económico español», *Cuadernos de Historia* 16.
- GARCÍA DELGADO, J. (1976), *La Cuestión Agraria en España*, Alianza, Madrid.
- MYERS, N. (2005), «Environmental refugees: an emergent security issue». XIIIth Economic Forum, Praga (mayo).
- MARTÍNEZ HERMOSILLA, P. (1957), «Discurso de 1957 ante las cortes», *Montes*, n. 75, pp. 163-169.
- SEIJO, F. (2005), «The politics of fire: Spanish forest policy and ritual resistance in Galicia, Spain», *Environmental Politics*, 14 n. 3, pp. 380-402.



Una librería y un nuevo espacio abierto para debates y otras actividades.

Análisis contemporáneo
Ecología
Movimientos sociales
Mujer y género
Relaciones Norte-Sur
Paz y Conflictos
Literatura
Poesía
Infantil

Horario
De martes a viernes de 4 a 8 de la tarde
Sábado de 10 a 2 del mediodía

Arc de Sant Cristòfol, 11-23 - Tel. 93 269 13 75 - 08003 Barcelona

El declive de la población rural y agraria

Roser Nicolau*

En la mayor parte de regiones y países europeos el declive histórico de las poblaciones rurales y agrarias se inició a una gran velocidad a mediados del siglo XIX. De esta manera se puso fin a un período anterior de rápido crecimiento alimentado principalmente por la reducción ininterrumpida de la mortalidad desde finales del siglo XVIII, que se produjo primero en las zonas rurales y bastante más tarde, a partir de 1870, en las grandes ciudades europeas. Los factores causantes del despoblamiento rural fueron múltiples y la fuerza de cada una de ellos varió según las regiones. En primer lugar tuvo lugar un proceso de reducción de la nupcialidad, es decir matrimonios más tardíos y menos frecuentes. Esta reducción se observó primero en los países del norte de Europa, y luego a partir de los años 1870 también en otros países, y también en las regiones mediterráneas, en donde la población empezó a emigrar más intensamente a ultramar. Esta emigración, fundamentalmente, de hombres jóvenes reducía la frecuencia de matrimonios y en cualquier caso los retrasaba; lo que contribuía, también de esta forma, a reducir la fecundidad y densidad rurales. Las proporciones de mujeres solteras observadas a partir de mediados del siglo XIX en Irlanda, Suecia y después en Galicia o Portugal se encuentran entre las más bajas que se han registrado. Simultáneamente a este proceso de reducción de la nupcialidad femenina e intensa emigración de la población europea, se extendió el uso de la contracepción y la limitación de la descendencia y de una forma muy rápida en las regiones donde las migracio-

nes internas, rural-urbanas, eran más intensas. En Francia y Cataluña por ejemplo, el descenso de la fecundidad de los matrimonios fue muy rápido en todas las localidades. Todos estos factores contribuyeron a frenar el crecimiento de la población rural, de tal forma que el crecimiento de la población europea a partir de mediados del siglo XIX refleja fundamentalmente el crecimiento de la población urbana.

España, como otros países de la Europa meridional, fue en este caso una excepción, porque la población rural y agraria aún creció en la segunda mitad del siglo XIX y no declinó de forma sostenida e ininterrumpida hasta después de 1950. Este mayor crecimiento se debió en parte al retraso del descenso de la fecundidad, que hasta los años 1960 era en España superior a la de los países del norte y centro de Europa. No obstante, este factor no debe sobreestimarse porque hasta los años 1960, la mortalidad española, sobre todo la de los niños, era también más elevada que la de aquellos países. La diferencia más significativa con los países del norte y centro de Europa es la menor intensidad de las migraciones y el retraso hasta muy avanzado el siglo XX de la emigración y el éxodo rural. La clasificación sectorial de la población activa en los censos españoles, con todas las limitaciones de estas clasificaciones aplicadas a las poblaciones del pasado, muestra la relativa

* Departament d'Economia i Història Econòmica. UAB.

estabilidad de la población agraria y la menor intensidad de los movimientos migratorios. Aunque los activos agrarios españoles disminuyeron en términos absolutos entre 1910 y 1930, después se recuperaron y alcanzaron un valor máximo en 1950. La emigración exterior a los principales centros industriales españoles que habían reducido los activos agrarios antes de 1930 se vio interrumpida por la crisis económica internacional, la guerra civil y la segunda guerra mundial. Estas circunstancias retrasaron significativamente el proceso de despoblación rural. A partir de 1950, los movimientos migratorios se intensificaron y el descenso de la población activa agraria española fue abrupto. En las dos décadas siguientes, la agricultura española perdió cerca de 2 millones 300 mil hombres activos y redujo a la mitad el total de sus activos masculinos (la población activa femenina es más difícil de estimar). La demanda de trabajadores inmigrantes principalmente de Alemania, Suiza y Francia, y la intensificación de las migraciones internas consiguieron finalmente, entre 1950 y 1970, reducir de forma significativa el peso en términos relativos y absolutos de la población agraria.

Si se examina las trayectorias de las distintas regiones españolas, el carácter excepcional de la evolución de la población activa agraria española debe matizarse, ya que las migraciones de los trabajadores agrarios tuvieron en algunas regiones una intensidad y repercusión demográfica importantes desde mucho antes. En la segunda mitad del siglo XIX, las diferencias en las tasas de crecimiento de las regiones españolas aumentaron sobretodo entre las regiones de la mitad norte de la península y se debieron en gran medida al aumento de los movimientos migratorios de las zonas rurales a las urbanas. Madrid y las áreas industriales de Cataluña y el País Vasco tuvieron un crecimiento más rápido que el de las otras regiones. La emigración a ultramar fue particularmente intensa en el noroeste de la península, en Canarias y en algunas áreas del Levante donde además de la emigración a América se produjo una significativa emigración a Argelia y Francia. El País Vasco y Madrid recibieron hasta los años 1930 inmigrantes de Castilla la Vieja, Asturias, Cantabria, la Rioja y Navarra, mientras que Cataluña de Aragón y otras áreas del levante

Mapa 1
Porcentaje de la población nacida
en la provincia que reside
en la misma provincia, en 1920



Fuente: Nicolau (1991).

español. El censo de 1920 permite comparar el lugar de nacimiento y de residencia de la población española en aquella fecha. A partir de este censo se ha elaborado el mapa 1, que muestra el impacto de la emigración a nivel provincial y concretamente, la proporción de la población nativa que en 1920 reside en su misma provincia de nacimiento. Este mapa traza una línea horizontal que pasa justo por debajo de Madrid, y que divide España en una mitad septentrional donde la movilidad geográfica de la población es mucho mayor que en la mitad meridional, con la sola excepción del sudeste. La escasa movilidad de la población de las provincias del sur es particularmente significativa, si tenemos en cuenta que estas eran las provincias donde dominaba la gran propiedad y la proporción de población agraria asalariada era mayor. Esta observación no contradice necesariamente la supuesta mayor movilidad de los asalariados agrarios, pero en cualquier caso sugiere que los asalariados agrarios de las otras regiones, donde la concentración de la propiedad agraria era menor y la forma de poblamiento rural mucho más dispersa, se incorporaron

antes a las corrientes migratorias internas e internacionales que los asalariados de la gran propiedad agraria. De forma general, se observa un contraste importante entre el proceso de éxodo rural característico del norte y del levante y el proceso propio de las regiones del sur de España. Así en el norte y el levante, el éxodo se desarrolló a través de un proceso migratorio gradual, tanto en el tiempo como en el espacio, es decir a lo largo de un período de tiempo largo y por etapas, de zonas rurales a pequeñas ciudades y luego a ciudades mayores. En cambio en el sur, el proceso migratorio fue mucho más tardío, y en parte por esto mucho más rápido. Además las migraciones se realizaron directamente de zonas rurales hacia las zonas urbanas del norte, densas y con un crecimiento entonces más rápido y caótico. Tal como se ha indicado, este contraste se debe seguramente a las diferencias en la estructura de la propiedad agraria, y en parte también a las diferencias en las formas de poblamiento de la población rural.

REFERENCIAS

- ERDOZAIN, P. y MIKELARENA, F. (1996), «Algunas consideraciones acerca de la evolución de la población rural en España en el siglo XIX» en *Noticiario de Historia Agraria* 12, 91-118.
- GOERLICH GISPERT, F. J. Y IVARS, M. MAS (Drs.) J. AZAGRA ROS y P. CHORÉN RODRÍGUEZ (2006), *La localización de la población española sobre el territorio. Un siglo de cambios*, Bilbao, Fundación BBVA.
- NICOLAU, Roser (1991), «Trayectorias regionales en la transición demográfica española» en Livi Bacci, M. (coordinador) *Modelos regionales de la transición demográfica en España y Portugal*, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante
- SÁNCHEZ ALONSO, B. (2000), *Tose who left and tose who stayed venid: explaining emigration from the regions of Spainm 1880-1914*.
- SILVESTRE, J. (2005), «Internal migrations in Spain, 1877-1930» en *European Review of Economic History* 9, 233-265.



FLACSO
ECLIAOCHI



Universitat
Autònoma
de Barcelona



IVO
INSTITUT VOOR
ONTWIKKELINGVRAAGSTELLINGEN



redibec



TILBURG UNIVERSITY

Revista Iberoamericana de Economía Ecológica ISSN 13902776

La REVIBEC es una revista electrónica impulsada por la Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), que busca promover y difundir el debate científico de la región iberoamericana en el campo de la economía ecológica. Se trata de una revista científica bilingüe español/portugués, con sistema de evaluación de los artículos por pares, e inscrita en el registro de revistas científicas Latindex. Los artículos se pueden bajar de la página web de forma gratuita. Asimismo en la misma página se pueden encontrar las normas que deben seguir los autores para enviar sus contribuciones

Forman parte del consejo editorial:				
Paula Antunes	Clóvis cavalcanti	Esteban Castro	Philip Fearnside	Silvio Furtowicz
Sergio Guevara	Carlos Larrea	Enrique Lefé	Joan Martínez-Alier	Manfred Max-Neef
Peter May	Walter Pengue	Olman Segura	Victor Toledo	Joseph Voguel
Equipo Editor:				
Fander Falconí	Roldan Muradian	Jesus Ramos		

Para más información visite la página <http://www.redibec.org> o escriba a redibec@flacso.org.ec

Migraciones: el imán de la especulación turística y residencial

Joan Buades*

constructor marcan el paso. Ayer, por ejemplo, en Baleares y hoy también en el Sur.

Las migraciones constituyen el primer factor de temor colectivo en las sociedades occidentales en los albores del siglo 21. Sorprenden los prejuicios sobre su magnitud real (Arango, 2007): sólo uno de cada 40 habitantes del Sur tiene la condición de emigrante y los 191 millones de migrantes mundiales actuales han crecido por debajo de lo que lo hecho la población humana desde 1970... Más relevante, en cambio, es su vistosidad: si a principios del siglo XX nueve de cada diez migrantes se dirigían a sólo cinco estados (EUA, Argentina, Brasil, Canadá y Australia) y habitualmente en dirección norte-sur o con el proyecto de constituir «nuevas Europas» (Crosby, 1988), ahora se les han añadido Europa occidental, el Golfo Pérsico y el Pacífico occidental; y entre las áreas de origen, dominan Asia, América Latina y África. En esta creciente transformación multicultural hay que buscar la raíz de la psicosis securitaria que corroe Europa occidental.

Quisiéramos llamar aquí la atención sobre las interrelaciones entre la globalización liberal, el auge de la economía especulativa y la localización desigual de mano de obra barata emigrante allá donde el turismo y el boom

BOOM TURÍSTICOS Y MAREAS HUMANAS

Si la población mundial se ha triplicado desde 1950, la economía se ha multiplicado por siete. Dentro de ella, destaca poderosamente que el número de turistas internacionales sea treinta veces mayor que a mitad del siglo pasado (808 millones en 2005 frente a 25 millones en 1950). Es decir, crece cuatro veces más rápidamente que la economía general en un contexto de explosión demográfica (Buades, 2006).

Lejos de constituir mundos aparte, el turismo y las migraciones interactúan cada vez con más fuerza. Así, desde el fin de la convertibilidad del dólar en oro a principios de los setenta, se desencadenó una auténtica lluvia de capitales especulativos, la cual acabó teniendo su principal destinatario en la expansión hotelera e inmobiliaria a partir de los noventa. Ello ha permitido la creciente constitución de «clústers» de negocios nucleados en torno a complejos hoteleros y residenciales allí donde las autoridades favorecen su implantación y hacen su agosto las empresas transnacionales y los fondos de inversión. El este de la República Dominicana (Bávaro, Punta Caná, Bayahíbe), el Yucatán (Cancún), la costa pacífica (Acapulco) y Baja California («Mar de Cortés») mexicanos, el nordeste (Recife, Fortaleza, Salvador de Bahía) brasileño o en los múltiples polígonos turísticos

* Miembro del Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears.

en construcción en Marruecos (como el de Saïdia-Ras el Ma en Oujda), son botones de muestra en el Sur.

Las zonas de turistización rápida constituyen un creciente foco de atracción de mano de obra barata emigrante. Paradigmáticamente, al menos 10.000 albañiles emigrantes del resto de México estuvieron trabajando en condiciones muy precarias para construir 4.000 nuevas habitaciones de hotel en la «Riviera Maya» en el verano pasado. Tales desplazamientos humanos coinciden con la creciente colonización inmobiliaria norteamericana y europea en el propio Yucatán, donde adquieren residencias secundarias.¹ Faltas de toda previsión, estas migraciones tienden a desestructurar y envejecer la población de las comunidades campesinas (que se tornan insostenibles) y generan el hacinamiento en la periferia turística de importantes contingentes de trabajadores migrantes jóvenes. Así, por imposición de las empresas transnacionales españolas hoteleras españolas, la República Dominicana ha creado en 2006 POLITUR, una policía turística especial, que permita aislar a los turistas de los slums donde sobreviven los albañiles haitianos y de la prostitución y la venta de souvenirs en competencia «desleal» con la que aquellas controlan.

En los países de inmigración reciente la gran mayoría de los trabajadores extranjeros legales trabajan en el sector servicios y en la construcción, es decir, a lomos de la eclosión turística (Dehoorne, 2002). Allí es fácil encontrar trabajo o algo parecido, incluso para los sin papeles, ya que el dinero circula abundantemente y se requiere muy poca cualificación (servicio doméstico, cuidado personal, etc). Para poder entender qué puede estar pasando en los nuevos Paraísos turísticos en el Sur, podemos mirarnos en el espejo de las islas Baleares, el conocido paraíso turístico de donde son originarias 5 de las 8 mayores empresas transnacionales españolas (Sol Meliá, Riu, Barceló, Iberostar y Fiesta/Sirenis). En 2006, el archipiélago balear, era la región más turistizada de España (11 turistas por habitante y año frente a los apenas 1,3 para el conjunto de España) y también la primera región en porcentaje de acogida migratoria exterior (15,6%) con una capacidad de atracción casi el doble que la media española (8,7%) y superior a la de la UE-25 (10%). Desde 1960 la población ha pasado de poco más de 400.000 personas a superar el millón de habitantes.

El éxito turístico-residencial arrastra, pues, una notable sobrepresión demográfica. Ello se traduce en crecientes costes sociales: el índice de presión humana en verano se sitúa en 363 habitantes por km² y se acerca al más densamente poblado de Europa, el de los Países Bajos (393). Paralelamente, esta capacidad de atracción provoca un choque cultural extremo: unida a la inmigración desde otras regiones de España, el porcentaje de población autóctona es ya mayoritaria y, con ello, el riesgo de minorización de la cultura y lengua tradicionales (en este caso, la catalana) es más grave que nunca. Todo ello en un contexto más *multicultural* que en ninguna otra región y sin que haya ningún tipo de acción social y cultural de descubrimiento intercultural mutuo. La fragmentación social por comunidades de origen está, pues, a la orden del día. Además, la especulación con las residencias turísticas genera escasez de vivienda disponible para los residentes permanentes: aproximadamente un tercio del parque construido no está ocupado mientras que prácticamente no hay mercado de alquiler y el coste de la compra de una vivienda es un 30% más cara que la media española...

La colonización turística del Planeta debería ser, pues, un espacio privilegiado y común de trabajo entre quienes, en el Sur y en el Norte, soñamos alternativas de fraternidad y sostenibilidad ecosociales.

REFERENCIAS

- ARANGO, J. (2007), «Las migraciones internacionales en un mundo globalizado», *Vanguardia Dossier*, n. 22, pp. 6-15.
- BUADES, J. (2006), *Exportando paraísos. La colonización turística del planeta*, La Lucerna, Palma de Mallorca.
- CROSBY, A. (1988), *Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa (900-1900)*, Crítica, Barcelona, 1988.
- DEHOORNE, O. (2002), «Tourisme, Travail, migration: interrelations et logiques mobilières», *Revue Européenne des Migrations Internationales*, vol. 18, n. 1, pp. 7-36.

¹ Véase www.fincascorral.com o <http://www.gruponicolasmateos.com/site>.

Publicación trimestral de ciencias sociales



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección C.P.

Población Provincia

NIF Teléfono

Profesión Ocupación

SUSCRIPCIÓN POR 4 NÚMEROS
DESDE EL PRÓXIMO NÚMERO

- primera suscripción
- renovación

Tarifa:

- España 22 euros
- Europa 30 euros
- Resto del mundo 37 euros

SUGERENCIAS

Apartado de Correos 30059, Barcelona

SUSCRIPCIONES

e-mail: comandes@icariaeditorial.com

e-mail: icaria@icariaeditorial.com

Tel.: (34) 93 301 17 23/26 (Lunes a viernes de 9 a 17 h.)

Fax: (34) 93 295 49 16

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual. Quienes deseen suscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org



Europa

**La normativa jurídica aplicable
a los desplazados por causas
medioambientales**

Nuria Arenas

**Migraciones y desertificación
en Portugal**

André Vizinho

**El comercio de emisiones en la Unión
Europea: juego sucio**

Kevin Smith

La normativa jurídica aplicable a los desplazados por causas medioambientales

Nuria Arenas*

La severa degradación medioambiental a la que viene siendo sometido el ecosistema se ha convertido, especialmente en las últimas décadas, en una de las causas más importantes en el origen actual de los desplazamientos humanos. Procesos como la deforestación; la desertización; los grandes trastornos en el equilibrio ecológico de la biosfera; o las catástrofes naturales pueden llegar a poner en peligro la supervivencia de la población afectada que, en consecuencia, se ve obligada a abandonar su hábitat natural desplazándose, ya sea en el interior o hacia el exterior de las fronteras de su país.

Esta última clase de personas contribuye a identificar una nueva categoría de desplazados que ha venido a denominarse «refugiados medioambientales». Las cifras prevén hasta 50 millones en 2010 (Environmental issues) 2007, lo que contrasta especialmente, con el vacío jurídico que existe

sobre este colectivo. La popularidad del término, desde que fuera adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1985 (El-Hinnawi), contrasta con su controvertida naturaleza jurídica, que ha devenido en una ausencia de instituciones responsables y, en general, en una carencia de respuestas internacionales apropiadas.

Se les ha llamado «refugiados medioambientales», pero según el Derecho Internacional el concepto de refugiado tiene un significado diferente. En virtud del artículo 1.A.2 del Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, marco jurídico internacional de referencia, estos deben haber cruzado una frontera internacional, carecer de la protección de su Estado y tener «fundados temores de ser perseguidos» por las razones taxativamente enumeradas: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas; no se mencionan los desastres ecológicos como motivo de persecución.

Desde entonces y a pesar de la importancia que va adquiriendo el fenómeno, ni la Asamblea General de Naciones Unidas ha ampliado el mandato de ACNUR para proteger a este colectivo, ni es mencionado en ningún instrumento regional a tales efectos. Por lo que respecta a la Unión Europea, en su Directiva 2004/83 CE por la que se dictan normas mínimas para una armonización a nivel europeo del concepto de refugiado,¹ tampoco menciona los desastres ecológicos como motivo para ser beneficiario de la protección internacional.

* Universidad de Huelva, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (nuria@uhu.es)

¹ Directiva 2004/83 CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida: DOUE L 304, 30.09.2004.

De igual forma, no serían potenciales acreedores de la acogida de carácter temporal como la que contempla la Directiva 2001/55/CE,² para casos de afluencia masiva de personas desplazadas. La petición al respecto formulada por el Comité Económico y Social, diferentes ONG y la doctrina mayoritaria fue desoída. La legislación norteamericana relativa a protección temporal sí considera a aquellos que huyen de desastres ambientales (Hathaway, 1997), al igual que alguna europea, como la sueca (Dacyl, 1999).

No obstante, con respecto a la concesión de protección temporal, habrá que estar atentos a la evolución del consenso en el seno de la Unión Europea, pues el Consejo tiene capacidad para incluir a otros colectivos a parte de los expresamente mencionados en la Directiva general. En cualquier caso, si se produjera una situación de emergencia por causa de un desastre ambiental cerca de las fronteras comunitarias, podría aplicarse el artículo 64.2 del Tratado de la Comunidad Europea.³ Y con carácter general, no necesariamente vinculada a una situación de emergencia en frontera, la Comunidad Europea dispone de «la política de ayuda humanitaria», en aplicación del artículo 179 del Tratado CE, para asistir a las poblaciones de países terceros víctimas de catástrofes naturales.

Teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos analizados no encontramos base jurídica suficiente para asimilar los desplazados ambientales con los refugiados. Sólo gozarían de la protección del Convenio de 1951, de forma excepcional, en la medida que la degradación ambiental vaya unida a una persecución en los términos del artículo 1.A.2 del Tratado aquellas personas forzadas a abandonar su hábitat natural utilizando el medio ambiente como política discriminatoria del Estado podrían gozar del estatuto de refugiado.

El desequilibrio rural, político y cultural de ciertas regiones entraña conflictos y deportaciones de población que están unidas al reparto del espacio, del territorio, más o menos manipulados por los intereses de los Estados. Estas actuaciones se revelan como una nueva forma de *apartheid* que podríamos llamar ‘ecológico’, nacido del desequilibrio rural y de las consecuencias sociales y políticas (MacGregor, 1993). Fuera de este supuesto, para afrontar el fenómeno del desplazado medioambiental, proponemos la efectiva apli-

cación de las normas de Derecho internacional ambiental, unida a la creación de mecanismos específicos, en este caso, un Fondo de Compensación como sistema financiador de todas las fases del desplazamiento (Arenas, 2002).

La comunidad internacional debe cubrir sus necesidades básicas y proporcionarles una ‘protección temporal’, para los casos en que haya sido necesario cruzar una frontera internacional. Esa cooperación de emergencia debe incluir esfuerzos para modificar la conducta ecológicamente incorrecta del Estado. En cuanto a nuestra propuesta de *lege ferenda*, se trata de crear un Fondo de Compensación para graves desastres ambientales que pudiera estar financiado por países y fondos privados, semejante a lo establecido para hidrocarburos,⁴ utilizando el concepto de «responsabilidades compartidas pero diferenciadas».⁵

Los desplazados medioambientales resultan un fenómeno difícil de aprehender debido a sus diversas dimensiones, de ahí que, partiendo de la complejidad de las causas que provocan estos flujos, de la multitud de factores conectados, no quepa más que utilizar una perspectiva integradora para hacerle frente.

² Directiva 2001/55/CE, del Consejo, de 2º de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, DOCE L 212, 07.08.2001.

³ «En el caso de que uno o más Estados miembros se enfrenten a una situación de emergencia caracterizada por la llegada repentina de nacionales de terceros países y sin perjuicio del apartado 1, el Consejo podrá adoptar, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, medidas provisionales por un período máximo de seis meses en beneficio de los Estados miembros afectados».

⁴ Convenio de Bruselas de 29 de noviembre de 1969, sobre responsabilidad civil nacida de daños de contaminación por hidrocarburos. Convenio de Bruselas de 18 de diciembre de 1971 sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.

⁵ El principal elemento de progreso de la Declaración de Río es el relativo a la idea de solidaridad mundial (partenariat). El principio 7 formula claramente la idea así como la de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.



REFERENCIAS

ARENAS HIDALGO, N. (2002), «El fenómeno de los llamados «Refugiados medioambientales»: ¿un nuevo desafío para el Derecho Internacional de los refugiados?», en (Fernández Sánchez, Pablo A. Editor), *La Revitalización de la Protección de los Refugiados*, Universidad de Huelva Publicaciones, pp.261-275.

DACYL (1999), «Protection Seekers from Bosnia ad Herzegovina and the Shaping of the Swedish Model of Time-Limited Protection», *International Journal of Refugee Law*, vol.11, nº 1.

EL-HINNAWI, E. (1985), *Environmental Refugees*, United Nations Environmental Programme, Nairobi.

Environmental issues: www.environmental.about.com

HATHAWAY, J. (1997), «Making International Refugee Law Relevant Again», *Harvard Human Rights Journal*, vol.10.

MACGREGOR, JoAnn (1993), «Refugees and the Environment», *Geography and Refugees: Patterns and Processes of Change*, Richard Black & Yaughn Robinsons (eds), pp. 157-170.

Oficina europea de Ayuda Humanitaria (ECHO): www.europa.eu.int/echo/



LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2007 Nuestro futuro urbano *Informe anual de The Worldwatch Institute*

“Los resúmenes más comprensibles, actualizados y accesibles... sobre el medio ambiente mundial.”

E.O. WILSON, ganador del Premio Pulitzer

Icaria editorial · CIP
Isbn 978-84-7426-290-2
Págs 480
Pvp 25

Estamos al borde de una transición histórica: en algún momento de 2008, más de la mitad de la humanidad vivirá en áreas urbanas. ¿Es ésta una buena o una mala noticia? Esta edición de *La situación del mundo* analiza los cambios en el modo en que las ciudades son gestionadas, urbanizadas y habitadas que podrían favorecer un futuro urbano más saludable a la vez que más pacífico. Sus autores investigan la provisión de agua y los servicios sanitarios, la horticultura urbana, la producción local de energía, las opciones «verdes» de transporte, la anticipación de los desastres, la estabilidad económica local y mucho más. Además, imágenes instantáneas de ciudades diversas, desde Tombuctú hasta Los Ángeles, nos permiten vislumbrar la fascinante diversidad de la vida urbana.



Migraciones y desertificación en Portugal

André Vizinho*

La palabra *desertificación* es habitualmente usada en Portugal tanto para referirse al proceso físico en que la tierra se convierte en desierto, como para describir el proceso social de abandono de las zonas rurales. La emigración y el abandono rural en Portugal han sido percibidos mayormente como fenómenos causados exclusivamente por problemas económicos y sociales; no fue hasta 1999, con la creación del Plan Nacional para Combatir la Desertificación (PANCD), que la desertificación del suelo y del territorio comenzaron a ser tenidas en cuenta en los programas de planificación nacionales y regionales (Louro, 2006).

En pocas palabras, la desertificación del suelo y del territorio son causadas principalmente por las actividades de las poblaciones humanas, ya sea mediante malas prácticas agrícolas, gestión forestal deficiente, sobrepastoreo, contaminación del suelo o erosión por el agua. Los incendios forestales contribuyen también en gran medida a la erosión del suelo, debido a la posterior exposición de las zonas quemadas a la erosión provocada por las lluvias y el viento. En los países desarrollados, la degradación del suelo y la desertificación se manifiestan primero a través de la reducción de los ingresos de los agricultores (Hare F. K. et al. 1977). Ese descenso de los ingresos ocasionado por la baja productividad de los sistemas naturales es parcialmente responsable de las emigraciones de gente desempleada que se desplaza hacia zonas urbanas más atractivas, donde la actividad económica es más dinámica y promisoría. Susan Adamo, en su estudio «Migraciones y desertificación en las

zonas áridas de Argentina», llega a la conclusión de que la emigración puede considerarse una estrategia de adaptación individual o familiar, utilizada para hacer frente a problemas ambientales que amenazan la base de producción de recursos (Adamo, 2003).

En Portugal, la emigración y el consecuente abandono rural son ocasionados por factores ambientales, sociales y económicos. De hecho, las causas de la migración del campo a la ciudad pueden ser vistas como sinérgicas, puesto que las migraciones iniciales de gente hacia las áreas urbanas crean una serie de incentivos para que emigren los demás habitantes rurales. Entre ellos se cuentan la reducción de la población, la disminución de mano de obra disponible, la falta de servicios, la reducción de las ayudas y las inversiones por parte de las autoridades locales, el cierre de servicios básicos sanitarios y educativos, el envejecimiento de la población, la ausencia de actividades artísticas y culturales, la pérdida de valor del conocimiento tradicional, etc. Simultáneamente, las poblaciones rurales tienen niveles reducidos de educación formal y en algunas regiones el 37% de la población es completamente analfabeta y un 30% adicional sólo ha cursado la educación primaria (Correia, T.P., 2006). Ese bajo nivel de educación formal contribuye

* GAIA -Grupo de Acção e Intervenção Ambiental- (andrevizinho@gaia.org.pt).

aun más a incrementar la dificultad para adoptar nuevas prácticas agrícolas o económicas, nuevas tecnologías, nuevas estrategias para comercializar los productos tradicionales, etc. (Johnson y Lehmann, 2006).

Portugal sufre más el abandono rural que la desertificación del suelo y del territorio (Louro, 2006). Las áreas más vulnerables a la desertificación del suelo (ver índice de potencial desertificación en PANCD <http://panda.igeo.pt/pancd/>) son zonas rurales donde el abandono y la emigración han sido elevadas. Al mismo tiempo, un análisis a nivel de distritos (*freguesia* en portugués) ha demostrado que Portugal no sólo está dividido entre la región costera, avanzada y dinámica, y el tradicional interior rural. De hecho, hay muchas «burbujas» en el interior que han atraído gente y cuyos niveles de población han aumentado (Ferrão J., 2004).

Cuando la gente emigra hacia áreas urbanas más dinámicas, se produce un abandono parcial de las zonas rurales, disminuyendo la responsabilidad social de los nuevos proyectos de inversión en la región y dando así paso a plantaciones intensivas de monocultivos a gran escala de olivos, eucaliptus, pinos, árboles frutales, organismos modificados genéticamente, etc. que se caracterizan por buscar el beneficio rápido, el trabajo mecanizado, las bajas tasas de empleo y posiblemente prácticas agrícolas insostenibles que intensifican aun más la desertificación tanto del suelo como humana. Ese tipo de plantaciones intensivas de monocultivos a gran escala es un fenómeno que está aumentando en Portugal y sería necesaria una mayor investigación para comprobar claramente sus impactos positivos y negativos, tanto sobre el medio ambiente como sobre el ámbito social. Este fenómeno de plantaciones de monocultivos a gran escala es realmente uno de los principales responsables de la erosión de los suelos en Portugal, habiendo comenzado en la década de 1930 con la Campaña del Trigo, impuesta a todos los agricultores por el régimen fascista de Salazar. Esa campaña tuvo un impacto económico positivo a corto plazo, pero sus efectos negativos y la desertificación de los suelos pueden prolongarse durante 7.000 años, hasta que la naturaleza logre regenerar lo perdido.

El análisis de los actuales regímenes de precipitaciones y los escenarios previstos ante el cambio climático sugieren que cada vez serán más frecuentes las sequías en las regiones altamente susceptibles a la desertificación y que, sumadas a las tormentas, favorecerían aun más la erosión del suelo, reduciendo la productividad (Soares, A. 2006).

Portugal no está considerado, según el Convenio de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (www.unccd.int), como una de las regiones del mundo más proclives a la desertificación, puesto que las zonas de destino de las poblaciones que emigran de regiones vulnerables no son de clima árido, subárido o subhúmedo seco y son poco vulnerables a la desertificación. En Portugal, el 40% de la población vive en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto (Correia, T.P., 2006) y ha confluído allí en los procesos migratorios internos que se iniciaron en la década de 1970. Dado que esa nueva población provoca altos niveles de presión sobre las áreas metropolitanas en diversos aspectos, la desertificación puede entenderse como un problema que no sólo afecta a las áreas rurales de Portugal, sino también a la calidad de vida en las ciudades.

Como hemos visto anteriormente, las causas de la desertificación del suelo, del territorio y humana están conectadas y se influyen recíprocamente, lo que demuestra que la desertificación es un problema ocasionado por los seres humanos, con impactos sobre la vida humana y que no puede estudiarse separadamente del aspecto medioambiental en términos de causas o soluciones. Las áreas urbanas ejercen presión sobre los hábitos agrícolas de las zonas rurales, que a su vez expulsan gente hacia las zonas suburbanas ocasionando problemas sociales y ambientales. Un sistema político y económico disfuncional e inestable conduce a la mala gestión de los recursos y de las personas, y por lo tanto genera problemas adicionales. Un sistema político estable, con altos niveles de educación y prosperidad económica facilita la inversión en buenas estrategias de adaptación para regenerar los suelos que han sido destruidos en el pasado y recuperar y adaptar los conocimientos tradicionales para el uso eficiente de los recursos naturales de las tierras vul-

nerables (Sarukhan y White, 2005). Los conocimientos y recursos necesarios para combatir la desertificación ya existen (Hare, F.K. et al., 1977). Las acciones deben centrarse en desarrollar proyectos demostrativos y cambios integrados en el sistema económico, a través de la determinación de la sociedad civil, la voluntad política, la planificación, la participación de las comunidades locales, la capacitación para la sostenibilidad y la acción.

REFERENCIAS

- ADAMO, S. B. (2003), *Vulnerable people in fragile lands: migration and desertification in the drylands of Argentina : the case of the department of Jachal. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin*. Disponible electrónicamente en <http://hdl.handle.net/2152/66>.
- CORREIA, T. P. (ed). (2006), *Estudo sobre o abandono em Portugal Continental*, Universidade de Évora, 2006
- FERRÃO, J. (2004), *Dinâmicas territoriais e trajetórias de desenvolvimento: Portugal 1991-2001*, Universidade de Lisboa.
- HARE F. K. et al (1977), *Desertificação, Causas e Consequências, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992*; copyright United Nations
- JOHNSON, B. , LAHMANN, M. (2006), *Sustainability and Cities as systems of innovation*, Denmark . Disponible electrónicamente en <http://www.druid.dk/index.php?id=22>.
- LOURO, V. (2006), «O essencial são as pessoas», *Pessoas e Lugares*, n. 39, pp 4-5.
- ROXO, M. J.(2006), «Sensibilizar para a desertificação», *Pessoas e Lugares*, n. 39, pp 7.
- SARUKHAN, J., WHITE, A. (ed) (2005), *Ecosystems and human well-being: Desertification synthesis. Millennium ecosystem assesment*, USA.
- SOARES, A. (2006), «A criação da ROADS – a gestão do fenómeno da desertificação e seca em Portugal», *Pessoas e Lugares*, n. 39, pp 6.



El comercio de emisiones en la Unión Europea: juego sucio

Kevin Smith*

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero parece guiarse por el principio de que «quien contamina, se lucra» y no por el de «quien contamina, paga».

La segunda fase del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (ETS en inglés) se pondrá en marcha en 2008 y, muy pronto, Bruselas tendrá que reconocer que no está funcionando. Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) no están disminuyendo, las industrias no están adoptando tecnologías de energía limpia y, hasta el momento, este régimen parece guiarse por el principio de que «quien contamina, se lucra» y no por el de «quien contamina, paga». La falta de resultados ostensibles hasta la fecha lleva a concluir que el ETS se ha concebido bajo la premisa de su compatibilidad ideológica con el libre mercado y no de su eficacia para alcanzar unos recortes muy necesarios en las emisiones de CO₂.

Sobre el papel, el sistema de «límites y comercio» (*cap and trade*) es de una atractiva sencillez. El volumen de contaminación por dióxido de carbono permisible se divide entre ubicaciones industriales (denominadas «instalaciones») de toda Europa. Ésa sería la parte que se refiere a los «límites».

Si una de esas instalaciones sobrepasa el tope que se le ha marcado, debe adquirir la cantidad de permisos equivalentes en el mercado. Y al revés: si una instalación está por debajo de sus límites, puede vender en el mercado la cuota que le sobra. Ésa sería la parte del «comercio». La idea es que el mercado creará las reducciones más «rentables» posibles. Se supone que los «límites» se endurecerán en rondas sucesivas del régimen, de modo que el precio de mercado del CO₂ aumente y genere incentivos para que las industrias realicen las modificaciones necesarias para reducir las emisiones en el origen en vez de tener que adquirir unos permisos muy caros.

La primera fase ha sido un desastre. Uno de los principales problemas del régimen es que cada una de las fases de su elaboración y aplicación se ha visto sujeta a un intenso cabildeo por parte de la industria. El economista John Kay escribía en el *Financial Times* que «cuando un mercado se crea a través de la acción política en lugar de surgir espontáneamente de las necesidades de compradores y vendedores, la industria buscará influir en la creación de ese comercio para su propia ventaja comercial». Sometidos a una constante presión empresarial, casi todos los gobiernos de la Unión asignaron una cantidad excesiva de permisos a la industria durante la primera fase. En 2005, el primer año de funcionamiento del sistema de comercio, las industrias relevantes en toda Europa emitieron 66 millones de toneladas menos que el límite que se les había fijado. Esto significa, por lo

* Transnational Institute, Carbon Trade Watch (kevin@carbontrade-watch.org).

tanto, que ese límite, en la práctica, carecía de sentido, pues no se había traducido en una reducción neta de las emisiones. Un análisis preliminar de los datos de 2006 demuestra que el 93 por ciento de las 10.000 instalaciones que quedan cubiertas por el ETS emitieron menos de la cuota asignada; en total, 30 millones de toneladas menos que la asignación marcada para toda Europa (Gow, 2007).

La industria también recogió los frutos de la presión empresarial durante la primera fase en forma de concesiones de permisos gratuitos. A pesar de ello, las empresas han estado repercutiendo «los costes» del proceso sobre los consumidores. Según un estudio de UPS Investment, la primera ronda del ETS ha sumado 1,3 céntimos de euro a cada kilovatio/hora de electricidad vendida. Puede que la cifra parezca insignificante, pero sólo hasta saber que, según los cálculos del ministro alemán de Medio Ambiente, las cuatro principales empresas proveedoras de energía de la UE —Eon, RWE, Vattenfall y EnBW— se habían embolsado entre 6.000 y 8.000 millones de euros traspasando a los clientes el coste imaginario de esa primera fase del ETS (Neuhoff et al., 2006).

Los defensores del ETS se apresuran a asegurar que estos primeros «fallos de diseño» se están subsanando en la segunda ronda. Para empezar, los gobiernos pueden subastar un porcentaje de los permisos entre las industrias, en lugar de entregárselos sin más. Pero en la práctica, sólo 10 Estados miembros han optado por seguir esta vía y, de éstos, cuatro están subastando menos del uno por ciento de su total de asignaciones (Neuhoff, K. Et al., 2006). Se siguen así concediendo asignaciones gratuitas a industrias que hacen un uso intensivo de combustibles fósiles y, por tanto, otorgando importantes subsidios a las empresas más contaminantes. En un artículo publicado por la revista *Climate Change*, el Dr. Karsten Neuhoff, de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, y otros autores consideran que «el nivel de estos subsidios en el marco de los PNA [planes nacionales de asignación] propuestos en la segunda fase es tan elevado que la construcción de centrales eléctricas de carbón es más rentable en virtud del ETS y sus distorsionadas decisiones que en ausencia del ETS» (Neuhoff et al., 2006).

Los que defienden el régimen actual también arguyen que los límites más estrictos impuestos por la Fase II provocarán un aumento del precio del CO₂ e incentivarán a las empresas a empezar a adoptar prácticas y tecnologías más limpias. Pero estas previsiones del aumento en el precio de los permisos parecen algo optimistas si se tiene en cuenta la ‘Directiva de enlace’, que significa que las empresas también pueden adquirir créditos invirtiendo en proyectos enmarcados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), es decir, en proyectos compensatorios en el Sur previstos por el Protocolo de Kyoto.

Esta «Directiva de enlace» representa una grave «fisura» en el sistema que socava la eficacia del endurecimiento de los límites. En opinión de Neuhoff, «algunos participantes del mercado anticipan que el mercado europeo podría verse inundado con esas asignaciones [MDL] hasta tal punto que el precio de las asignaciones de la Unión Europea caería en picado» (Neuhoff K. et al., 2006).

Pero lo que mina la legitimidad medioambiental del ETS no es sólo la oferta de esos créditos tan económicos. La propia esencia de los proyectos de MDL es objeto de duras críticas.

El MDL está formulado con una benévola retórica sobre el desarrollo (la «D» de la sigla MDL). Se suponía que esos proyectos deben generar beneficios en materia de desarrollo para las comunidades locales y, además, se esperaba que el mercado creara incentivos para la inversión en infraestructuras energéticas de bajas emisiones en los países del Sur. Sin embargo, casi dos tercios del total de 1.534 proyectos de MDL previstos a principios de 2007 no están relacionados con la generación de energía limpia ni con las emisiones de CO₂ (Wara, M., 2007).

La mayor parte de los créditos de MDL (30 por ciento) se ha generado con la eliminación de HFC-23. Este potente gas de efecto invernadero se crea con la producción de gases refrigerantes. Un estudio publicado en el número de febrero de 2007 de *Nature* demostraba que el valor de estos créditos, según el precio vigente del CO₂, era de 4.700 millones de euros. Este valor no sólo representaba el doble del de los gases refrigerantes en sí, sino que se calculaba que el coste aproximado de implementar la tecnología necesaria

para capturar y eliminar el HFC-23 era de menos de 100 millones de euros. Así pues, los propietarios de las plantas y los intermediarios de los proyectos estaban alcanzando unos beneficios que rondaban los 4.600 millones de euros (Wara, M., 2007).

La enorme suma de dinero generada con estos sistemas de comercio del estilo de Kyoto no ha ido a parar a las empresas y comunidades que están movilizándose con proyectos sobre energía limpia y reducción de emisiones, sino a grandes contaminadores industriales que, después, tienen libertad para reinvertir los beneficios en la expansión de sus actividades. En el año fiscal 2006/07, los propietarios de SRF, una empresa industrial y textil con sede en India, registró unos beneficios de 87 millones de euros con la venta de créditos de CO₂ derivados de la eliminación de HFC-23. Ashish Bharat Ram, el director ejecutivo, declaraba al *Economic Times* que «las importantes entradas con el comercio de emisiones de CO₂ nos han fortalecido financieramente, y ahora estamos expandiéndonos hacia áreas relacionadas con nuestro punto fuerte en el negocio químico y técnico de los textiles» (*Point carbon*, 10/4/2007).

Muchas de las empresas destinatarias de los fondos de MDL en los países del Sur son blanco de una constante resistencia local de comunidades que deben soportar los impactos —a menudo letales— de una contaminación industrial intensiva. En 2005, unas 10.000 personas de movimientos sociales, grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil se movilaron en Chhattisgarh, India, para protestar en una audiencia pública sobre medio ambiente celebrada para plantear la expansión de las fábricas de hierro esponjoso de Jindal Steel and Power Limited (JSPL) en el distrito.¹ La producción de hierro esponjoso (una forma impura del metal) se caracteriza por los residuos que genera, y las empresas implicadas han sido acusadas de apropiarse de tierras ajenas y de contaminar el aire, la tierra

y el agua. JSPL gestiona la mayor fábrica de hierro esponjoso del mundo, que ocupa más de 320 hectáreas de lo que solía ser la próspera aldea agrícola de Patrapali. Sólo esta fábrica cuenta con cuatro proyectos de MDL distintos, que generan millones de toneladas de supuestas reducciones de CO₂ que se podrían importar al régimen del ETS. Los habitantes de tres pueblos vecinos están luchando contra una propuesta multimillonaria para expandir la empresa porque ésta acabaría envolviéndolos por completo (Lohmann, L. 2006). El MDL no sólo está proporcionando ayuda financiera a JSPL para llevar adelante la expansión, sino también que también le está otorgando una «credibilidad verde» por estar en la vanguardia del emergente mercado de emisiones.

Puede incluso que el MDL sirva para desincentivar a los gobiernos del Sur que estudian adoptar leyes respetuosas con el medio ambiente. En caso de que, por ley, se hubiera obligado a las fábricas a capturar y eliminar el HFC-23, éstas no habrían podido optar a la categoría de MDL, ya que la financiación para reducir las emisiones de CO₂ no habría sido «adicional».

Ya en 1991, se propusieron planes para aplicar un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono en toda la Unión Europea, pero la falta de apoyo político y la moda por todo lo que tuviera que ver con el mercado acabaron con ellos (ENDS Europe Daily, 2006). Sin embargo, en febrero de 2007, un estudio realizado por el economista Robert Shapiro, subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos durante el Gobierno Clinton, afirmaba que los impuestos sobre las emisiones de CO₂ eran «mucho menos susceptibles de evasión y de manipulación del mercado» que los sistemas de límites y comercio. Mientras los impuestos sobre las emisiones de CO₂ ofrecen «un sistema más estable y transparente para los consumidores y la industria», los sistemas de límites y comercio son «mucho más complejos de administrar» y «provocan una volatilidad mucho mayor en los precios de la energía y en los precios relacionados con ésta» (*Point Carbon*, 19/2/2007). Otros economistas y politólogos de todo el mundo están llegando a conclusiones parecidas. La cuestión sigue siendo cuánta más energía y voluntad política se seguirán canalizando hacia un mecanismo que no hace

¹ Sitio web de Mines and Communities, <http://www.minesandcommunities.org/Action/press728.htm>.

mucho más que fomentar los beneficios y la «credibilidad» medioambiental de los mayores contaminadores. Incluso aunque la comunidad internacional no haya conseguido reducir las emisiones netas de forma significativa a través del ETS, es de esperar que, al menos, haya aprendido una valiosa lección sobre cómo no se debe elaborar una política climática que pretenda ser eficaz.

REFERENCIAS

- GOW, D. (2007), «Smoke alarm: EU shows carbon trading is not cutting emissions», *Guardian*, 3 de abril.
- ENDS Europe DAILY «Expert calls for EU-wide CO₂ taxation», 2290, 26/3/2007.
- LOHMANN, L. (2006), «Carbon Trading – A Critical Conversation

on Climate Change, Power and Privatisation», capítulo 4, pp. 254-271, The Dag Hammarskjöld Foundation.

- Neuhoff, K. et al., «Comparison of National Allocation Plans for the Period 2008-2012», <http://www.climate-strategies.org>, visitada el 10/04/07
- NEUHOFF, K. et al. (2006), «Implications of announced Phase 2 National Allocation Plans», *Climate Policy* 6, 411-422
- OAKLEY, R. (2006), «Greenpeace on the fiasco of the CO₂ emissions trading scheme» Greenpeace.
- WARA, M. (2007), «Is the Global Carbon Market Working?» *Nature*, vol. 445, 8 de febrero.
- Point Carbon* (www.pointcarbon.com), «Indian chemical company books €87 million windfall from carbon trading», 10/4/2007.
- Point Carbon* (www.pointcarbon.com), 19/2/2007 «Study favours carbon tax over cap-and-trade».



BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS

Biodiversidad, sustento y culturas
Revista trimestral - www.grain.org/biodiversidad

Editada por

REDES-AT

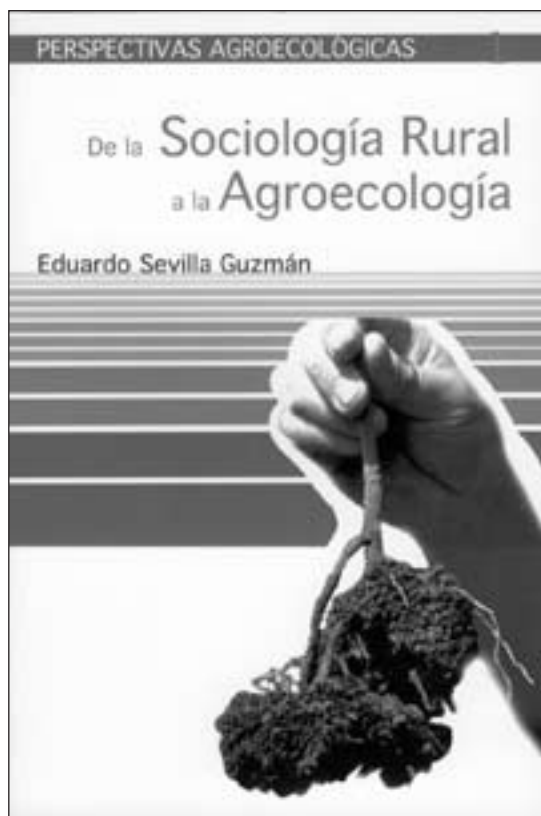
GRAIN

Contenido LIBRE

Informes y suscripción: biodiv@redes.org.uy

Nueva colección de Icaria

Perspectivas Agroecológicas



Títulos programados

1. *De la sociología rural a la agroecología*
Eduardo Sevilla Guzmán
2. *Biodiversidad y manejo ecológico de plagas en los agroecosistemas*
Miguel Altieri y Clara Nichols
3. *Agroecología, bases ecológica de la producción agraria*
Stephen Gliessman
4. *Introducción a la agroecología como desarrollo rural sustentable*
Gloria Guzmán Casado, Manuel González Molina y Eduardo Sevilla
5. *Transición agroecológica*
Gloria Guzmán (ed.)
6. *Una estrategia teórica y metodológica para la agroecología*
Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel González de Molina
7. *Conocimiento tradicional en agroecología*
Rufino Acosta (ed.)

Esta colección pretende difundir una serie de obras de agroecología, tanto teóricas como prácticas, dirigida a técnicos en agricultura ecológica, productores, funcionarios de la administración agraria, agentes de desarrollo local, estudiantes de ingeniería técnica y agronómica, ciencias ambientales, biología, geografía, edafología, etc., asociados a ONG y al movimiento ecologista, estudiantes de los dos máster de agroecología y de las dos titulaciones en agricultura ecológica.

www.icariaeditorial.com



América del Norte

**Migración y medio ambiente.
Una aproximación metodológica**

Ana Alicia Peña López, Nashelly Ocampo y Octavio Rosas Landa

**Las crecientes amenazas de
desastre y su potencial riesgo
de desplaamientos de población**

Zoë Chafe

Migración y medio ambiente.

Una aproximación metodológica

Nashelly Ocampo, Ana Alicia Peña
Octavio Rosas-Landa*

UNA RELACIÓN DESCUIDADA

Cada minuto de los pasados seis años, en que Vicente Fox gobernó México, un mexicano cruzó la frontera con Estados Unidos para incorporarse, en condiciones de ilegalidad, inseguridad e indefensión, a la economía estadounidense. Este flujo migratorio, que se remonta a más de un siglo atrás, ha originado que la población mexicana (o de origen mexicano) que reside en ese país ronde los 30 millones de personas, lo que la constituye —hasta hoy— el más grande flujo migratorio de la historia humana. Pero esta no es una situación que exclusivamente afecte a los mexicanos. Durante décadas, millones de latinoamericanos, asiáticos y africanos han emprendido una diáspora global hacia Europa, Medio Oriente, Australia, Norteamérica y todas aquellas regiones en las que el capital se asienta para extraer recursos naturales (energéticos, hídricos, bióticos, forestales, mineros, etc.), construir infraestructuras (ca-

rreteras, ferroviarias, aeroportuarias, energéticas), producir manufacturas, maquinaria, equipos y tecnologías o bien, para el desarrollo de las economías urbanas «terciarizadas». La densificación, proliferación y complejización de cada una de estas actividades de la economía global, así como todas ellas en conjunto han promovido —directa o indirectamente— la migración hasta alcanzar la cifra de más de 200 millones de migrantes internacionales, pero que superarían fácilmente los mil millones si se suman los migrantes internos de cada país.

La migración de población no es sólo un fenómeno económico, político, social y cultural. Tiene además un componente esencial que no ha sido reflexionado en su complejidad: la relación existente entre la devastación ambiental y los procesos migratorios, tanto en el lugar de salida, en el trayecto, el lugar de llegada y el posible retorno de los migrantes. El presente artículo tiene como propósito ofrecer algunas anotaciones metodológicas sobre esta relación a partir de un trabajo colectivo, interdisciplinario y crítico de investigación, reflexión y debate, que sirvan para apoyar las luchas por los derechos sociales y ambientales de los pueblos y los migrantes, así como despertar un mayor interés en la reflexión teórica y la acción política que vuelvan visible esta relación socioambiental fundamental. Por ello, en principio, consideramos que la crisis ambiental no sólo debe ser referida al ámbito *exterior* de la «naturaleza objetiva», sino también al de la «naturaleza subjetiva» o *interior*, con la cual está conectada, y a la relación entre ambas, como *totalidad*. Pero también creemos que los actuales procesos de migración de población no ocurren por la mera voluntad de los sujetos involucrados,

* Nashelly Ocampo: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). nashelly@hotmail.com. Ana Alicia Peña: Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Morelos. aliciap68@hotmail.com. Octavio Rosas-Landa: Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop). orr@servidor.unam.mx.

sino fundamentalmente por la dinámica de descampe- sinización forzosa y desarrollo de la gran industria y su correspondiente reflejo territorial hiperurbanizado, cuyo motor fundamental es el proceso de acumulación global de capital. Así, es necesario subrayar que las modernas migraciones son esencialmente *desplazamientos de fuerza de trabajo* para su empleo potencial, en función de los ciclos económicos de auge, estancamiento y crisis.

LAS FASES DE LA MIGRACIÓN Y LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL

Visto desde la perspectiva de *lugar de salida o expulsión*, el proceso migratorio está vinculado con la degradación de las condiciones ambientales locales de producción y reproducción (inundaciones, sequías, desertificación, desaparición o contaminación de sistemas hidrológicos, pérdida de ecosistemas completos, culturas, lenguas, saberes tradicionales, locales y ambientales, etc.). Por ejemplo, la ruta migratoria del Golfo de México hacia Estados Unidos se consolidó con los flujos migratorios ocasionados por el huracán *Mitch*, que asoló las costas centroamericanas y caribeñas.

La expulsión de la población local constituye una pérdida de *soberanía laboral y alimentaria*, especialmente si se trata de población campesina e indígena (como ocurre en México, América Latina y numerosas poblaciones asiáticas y africanas). Pero también representa una pérdida de *soberanía ambiental*, en tanto que la imposición técnica de métodos, prácticas y dinámicas productivas en el campo ligadas al uso de «paquetes» como el de la *revolución verde*, las semillas «mejoradas» y los transgénicos, han llevado al empobrecimiento de los suelos, al envenenamiento y reducción de los acuíferos y así, a la miseria de la población y a su éxodo forzoso. Esta pérdida se agrava porque los migrantes se llevan consigo sus saberes y la habilidad de cuidar y conservar la compleja diversidad agroecológica con la que históricamente convivían antes de forzar su salida para buscar su supervivencia en otros espacios.

El *trayecto migratorio* acarrea consecuencias ambientales igualmente serias y algunas apenas perceptibles. En México, por ejemplo, se ha estudiado poco la función que desempeña la construcción de infraestructuras de transporte, comunicación, etc., como mecanismos para el «vaciamiento» poblacional del campo y las ciudades. Lo que en países como México se observa más nítidamente, dada su posición geográfica de vecindad directa con Estados Unidos, es el surgimiento de *corredores de transmigración* que incluyen toda una «red de servicios» para los migrantes (casas de cambio, tiendas de conveniencia, hoteles, prostíbulos, bares, gasolineras, etc.), que alimentan un proceso de urbanización de los espacios rurales, así como la «calificación» de la fuerza laboral de los migrantes para adecuarlos a la *superexplotación* que les espera como destino: condiciones más extenuantes, insalubres e inseguras de trabajo, racismo y desarraigo. Del lado del sujeto migrante, su desplazamiento destruye progresivamente su capacidad de arraigo, mientras que el mayor desgaste físico y emocional lo vuelve más vulnerable y susceptible de control político, laboral, social y cultural, es decir, que en el trayecto se le enajena al migrante su *naturaleza fisiológica y comunitaria*.

La *llegada* al lugar de trabajo implica, según el sector o rama económica de empleo, diferentes condiciones de trabajo y destrucción ambiental interna y externa. Estados Unidos es el espacio ejemplar de dicha destrucción, reflejada tanto en los jornaleros agrícolas mexicanos, expuestos a todo tipo de agroquímicos, desechos tóxicos, jornadas extenuantes y condiciones de vida *contra natura*, como en los migrantes empleados como obreros de la industria empacadora de alimentos (carnes, embutidos, frutas y verduras industrializadas, etc.), que sufren ritmos de trabajo maquinizado tan riesgosos como demenciales, que la han convertido en la segunda industria más peligrosa de toda la economía estadounidense. Y qué decir de los migrantes empleados del «ambientalmente inocuo» sector servicios (jardineros, capturistas de datos, cocineros, trabajadores de limpieza), cuyas actividades se realizan en un verdadero régimen carcelario donde se incluyen riesgos ambientales como su hacinamiento en espacios urbanos hiperdegradados que no tienen nada que envidiar a las ciudades miseria



del Tercer Mundo, combinados con la miseria ambiental producida por las «ciudades globales».

El *retorno* de los migrantes a su tierra supone, como ocurre por ejemplo en México, la adopción de prácticas productivas y sociales degradadas (urbanización de las comunidades rurales, cambios en los usos de suelo, abandono de las prácticas y saberes locales y ambientales tradicionales que ayudaban a conservar las condiciones del medio natural), adquiridas muchas de ellas en el territorio de inmigración (como son los consumos nocivos de drogas, alimentos, medios de comunicación y transporte, plásticos) que se manifiestan en una socialidad decadente, homogeneizada, mediatizada y autodestructiva desligada ya de su identidad originaria, por cuanto los migrantes mismos se vuelven promotores de dichas prácticas en sus lugares de origen. Pero también, *las remesas* de los migrantes han servido en algunos casos, para estimular el abandono de las prácticas comunitarias (como el trabajo colectivo) y la promoción de toda una cultura de autoexplotación domiciliaria a partir de la incorporación de los campesinos en actividades de maquila.

A inicios de 2006, los migrantes mexicanos, como otros grupos de migrantes en Europa hicieron sentir su hartazgo respecto de las injusticias sociales que sufren cotidiana y extraordinariamente, cada vez que se los vuelve chivos expiatorios de la clase política y empresarial. Sus demandas han incluido, entre otras, el respeto a sus derechos civiles, laborales y sociales. La incorporación de sus derechos ambientales como demanda general del movimiento social es también prioritaria.

REFERENCIAS

- BARTRA, Armando (2003), *Cosechas de ira*, México, Itaca.
- CASTLES, Stephen y Mark J. MILLER (2004), *La era de la migración*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas-Porrúa.
- ENGELS, Friedrich (1978), *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, Barcelona, Crítica.
- GEORGE, Susan (1996), «Liberalismo económico. Marginación del Tercer Mundo y de la naturaleza», en *Ecología solidaria*, Madrid, Trotta, pp. 39-53.
- LEFF, Enrique (1986), *Ecología y capital: Hacia una perspectiva ambiental del desarrollo*, México, Siglo XXI.
- MARX, Karl (1979), «Emigración forzada», en Karl Marx y Friedrich Engels, *Escritos sobre Irlanda*, México, Ediciones de Pasado y Presente.
- PEÑA, Ana Alicia (1995), *La migración internacional de la fuerza de trabajo (1950-1990). Una descripción crítica*, México, Fundación Cambio XXI-Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
- *Los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, 1980-2000*, Tesis doctoral, en proceso, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
- ROSAS-LANDA, Octavio (2006), «Agua, saqueo y devastación. Ni el campo ni la ciudad tienen garantía de sobrevivir», en *Ojarasca*, suplemento mensual de *La Jornada*, n. 116, diciembre. Disponible en Internet (www.jornada.unam.mx/2006/12/18/oja116-nicamponciudad.html).
- SASSEN, Saskia (1988), *The mobility of labor and capital: A study in international investment and labor flow*, Cambridge, Cambridge University Press.



Las crecientes amenazas de desastre y su potencial riesgo de desplazamientos de población

Zoë Chafe*

Las cabeceras de la prensa internacional presentan frecuentemente noticias sobre repentinos y devastadores desastres, como terremotos o inundaciones. Pero difícilmente oigamos o leamos acerca de los posteriores sufrimientos de quienes han sobrevivido al desastre inicial y ahora deben afrontar sus consecuencias. Eso incluye a quienes se ven forzados a abandonar sus hogares por falta de seguridad, cobijo, agua potable, medios de subsistencia u otras necesidades. Son refugiados ambientales víctimas de desastres, y su número tenderá a aumentar enormemente en las próximas décadas, a medida que empeoren los desastres y el clima continúe cambiando.

Con frecuencia, los desastres naturales son vistos como acontecimientos fortuitos, pero cada vez están más relacionados con tendencias que en absoluto son fruto del azar. Son el resultado de una compleja relación entre diversos factores: peligros naturales (terremotos e inundaciones), vulnerabilidades (una seguridad alimentaria inadecuada, la falta de advertencias e información y la escasa planificación urbana) y el fracaso en la gestión del desastre (Chafe, 2007).

En años recientes, el mundo ha padecido un exceso de desastres; casi uno por día, a un promedio anual de 348 durante la pasada década (Renner y Chafe, 2007).¹ Mientras el número de víctimas mortales atribuidas a desastres naturales ha descendido con el paso del tiempo, debido especialmente a los avances en los pronósticos meteorológicos y a las tecnologías de la información, la cifra de personas afectadas por desastres no ha dejado de aumentar. (Ver Figura 1)

A cualquier persona que resulte herida, pierda su hogar o requiera asistencia inmediata se la considera «afectada» por el desastre.² Durante los pasados diez años, un promedio de 231 millones de personas anuales se vieron afectadas anualmente por desastres (Renner y Chafe, 2007), sumando 2.300 millones en el transcurso de la década. Esta cifra es 10% mayor que la de la década anterior (Renner y Chafe, 2007).

La incidencia de los desastres naturales va en aumento debido a diversas razones y está generando una compleja variedad de efectos. A continuación presentamos una selección de causas y efectos (Renner y Chafe, 2007):

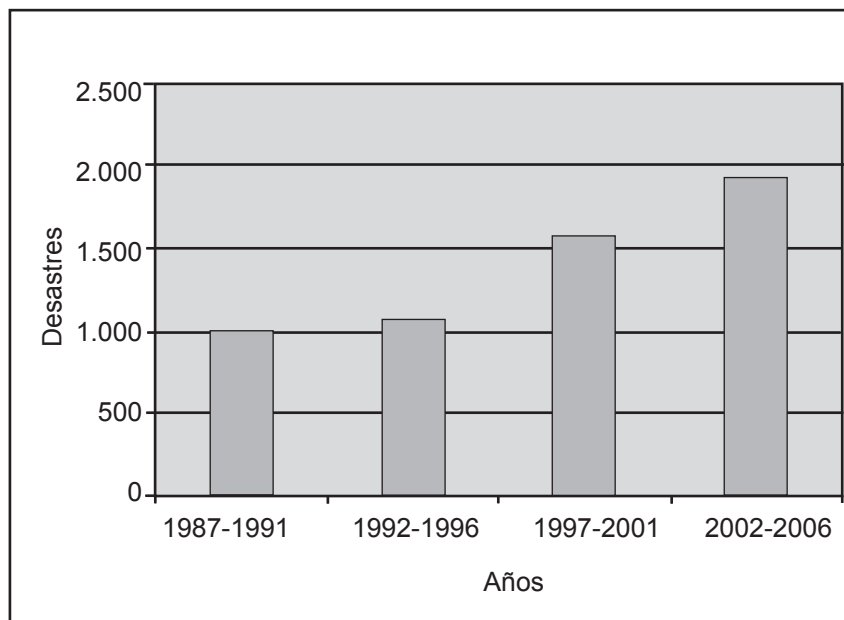
* Worldwatch Institute (zchafe@worldwatch.org).

¹ Las cifras sobre desastres son cálculos del Worldwatch basados en Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), «EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database,» en www.em-dat.net, actualizado el 6 de marzo de 2006. Debido a cambios en el método de registro, en 2003, las cifras recientes sobre la cantidad de desastres pueden parecer artificialmente exageradas si se las compara con las cifras históricas. Ver www.em-dat.net/guidelin.htm.

² Ver definición de «total de afectados» en Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), «EM-DAT Criteria & Definition,» www.em-dat.net/criteria.htm.



Figura 1
Número de desastres naturales en el mundo, 1987-2006



Fuente: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), «EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database,» en www.em-dat.net, actualizado 6 de marzo 2006.

Degradación ambiental: Las alteraciones de origen humano que afectan a los sistemas y ciclos ecológicos hacen más probable cierto tipo de desastres e incrementan su poder destructivo. La deforestación intensifica el peligro de inundaciones y deslizamientos de tierras; un uso inadecuado de la tierra favorece las sequías y la desertificación; la destrucción de arrecifes de coral, manglares y humedales incrementa los efectos de las tormentas en las zonas costeras (Dahdouh-Guebas, et al., 2005; Raman, 2005; Sengupta, 2005).

Cambio climático: La emisión de enormes cantidades de carbono a la atmósfera a través del consumo de combustibles fósiles y la deforestación no hace más que agravar esos problemas (Revkin, 2007). Los deltas de los ríos y otras regiones bajas se deberán enfrentar a la amenaza de la subida del nivel de los mares. Las poblaciones que actualmente

habitan zonas propensas a la sequía y a los fenómenos meteorológicos extremos, muchas de ellas con escasa capacidad para afrontarlos o adaptarse, deberán hacer frente a desafíos cada vez mayores (Revkin, 2007).

Población y vivienda: El aumento demográfico se traduce en un número cada vez mayor de personas viviendo en potenciales situaciones de riesgo, especialmente en zonas donde las viviendas son precarias (y por lo tanto menos resistentes ante los fenómenos naturales). La gente se establece, por elección o por necesidad, en zonas propensas a los desastres. Con un aumento de las posibilidades de fenómenos naturales extremos, ciertas regiones serán cada vez menos habitables o económicamente viables. Tal cosa contribuirá a mayores desplazamientos involuntarios de población, con el gran riesgo de que esos desplazamientos acaben siendo definitivos (IPCC, 2007).



Pobreza y desigualdad: Los habitantes más pobres tienen pocas posibilidades de decidir dónde viven y trabajan. Marginados por las estructuras económicas y políticas que sólo responden a los poderosos, tienden a asentarse en los lugares más vulnerables: laderas escarpadas o zonas bajas que pueden verse afectadas por deslizamientos, inundaciones u otros desastres. Después del desastre, los pobres difícilmente pueden adquirir comida y agua limpia. También padecerán cuando los presupuestos para programas sociales sean desviados para aliviar los efectos del desastre y para tareas de reconstrucción. Los desastres pueden llegar a dificultar la consecución de metas internacionales de bienestar, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Naciones Unidas.

Seguridad y pacificación: La pesada carga económica y el repentino desgaste producidos por los desastres pueden fácilmente potenciar las desigualdades ya existentes y favorecer un aumento de los conflictos (Renner y Chafe, 2006).

El IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) ha identificado los efectos que se prevén a medida que el cambio climático influya sobre los patrones meteorológicos y otros ciclos naturales. Los desplazamientos son una de las principales consecuencias que podemos esperar y está previsto que acontezcan en gran escala según: 1) la sequía afecte a regiones cada vez más amplias, 2) se incremente la actividad de los ciclones tropicales, y 3) aumente la incidencia de la subida del nivel del mar (IPCC, 2007). Desde 1997, el 82% de los afectados por desastres naturales han sido víctimas de inundaciones o de sequías, dos fenómenos naturales que se supone serán más frecuentes con el cambio climático (Renner y Chafe, 2007). Refiriéndose específicamente a África, Kathleen Miller, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Boulder (Colorado, EE UU), tendía a suponer que «las tormentas de lluvia serían más intensas y los aluviones imprevistos, más frecuentes» (Borenstein y Casey, 2007).

En las horas y días inmediatamente posteriores a uno de tales desastres naturales, cuando las cámaras de los medios de comunicación abundan en las zonas afectadas, es difícil contabilizar las víctimas y las pérdidas, y mucho más difícil aún estimar los efectos a largo plazo. Lesiones, pérdida de medios de subsistencia y quedarse sin hogar son algunos

tipos de sufrimiento humano que comúnmente provocan los desastres naturales. Pero es muy probable que esas estadísticas e historias nunca lleguen a aparecer en los medios. Son las repercusiones sociales, económicas y ambientales que perdurarán mucho después de que las cámaras se hayan ido y serán los supervivientes locales quienes seguirán padeciendo sus efectos.

Los informes relacionados con el número de personas que podría llegar a desplazarse debido al cambio climático han sido revisados a medida de que se iba definiendo el alcance de los efectos ambientales pronosticados y confirmados. Por ejemplo, un artículo del *Guardian* británico de 2003 calculaba que para el año 2050 habría 150 millones de desplazados (Simms, 2003); en 2005, la BBC informaba que 50 millones de personas podrían convertirse en refugiados ambientales en los cinco años siguientes (BBC, 2005); y en 2007, a partir del borrador de un informe del IPCC, la ONG Christian Aid afirmaba que para el año 2050 podría llegar a haber mil millones de desplazados en todo el mundo, la mayoría por los efectos del cambio climático (Christian Aid, 2007).

Las cifras exactas no son lo importante, pero es más que obvio que la comunidad internacional tiene que comenzar a planificar la migración de poblaciones humanas provocada por los cada vez mayores riesgos de desastre y otras consecuencias del cambio climático. Si no se reconoce esta inminente y profunda alteración, los esperados desplazamientos de población pueden tener efectos colaterales negativos, como escasez de agua potable y de alimentos, disputas por tierras cultivables o habitables y, en última instancia, casos de abierta violencia. Sin embargo, cooperando, los gobiernos, los grupos de ayuda y los representantes de la sociedad civil pueden contribuir efectivamente para que al menos una parte de esos refugiados ambientales logre satisfacer sus necesidades básicas.

MÁS INFORMACIÓN:

Intergovernmental Panel on Climate Change:
www.ipcc.ch

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: www.ifrc.org

Worldwatch Institute Disasters & Peacemaking Project:
www.worldwatch.org/features/disasters

REFERENCIAS

BBC News, «Millions 'Will Flee Degradation'», 11 de octubre 2005.

BORENSTEIN, S. y CASEY, M., «Panel: Climate Change Will Hurt Africa», Associated Press, 14 de mayo 2007.

CHAFE, Z. «Reducing Natural Disaster Risk in Cities», in *State of the World 2007*, W.W. Norton, New York, 2007.

Christian Aid, *Human Tide: The Real Migration Crisis*, mayo 2007.

DAHDOUH-GUEBAS, F., et al., «How Effective Were Mangroves as a Defence Against the Recent Tsunami?»

Current Biology, v. 15, n. 12 (2005), pp. 443–47.
Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Working Group II Summary for Policymakers*, Brussels, 13 de abril 2007.

RAMAN, S., «Tsunami Villagers Give Thanks to Trees», BBC News Online, 16 de febrero 2005.

RENNER, M. y CHAFE, Z., *Beyond Disasters: Creating Opportunities for Peace*, Worldwatch Institute, Washington, DC, 2007.

RENNER, M. y CHAFE, Z., «Turning Disasters into Peacemaking Opportunities», in *State of the World 2006*, W.W. Norton, Nueva York, 2006.

REVKIN, A., «U.N. Draft Cites Humans in Effects of Climate Shift», *New York Times*, 5 de abril 2007.

SENGUPTA, S., «Torrential Rain Reveals Booming Mumbai's Frailties», *New York Times*, 3 de agosto 2005.

SIMMS, A., «Unnatural Disasters», *Guardian Newspaper*, 15 de octubre 2003.





Asia e Indonesia

**La desecación de un mar:
De cómo el algodón dejó al Aral
sin agua y sin gente**

Juliette Williams

**Desplazados por el tsunami
en Asia**

Michael Renner

Viaje a Orissa

Joan Martínez Alier y Leah Temper

Salud ambiental en Israel

Avi Blau

La desecación de un mar: De cómo el algodón dejó al Aral sin agua y sin gente

Juliette Williams*



Barcos de pesca oxidados yacen en la arena del desierto, a millas de distancia de la línea de costa en retroceso del Mar de Aral. © Environmental Justice Foundation (www.ejfoundation.org).

En Moynaq visité una fábrica procesadora de pescado abandonada. Hacía tiempo que la producción se había detenido, debido a que las pesquerías comerciales de la ciudad habían ido desapareciendo... La pérdida del mar de Aral ha dejado en seco a los qaraqalpaqs. Sin agua no tienen trabajo, ni ingresos ni futuro.

GALIMA BUKHARBAEVA,
corresponsal de IWPR, Uzbekistán, 2005

Es probable que cada uno de nosotros esté usando en este momento alguna prenda de algodón. Tal vez sea una excelente fibra natural, pero los costes ambientales y sociales

de la producción mundial de algodón son verdaderamente estremecedores. Mano de obra infantil y forzada, utilización masiva de plaguicidas letales y demanda insostenible de recursos hídricos son algunos de los principales problemas vinculados a la producción mundial de algodón. Cinco décadas de producción intensiva de algodón en la URSS y que ha continuado en las ahora independientes repúblicas del Asia central, han conducido a lo que el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha descrito como «Uno de los más espantosos desastres del siglo XX» (UNEP, 1991). El algodón es el cultivo más sediento del planeta y en Asia central esa demanda de agua ha sido la principal responsable de la muerte del mar de Aral y, en consecuencia, de los agudos problemas que hoy padecen los 500.000 integrantes del pueblo qaraqalpaq (Ilkhamov, 2002). Esta etnia, pobladora de las costas del mar de Aral durante más de dos mil años, ha visto cómo en menos de una generación desaparecían sus medios de supervivencia, llevándoles a la pobreza, el desempleo y la emigración.

* Juliette Williams es directora de la Fundación por la Justicia Ambiental (EJF) y coautora de varias publicaciones sobre los plaguicidas, la producción de algodón, las pesquerías y la acuicultura del camarón, y sus respectivos impactos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los derechos humanos fundamentales. www.ejfoundation.org.
Environmental Justice Foundation (jwilliams@ejfoundation.org)



Las comunidades y los ingresos que en un tiempo dependieron de la pesca se han visto diezmados por el agotamiento del Mar de Aral. © Environmental Justice Foundation (www.ejfoundation.org).

Antes de la expansión de la producción algodonera en Uzbekistán y los países vecinos, el mar de Aral era un oasis ecológico situado en medio de los grandes desiertos de Asia central. Alimentado por los ríos Amu Darya y Syr Darya que nacen en las montañas tayiko-afanas, esas dos gigantescas vías de agua llegaron a transportar más agua que el Nilo (New Scientist, 2004); un volumen suficiente como para hacer del Aral el cuarto mar interior del planeta (Whish-Wilson, 2002). Sin embargo, actualmente se utiliza para irrigación el 85% del agua disponible (BAD, 2001), principalmente para el cultivo de algodón, que consume casi 20.000 litros de agua por cada kilo de algodón cosechado. Poca de esa agua alguna vez llega al mar de Aral; peor aun, hay momentos del año en que el Amu Darya está seco mucho antes de alcanzar el delta (Johnson et al. 2001), un fenómeno que hubiese resultado inconcebible en la primera mitad del siglo pasado. El resultado es que actualmente el mar de Aral se ha reducido a sólo el 15% de su volumen original y ahora es no uno sino tres cuerpos de agua separados por tierras desérticas (Spor y Krutov, 2004). La muerte del Aral ha dejado al descubierto más de 40.000 km² del antiguo lecho marino (Waltham y Sholji, 2001). Esa superficie, mayor que la de Suiza, está ocupada por planicies

de barro seco saturadas de sal y contaminadas por residuos de plaguicidas (Whish-Wilson, 2002). Al quedar expuestas a los fuertes vientos del norte, se originan tormentas de polvo que transportan anualmente más de 40 millones de toneladas de partículas cargadas de sal por toda la región (Médicos sin Fronteras, 2003).

Las aguas remanentes del Aral son ahora mucho más salinas que antes; con 67 gramos de sal por litro de agua, el mar es el doble de salado que los océanos. Las especies nativas de peces de agua salada han sido erradicadas por el rápido cambio. En su momento el Aral fue la fuente de pescado de la región, hoy las estériles aguas del Aral se hallan en el centro de 400.000 km² de «zona ekologicheskogo bedstviya» es decir «zona de desastre ecológico». Ya a comienzos de la década de 1980 las especies nativas comenzaron a desaparecer. Pocos años después, la pesca comercial dejó de ser viable. Hoy día, no se halla en sus aguas ninguna de las especies nativas (Sievers, 2002). Algunos peces sobreviven en los lagos deltaicos; otros, como el salmón del Aral, se dan por extinguidos (World Lakes Network, 2003). La flota pesquera del Aral, que en su época dorada descargaba 40.000 toneladas de pescado cada año (Waltham y Sholji, 2001) y alimentaba a la mayor planta procesadora de pescado de la Unión Soviética, ahora se oxida sobre el antiguo lecho del mar.

Para el pueblo qaraqalpaq, el colapso de la industria pesquera, que en su momento aportaba el 50% del ingreso nacional, ha significado pobreza y desempleo. Un informe reciente del Banco Asiático de Desarrollo indica que entre el 50 y el 70% de los qaraqalpaqs son pobres y que la tasa de desempleo llega al 70% (BAD, 2001).

La pobreza, sumada a la exposición a productos químicos tóxicos, ha tenido efectos nocivos sobre el bienestar de la población qaraqalpaq. La lista de perjuicios sanitarios que hoy afectan a la región es más que desalentadora:

- Dos tercios de los qaraqalpaqs sufren actualmente de mala salud (Waltham y Sholji, 2001).
- Los elevados niveles de sal transportados por el Amu Darya han dejado al 40% de la población sin acceso a agua potable (Waltham y Sholji, 2001), y el consumo

regular de agua salobre puede ser responsable de la elevada incidencia de hipertensión y enfermedades de los riñones y el tracto urinario (MSF, 2003).

- Incapacitados para cultivar hortalizas en suelos salinos y demasiado pobres para comprar alimentos en los mercados, los pobladores padecen niveles elevados de malnutrición (MSF, 2003). La anemia es endémica y afecta al 99% de las embarazadas (MSF, 2003), factor que favorece las complicaciones durante el embarazo y el parto, incluidas las hemorragias; en los bebés, la anemia supone mayores riesgos para los sistemas inmunitarios y la posibilidad de daños cerebrales (Ataniyazova, 2003).
- Los qaraqalpaqs sufren los embates de las tormentas de polvo tóxico que asolan la región y el 50% de todos los fallecimientos registrados son de origen respiratorio (O Hara, 2000). Datos recientes confirman un aumento de

la incidencia de dolencias vinculadas a la obstrucción de los pulmones y asma bronquial en la zona del Aral, especialmente en Qaraqalpaqstán (UNECE, 2001).

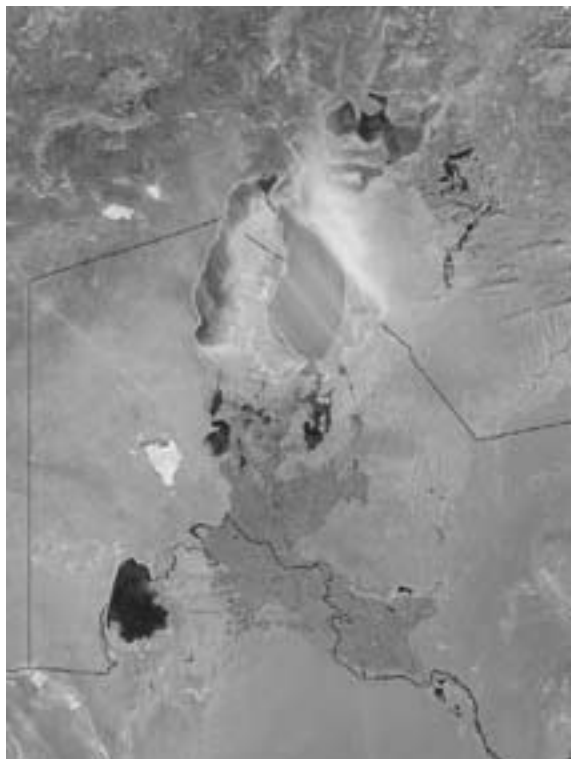
- Niveles significativos de organoclorados (incluyendo PCB, dioxinas y DDT) han sido hallados en muestras de carne vacuna, pescado, huevos, leche, patatas y arroz (Muntean et al. 2003) y en el agua potable, la sangre humana y la leche materna (Hooper K et al. 1998); hallazgos estos que se corresponden con un marcado incremento en la incidencia de trastornos inmunológicos, enfermedades de los riñones, alergias, patologías hepáticas y del aparato reproductivo (MSF, 2003).
- La infertilidad y los abortos son frecuentes y uno de cada veinte bebés nace con alguna anomalía (Ataniyazova, 2003), una cifra cinco veces mayor que la de los países europeos.

ÉXODO

Enfrentados a la pérdida de sus medios de subsistencia, la pobreza y la mala salud, amplios sectores de la comunidad qaraqalpaq han respondido con el desplazamiento. Un estudio de 1999 confirmaba que casi la mitad de la población mostraba síntomas asociados con el estrés emocional; los efectos de presenciar la completa destrucción de su entorno natural y de sus medios de subsistencia en menos de una generación. El mismo estudio halló que el 48,8% de los encuestados deseaba abandonar sus hogares debido a la degradación ambiental y que la mitad de esos querían emigrar fuera de la región del mar de Aral (Crighton et al. 1999).

Actualmente, esos refugiados ambientales están abandonando su territorio étnico en busca de una mayor prosperidad en algún otro sitio. Hay estimaciones que sugieren que antes de 1996 más de 100.000 personas abandonaron la región (ACNUR, 1996) y desde entonces la emigración ha continuado a un ritmo de aproximadamente 4.000 personas por año (MSF, 2003).

Quienes abandonan la región son frecuentemente los más capacitados, los que disfrutaban de mayores oportunida-



Tormenta de arena sobre el mar de Aral. © Jeff Schmaltz, MODIS Land Rapid.

des y con la fortaleza para adaptarse a nuevos estilos de vida. Tal cosa representa para la región una pérdida considerable de recursos humanos, que puede comprometer aun más el futuro de la población que permanece, ya que cada vez cuenta con menos capacidades y potencialidades para remediar o, al menos, adaptarse a los problemas. La magnitud de la emigración de los qaraqalpaqs es una confirmación de la severa degradación ambiental provocada en la región. El delta del Aral, en una época tan rico que atraía a miles de personas hacia sus costas, es ahora tan yermo que rechaza a los humanos hacia el desierto.

REFERENCIAS

- BAD (2001). Propuesta de asistencia financiera a la República de Uzbekistán para apoyar la reducción de la pobreza en Qaraqalpaqstán.
- ATANIYAZOVA, Dr O (2003), Health and Ecological Consequences of the Aral Sea Crisis; ponencia para el 3rd World Water Forum, Kyoto.
- BUKHARBAEVA G. (ex-corresponsal del IWPR-Institute for War and Peace Reporting en Tashkent) (2005), comentario personal para EJE.
- CRIGHTON EJ, VAN DER MEER JBW, YAGODIN VN, ELLIOTT S. (1999), Impact of an Environmental Disaster on Psychosocial Health and Well-being in Karakalpakstan. Tashkent, Uzbekistan: Médecins Sans Frontières Aral Sea Area Program.
- HOOPER K, *et al.* (1998), Analysis of breastmilk to assess exposure to chlorinated contaminants in Kazakhstan: High levels of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) in agricultural villages of Southern Kazakhstan. *Environmental Health Perspectives*. 106: 797-806
- ILKHAMOV (ed) (2002). Ethnic Atlas of Uzbekistan, Open Society Institute and LIA R. Elinia, Tashkent-Moscow, p. 116-125
- JOHNSON N., REVENGA C., ECHEVERRIA J. (2001), Managing Water for People and Nature, *Science*, Vol 292, Issue 5519, 1071-1072, 11 Mayo.
- Médecins Sans Frontières (MSF) (2003), Karakalpakstan: A Population in Danger.
- MUNTEAN, N. (2003), *et al.*, Assessment of Dietary Exposure to Some Persistent Organic Pollutants in the Republic of Karakalpakstan of Uzbekistan, *Environmental Health Perspectives*, 111: 10.
- New Scientist (2004), Russia reviving massive water diversion plan.
- O'HARA S. L. (2000), Lessons from the past: water management in Central Asia. *Water Policy* 2: 365-384.
- SIEVERS, E. W. (2002), Water, Conflict, and Regional Security in Central Asia, *Conflict and Water in Central Asia*.
- SPOOR M. y KRUTOV A. (2004), The «Power of Water» in a Divided Central Asia. In Mehdi parvizi Aminéh & Henk Houweling (eds.), *Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security and Development*, (Leiden, Boston: Brill Academic Publishers.
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2001), *Environmental Performance Review of Uzbekistan*, Geneva.
- United Nations Environment Programme (UNEP) (1991), Diagnostic study for the development of an action plan for Aral Sea. In: UNEP expert working group for the project assistance in the development of an action plan for the conservation of the Aral Sea. Tashkent: UNEP.
- United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR) (1996), CIS Conference on Refugees and Migrants, 30-31 mayo, Geneva, Switzerland.
- WALTHAM y SHOLJI (2001), The demise of the Aral Sea – an environmental disaster, *Geology Today* 17.
- WHISH- WILSON, P. (2002), The Aral Sea environmental crisis. *Journal of Rural and Remote Environmental Health* 1: 29-34.
- World Lakes Network (2003), *The Aral Sea: Management Experience and Lessons Learned*, junio.

Desplazados por el tsunami en Asia

Michael Renner*

El tsunami de diciembre 2004 fue uno de los desastres naturales más letales en la historia reciente. Cerca de 230.000 personas murieron, y más de 2,4 millones de una docena de países fueron afectadas (Telford et al, 2006). La provincia de Aceh en Indonesia, la más cercana al terremoto que inició el tsunami, fue con mucho la más afectada. Sri Lanka también sufrió impactos muy severos (véase tabla 1).

Aunque tanto el terremoto como el tsunami fueron fenómenos naturales, la acción humana en el medio ambiente fue clave en el impacto generado. En amplias zonas de la costa afectada por el tsunami, la deforestación de los manglares y la degradación de los bancos de corales situados frente a la costa dejaron en una situación de vulnerabilidad a la población. Por ejemplo, los manglares alrededor de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, habían sido remplazados por instalaciones cameroneras (UNEP, 2005). Un estudio en Sri Lanka mostró que también allí los daños en la zona costera fueron mucho mayores en las zonas donde se habían eliminado o perjudicado a los manglares. En las zonas con bosques de manglares más intactas los árboles permanecieron en pie, incluso en las zonas más afectadas por las olas (Dahdouh-Guebas, et al, 2005).

En Aceh, 500.000 personas se quedaron sin casa debido al tsunami, que devastó la zona costera y eliminó ciudades



Pueblo para supervivientes del tsunami que fueron desplazados lejos de la costa en Sri Lanka. El municipio fue organizado por Sarvodaya y se llama Lagoswatte Eco-village en Kalutara, Sri Lanka. © Zoe Chafe.

y pueblos enteros. Aceh ya estaba sufriendo de los impactos producidos por décadas de guerra civil que enfrentaron a la provincia contra el gobierno central en Jakarta (véase tabla 2). Aunque el tsunami ayudó a conseguir un acuerdo de paz, probablemente aún pasarán años antes que Aceh sea capaz de completar la reconstrucción y reintegre a las poblaciones desplazadas.

La reconstrucción post-tsunami se ha encontrado con numerosos problemas, incluyendo disputas no resueltas sobre tierras y propiedades. Dos años después del tsunami se han construido cerca de 57.000 casas – aproximadamente la mitad de las necesarias. Muchas personas continúan en barracas temporales o tiendas de campaña, que sufren de sobrepoblación, falta de privacidad y en bastantes ocasiones carencia de servicios sanitarios básicos como baños o agua corriente (Mydans, 2006). En los próximos dos años está

* Worldwatch Institute (mrenner@optonline.net).

prevista la construcción de entre 50.000 y 70.000 casas, y aproximadamente unas 80.000 más serán reparadas para finales de 2009 (Stechert, 2007).

Se han dado numerosos casos en los que constructores inescrupulosos han construido casas y escuelas defectuosas o frágiles. En vez de realizar unos fundamentos adecuados han apoyado las casas en pilares de madera y piedra. Las vigas utilizadas eran de calidad inferior al standard, al igual que los ladrillos. En marzo de 2006 unas 10.000 casas se consideraron de tan mala calidad que requirieron reparaciones importantes (The Age, 2006).



© Zoe Chafe

Tabla 1
Impactos demográficos relacionados con el Tsunami en algunos países

	Indonesia (Aceh)	Sri Lanka	India	Tailandia
Población (millones)	215	19	1.064	62
Población muerta o desaparecida	167.540	35.322	16.269	8.212
Población muerta o desaparecida como % de la población total	0,08	0,18	0,002	0,01
Población muerta en la provincial más afectada (%)	2,3	2,7	No disponible	1,5

Fuente: Telford et al, 2006

Tabla 2
Impactos del Tsunami de 2004 y de la guerra civil en Aceh

Impactos	Número de personas o casas afectadas
Tsunami	
Muertos o desaparecidos	167.540
Desplazados	500.000
Casas dañadas y destrozadas	116.880
Guerra Civil	
Muertos o desaparecidos	13.000-50.000
Desplazados en 1992-2002	1,4 millones
Desplazados en 2003-04	120.000-150.000

Fuente: Renner y Chafe, 2007.

En la carrera para conseguir una reconstrucción rápida en numerosos casos se ha prestado una atención insuficiente a los temas sanitarios. Esta situación debe ser atendida urgentemente para evitar problemas ambientales y sanitarios de gran-escala. De hecho, muchas casas continúan vacías porque la gente se niega a habitarlas (Stechert, 2007).

La experiencia del post-tsunami en Indonesia muestra el riesgo de una distribución de ayuda que beneficie desigualmente a la población y aumente las disparidades entre los grupos poblacionales. Las 120.000 personas de Aceh que perdieron sus casas debido al conflicto armado han recibido poca atención en comparación con las comunidades afectadas por el tsunami (Hedman, 2006). Los sobrevivientes del tsunami recibieron entre 5.000 y 6.000 dólares para la reconstrucción de sus casas, mientras que los sobrevivientes del conflicto recibieron sólo unos 3,500. (WB/DSF, 2007). Actualmente hay algunas medidas para tratar de corregir estos desequilibrios a través del Programa de Desarrollo de Kecamatan que distribuirá unos 60 millones de dólares en dos años (World Bank, 2006b). En marzo de 2007, el 30 por ciento de las poblaciones afectadas por el conflicto ya habían recibido los recursos que les correspondía.

El tsunami impulsó una de las reacciones de ayuda humanitaria más generosas de la historia. Pero a pesar de todo una parte importante de la población de Aceh continua en la pobreza. El conflicto elevó el porcentaje de pobreza de

un 10% en 1996 a un 28,5% en 2004. Tras el tsunami, más del 35% de la población vivía en la pobreza (World Bank, 2006a; Sukma, 2004). Revitalizar la economía será crítico para superar los numerosos retos de Aceh.

En Sri Lanka, desde el tsunami se han reconstruido un 51% de las casas necesarias. Pero este valor esconde importantes diferencias geográficas. Al igual que Aceh, Sri Lanka ha sufrido el doble golpe de un desastre natural y una guerra civil (véase tabla 3). A pesar de que en el año 2002 se acordó un alto al fuego, las disputas sobre la distribución de la ayuda entre el gobierno en Colombo y la organización rebelde Tamil Tiger ha llevado en la práctica (que no formalmente) a un rebrote del conflicto armado.

En el norte del país, controlado por los rebeldes Tamil, la escalada en el conflicto ha impedido buena parte de la reconstrucción. En diciembre de 2006, se habían construido menos del 15% de los edificios necesarios. En la costa este, afectada también por las hostilidades, se habían construido aproximadamente un 25% de las viviendas. (GOSL, 2006)

Aunque 150.000 familias de Sri Lanka perdieron su entorno de vida tras el tsunami, cerca de un 75% han recuperado su fuente principal de ingresos. No obstante, la regeneración de los entornos en el norte y en el este ha sido impedida por la reaparición del conflicto violento. (GOSL, 2006)

Tabla 3
Impactos del tsunami de 2004 y de la guerra civil en Sri Lanka

Impactos	Número de personas o casas afectadas
Tsunami	
Muertos o desaparecidos	35.322
Desplazados	516.150
Casas destruidas o dañadas	105.000
Guerra Civil	
Muertos o desaparecidos	86.000
Desplazados, en el momento máximo	800.000
Desplazados, marzo 2007	465.000
Casas dañadas y destruidas	326.000

Fuente: Renner y Chafe, 2007.



© Zoe Chafe

Aunque el sur ha obtenido resultados comparativamente buenos, los residentes, no obstante, afirman que la comunidad internacional se ha focalizado excesivamente en la situación apremiante de los ciudadanos Tameses aislados por el conflicto armado. Los habitantes en el norte y en el este, donde la construcción ha sido lenta debido a dificultades logísticas y a problemas de seguridad, de manera reiterada han denunciado que sienten que el sur ha recibido

una parte de ayuda superior a la que les corresponde en una distribución justa. (Renner y Chafe, 2007)

Se han dado numerosas inequidades tanto en la cantidad como en la ayuda suministrada. Entre las comunidades afectadas por el tsunami, la mayoría Sinhala del sur y del oeste obtuvo mejores resultados que el norte y el este del país. Igualmente, en general las áreas afectadas por el tsunami consiguieron mejores resultados que las comunidades afectadas por el conflicto (véase tabla 4). Además de por el conflicto anteriormente explicado esto se explica porque el sur y el oeste tienen una representación política y una influencia mayor en Colombo (Grewal, 2006).

En el sur, se han dado varios programas microfinancieros exitosos que han ayudado a las familias a recuperar su capacidad financiera. Por ejemplo la organización Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), ha facilitado miles de pequeños préstamos de aproximadamente 100\$. Estos pequeños préstamos se han utilizado para apoyar una gran variedad de negocios, la mayoría de ellos relacionados con el procesamiento de la fibra de coco, manufacturas, alimentación, y comercio. (Renner y Chafe, 2007)

Tabla 4
Ayuda, en abril 2006, a los afectados por el tsunami y el conflicto en Sri Lanka

	Afectados por el tsunami	Afectados por el conflicto
Comida (Valor nutricional estimado)	1.881 kilocalorías por persona y día	1.000 kilocalorías por persona y día
Refugio (Valor estimado)	Entre 300 y 600 \$ por refugio, para las 60.000 familias que lo requerían	Entre 50 y 200 \$ por refugio; para el 60% de las 17.852 familias que se protegieron en ellos
Vivienda (Costes estimados)	Entre 3.000–11.000 \$ por casa; para las 105.000 familias que lo necesitaron	2.500 \$ por casa; para 47.000 familias, un 14% de las que lo necesitaron
Dinero en efectivo, Subvenciones/Préstamos	Entre 100–200 \$, más una subvención de 50 \$ por familia por reubicación; para las 405.000 familias que lo requieren	250 \$ de subvención por reubicación por familia; para 105.000 familias, o una tercera parte de las que lo necesitan

Fuente: Grewal, 2006.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) administra también otra iniciativa efectiva. Bajo el acrónimo «Strong Places» la iniciativa se centra en apoyar a organizaciones comunitarias locales en un momento en el que la mayor parte de la ayuda tiende a fluir hacia un grupo selecto de grandes ONG internacionales (UNDP, sin fecha). El UNDP apoya a los grupos locales mediante financiación para iniciar proyectos con la convicción que las organizaciones de base locales pueden jugar un rol básico en el actual proceso de recuperación y la prevención de posibles desastres futuros.

MÁS INFORMACIÓN

- UN Office of the Special Envoy for Tsunami Recovery: www.tsunamispecialenvoy.org/indicators.asp.
- Coalición de evaluación del tsunami: www.tsunamispecialenvoy.org/indicators.asp.
- Worldwatch Institute Disasters and Peacemaking Project: www.worldwatch.org/features/disasters.

REFERENCIAS

- DAHDOUH-GUEBAS, F., et al. (2005), «How Effective Were Mangroves as a Defence Against the Recent Tsunami?» *Current Biology*, v. 15, n. 12, pp. 443–47.
- Government of Sri Lanka (GOSL) and Development Partners (2006), *Post-Tsunami Recovery and Reconstruction*, Colombo.
- GREWAL, M. K (2006), *Approaches to Equity in Post-Tsunami Assistance. Sri Lanka: A Case Study*, Office of the UN Special Envoy for Tsunami Recovery, Nueva York.
- HEDMAN, E. (2006), «The Right to Return: IDPs in Aceh», *Forced Migration Review*, mayo.

- MYDANS, S. (2006), «Tsunami-Tossed City's Survivors Struggle to Carry On», *New York Times*, 26 diciembre.
- RENNER, M. y CHAFE, Z. (2007), *Beyond Disasters: Creating Opportunities for Peace*, Worldwatch Institute, Washington, DC.
- STECHELT, A. (2007), «UNICEF Supports Improved Sanitation in the Rebuilt Homes of Aceh and Nias», 9 May, UNICEF Web site, www.unicef.org/infobycountry/indonesia_39604.html.
- SUKMA, R. (2004), *Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons*, East-West Center, Washington, DC.
- TELFORD, J., COSGRAVE, J. and HOUGHTON, R. (2006), *Joint Evaluation of the International Response to the Indian Ocean Tsunami: Synthesis Report*, Tsunami Evaluation Coalition, Londres.
- The Age (2006), «Aceh Aid Homes Unfit», Melbourne, 30 March.
- United Nations Development Programme (UNDP), «Sustaining Tsunami Recovery by Organisations Networking at the Grassroots level through Promoting Local Accountability and Capacity Enhancement Systems (STRONG PLACES)», undated, at mdg-guide.undp.org/files/Module%203.4/STRONG_PLACE_Project_Sri_Lanka.doc.
- World Bank (2006a), «Aceh Public Expenditure Analysis. Spending for Reconstruction and Poverty Reduction», Washington, DC: 2006, at siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1152870963030/APEA.pdf.
- World Bank (2006b), «Brief—The Aceh Peace Agreement: How Far Have We Come?» (Washington, DC: December 2006), at web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21150070~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:226309,00.html.
- World Bank/Decentralization Support Facility (WB/DSF) (2007), «Aceh Conflict Monitoring Update», Jakarta, 2007.

Viaje a Orissa

Joan Martínez-Alier y Leah Temper*

De camino hacia la Zona Industrial Kalinga Nagar, a la que nos dirigíamos el 2 de enero del 2007 para conmemorar el primer aniversario del asesinato de algunos miembros de grupos adivasis (tribales) durante una protesta contra la acería TATA, íbamos viendo trituradores de piedras alineados a ambos lados de la carretera acabada de pavimentar. Mujeres, niños y hombres movían los martillos bajo el cálido sol rompiendo piedras en trozos más pequeños. El salario para este tipo de trabajo es de 40-60 rupias por día,¹ pero es un trabajo disponible para aquellos que han sido expulsados de su tierra para dejar espacio a las industrias. Hasta ahora se han firmado alrededor de 50 MoUs² para construir acerías en la zona industrial, algunos de ellos con gigantes industriales como la sur-coreana POSCO.

El contexto del encuentro con los adivasis al que asistimos se inició en enero de 2006, cuando las excavadoras de TATA empezaron a hacer movimientos de tierras bajo los arrozales de la comunidad, y los habitantes locales fueron a encontrarlos con arcos y hachas. El resultado fue un enfrentamiento el 2 de enero de 2006, en el que murieron 12 adivasis y un policía. Otra adivasi murió más tarde. Los líderes empezaron entonces un corte de la carretera que va desde Daitari a Paradip, que atraviesa su territorio, a una hora y media de distancia en coche de la capital del Estado, Bhubaneswar. Este *rasta roko*³ ha durado más de un año. Sólo una de las 13 familias ha aceptado la compensación (10 lakh Rs⁴) ofrecida por el gobierno, que es cinco veces mayor que la habitual en casos de muerte laboral o en accidente de tráfico.

El aniversario de Katalinganagar es importante porque no se trata de un incidente aislado, sino tan sólo el último de un conjunto de conflictos abiertos entre dos bandos: aquellos que promueven la industrialización extractiva,



Protesta en el primer aniversario de las muertes en Kalinganagar, 2 de enero 2007. © Leah Temper.

liderado por el gobierno; y quienes se oponen a ella. El 14 de marzo de 2007 en Bengala occidental, en Nandigram, 14 personas murieron cuando la policía quiso acabar con las protestas contra una zona especial industrial para la industria química. En Maikanch, en Orissa, el 16 de diciembre del 2000, tres adivasis murieron por el ataque de la policía cuando protestaban contra los planes de minería de bauxi-

* leah_temper@yahoo.com

¹ Entre 0,60 céntimos y 1 euro diario.

² Memorando de entendimiento (Memorandum of understanding). Es un documento legal que describe un acuerdo bilateral entre partes, expresando las intenciones de las partes e indicando una línea de acción común, aunque no significa un compromiso legal. (N.d.T.)

³ Corte de carreteras. (N.d.T.)

⁴ El lakh es una unidad que se utiliza en la India que equivale a 100.000 unidades (10 lakh Rs son, por tanto, un millón de rupias, un poco más de 17.000 Euros). (N.d.T.)

ta de ALCAN (la compañía canadiense) y UTKAL. Estos lugares se convierten, como Kalinga Nagar, en lugares de manifestación en los «días de los mártires».

NO HAY DESMATERIALIZACIÓN

Con el crecimiento de la economía de la India, el flujo de materiales que entra y sale de la economía crecerá inevitablemente. Los ritmos de crecimiento son del orden del 7 por ciento anual, de forma que la cantidad de materiales extraídos se dobla cada diez años. La industria del automóvil crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Cuando los materiales entran en la economía, sale dióxido de carbono. En la India esto pasa en pequeñas cantidades por capita y año, comparado con los países ricos. La India importa petróleo y gas, y estas importaciones crecerán. Pero se basa todavía bastante en sus propios recursos de carbón, cuyo ritmo de extracción está aumentando muy rápidamente. La energía eléctrica proviene también de embalses que desplazan a mucha gente. También se ha incrementado mucho el uso de materiales para la construcción de viviendas o de infraestructuras, como la arena y piedras. Hay una gran demanda de minerales metálicos, tanto para consumo interno como para exportar; la bauxita es uno de los principales. Este es el contexto de los enfrentamientos sobre el uso del territorio en Orissa y otros estados, como Jarkhand (minería de uranio) o ahora también Andhra Pradesh (minería de bauxita), además de las minas de hierro y de carbón en muchos otros lugares. La economía mundial no se desmaterializa en términos absolutos, ni tampoco en relación al crecimiento del PIB. Las fronteras de extracción de materias primas para abastecer el consumo material de las clases urbanas están llegando lejos, hasta las áreas Adivasi, mientras que la apropiación de tierras agrícolas para construir grandes polígonos industriales provoca conflictos y muertes (como en Singur y en Nandigram en Bengala Occidental, en el 2006 y 2007).

Cuando se trata de minería, los requerimientos de tierra para las minas a cielo abierto, para depositar los residuos (como por ejemplo los fangos rojos de la bauxita) y para las infraestructuras como carreteras y ferrocarriles son todavía

mayores que en el caso de polígonos industriales. La India es un país con mucha población, con una densidad similar a Alemania, Italia y los Países Bajos, pero que no puede permitirse importar los metales que necesita y los combustibles fósiles del extranjero, como lo han ido haciendo cada vez más Europa y Japón. Al contrario, la India se ve a si misma como un país exportador de aluminio y hierro o acero. Así, para conseguir la industrialización al estilo occidental, la India se ve obligada a desposeer su propia gente. El precio del desarrollo en la India ha caído desproporcionadamente sobre las castas más bajas y las comunidades tribales. Los Adivasi son el 8 por ciento de los habitantes del país, pero el 40 por ciento de la población desplazada.

El choque entre los planes indios de un crecimiento basado en la minería y los de las comunidades tribales no es tan palpable en ningún otro sitio como lo es en Orissa. El Estado es uno de los más pobres de la India, aunque por un giro cruel del destino sus recursos minerales son los más ricos del país. Orissa tiene aproximadamente el 97% de la cromita, el 71% de la bauxita, el 33 % del hierro y el 32% del manganeso presente en la India. El año pasado, con la subida de los precios de las materias primas, las empresas internacionales estuvieron «salivando» para tomar parte de este botín mineral, gran parte del cual está situado bajo el territorio tribal.

Pasando unos días cerca de la realidad de la industria minera de la bauxita y la industria pesada de Orissa, uno se da cuenta de la estupidez de la economía neo-clásica, que se basa en la idea de «compensar las externalidades». La minería y la industria ciertamente producen «externalidades» —es decir, daños a la gente y al medio ambiente que no se tienen en cuenta en los costes de las empresas. Para recibir las compensaciones la gente tiene que tener un título de propiedad de su tierra y suficiente poder de negociación; así pueden pedir compensaciones equivalentes al bienestar que han perdido. Las empresas pagarían estas compensaciones de sus beneficios. Hasta aquí, todo bien. Pero la situación sobre el terreno es muy distinta.

Los conflictos ambientales son luchas por los títulos de propiedad de los recursos. En la práctica los títulos no están bien establecidos. Más allá de los títulos legales a la



En Kalinganar, mitin con asistentes de diversos lugares de la India contra los desalojos, 2 enero de 2007. © Leah Temper.

tierra privada o comunal, los derechos de propiedad sobre el medio ambiente son controvertidos. Las reivindicaciones indígenas por el derecho al agua limpia y el aire limpio, y el acceso a los boques son negados. Bajo «Quinta Lista» de la Constitución india,⁵ las áreas tribales no se pueden vender a inversores privados, pero el gobierno puede alegar necesidades de interés público. Lo que sucede en la práctica es que el gobierno expropia las tierras para un «interés público», pagando mucho menos del precio de coste, y las revende a las empresas con un pequeño margen de beneficios, pero todavía por debajo del precio de coste. Por ejemplo, en el caso de Kalinganagar, según la organización de derechos humanos People's Union for Civil Liberties [Unión del Pueblo por las Libertades Civiles], la agencia de desarrollo de infraestructuras industriales de Orissa (Industrial Infrastructure Development Corporation of Orissa [IDCO]⁶) compró terrenos a los propietarios a un precio de 15.000 a 30.000 rupias por acre, añadiendo después una cantidad ex-gratia de 25.000 rupias. Posteriormente revendió el terreno a TATA por 3,5 lakhs rupias por acre. El precio de mercado estaba alrededor de 5 lakhs rupias por acre.

Mientras, el gobierno estatal local también aporta la infraestructura, concede permisos administrativos, se encarga de que las Evaluaciones de Impacto Ambiental no compliquen las cosas, acepta regalías bajas, y no pide

compensaciones por las externalidades ni impone tampoco «impuestos al agotamiento del capital natural». La urgencia de firmar MoUs parece inexplicable a primera vista. Aún más cuando se tiene en cuenta que Orissa recibe una regalía muy pequeña comparada con los precios de mercado por el mineral extraído de sus minas. Así pues, ¿por qué el Estado negocia en nombre de las empresas en lugar de proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos?

LENGUAJES DE VALORACIÓN

Se comenta a menudo en Orissa que el primer ministro del gobierno del estado no habla la lengua local del estado, Oriya, y mucho menos todavía las lenguas de las comunidades tribales. Sin embargo, incluso si lo hiciera, habría todavía grandes diferencias entre los lenguajes utilizados por las empresas, el gobierno del Estado, los intermediarios y los adivasis mismos. «Lugar sagrado», por ejemplo, como en la montaña Niyamgiri amenazada por la minería de bauxita por Vedanta, ese lenguaje de sacralidad es el lenguaje de los adivasis, los antropólogos y algunas ONG, mientras que el Análisis Coste-Beneficio es el lenguaje de las empresas, así como de la Corte Suprema de la India.

Los bancos gubernamentales y de desarrollo calculan los costes y beneficios de los proyectos industriales sólo en términos monetarios, pero la gente desplazada vive y ha vivido de los ecosistemas que los envuelven durante generaciones. Los aparceros u otros campesinos forzados a irse de su tierra de las Zonas Económicas Especiales o los adivasis que pierden sus bosques pueden ganar 60 rupias al día como trituradores de piedra, mientras que antes ganaban 45 o vivían en parte fuera del mercado. Un ministro podría

⁵ Conocido como «Fifth Schedule». Es la parte de la Constitución india que trata de la administración y control de determinadas áreas donde hay tribus establecidas cuya lista («schedule») está dada. Cubre áreas tribales de 9 estados de la India: Andhra Pradesh, Jharkhand, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Orissa y Rajasthan. (Fuente: http://www.mmpindia.org/Fifth_Schedule.htm; web de la organización Mines, minerals and people) (N.d.T.)

⁶ <http://www.idcoindia.com/>.

calcular que por eso son más ricos que antes, el PIB aumenta y todo va bien. Pero esta simple aritmética desatiende las ayudas de la naturaleza que habían obtenido previamente —incluyendo agua limpia para beber, leña para combustible, hierba, frutos secos y frutas de los árboles, y tierra y agua para cultivar arroz— que no podrán obtener ya en el nuevo paisaje modificado de Orissa.

Los economistas han calculado que los productos recogidos en las áreas rurales de la India fuera del mercado, normalmente en tierras de propiedad comunal, llegarían a ser un 4 o un 5% del PIB si se convirtieran a valor monetario. Pero estos valores no se incluyen en los análisis económicos, ni tampoco el valor de los ríos y corrientes de agua ni la pérdida de biodiversidad debida a los proyectos de minería. Tal como argumenta el PSSP (Grupo de Protección de Recursos Naturales, con base en Kashipur), en 25 o 30 años, toda la bauxita se habrá extraído de Bapla Mali y Niyamgiri, pero la gente tribal todavía estará allí, encerrada en sus colonias de casitas que les han dado y que ya están cayéndose al cabo de tres años, sin tierra, agua o formas de subsistencia.

Algunas ONG que se oponen a los proyectos, como el Grupo de Protección Ambiental (freewebs.com/epgorissa/kashipur.htm) en el caso de Niyamgiri, a veces intentan ilustrar estos costos sociales y ambientales elaborando análisis coste-beneficio alternativos que tengan en cuenta los servicios ambientales aportados por los bosques y los corrientes de agua que se perderán, la pérdida de biodiversidad, las externalidades del lodo rojo y las balsas de ceniza que se generaran, la pérdida de formas de subsistencia y los costes sociales del desalojo, y los traducen en términos monetarios —la única lengua que les parece que entienden los gobiernos y las empresas.

Todo esto nos lleva a las luchas de poder por los lenguajes de valoración que son impuestas por quienes tienen el poder y tienen éxito en este proceso de «cerramiento de los comunes». ⁷ ¿Son los lenguajes de los derechos territoriales, los derechos humanos, la subsistencia, lo sagrado, verdaderamente conmensurables con los valores monetarios del crecimiento económico (en términos de PIB)? No lo son. Así, la cuestión no es tanto llegar a un equilibrio entre el medio ambiente, las necesidades humanas, y el progreso económico expresados en las mismas unidades (una vez las «externalidades» se han incluido en las cuentas). Realmente no hay ninguna unidad de medida común. La cuestión es quién tiene el derecho, o más exactamente quién tiene el poder de imponer el lenguaje económico de valoración pasando por encima de los otros. En este sentido, la economistas y quienes emplean su lenguaje, hasta cuando se quejan con la mejor intención de que las «externalidades» no se incluyan en las cuentas económicas como debería hacerse, se convierten en cómplices de la tarea de privar a los pobres de sus propias voces. La situación también demuestra que sólo se valora la opinión de científicos expertos, mientras que el conocimiento y la perspectiva de las poblaciones indígenas queda descartada. En el caso de los informes a la Corte Suprema sobre la mina de Niyamgiri sólo dos comités científicos podrán presentar pruebas, mientras que los otros expertos locales propuestos han sido silenciados. Pero los que habitan la región tienen su propia forma de entender la relación entre las montañas de bauxita y la tierra, tal como han explicado Feliz Padel y Samarencdra Das en sus escritos y en el extraordinario documental «Earthworm / Company Man».

Hay una gran asimetría en recursos y poder entre los que se oponen a los proyectos que amenazan subsistencias humanas, culturas locales, y el medio ambiente, y los que sacrifican estos valores en el altar de una industrialización pasada de moda y un crecimiento económico basado en la minería. Viendo las fenomenales fuerzas desplegadas contra ellos, a uno se le plantea la inmensidad de la lucha y los retos a los que debe hacer frente la gente del ecosistema, intentando parar el *juggernaut*⁸ de la minería que les desaloja y les aplasta.

⁷ Se refiere a «enclosure of the commons». (N.d.T.)

⁸ Se refiere a «una fuerza irrefrenable que en su avance aplasta o destruye todo lo que se interponga en su camino». (N.d.T.)

Salud ambiental en Israel

Avi Blau*

compañía de seguros, para estudiar las relaciones entre los niveles sanguíneos de ciertos contaminantes y el incremento en la incidencia de diabetes.

CUÁL ES EL PROBLEMA

En los últimos años se han dado episodios de mortalidad y morbilidad asociados a fenómenos de contaminación ambiental. No obstante, ni estos incidentes, ni aún menos los efectos de las exposiciones crónicas (exposiciones a contaminantes de larga duración a dosis bajas), han conseguido atraer la atención pública.

Los casos más preocupantes son la existencia de clusters de morbilidad cerca de industrias contaminantes. Los datos son muy escasos, pero existen indicios de niveles de cáncer más altos en el norte de Israel, así como niveles superiores de mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares Ginsberg et al., 2003), especialmente en la zona de Haifa (la tercera ciudad más importante de Israel, donde están ubicadas varias instalaciones industriales relacionadas con la energía). Los habitantes del norte de Israel tienen uno de los niveles más altos del mundo de Linfoma No Hodgkin (NHL)¹ —una enfermedad que ha sido asociada a la contaminación ambiental. En el sur, un estudio del Ministerio de Salud ha encontrado una morbilidad alta en los habitantes cercanos a la instalación de tratamiento de residuos peligrosos de Ramat Hovav.²

El hecho de que tanto los medios de comunicación como el público general respondan pasivamente a esta problemática se puede asociar a diversos factores, uno de los cuales es la falta de involucración por parte de las asociaciones médicas israelíes, especialmente si comparamos su comportamiento con otras organizaciones equivalentes en el exterior³. Aún así existen indicios de cambio. Por ejemplo, se ha iniciado un proceso, impulsado por varios médicos con experiencia y expertos ambientales, apoyados por una

LA FUNCIÓN DE LOS ACTORES CLAVES EN LA SALUD AMBIENTAL

El apoyo a la salud ambiental necesita un marco de cooperación entre numerosos actores. A pesar de que esta temática está incrementando su importancia, aún se encuentra ante numerosas barreras.

* The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership (avi@heschel.org.il)

¹ Los niveles de incidencia estandarizada (ASIR) de NHL en la región de Haifa para el período 1998-99 fueron de 21,48 para hombres y 17,67 para mujeres. En algunas ciudades de la región, como por ejemplo Nesher, el ASIR es mucho mayor que la media regional – 38,1 y 19,05 para hombres y mujeres respectivamente (Israel Cancer Registry Report on Geographical Mapping of Malignant Diseases in Israel. 2001; (en hebreo) <http://www.health.gov.il/Download/pages/Mipui-V6-2.pdf>), mientras que el ASIR más alto a escala regional en el mundo (en América del Norte) en el año 2000 fue 16 para hombres y 10.8 para mujeres (Canadian Cancer Society, véase http://129.33.170.32/ccs/internet/standard/0,3182,3172_367655_194217223_langId-en,00.html#fig10.7). Como se puede observar obviamente la diferencia es clara y preocupante.

² Véase el anuncio ministerial (en hebreo): <http://www.health.gov.il/news/news.asp?ID=231>

³ Véase por ejemplo la declaración de profesionales de la salud referente a la contaminación atmosférica y enfermedades cardiovasculares publicada en un seminario de la Asociación Americana de Salud a finales del año 2004 (Brook et al. 2004. *Circulation*. Vol. 109:2655-2671) en la que se afirmaba, entre otros aspectos, que: «los estudios epidemiológicos muestran un incremento en el riesgo de fenómenos cardiovasculares en relación a la exposición, tanto de corto como de largo plazo, a los niveles de concentración actuales de partículas en suspensión», o a la revisión de publicaciones de la Academia de Pediatría Americana, en la que se afirmaba «la contaminación del aire en la actualidad está reconocida como un problema importante...Nuestro conocimiento científico [...] ha aumentado, y numerosos estudios están encontrando efectos sobre la salud en niveles de contaminación que en su momento se consideraron seguros. (Kim et al. 2004. *Pediatrics*. Vol. 114(6):1699-1707).



Por una parte los movimientos de base no disponen de una coordinación a escala nacional y carecen de estrategia a largo plazo. Permanentemente necesitan datos, conocimientos profesionales y apoyo para la formulación de propuestas alternativas para conseguir una sociedad industrial más sana en Israel.

En el gobierno no existe ningún departamento ni en el Ministerio del Medio Ambiente ni en el Ministerio de Salud relacionado con la Salud Ambiental. Recientemente el Ministerio de Salud ha realizado los primeros pasos en esta temática y ha formado un comité de salud ambiental, como parte de una iniciativa más amplia para incrementar la atención y los esfuerzos hacia una orientación más preventiva del sistema médico. Si bien se trata de una medida positiva, no se puede considerar suficiente.

En el ámbito académico no se ofrece suficiente formación en medicina ambiental, epidemiología ambiental o en factores ambientales generadores de enfermedades, además no hay prácticamente candidatos para realizar doctorados en este ámbito de trabajo. Se están dando los primeros pasos para corregir este aspecto, principalmente apoyados por filántropos privados, pero no se prevé un cambio significativo en los próximos años.

Por otro lado, el sector de la salud en general todavía no reconoce que los aspectos ambientales son parte de sus responsabilidades (o intereses). Existen algunas iniciativas individuales por parte de algunos médicos que desean que se desarrolle una medicina ambiental, pero su voz apenas se escucha.

Actualmente el *Heschel center for environmental learning and leadership* (una ONG) está llevando a cabo un proyecto trans-sectorial para construir puentes entre las comunidades ambientalistas y de la salud, para combinar ambas agendas y crear un marco de interés común. Con esta iniciativa, el centro Heschel se integra en una red mundial de entidades focalizadas en la salud ambiental, que tienen como pilares centrales la iniciativa Collaborative on Health and the Environment⁴ (CHE), de Estados Unidos, y la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente⁵ (HEAL) Europea.

⁴ <http://www.healthandenvironment.org>

⁵ <http://www.env-health.org>

ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

A corto plazo, es necesario establecer un mayor nivel de confianza entre los diversos actores implicados, así como debe crearse una estructura para el intercambio de ideas y la discusión de propuestas. Para ello parece necesario realizar encuentros en los que participen conjuntamente empresas, ONG, servicios de salud, especialistas ambientales y grupos interesados en salud.

A largo plazo los principales actores deben unirse para establecer una visión común sobre cómo puede ser una sociedad más saludable. En general, la capacidad de algunas agencias gubernamentales para monitorear, hacer cumplir y establecer estándares dinámicos y adaptados a los desarrollos globales, debe mejorar incrementando la presión pública y mejorando el conocimiento profesional entre los gerentes de nivel medio-alto de las principales agencias implicadas. Se debe incorporar a esta discusión a la industria y el sector de la salud, para lo que se requiere un importante viraje en su actual perspectiva.

Con el fin de conseguir nuevos objetivos y crear nuevos espacios de el debate público, está claro que los activistas de Salud Ambiental deben ampliar el debate no solo a los «grupos ambientalistas» sino también a otros grupos de interés. Algunos ejemplos pueden ser: grupos de afectados por enfermedades relacionadas con las condiciones ambientales, sindicatos (relacionando la temática con la salud laboral), grupos relacionados con la movilidad (por ejemplo trabajando juntos para reducir el uso de automóviles), con la seguridad infantil (para introducir elementos legislativos para proteger a los niños de los productos químicos peligrosos), y proveedores de salud y compañías aseguradoras (principalmente, aunque no exclusivamente, compañías aseguradoras sanitarias).

REFERENCIAS

GINSBERG G.M., et al (2003), Standardized mortality ratios by regions of residence, Israel, 1987-1994: A tool for public health policy. *Public Health Rev*, 111-131.





África

**Quando un diamante es más peligroso
que un león. Los bosquimanos gana
y gwi del Kalahari**

Ana M. Machado

**Marineros a la mar o pescadores
desplazados**

Ecodesarrollo. Gaia

**Consideraciones ambientales
sobre los desplazamientos humanos
en Liberia**

Gran Wroe-Street

Cuando un diamante es más peligroso que un león

Los bosquimanos gana y gwi del Kalahari

Ana M. Machado*

Creo que habéis estado en Gope y habéis visto dónde va a estar la mina. Ver esos edificios muestra que el Gobierno planea estar aquí dentro, y que [los diamantes] van a ser extraídos. Incluso algunos funcionarios del Gobierno nos dijeron que nos trasladaban sólo por los diamantes. Dicen que la gente no debería quedarse sentada junto a los diamantes.

MONGWEGI GAOBEREKEW, bosquimano gana de la Reserva de Caza del Kalahari Central, Botsuana.

En los años cincuenta un millonario estadounidense, Laurence Marshall, se trasladó con su mujer Lorna y sus hijos John y Elizabeth a Nyae Nyae, hogar de los bosquimanos !kung. Situada en pleno desierto del Kalahari, el mayor desierto del sur de África, la escasez de agua de la zona había

* Survival International (España). Correo electrónico: am@survival.es



Mujer bosquimana, Reserva de Caza del Kalahari Central, Botsuana. © Survival.

hecho que careciera de interés hasta entonces tanto para blancos como para negros.

La familia Marshall entró en contacto con una comunidad !kung, que debido a su aislamiento aún conservaba su modo de vida cazador-recolector, y llegó a formar parte de ella.

En su libro *El pueblo inofensivo*, Elizabeth Marshall recuerda cómo solían dormir al aire libre en Nyae Nyae, sin temor a los leones, pues entonces «los leones dejaban a los humanos en paz». Si los bosquimanos habían herido a

un antílope con un dardo envenenado y lo estaban siguiendo, y alcanzaban a una manada de leones (compuestas en general por unos 30 miembros) que habían reclamado la pieza, los bosquimanos se acercaban a los leones y les decían que la carne les pertenecía. «Les hablaban con respeto, pero avanzaban hacia ellos y los leones gruñían y gruñían pero al fin se retiraban.» Los bosquimanos podían hacer esto porque, habiendo convivido y cazado en las mismas tierras que los leones durante miles de años, los bosquimanos y los leones habían desarrollado un modo de vida conjunto basado en el respeto mutuo. «Es una cosa muy antigua, esta relación entre leones y bosquimanos», comenta Elizabeth. «El pasado arqueológico bosquimano se remonta 35.000 años, probablemente más... Los leones han vivido aquí [en el Kalahari] más de 700.000 años.»

Hoy los antropólogos consideran que los bosquimanos llevan viviendo en el Kalahari más de 20.000 años, lo que les convierte en una de las culturas más antiguas del planeta.¹ No se trata de un sólo pueblo, sino de un conjunto de pueblos que hablan lenguas similares, compuestas por «chasquidos», sonidos hechos con la lengua que se representan en la escritura por distintos signos como ! y /. Según los últimos cálculos, quedan unos 100.000 en el sur de África, repartidos entre Botsuana, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Angola.

De entre todos ellos, los 5.000 gana y gwi de la Reserva de Caza del Kalahari Central en Botsuana fueron de los últimos bosquimanos que vivían exclusivamente de la caza y recolección. Sin embargo, en 1997 y 2002, tras años de acoso, el Gobierno de Botsuana los expulsó de sus tierras ancestrales en la Reserva. Los trasladó a la fuerza a campos de reasentamiento, conocidos entre los gana y gwi muy expresivamente como «los lugares de la muerte», pues en ellos reinaba y reina solamente la desesperación, el paro, el alcoholismo, la prostitución, el sida y la muerte. Alejados de su tierra, del lugar donde sus antepasados están enterrados, de su hogar, su vida, como la de tantos indígenas desplazados, carece de sentido para ellos.

Si un animal tan poderoso como un león no constituía un peligro para los bosquimanos !kung, ¿qué implacable fuerza consiguió que los gana y gwi tuvieran que abandonar

su tierra? Aún más importante y pertinente: ¿qué poder puede conseguir que regresen a ella?

Lo que se les dijo a los bosquimanos fue que tenían que trasladarse para dejar vía libre a la futura excavación diamantífera. Sin embargo, tanto el Gobierno como su socio, De Beers, niegan ahora esto, a pesar de que la Reserva entera está cubierta en la actualidad por concesiones de prospección.² Otras empresas, como Petra Diamonds,³ están realizando en la actualidad exploraciones en dos antiguos poblados bosquimanos, Gope y Kukama. El Presidente de Botsuana, Festus Mogae, ha llegado a describir la relación entre su gobierno y De Beers como la de «hermanos siameses», esgrimiendo mientras tanto muy distintas razones para las expulsiones.

Una de estas razones ha sido lo costoso que resultaba el abastecimiento de agua en la Reserva. Sin embargo, mientras el Gobierno afirma haberse gastado seis millones de dólares en uno sólo de los campos de reasentamiento, el coste anual de la provisión de servicios gubernamentales era únicamente de unos 12.000 dólares.

Por otro lado, la razón de que los bosquimanos necesitaran en primer lugar dicho abastecimiento se debió a la ganadería exhaustiva, fomentada por el Gobierno en los años ochenta y que continúa activa hoy, en las fronteras de la Reserva de Caza. Dicha ganadería hizo que descendiese dramáticamente el nivel de agua del subsuelo, hasta que los bosquimanos no podían alcanzarla con sus métodos tradicionales.

Otra razón esgrimida por el Gobierno ha sido que los bosquimanos constituían una amenaza contra la fauna de

¹ Ver <http://www.elmundo.es/papel/2006/12/04/ciencia/2057416.html>

² Ver mapas que muestran el aumento de las concesiones justo después de las expulsiones de 2002 en <http://www.survival.es/bosquimanos>

³ En noviembre, sólo unas semanas antes del dictamen del Tribunal a favor de los gana y gwi, equipos de exploración diamantífera estaban activos en la Reserva. Ver «Las empresas de diamantes se instalan en el Kalahari mientras el sida golpea a los bosquimanos expulsados», 16 noviembre 2007, sección Noticias, <http://www.survival.es>



Los bosquimanos celebran su histórica victoria judicial del pasado 13 de diciembre en la comunidad de Metsiamaong, dentro de la Reserva de Caza del Kalahari Central, Botsuana. © Survival.

la Reserva. Sin embargo, Joseph Matlhare, director del Departamento de Medio Ambiente de Botsuana, ha declarado bajo juramento ante el Tribunal Supremo de este país que no hay evidencia alguna de que los bosquimanos cacen con rifles o lo hayan hecho en los últimos 20 años, el argumento empleado por el Gobierno para calificar de «amenaza» a los bosquimanos. Además, los estudios medioambientales del propio Gobierno muestran que en los años anteriores a las expulsiones la mayoría de las especies de antílope habían aumentado en número. La hipotética amenaza contra la fauna se revela así como una excusa para justificar las expulsiones, excusa que además pasa por alto que los bosquimanos han vivido en el Kalahari más de 20.000 años sin perjudicar el equilibrio ecológico.

Las declaraciones de Matlhare se produjeron en el contexto de un juicio que puede considerarse histórico por varias razones: además de tratarse del juicio más largo y caro de la historia de Botsuana, con una duración de más de dos años, los solicitantes del mismo, que no eran otros que los bosquimanos gana y gwi de la Reserva, son los habitantes más pobres del país. Llevaban a juicio al Gobierno de Botsuana por haberles expulsado de sus tierras ancestrales. Esto hace que el dictamen conseguido en el mismo el pasado 13 de diciembre, a favor de los bosquimanos, haya sido una

victoria sin precedentes no sólo para los derechos indígenas en África y en el mundo, sino también para los simpatizantes de los bosquimanos, que fueron quienes financiaron el juicio. El Tribunal Supremo de Botsuana dictaminó que era «ilegal e inconstitucional» por parte del Gobierno tanto haberles expulsado de la Reserva de Caza del Kalahari Central como los impedimentos (torturas, detenciones) puestos a sus actividades de caza y recolección en sus tierras.

Con la mención a este juicio respondemos a nuestra pregunta acerca del poder que puede conseguir el regreso de los gana y gwi a sus tierras y su permanencia en las mismas. Se trata del poder de la opinión pública. Fue precisamente la presión de los ciudadanos y la atención de los medios de comunicación hacia la situación de los bosquimanos lo que consiguió la histórica victoria jurídica que supone el dictamen del 13 de diciembre. Por eso, en Survival consideramos que la opinión pública es la fuerza más poderosa para el cambio.

MÁS INFORMACIÓN:

www.survival.es Página web de Survival International

www.iwant2gohome.org Página web de la organización de los bosquimanos gana y gwi, First People of the Kalahari

<http://www.rightlivelihood.org/recipe/2005/first-people-of-the-kalahari-roy-sesana.htm> Página web de la organización Right Livelihood Award, que otorga el llamado «Premio Nobel alternativo», recibido por la organización First People of the Kalahari para 2005

REFERENCIAS

GALL, Sandy (2001), *The Bushmen of Southern Africa. Slaughter of the innocent*, Chatto & Windus, Londres (pp. 141-144 para la referencia a la familia Marshall y el libro de Elizabeth Marshall *El pueblo inofensivo*).

TRISTÁN, Rosa M. (2006), «La serpiente, el primer dios», artículo aparecido en *El Mundo del Siglo XXI*, lunes 4 de diciembre.

Marineros a la mar o pescadores desplazados

Ecodesarrollo Gaia*

Procediendo como precedíamos del ecologismo activo, hace ocho años, cuando iniciamos nuestro proyecto con la inmigración subsahariana en La Coruña (Galicia-España), éramos perfectamente conscientes que se trataba de un proyecto dirigido a ayudar a las víctimas de la relación norte sur en el sector de la pesca y a la denuncia de esta situación. De hecho la denominación por la que optamos por más definitoria para los usuarios sur del proyecto fue la de Ecorrefugiados. Se trataba en la mayoría de los casos de jóvenes pescadores que habida cuenta de la sobrepesca industrial en sus costas, habían perdido el acceso a unos recursos que desde hace mil años sustentaban su modelo sociocultural-laboral, la pesca. En efecto, nuestra actividad se centró en la detección de jóvenes pescadores subsaharianos que en las calles de nuestra ciudad deambulaban a la deriva subsistiendo con la venta inicialmente de baratijas y posteriormente de CD piratas.

* Ecodesarrollo Gaia es una organización no gubernamental para el desarrollo sostenible nacida en 1992 que entre otras desarrolla actividades de mediación sociocultural laboral con inmigrantes, con programas específicos dirigidos a mujeres inmigrantes, refugiados y de reinserción laboral de marineros subsaharianos en la pesca artesanal de Coruña (España) y Área Metropolitana, y un programa formativo especial en relación con el Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de La Coruña. Correo electrónico: edg@edggaia.org



Curso de preparación en La Coruña. © Ecodesarrollo Gaia.

En un lento proceso de acercamiento fuimos ganándonos su confianza y poniendo en pie simultáneamente estructuras de ayuda y formación que les permitiesen el inicio de una andadura hacia su reinserción en el sector laboral en el que la mayoría se habían iniciado desde la infancia.

Creamos una pequeña red de ayuda consistente en acordar con unos pescadores de bajura del puerto de La Coruña un sistema de recogida de «descartes» con lo que semanalmente conseguíamos unos 500 kg. de pescado que repartíamos personalmente por las casas que agrupaban a un total de 175 personas, la mayoría de jóvenes pescadores



Proyecto en Senegal. © Ecodesarrollo Gaia.

subsaharianos, a los que mantuvimos «alimentados» durante unos dos años y medio a razón de aproximadamente 2,5 kg. de pescado persona semana. Simultáneamente, pusimos en funcionamiento un local para impartir clases de castellano. En cuanto se conseguían los primeros balbucesos se realizaba una clase específica para la *Preparación al examen oficial de Competencia Marinera*. En esta fase contamos siempre con «O Patrón do Coral» un excelente marinero gallego solidario que consolidó grupos de alumnos que primero se entendían como marineros y poco a poco ya con las palabras de aquí.

De estos procesos sacamos a un centenar de marineros africanos con el *Carné de Competencia Marinera* y hablando y escribiendo en castellano (en aquel momento no se precisaba tener el permiso de residencia para presentarse al examen de Competencia). Una vez obtenido el mismo, aprovechando los resquicios de la Ley de Extranjería los regularizamos administrativamente con lo que accedieron al permiso de residencia y trabajo. No fue fácil, unos se regularizaron por arraigo, otros volvieron a su país a sacar el visado en nuestra Embajada. Por suerte no estuvimos

sol@s, las administraciones competentes en la ciudad nos echaron una mano. Muchos de los chicos se reinsertaron en la pesca en Galicia, recuperando, 5.000 Km. más arriba, su sitio en el mismo mar.

De todo este proceso dejamos clara constancia en la Comisión de Pesca de la Unión Europea en la que dentro de la estructura de la *ICSF-CIAPA International Council in Support of Fishworkers (Colectivo Internacional en Apoyo a la Pesca Artesanal)* y *CFFA —CAPE Coalition for Fair Fish Agreements— (Coalición por Acuerdos Pesqueros Equitativos)*. Tuvimos voz, fundamentalmente para denunciar que mientras se hablaba de Acuerdos Pesqueros e indemnizaciones, cientos de pescadores del sur, desposeídos de la fertilidad de sus mares por los excesos de la pesca industrial, corrían en nuestras ciudades delante de la policía municipal por vender ilegalmente productos protegidos por la «propiedad intelectual». Lo cierto es que mientras los mares se esquilman, y las ayudas no llegan a los esquilmanos y sus familias, los ex pescadores paradójicamente caen en otras *redes* gubernamentales, redes, por cierto no marineras.

Hemos seguido incansables, desde entonces, haciendo lo mismo, recibiendo pescadores del sur (en estos últimos años en oleadas), les hemos dado cobijo, alimentación y clases de español y competencia marinera. Como mínimo han comido, han vivido bajo techo, han aprendido, han hablado semanalmente con sus mamás y han visto muchas cosas. Pero nosotr@s, que somos una pequeña ONG, sabemos que la inmigración, y más en estas condiciones, no es más que un drama y por ello hemos denunciado reiteradamente la sobrepesca industrial que está en el origen de este problema.

Además sabiendo que no hay más solución que el propio desarrollo local, iniciamos hace pocos años un proyecto de codesarrollo con senegalocoruñeses y coruñeses consistente en construir una Escuelita y un Centro de Formación Comunitaria en Desarrollo Sostenible local, atendiendo a las proyectos soñados por mujeres senegalesas recogedoras y saladoras-secadoras de pescado que resta en las playas por no vendido, y que con sus labor de recuperación para la alimentación de ese producto alimentario que se iba a perder, son, sin saberlo, garantes de la seguridad alimentaria de los más pobres.

Todo está ya en funcionamiento, regido por las saladoras de pescado, e impartiendo clases a las hij@s de las familias pescadoras del lugar, porque lo mejor, lo que hace más feliz, es prepararse para poder quedarse donde un@ nació, donde está lo tuyo. Porque eso de ser arrojado de tu



Prácticas en La Coruña. © Ecodesarrollo Gaia.

país por que te esquilman los recursos de subsistencia, que eufemísticamente, denominan inmigración... en fin, que quieres que te diga... aunque el mar es el mismo cuando llegas de arribada a tierra ahí no te esperan l@s mism@s.

Mas información

www.edgaia.org

Ver también en últimos acontecimientos 30 PDFs
www.gaiadiaadia.blogspot.com

Consideraciones ambientales sobre los desplazamientos humanos en Liberia

Grant Wroe-Street¹

Uno de los rasgos característicos de los conflictos en África es el gran número de civiles que se ven obligados a huir de sus hogares. Cuando esas personas cruzan fronteras internacionales; y otros países les conceden asilo son considerados refugiados; aquellos que permanecen dentro del país afectado por conflictos son definidos como desplazados internos (DI). Las consecuencias ambientales de tales movimientos de población, así como los impactos que genera el proporcionarles asistencia humanitaria, no pueden ser ignorados si se pretende tener en cuenta la sostenibilidad social y ambiental a largo plazo.

Los catorce años de guerra civil en Liberia, que acabaron en agosto de 2003 con la firma del Tratado de Paz de Ghana, no se diferenciaron del resto de conflictos en África; se estima que unos 800.000 liberianos de una población total de poco más de tres millones, es decir, más de una de cada tres personas del país se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Más de 300.000 liberianos cruzaron

las fronteras del país y fueron acogidos como refugiados en Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana. Sin embargo, la mayoría de los desplazados eran DI y hasta comienzos de 2006 vivieron en campamentos dentro de Liberia. El tamaño de esos emplazamientos variaba entre las 28.000 personas del campamento Wilson a los 2.000 habitantes del campamento Sinje 3. A los campamentos para DI,

también hay que sumar un número fluctuante de campamentos para refugiados, establecidos durante ese período en Liberia para alojar a las personas que huían de los conflictos en Sierra Leona y Costa de Marfil.

Las consideraciones ambientales son importantes en todas las etapas de la asistencia humanitaria a personas alojadas en campamentos: desde la identificación y selección del lugar, pasando por la planificación, el establecimiento, la gestión y, en última instancia, el cierre de los campamentos. El cierre ecológicamente sensato de un campamento debe incluir la rehabilitación ambiental de las áreas afectadas por las operaciones realizadas anteriormente. El no tener en cuenta tales consideraciones puede afectar negativamente no sólo a los pretendidos beneficiarios —las personas desplazadas— sino también a las comunidades anfitrionas que habitan las zonas adyacentes a dichos campamentos. En el peor de los casos eso puede conducir a una degradación ambiental prolongada y, en caso de existir una disputa por el acceso o el uso de los recursos naturales, provocar nuevos ciclos de conflictos y desplazamientos secundarios.

Las agencias humanitarias han comenzado a reconocer la importancia de la gestión ambiental y ha aparecido un cierto número de publicaciones a escala internacional, por ejemplo, las *Environmental Guidelines* (Directrices ambientales) de ACNUR (UNHCR, 1996 y 2005), una serie de manuales de ACNUR relacionados con el medio ambiente y el *Camp Management Toolkit* (Manual de herramientas

¹ Coordinador de proyectos en el Departamento para la gestión posterior a conflictos y desastres del PNUD (grant.wroe-street@unep.ch).



Campamento para DI de Salala, Liberia, noviembre de 2005. Habitualmente, los campamentos pequeños causan menor impacto ambiental que los grandes. La necesidad de proporcionar asistencia humanitaria urgente en épocas de conflicto puede, con frecuencia, generar dificultades en la gestión. El campamento de Salala fue establecido inicialmente para albergar aproximadamente a 8.000 DI, pero debido a la permanente llegada de gente acabó cobijando a más de 24.000 personas. Anteriormente, la zona había estado cubierta por bosque secundario pero, como resultado del elevado número de DI albergados, unas 50 hectáreas sufrieron un considerable impacto negativo derivado de los efectos combinados del desmonte de vegetación, la erosión y compactado del suelo y la elevada densidad de refugios y personas.

para la gestión de campamentos) publicado por el Consejo Noruego para los Refugiados (2004). No obstante, poca de esa información era específica para Liberia y, peor aun, los profesionales de la ayuda humanitaria en Liberia tenían dificultades para acceder a esa información, aún sabiendo de su existencia.

Con el apoyo financiero de los gobiernos de Noruega y Suecia, el PNUD ha procurado subsanar ese déficit. Como culminación de un programa de consulta a las partes afectadas y talleres de capacitación realizados entre finales de 2005 y comienzos de 2006, conjuntamente con el gobierno liberiano y especialmente con el Comité Liberiano para la Repatriación y Reasentamiento de Refugiados y la Agencia de Protección Ambiental, el PNUD publicó las *Consideraciones ambientales sobre los desplazamientos humanos en Liberia: Una guía para quienes toman decisiones y para profesionales de la ayuda humanitaria*.

La guía incluye estudios de casos liberianos, listas de control medioambiental y una visión general de las mejores prácticas internacionales y de las herramientas disponibles para la gestión ambiental en todas las fases del desplazamiento. Se han escogido materiales de referencia

de las principales organizaciones ecologistas y humanitarias, distribuyéndose en un CD junto con la guía.

Un componente particularmente destacable del proyecto fue el cartografiado de la vulnerabilidad ambiental en torno a las áreas de los campamentos. Esta metodología se basa en una comparación entre el valor de los servicios ecológicos y la accesibilidad de las personas desplazadas a un área específica. Las áreas fueron caracterizadas según su valor ecológico y su vulnerabilidad ambiental. En el transcurso de esas tareas se estableció, por ejemplo, que 15 de los campamentos para DI en Liberia estaban situados en la misma cuenca hidrográfica que alimenta los humedales Marshall, una zona para la que se ha propuesto protección. Incentivar los estudios de vulnerabilidad al comienzo de las crisis humanitarias, como parte del proceso general de planificación, puede contribuir a la protección de ecosistemas valiosos y vulnerables.

A fines de abril de 2006, los 22 campamentos oficiales para DI habían sido cerrados y se iniciaba el proceso de rehabilitación ambiental de esas áreas. Durante los talleres de capacitación realizados como parte del proyecto del PNUD, los participantes liberianos definieron una lista de cuestiones

a tener en cuenta al cierre de un campamento (incluidas en la publicación del PNUD) que recomiendan, sobre todo, el diseño y adopción de planes de desmantelamiento de los campamentos. Esos planes de desmantelamiento no sólo deberían tener en cuenta las cuestiones obvias, como la retirada de los antiguos refugios y el adecuado tratamiento de los vertederos de residuos, letrinas y pozos de agua potable, sino incluir también procesos consultivos con las comunidades anfitrionas próximas al antiguo campamento para determinar las necesidades de rehabilitación y el futuro uso de las tierras afectadas por el establecimiento de los campamentos.

En base a las tareas realizadas durante el proyecto del PNUD y las posteriores valoraciones de los antiguos campamentos para DI, ha quedado claro que cuando los factores ambientales no fueron tenidos en cuenta al escoger el emplazamiento de dichos campamentos ni durante su etapa operativa, los impactos ambientales finales fueron más severos. Tal cosa no sólo encarece la rehabilitación de las áreas donde estuvieron situados los campamentos, sino que además incrementa el riesgo de graves y perdurables impactos ambientales que afecten la salud y los medios de subsistencia de las comunidades vecinas a esas zonas. Los ejemplos incluyen: un dramático incremento de la erosión cuando los campamentos fueron emplazados en declives mayores de 10°; las prácticas inadecuadas en el tratamiento de los residuos provocaron que parte de estos permaneciesen sin enterrar; muchas letrinas y pozos de agua no fueron clausurados correctamente; la deficiente distribución y el exceso de densidad de población han ocasionado la compactación del suelo, además de hondonadas y lodazales producidos por la erosión, factores todos estos que dificultan la rehabilitación y el futuro uso de esos terrenos; y, finalmente, la pérdida de superficie agrícola productiva en los campos adyacentes. Los propietarios de tierras próximas a los antiguos campamentos afrontan la incertidumbre de saber si se les compensará, y de qué manera, por tales impactos ambientales. Una posibilidad sería que, antes del establecimiento de un campamento, se firmase un memorándum de acuerdo entre el

gobierno y los propietarios de las tierras adyacentes, que contemplase la rehabilitación de las zonas afectadas por el funcionamiento del campamento y también el traspaso de cualquier infraestructura que fuese a permanecer en el lugar, como construcciones de ladrillo y pozos de agua.

No se trata de cuestionar la prioridad de los factores humanitarios en situaciones de desplazamiento de refugiados y DI. No obstante, está claro que si las consideraciones ambientales no son tenidas en cuenta por las organizaciones y agencias durante los procesos de planificación para proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados, simplemente se estará postergando el problema y, simultáneamente, incrementando los costes ambientales posteriores. Tal cosa demanda una mayor responsabilidad por parte de las organizaciones y agencias de ayuda humanitaria, así como de los gobiernos, para que gestionen adecuadamente los factores ambientales en sus esfuerzos de socorro. No obrar en tal sentido aumenta los riesgos de degradación ambiental, amenazando la supervivencia de las comunidades, debilitando la estabilidad social y, en última instancia, favoreciendo su vulnerabilidad ante los desastres y conflictos.

REFERENCIAS Y RECURSOS:

Environmental Considerations of Human Displacement in Liberia: A Guide for Decision-makers and Practitioners (UNEP, 2006).

Copias en PDF de las publicaciones del PNUD pueden obtenerse en: http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_HR.pdf

Las referencias técnicas recogidas durante el proyecto pueden consultarse en: <http://postconflict.unep.ch/liberia/displacement/references.html>

Entre las citadas referencias se encuentra el informe técnico que describe el enfoque adoptado para establecer la vulnerabilidad ambiental en las zonas adyacentes a los campamentos.



América Latina

Entre la inundación y el desplazamiento

Juan Pablo Soler y Danilo Urrea

Pascua-Lama: el oro bajo los glaciares

Alba Sánchez Corominas y Leire Urkidi Azcarraga

El intercambio ecológicamente desigual del comercio internacional colombiano

Mario Alejandro Pérez Rincón

Las resistencias al etnocidio petrolero. Estrategias de los pueblos indígenas para sobrevivir al territorio invadido

Marc Gavaldà

Los desplazados de Endesa

Pedro Cayuqueo

Entre la inundación y el desplazamiento

Juan Pablo Soler y Danilo Urrea*

Sin lugar a dudas, las grandes y medianas represas han sido sinónimo de endeudamiento, engaño, pérdida de soberanía, degradación ambiental y vulneración cultural. Durante los 70, 80 y 90's los empresarios de las represas quebrantaron en los países del norte diversos ríos (como el Ebro o el Rhin) al obstaculizar el cauce una o más veces, al igual que en los países del sur donde se volcaron a multiplicar su capital en función de las externalidades no previstas. En esa época, según la ICOLD¹ (McCully, 2001), se iniciaba la construcción de una nueva represa cada hora. En la actualidad, a pesar de haberse demostrado que los beneficios generados por las represas no justifican los impactos irreversibles e incommensurables generados, se insiste por parte de los gobiernos, las empresas y la banca multilateral en la construcción de un largo y nefasto listado de proyectos.

Las represas en los países del sur han sido construidas para promover el desarrollo de los países empobrecidos. *Desarrollo y empobrecidos*, dos categorías que no son el énfasis de este documento, pero que autores como Arturo Escobar, con base en argumentos políticos, técnicos y ambientales, han podido desmentir y clarificar; por una parte, el desarrollo sólo es un discurso que esconde los verdaderos intereses de dominación a través de las falacias de ayuda para

los pobres, y, por otra, la pobreza y el empobrecimiento surgen de la diferencia cultural de los pueblos, que, al no ser entendida por los países del norte, sirvió como eufemismo para devastar pueblos y culturas enteras. Ahora bien, desde la perspectiva de la justicia ambiental valdría la pena preguntar, ¿países empobrecidos por quién?, ¿para quién?, ¿para qué?, y, ¿represas en función de qué?

Aunque la construcción de grandes y medianas represas ha conllevado una serie de impactos ambientales, culturales, sociales y políticos, en este escrito nos ocuparemos de evidenciar la categoría de «desplazamientos forzados reiterativos por represas» elemento que adquiere sentido tanto como desplazamiento físico como desplazamiento de medios de subsistencia (CMR, 2000: 149).

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS REITERATIVOS POR REPRESAS (DEFORE) EN COLOMBIA

La base de conocimientos de la Comisión Mundial de Represas constata que con demasiada frecuencia el desplazamiento físico es involuntario e implica coerción y fuerza, y en algunos casos incluso quitar la vida (CMR, 2000). Según el informe *Represas y Desarrollo*, de la misma comisión, entre 40 y 80 millones de personas habrían sido desplazadas en el mundo durante el siglo XX a causa de las represas; tal situación constituye un lesivo impacto social, ambiental y cultural que los empresarios de las represas y

* Juan Pablo Soler, *Censat Agua Viva. Amigos de la Tierra Colombia* (energia@censat.org); y Danilo Urrea, *Censat Agua Viva. Amigos de la Tierra Colombia* (agua@censat.org).

¹ Comisión Internacional sobre Grandes Represas.



Río Cauca represado en el Embalse la Salvajina. © CENSAT Agua Viva.

diversos gobiernos, a través de discursos y engaños, han invisibilizado durante décadas.

Gran parte de los desplazados por represas que han tenido que sumarse a los planes de reasentamiento no han mejorado su calidad de vida, ni mejorado su situación económica; por otra parte, los que no han sido tenidos en cuenta para estos planes han sufrido impactos similares, o han tenido que migrar a las ciudades a acrecentar los cordones de miseria. En cualquiera de los casos, la mayoría de quienes fueron desplazados por represas han desaparecido de las estadísticas, absorbidos por barrios pobres, o por los campos de trabajadores extranjeros (Mc Cully, 2001).

Al averiguar lo que ha sucedido con los desplazados por represas en Colombia, se encuentra que algunas familias están a punto de sufrir un DEFORE. Esta situación revela el fracaso y el engaño de los planes de reasentamiento y la desprotección que sufren las comunidades más vulnerables y vulneradas.

Represa La Salvajina y el Proyecto de Desviación del Río Ovejas

La represa La Salvajina fue construida en el norte del departamento del Cauca en la primera mitad de los años ochenta y desplazó de un área de 2100 hectáreas a más de

tres mil personas que se dedicaban a actividades de subsistencia, hablamos de comunidades de afrocolombianos que descienden de negros que padecieron el yugo de la esclavitud en la época de la colonia española.

Las actividades de subsistencia que tenían lugar en la zona —entre las que se encontraban la minería y la agricultura— cambiaron para muchos habitantes de la región, puesto que las tierras fértiles quedaron sumergidas en el embalse. Sumado a ello, la reubicación prometida, como suele suceder en la mayor parte de los casos, no correspondió ni a las necesidades de la comunidad ni a sus patrones culturales. Veinte años más tarde de haber pactado el Acta del 86² entre el gobierno y la comunidad, ésta aún espera el cumplimiento del listado de promesas de la empresa EPSA y del gobierno nacional; en octubre de 2006 1000 manifestantes marcharon pacíficamente desde Jamundí hasta Cali, Valle del Cauca, para exigir el cumplimiento de los acuerdos sin obtener respuestas concretas por parte del Gobierno y la Corporación Regional del Valle del Cauca.

La represa obstaculizó los caminos que campesinos e indígenas habían construido como parte de su territorio, para un recorrido que antes se podía realizar en un día ahora se necesitan tres días o hasta una semana. Con el embalse, es necesario pedir permiso y someterse a requisas del ejército nacional, que cuida la represa. Ahora bien, cuando aparecieron los empresarios les prometieron puentes, les dijeron que ya no transitarían en caballo sino en coche... pero los puentes nunca llegaron, y, por suerte, los coches tampoco; les prometieron energía barata, puestos de salud, oportunidades laborales y muchas otras cosas que se han quedado en la imaginación de quienes ilusionaron y engañaron; con esta gama de sofismos los medios tradicionales de subsistencia nunca fueron reemplazados, en detrimento perpetuo de su calidad de vida.

Los adolescentes de la región presenciaron el conflicto social que generó la construcción de la represa, vieron como

² El Acta del 86 contiene los acuerdos pactados entre la comunidad y el gobierno para compensar los impactos generados por la Represa La Salvajina; allí quedaron contenidas las promesas en materia de salud, infraestructura y educación para los afectados en la zona como por ejemplo, centros de salud, carreteras, colegios entre otros.



se inundó el trabajo de años de sus padres y de sus abuelos, tuvieron que aceptar y acostumbrarse a vivir en otra tierra, en la misma región pero en otra parcela, junto a otra gente también desplazada por la represa; ésta es parte de la historia de la comunidad de Yolombó en el norte del Cauca, Colombia. Los jóvenes vieron y acompañaron a sus padres en la lucha contra la represa Salvajina, pero tanto unos como otros sufrieron amargamente el desalojo físico, y por desgracia hoy de nuevo se encuentran amenazados por un DEFORE generado por la Desviación del Río Ovejas al Embalse la Salvajina, despropósito que atenta contra los medios tradicionales de subsistencia al impedirles el derecho al acceso al agua.

Desde el año 2000, la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) fue adquirida por la empresa trasnacional española Unión Fenosa, al comprar más del 60% de las acciones; Unión Fenosa no reconoce que al comprar la empresa, además de adquirir las actividades y activos de la compañía, también se hace acreedora de los pasivos ambientales y sociales del proyecto; además, la empresa insiste en llevar a cabo el proyecto pese a que por medio del proceso de consulta previa del año 97 las comunidades afectadas por el proyecto dieron un No rotundo al DROES.³

RÍO GUARINÓ Y PORCE II

En Antioquia los empresarios de las represas han quebrantado gran parte de los ríos del departamento, y entre ellos, con tres grandes proyectos de generación que llevan su nombre, el Río Porce. El proyecto Porce II generó más de 1500 desplazados (y el Porce III desplazará cerca de 2.200 personas, en su mayoría campesinos). Parte de estos desplazados tuvieron que buscar nuevas formas de subsistencia en otras regiones, y así aparecieron los habitantes afrocolombianos en la Dorada y en Victoria, Departamento de Caldas.

No obstante, los planes de integración energética con Suramérica y Centroamérica requieren el aumento de la capacidad de energía eléctrica disponible para exportación,

por lo que se ha contemplado la construcción de nuevas represas y la repotenciación de algunas otras; tal es el caso del embalse Miel I, que prevé la desviación del Río Guarinó hacia el embalse, colocando en riesgo la supervivencia de las comunidades del oriente de Caldas, entre ellas la de La Dorada y la de Victoria, puesto que la desviación provocaría un desabastecimiento hídrico en la región, y, por ende, desplazamiento involuntario de las comunidades aledañas al afectar los medios de subsistencia.

Algunas conclusiones

Los proyectos de desviación del Río Guarinó y del Río Manso en el oriente de Caldas, y del Río Ovejas en el norte del Cauca, provocarían un DEFORE de las comunidades negras e indígenas que se asentaron hace años en las riberas de estos ríos.

Las experiencias de las comunidades y la abundancia de conflictos ambientales, sumadas al desacierto de las políticas gubernamentales, favorecen que los DEFORES proliferen y, a la vez, se produzcan desplazamientos reiterados no solamente por represas, sino por otro tipo de megaproyectos dirigidos a mercantilizar la vida y la naturaleza.

Los DEFORES con seguridad han tenido lugar en otros países del sur y del norte, lo que demuestra que las políticas de reasentamiento establecidas por el Banco Mundial han fracasado de principio a fin; es necesario que la banca multilateral y las agencias de cooperación acepten la posición de las comunidades por preservar su territorio, y cuando hubiese lugar a planes integrales de reasentamiento deberían formularse a través de un proceso participativo que se centre en preservar la cultura de los pueblos y sus medios de subsistencia.

REFERENCIAS

- MCCULLY, Patrick (2001), *Ríos Silenciados, Ecología y Política de las grandes represas*.
 COMISIÓN MUNDIAL DE REPRESAS (2000), *Represas y Desarrollo, Un nuevo marco para la toma de decisiones*, USA, p. 149.

³ DROES: *Desviación del Río Ovejas al Embalse Salvajina*

Pascua-Lama: el oro bajo los glaciares

Alba Sánchez Corominas
y Leire Urkidi Azkarraga*

INTRODUCCIÓN

En el 2001 se desata un conflicto socioambiental en el valle del Huasco¹ a raíz de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Pascua Lama. Es entonces cuando un grupo de personas del Valle alertan sobre la existencia de glaciares en la zona del yacimiento y se inicia el debate sobre la idoneidad de la ejecución de una gran mina a cielo abierto con lixiviación con cianuro en la naciente de sus aguas.



Valle del Huasco.

¿CÓMO ES EL VALLE DEL HUASCO?

Se ubica en el Norte Chico de Chile, al sur del desierto más árido del mundo, el de Atacama. Su importancia ecológica recae en ser el último de los valles con agua superficial antes del desierto. Hace años que las mineras secaron las aguas corrientes del vecino valle de Copiapó, el siguiente hacia el desierto, y ahora las reservas de las subterráneas amenazan con acabarse si continúan las actuales tasas de extracción (Golder, 2006).

Los ríos del Huasco nacen en lo alto de la cordillera, de la nieve y del deshielo glaciar, y descienden hacia el mar a lo largo de un valle transversal a los Andes. El curso del agua dibuja una franja de vegetación, un oasis en medio del desierto, mezcla de flora autóctona y cultivos de uva para la exportación. Este es el principal sustento de los 70.000 habitantes del Valle.

EL PROYECTO MINERO PASCUA LAMA

Pascua Lama se proyecta como una de las más grandes minas auríferas del mundo² y la empresa responsable es la

* Alba Sánchez Corominas: alba_@hotmail.com. Leire Urkidi Azkarraga: leireurkidi@hotmai.com.

¹ El artículo se centra más en el conflicto desarrollado en la parte chilena, por ser allí donde más visible ha sido y donde se ha realizado la investigación de manera más profunda. Sin embargo, en la provincia de San Juan en Argentina, también se ha creado una fuerte oposición. De hecho, el tranque de relaves de la mina está proyectado en territorio argentino y la mayor parte de la extracción de agua para los trabajos se realizará en esta zona.

² Sería la segunda mayor de Sudamérica después de Yanacocha en Perú (que afirma haber extraído alrededor de 3 millones de onzas de oro en el 2004 y cuyas reservas probadas y probables en el 2006 ascendían a 32.6 millones de onzas).

canadiense Barrick Gold Corp., la mayor de las transnacionales de oro y que cuenta con una controvertida trayectoria social y ambiental.³

Tabla 1. Datos del proyecto

Inversión	2.300-2.400 millones de US \$
Tasa de extracción de oro	750.000 onzas/año aprox.
Duración del proyecto	20 años, incluyendo 3 de construcción
Reservas de mineral	17 millones de onzas de oro. 656 millones de onzas de plata. 250.000 toneladas de cobre.

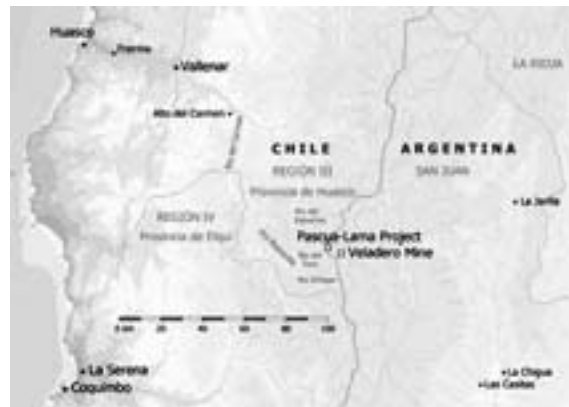
Fuente: Barrick, febrero 2007.

El proyecto supondría el inicio de la explotación minera a gran escala en zona fronteriza, prohibida hasta hace unos años por razones militares y estratégicas. En 1997, los Gobiernos de Chile y Argentina firmaron el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, acuerdo claramente promovido por las transnacionales del sector. A partir de éste, ambos países ceden soberanía creándose un área donde las legislaciones nacionales no son aplicables, violando sus propias constituciones. En el ámbito del Tratado, por ejemplo, no se aplicará la prohibición que establece la constitución chilena sobre la concesión de terrenos fronterizos a personas o entidades extranjeras.

El caso de Pascua Lama es el inicio de la ejecución del Tratado y éste a su vez, es la muestra del interés que las

³ Según las investigaciones de Javier Rodríguez Pardo, la empresa se ha visto involucrada en conflictos armados en el Zaire. Además, encontramos entre sus fundadores a personajes como el narcotraficante Peter Munk, el traficante de armas Adnan Khashoggi o George W. Bush. La web de la empresa es www.barrick.cl.

Mapa de ubicación de Pascua Lama



Fuente: Adenda n°2 de Pascua-Lama en www.e-seia.cl.

transnacionales tienen en los minerales andinos. De hecho, sólo en el valle del Huasco, ya existen otros ocho proyectos en exploración y en Argentina ya funciona Veladero, una mina muy cercana al yacimiento Pascua Lama y también propiedad de Barrick.

DESARROLLO DEL CONFLICTO

Las exploraciones mineras en la zona donde se acabará ubicando Pascua Lama empiezan ya en 1977, pero no es hasta el 2001 que se desencadena en conflicto en el valle del Huasco. El trato que recibió el tema de los glaciares es uno de los detonantes que alentaron el rechazo de la población hacia Barrick: primero, no menciona el impacto sobre los glaciares en la Evolución de Impacto Ambiental (EIA) de 2001; después, afirma que existen experiencias positivas de traslado glacial en la Antártica y presenta un ridículo plan de manejo de sólo dos páginas; finalmente, insiste en el cambio climático como la causa de la reducción de los glaciares. Esta justificación responde a un estudio de la propia empresa en el que se ratifica que los glaciares más cercanos a las obras de exploración y construcción han disminuido en un 50-70% en los últimos 20 años, mientras que otros más alejados, no en más de un 15% (Comisión de servicio para la DGA, 2005).

Esta es la principal discusión en la primera etapa identificada en la evolución del conflicto (2001-2004). Posteriormente a la aprobación de la primera EIA, Barrick decide congelar el proyecto y no es hasta finales del 2004 que presenta la segunda y la definitiva EIA, con una ampliación de la mina. Durante los años intermedios, la empresa lleva a cabo una fuerte política del *buen vecino*: políticos, ayuntamientos, juntas vecinales, escuelas y otras organizaciones sociales reciben ayudas económicas abierta o encubiertamente. Paralelamente, se organiza la oposición a la minera con el discurso de la defensa del agua. En un primer momento, esta oposición se articula entorno a la iglesia y recibe apoyo técnico del OLCA⁴ de Santiago. Más adelante, se organizan colectivos autónomos, como la Coordinadora de la Defensa del Valle, y, aunque las personas que participan activamente de éstos no son muy numerosas, la posición general de la población aledaña es contraria al proyecto. Esto, junto con la *estrategia social* de la empresa, genera los dos focos del conflicto y la división de la comunidad.

Se identifica el inicio de la segunda etapa con la presentación, a finales del 2004, de la segunda EIA. La oposición presenta unas 700 alegaciones, se organizan marchas, se realiza un importante trabajo de concienciación, se lanza todo un dispositivo de difusión vía internet... Pero el Gobierno no responde a las demandas sociales y Barrick continúa con su política de *responsabilidad empresarial*. Tanto es así, que anula a uno de los principales actores que rechazaban la minería: la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco, organización encargada de la gestión del riego. Ésta suscribe un acuerdo con la empresa sin consultar a sus bases por el cual recibirá 60 millones de US\$ como medida compensatoria al posible daño ambiental.

En febrero del 2006, la CONAMA⁵ aprueba el proyecto en el lado chileno, con la *condición*⁶ de no afectar los glaciares, y en diciembre se aprueba en Argentina. Con esto, se abre una nueva etapa en la que la oposición se debilita y Pascua Lama parece ser una realidad imparable. Sin embargo, la explotación de la mina no ha empezado oficialmente y los meses de enero y febrero de 2007 la lucha se ha reactivado en el Valle del Huasco. Muestra de ello, es un corte de carretera realizado a finales de enero que aglutinó

a gran diversidad de personas y que representa una de las acciones directas más fuertes realizadas en la zona. Además, el apoyo desde organizaciones de Santiago es cada vez mayor, así como el interés internacional en el caso.

Entendemos, pues, que a pesar de la aprobación ambiental, el conflicto no está cerrado y que habrá que mantener la mirada puesta en los acontecimientos venideros.

MÁS INFORMACIÓN

www.olca.cl.

www.noapascualama.org.

<http://noapascualama.blogspot.com>.

REFERENCIAS

- Comisión de Servicio a la III Región para la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Informe sobre la Visita a Pascua-Lama, 12 de enero de 2005.
- Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Pascua-Lama, de sus modificaciones de 2004 y demás documentación en el portal del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno de Chile, www.e-seia.cl.
- GOLDER ASSOCIATES S.A. (2006), Diagnóstico de los recursos hídricos de la cuenca del río Copiapó y proposición de un modelo de explotación sustentable, Santiago de Chile.
- LUNA QUEVEDO, D.; PADILLA, C.; ALCAYAGA OLIVARES, J. (2004), *El exilio del cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera: El tratado minero entre Argentina y Chile*, OLCA, Santiago de Chile.
- RODRÍGUEZ PARDO, J. (2004), «La Macabra Barrica de Bush», www.sincensura.org.ar.

⁴ Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

⁵ Comisión Nacional de Medio Ambiente, ente competente para la calificación de los EIA en Chile.

⁶ Esta condición es técnicamente incumplible, dado que el tajo de mina proyectado en la EIA se encuentra contiguo a los mismos glaciares, y el vertedero de estériles en un glaciar de roca.

El intercambio ecológicamente desigual del comercio internacional colombiano

Mario Alejandro Pérez-Rincón*

Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional (CI) no es un juego de suma positiva donde todos los participantes resultan ganadores en el intercambio comercial, sino que es un juego de suma cero, donde hay beneficiados y perjudicados en los aspectos ecológicos. Bajo este aspecto, el CI juega un papel protagónico como un nuevo «vector ambiental» que distribuye en forma asimétrica los costos ecológicos entre los países que comercian, siendo los países con abundancia de recursos naturales los que resultan perdedores en este intercambio comercial (Karlson, 1995). Las ventajas comparativas estáticas hacen que estos países se especialicen en la producción y exportación de bienes natural-intensivos e importen bienes capital-intensivos. Este patrón de especialización conlleva mayores costos ecológicos puesto que los recursos exportados no incluyen en los precios de exportación la pérdida ni la depreciación del patrimonio ambiental. A su vez, los términos de intercambio

del comercio internacional, junto a las relaciones desiguales de poder entre Norte y Sur, hacen que se requiera cada vez exportar y explotar más recursos naturales para obtener la misma cantidad de bienes importados. Esto es lo que se conoce como el *intercambio ecológicamente desigual* heredero de las diferentes versiones de la teoría de la dependencia.

Pero además, el patrón de especialización no resulta solo de la aplicación de la «ley de las ventajas comparativas», sino que corresponde también a una división internacional del trabajo o Sistema Económico Mundial, en el cual los países ricos en recursos naturales juegan el papel de proveedores de materias primas (*commodities*) y algunos bienes sustantivos de origen primario (*preciosities*) para los países desarrollados (Wallerstein, 1974). O, dicho en términos de la economía ecológica, cumplen el rol de proveedores de recursos materiales y energéticos para que el proceso metabólico de los países del Norte pueda realizarse (Hornborg, 1998). Aunque también los proveen de bienes para satisfacer sus necesidades «postmateriales». Esto llama a la necesidad de estudiar a las Naciones no como realidades aisladas sino como parte integrante de un engranaje más amplio a nivel internacional tanto en el plano económico y político como en el ecológico.

Este panorama conceptual es el soporte teórico de la investigación doctoral «Comercio Internacional y Medio

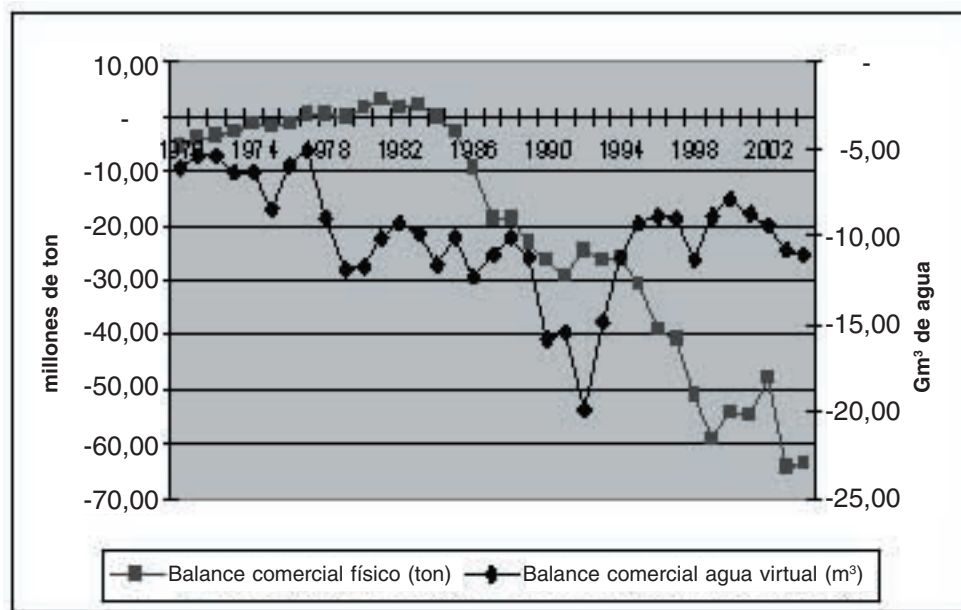
* Universidad del Valle, Instituto CINARA, A.A. 25157, Cali, Colombia
(aleperez@univalle.edu.co).

Ambiente en Colombia», la cual tuvo como propósito examinar las diferentes interrelaciones e impactos del comercio exterior colombiano sobre el medio ambiente a lo largo de buena parte de su historia económica contemporánea (Pérez, 2006). Para alcanzar los resultados obtenidos, se trabajó con métodos que corresponden al instrumental de técnicas desarrolladas desde la óptica de la sostenibilidad fuerte (Análisis de Flujo de Materiales, Indicadores de Uso del Suelo, Huella Hídrica, Agua Virtual y Balances Energéticos), las cuales buscan además de cuantificar la presión que la actividad económica ejerce sobre la biosfera, identificar la diferente distribución de costos y beneficios ambientales del comercio internacional entre Norte y Sur. El estudio estuvo orientado a abordar tres aspectos claves: identificar los efectos ambientales asociados al patrón exportador de la economía colombiana a nivel nacional; identificar el papel que el flujo de capitales ha tenido para mantener el patrón natural-exportador de la economía nacional; y, encontrar los

impactos y conflictos ecológicos distributivos generados por la actividad exportadora a nivel regional y local.

El intercambio ecológicamente desigual y la presión ambiental ejercida por el patrón de especialización *natural-intensivo* de la economía colombiana, se identifica de varias maneras: por la dirección del flujo neto de recursos materiales y agua, los cuales tienen una clara orientación hacia el resto del mundo: 720 millones de toneladas de materiales (1970-2004) y 388 Gm³ (mil millones) de agua (1961-2004) es el saldo neto biofísico de las transacciones comerciales realizadas en ambos períodos; ampliación de la frontera agrícola en un millón de hectáreas y disminución de la cobertura boscosa en 10 millones de hectáreas en zonas de importancia estratégica para el ecosistema global como la selva Amazónica, la Orinoquía y las selvas del Pacífico colombiano; creciente dependencia del exterior de flujos energéticos primarios para satisfacer las necesidades calóricas de su población afectando su seguridad alimentaria; patrones

Figura 1
Deuda Ecológica del comercio exterior colombiano expresada en materiales y agua virtual que sale del país al resto del mundo (1970-2004)





de desarrollo agrícola que no corresponden a sus realidades sociales y ambientales, que generan alta dependencia de *inputs* externos al sistema agrario y de carácter no renovable, que además de producir una agricultura energéticamente ineficiente y poco sostenible ecológicamente, transfiere una parte creciente de los ingresos generados por la población agrícola del país a las grandes empresas transnacionales fabricantes de muchos de los *inputs* utilizados dentro del modelo de «revolución verde» que se impulsa en Colombia desde los sesenta; alta contaminación de aguas y suelos por la intensificación del uso de agroquímicos asociados a este patrón tecnológico; e importantes niveles de contaminación atmosférica y del suelo, aunque más focalizados, producto de las actividad minera. De la misma manera, los «términos de intercambio» son crecientemente desfavorables para las exportaciones colombianas (ricas en energía disponible), al compararlas con las importaciones (de alto valor económico), situación que ha contribuido a incrementar la presión y explotación de recursos naturales en el país.

Por su parte, el flujo de capitales que viene desde las economías del Norte a través de la inversión extranjera y la deuda externa, han jugado también un papel protagónico en la conformación del *patrón natural-exportador* de la economía colombiana. Tanto el crédito externo como la inversión extranjera directa se han dirigido en buena medida a explotar las ventajas comparativas de la economía nacional, los recursos naturales, fortaleciendo una senda de desarrollo natural-intensiva y generando un sesgo que pudiera considerarse anti-ecológico del desarrollo económico nacional. El incremento en el saldo de la deuda externa ha sido un factor que ha contribuido de diferentes formas a incrementar la explotación de los recursos naturales durante el período 1970-2004. Ello se corrobora al calcular la deuda externa en términos físicos, la cual pasó de 5 millones de toneladas en 1974 a 409 millones en 2004. Por su parte, el servicio de la deuda pública pasó de 400 mil a 40 millones de toneladas, de tal manera que el pago total de remesas dirigidas a cubrir este servicio alcanzó para todo el período 342 millones de toneladas de productos básicos, cifra preocupante si entendemos que buena parte de ellos corresponde a recursos finitos por su carácter de no renovables.

Finalmente, la investigación también puso en evidencia los efectos ambientales regionales y locales que resultan de las variaciones en la dinámica económica producto de los cambios en los patrones de especialización impulsados por el comercio internacional. El trabajo mostró como tal dinámica afectó la gestión del recurso hídrico a nivel del departamento del Valle del Cauca y de la cuenca hidrográfica del río Bolo (sur-occidente colombiano), debido a los conflictos producidos por la intensificación en el uso del agua para la agricultura de exportación y su competencia con otros usos. La orientación hacia el mercado externo de la economía nacional generó un proceso de especialización hacia el monocultivo cañero de exportación en estas zonas, triplicando su área sembrada, extendiendo la frontera agrícola y incrementado do ampliamente el consumo de agua. La globalización, la importancia estratégica de la actividad exportadora cañera y la concentración económica de esta actividad, disminuyeron la gobernabilidad de las instituciones nacionales, regionales y locales para reducir presiones ambientales e implementar políticas de gestión de los recursos naturales.

REFERENCIAS

- GILJUM, S. (2003), Biophysical dimensions of North-South trade: material flows and land use, Cap. I. Introduction. Doctoral Thesis. Viena.
- HORNBERG, A. (1998), Towards an ecological theory of unequal exchange: articulating world system theory and ecological economics. *Ecological Economics* 25: 127-136.
- KARLSON, R. (1995), Recycling in life cycle assessments. Doctoral Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Suecia.
- PÉREZ, M. (2006); Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona (<http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1123106-102821/>).
- WALLERSTEIN, I. (1974), *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.



Las resistencias al etnocidio petrolero. Estrategias de los pueblos in- dígenas para sobrevivir en un territorio in- vadido



Mujeres y niños del oriente ecuatoriano ante un quemador de gas. © Marc Gavaldà.

Marc Gavaldà*

En el precipitado avance tropical de las transnacionales petroleras, que en su política de tierra pisada siguen abriendo accesos para nuevos pozos en la faja subandina-amazónica, las culturas que viven allí sufren un deterioro cultural y poblacional irreversible.

Las compañías para su expansión cuentan con contratos que las legitima todavía por tres décadas más, estados que actúan de socios y a la vez recaudadores de regalías, y una débil y confusa resistencia a sus operaciones por parte de las poblaciones atrapadas en el bloque petrolero.¹

Englobadas en un contexto internacional de petrodependencia, con un agotamiento visible de las reservas hidrocarbúricas que empuja los precios (y beneficios) por las nubes, las compañías petroleras hacen caso omiso de las advertencias científicas del cambio climático, de la destrucción territorial de las actividades de los pueblos indígenas y de las denuncias de los afectados. En su convicción ciega del «todo vale» para satisfacer al accionista, no se prevé ningún cambio sustancial

en su metodología operativa más allá de destemplados informes de Responsabilidad Social Corporativa, convertidos en álbumes de fotos para ilustrar sus perniciosas actividades filantrópicas en sus respectivas juntas de accionistas.²

LA PETROLIZACIÓN TERRITORIAL

En cada una de las etapas de su ciclo productivo, la industria petrolera perpetra acusados impactos sobre el territorio. A

* Participa en campaña Repsol Mata (<http://repsolmata.info>).

¹ Ver por ejemplo: Kimerling, FCUNAE, *Crudo Amazónico, Abya Yala, Quito, 1993*; Narváez, Huaorani vs. Maxus, FESO, *Quito, 1996*; La Torre, ¡Sólo queremos vivir en paz!, IWGIA-Racimos de Ungurahui, *Lima, 1998*.

² Carrión, Gavaldà, *Desenmascarando la Responsabilidad Social Corporativa, Ágora Nord-Sud, Barcelona, 2007 (en prensa)*.



través de la deforestación, apertura de accesos y erosión de las líneas sísmicas; la contaminación por lodos de perforación, aguas de formación y restos de crudo de la perforación o los inseparables derrames de la red de oleoductos, el petróleo imprime su huella destructiva.

Las poblaciones que habitan la superficie de las concesiones —en el caso amazónico, en su mayoría indígenas— son afectadas directamente por la convivencia forzada de trabajadores temporales que en su estancia consumen alcohol, prostitución y no son raros los casos de violencia y violaciones.³

Indirectamente, las poblaciones afectadas ven como las condiciones ambientales y los recursos naturales que las sostienen son degradados irreversiblemente. A corto o mediano plazo, la industria petrolera es responsable del empobrecimiento de las poblaciones vecinas y la aparición de enfermedades, empujándolas a desplazarse hacia otras tierras, o sobre todo a las ciudades donde su cultura es asimilada sin dejar apenas rastro.

Ante esta situación, ¿cómo reaccionan las comunidades indígenas? ¿articulan una oposición útil? ¿reaccionan a tiempo al embate petrolero?

LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ANTE LA INVASIÓN

Para iniciar cualquier proyecto, las compañías petroleras necesitan una consulta con las poblaciones afectadas para cumplir las leyes nacionales y los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT que obliga a las empresas a pedir permiso en las operaciones que afecten territorios indígenas. En la actualidad, este proceso se evita o se desinforma a las poblaciones en la precipitada búsqueda de

una firma que avale el inicio de operaciones. Para esta fase, las compañías aprovechan la débil estructura de las organizaciones indígenas y los dirigentes locales para obtener el permiso a cambio de promesas o entregas de dinero, alguna obra o productos de primera necesidad para las comunidades. Algunas veces, si la población está desorganizada, recurren a personas no indígenas que los representen, como puede ser un alcalde del municipio cercano. Otras veces las compañías se aprovechan del «fortalecimiento» organizativo y visibilización de una élite indígena amoldada al modus vivendi occidental.

Ejemplos locales son la funcionalidad que tiene la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) para empresas como Repsol YPF o Agip, que operan en el interior del Territorio Indígena y el Parque Nacional Yasuní con el beneplácito de esta organización.

Sin embargo, en general, es en la organización indígena donde las comunidades depositan sus esperanzas y aglutinan fuerzas para resistir a un conflicto desigual, donde las compañías se benefician de una población aislada y dividida. Que la organización defienda los intereses colectivos depende de la participación y control de las comunidades a sus respectivos dirigentes.

LOS PLANES DE DESARROLLO, ACULTURACIÓN Y ESPEJISMOS

Algunas organizaciones indígenas, apoyadas por ONG locales, han querido transformar el método del espejito por otro más sofisticado, que incluye demandas más amplias, consensuadas por las comunidades y con un relativo control de la ejecución de los proyectos. Son los denominados Planes o Programas de Desarrollo Indígenas (PDI). Estas negociaciones, por su participación más transparente, ha permitido a las petroleras colgarse de antemano una medalla por sus buenas formas, aunque al final del recorrido, en el distante momento que los planes son ejecutados en la comunidad, el proyecto real que lo ha generado, o sea no el PDI sino por ejemplo un ducto o un campo petrolero,

³ Ver impactos de empresas como Petrobras: Leroy, Malerba, Petrobras: ¿integración o explotación?, NCF, Río de Janeiro, 2005; Occidental: Maldonado et al, La Manera Occidental de extraer petróleo, Oilwatch, Quito, 2001; Repsol: Gavalda, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2006



es ya una realidad irreversible. El largo proceso de redacción, negociación y ejecución peca entonces de tremenda ingenuidad por involucrar a poblaciones enteras a resolver sus necesidades a partir de una cuenta bancaria alimentada por la petrolera que puede congelar o retirar si algún día se siente presionada. La distracción de la verdadera y urgente problemática que es la ejecución del proyecto petrolero, así como el paso del tiempo, juega en favor de la compañía.

Algunos ejemplos en Bolivia son las negociaciones de la Organización Indígena Chiquitana con el consorcio del Gasoducto Lateral San Miguel – Cuiabá (2002)⁴ o la negociación muy publicitada de Repsol YPF y Petrobras con la Asamblea del Pueblo Guaraní y la Organización Weenhayek-Tapiete en la construcción del Gasoducto Ya-cuiba Río Grande (2003). En ambos casos, tras dilatadas negociaciones, la ejecución de los PDI se quedó por el camino, se rompieron negociaciones pero el mal ya está hecho. Ambas experiencias, convirtieron las ilusiones de las comunidades en un espejismo.

LA VIGILANCIA SOCIAL

Conociendo las graves inexactitudes y vacíos de los Estudios de Impacto Ambiental realizados por y para sí mismas, las empresas, en una actitud de mirarse el propio ombligo, destacan las iniciativas de monitoreo ambiental que realizan por cuenta propia las comunidades afectadas. La importancia de estas experiencias, radica en el profundo conocimiento que tienen de su territorio, con una penetrante percepción de la realidad del presente y del pasado local, que permite una valoración más ajustada de los impactos producidos por la actividad petrolera en su comunidad.

La vigilancia social se convierte entonces en un instrumento de formación y empoderamiento de las comunidades frente la prepotencia de los técnicos a sueldo de las petroleras. El problema radica en la poca cobertura legal y voluntad de fiscalización así como la inoperancia gubernamental para sancionar las denuncias que se levantan en los campos petroleros.⁵

LA RESISTENCIA FRONTAL

Algunas comunidades indígenas, por su unión o fortaleza cultural, han sabido adelantarse al desencanto de las promesas de buenas prácticas petroleras, para enfrentar una oposición radical que pone en entredicho la colonización corporativa en América Latina.

Con esta estrategia, las comunidades —que han conocido la suerte de sus vecinos afectados— intentan preservar su territorio intacto evitando así la conocida política de hechos consumados. A pesar de emprender un camino a contracorriente, pues tanto los Estados, organismos como el Banco Mundial o el intervencionismo pragmático de muchas ONG apoyan la solución negociada, afortunadamente la resistencia también genera la solidaridad internacional. Construir puentes entre las comunidades resistentes y grupos de presión en los centros de poder corporativo es un reto que tiene el ecologismo actual para parar la destructiva maquinaria petrolera. La lucha de Sarayaku en Ecuador, Tentayapi en Bolivia o los U'was en Colombia, por citar los más conocidos, merece ser acompañada.⁶

⁴ Recogidas en el informe: *Organización Indígena Chiquitana*. Guía Metodológica para la Vigilancia Social de la Industria Extractiva en Territorios Indígenas, *CEADES*. Santa Cruz, Bolivia, 2004.

⁵ Ver por ejemplo: *APG- Itika Guasu*, Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, *CEADES-CERDET*, Tarija-Bolivia, 2005.

⁶ Ver respectivamente: www.sarayaku.org; *Gavaldà*, Viaje a Repsolandia, *Tutuma Edicions*, Barcelona, 2006; *Ramiro*, *Chaparro*, Colombia en el pozo, *OMAL*, Madrid, 2006; *Otros casos de resistencias indígenas son reseñadas en Proaño*, «Pueblos originarios y acción directa ambientalista», *Ekintza Zuzena*, N°34, 2007.

Los desplazados de Endesa*

Pedro Cayuqueo Millaqueo**

En septiembre del año 2004 fue inaugurada oficialmente por altos ejecutivos de Endesa-España la Central Hidroeléctrica Ralko, en el sur de Chile. Gerentes, autoridades, accionistas e ingenieros brindaron aquel día sobre el imponente muro de 150 metros emplazado sobre el río Bio-Bio, en la precordillera de la VIII Región y sobre territorio de comunidades indígenas pehuenches. Como contrapunto, 40 kilómetros montaña arriba, caminos intransitables y viviendas enterradas en la nieve daban cuenta de uno de los capítulos desconocidos de esta historia.

«Nosotros antes teníamos una o dos hectáreas de tierra allá abajo en Lepoy. Apenas nos alcanzaba para criar algunas aves, animalitos y hacer huerta... Acá Endesa nos paso veinte hectáreas promedio. Todos lo vimos como un avance, sin embargo, hoy estamos casi peor que antes. Los animales se nos mueren en invierno, los mata la nieve cuando se accidentan en las quebradas o se acaba el pasto y no hay forraje... Ahora los estamos vendiendo casi todos, para poder comprar mercaderías o para pagar las deudas que tenemos con la propia Endesa», señala José Millanao, miembro de la comunidad pehuenche El Barco.

Millanao es uno de los 184 indígenas pehuenche que —a fines de los años noventa— aceptó permutar sus tierras a



Central Hidroeléctrica Ralko de Endesa-España, Alto Bio Bio.
© Pablo Díaz

Endesa-España para posibilitar la construcción de la Represa Ralko en el Cajón del río Bio-Bio, uno de los más importantes de la zona sur de Chile y que nace en las altas cumbres cordilleranas de la VIII región. Nos cuenta que vivía en la comunidad Ralko Lepoy y desde allí se traslado junto a toda su familia cordillera arriba, hasta el denominado Fundo El Barco, uno de los dos lugares elegidos por la transnacional para trasladar a todas aquellas familias afectadas directa o indirectamente por el emplazamiento de la central. «En ese tiempo no pudimos negarnos. La situación estaba mala, no había trabajo, no teníamos tierra, animales y Endesa nos prometió ayudarnos», recuerda Millanao.

Sin embargo, le bastó soportar solo uno de los seis inviernos que llevan en la zona para darse cuenta que el paraíso prometido bien podría transformarse en un verdadero infierno. En un verdadero y cruel infierno blanco. «Acá los inviernos son muy duros, a veces caen dos, tres metros de nieve y no se puede hacer nada en varios meses porque la nieve lo tapa todo... Antes Endesa limpiaba con

* Reportaje publicado originalmente en Periódico Azkintuwe N°10.

** Periodista, director del Periódico Azkintuwe, de circulación en Chile y Argentina (www.azkintuwe.org); miembro de la Red Internacional de Comunicadores Indígenas y del Consejo Editorial de la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN)

su maquinaria los caminos, pero cada vez cuesta más que cumplan. Ahora, como la represa Ralko está terminada, ya ni se aparecen por estos lados. Toda la gente que Endesa traía para ayudarnos está desapareciendo poco a poco de este lugar», nos dice.

Llegamos a la comunidad pehuenche El Barco cerca del atardecer, después de sortear los casi 70 kilómetros de montañas que la separan de la pequeña localidad de Ralko, antiguo campamento maderero hoy reconvertido en cabeza municipal y puerta de entrada hacia los imponentes cajones cordilleranos de los ríos Queuko y Bio-Bio, territorio ancestral de las comunidades mapuche-pehuenche. Cuando ellos se enteraron de los beneficios que contemplaba el Plan de Relocalización de Endesa, reconocen que no dudaron que debían permutar sus tierras. Se trataba —en teoría de un negocio redondo. Pocas tierras, erosionadas e improductivas a orillas del Bio-Bio, a cambio de nuevos terrenos, animales, modernas viviendas, electricidad y una calidad de vida digna de habitantes de los alpes suizos. Poco y nada de eso se cumpliría.

Domingo Puelma fue uno de los dirigentes que encabezó el proceso de negociaciones de las familias que se trasladaron más tarde al fundo El Barco. Le tocó, por tanto, escuchar de boca de los propios gerentes las promesas de la transnacional y convencer más tarde a sus hermanos de la conveniencia de los contratos. Hoy, al igual que su peñi José Millanao, se siente estafado y, peor aun, responsable de la situación que padecen gran parte de los miembros de su comunidad.

«Yo participé activamente como parte de las negociaciones, junto al peñi Ricardo Gallina y otros de Lepoy y Quepuka. Nosotros veíamos que era favorable para nuestra gente permutar las tierras. Había mucha pobreza, casi ningún futuro para nuestros hijos en esas tierras y el ofrecimiento de Endesa lo encontramos bueno, todos lo encontramos bueno, aunque era poco, casi nada, si lo comparamos hoy con lo que ofrecieron después a las Quintremán. Pero como le decía, nosotros vimos que era mejor que lo poco y nada que teníamos», señala. «Sabíamos que estaba lejos, que la tierra no era muy buena, pero también veíamos que Endesa iba a construir buenas casas, teníamos la palabra de Endesa,

que se comprometió también a seguir apoyándonos por 10 años, ellos dijeron que no nos iban a dejar solos», agrega.

«Algunas cosas se cumplieron en los primeros años. Algunas veces mal, otras veces a medias, otras veces bien. Nos pedían paciencia cuando pedíamos proyectos, asistencia y esas cosas. El tiempo pasó y comenzamos a darnos cuenta de que nos estaban mintiendo. La luz eléctrica, por ejemplo, que prometieron instalar apenas llegáramos, recién hace dos años que llegó y ahora a todos nos están cobrando. Y el que no paga, simplemente se la cortan. Nosotros estamos ahora con velas, con lamparines a parafina, ya que no hay plata para pagar las cuentas. Tenemos los postes y los medidores de bonito en nuestras casas y eso es una burla, una verdadera burla...», nos cuenta Puelma enrabiado.

«Otra cosa es la tierra. Acá nadie es propietario, esto sigue siendo un fundo, claro que con otro dueño. No hay títulos de propiedad, solo un comprobante que no tiene validez legal, según nos han dicho los abogados. Más encima, como han pasado los años, las cosas que Endesa construyó cuando llegamos ya no sirven. Las casas, por ejemplo, gotean en invierno, la madera se está pudriendo porque resultó ser de mala calidad, los puentes están casi todos a punto de caerse y la micro funciona sólo a veces, dependiendo del tiempo, de la nieve. Nosotros hemos reclamado esto, pero hoy nos dicen que Endesa no tiene responsabilidad, porque solo eran un compromiso, que nada de eso aparece en los documentos firmados», denuncia el ex dirigente.

Y lo peor de todo es que los años pasan, implacables, agrega el peñi Domingo. «Sólo nos quedan un par de años con ayuda, luego la empresa se irá de la zona y quedaremos solos, abandonados a nuestra suerte aquí en la cordillera... Ya se están yendo todos, eso estamos viendo acá en la comunidad. Si ya ni nos visitan, siendo que antes pasaban a cada rato. Eso nos duele en el alma porque nosotros confiamos en lo que nos dijeron al permutar, confiamos en sus palabras. Por eso decimos ahora que fuimos engañados, estafados por esta empresa extranjera que se aprovechó de la gente pehuenche».

En teoría y mirándolo desde un plano estrictamente económico, el Plan de Relocalización de Endesa significaba un buen negocio. A no ser por un solo detalle. Bueno,

digamos dos: la elevada altura cordillerana en que estaban ubicados los terrenos y que, según diversos informes, hacían imposible la permanencia humana por más de cuatro meses al año, y la poca voluntad de Endesa de cumplir finalmente con lo pactado con cada una de las familias. El tema de la altura de los terrenos no era menor. Condiciones climáticas extremas en invierno, suelos no aptos para la ganadería, mucho menos para la agricultura y una evidente lejanía de los centros poblados aconsejaban desde hace mucho tiempo no realizar en El Barco ningún intento de reasentamiento humano.

En los hechos, se trataba de terrenos solo aptos para «veranadas», tal como lo señalaba de manera categórica un estudio elaborado por Raúl Molina y Martín Correa para la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), antecesora de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Dicho estudio, denominado «Las Tierras Pehuénche del Alto Bio-Bio», es claro en señalar que las tierras del Fundo El Barco constituían «veranadas», debiendo ser «bajados» sus animales durante el invierno hacia las partes bajas del sector de Guayalí, «donde los inquilinos del fundo arrendaban talaje para su mantención».

Sendos informes de organismos gubernamentales alertaban además sobre esta situación. Es así como el año 1998, en plena etapa de evaluación de las permutas por parte de la propia CONADI, un informe sobre el plan de desarrollo productivo de los predios El Huachi, Santa Laura y El Barco, encargado en agosto de 1998 por el entonces Intendente Martín Zilic, señalaba textualmente que el fundo estaba «en el límite de la desertificación» y que «no debería usarse en actividades agropecuarias» si lo que se buscaba era cautelar la sustentabilidad de la cuenca hidrográfica a la que pertenecía. La comisión encargada de elaborar el informe la integraron profesionales de la Seremi de Agricultura, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Chillán, INIA-Quilmapu, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

A diferencia de lo sostenido por Endesa, el informe indicaba que el predio se encontraba en una zona agroecológica muy frágil, señalando además que la parte del fundo que Endesa había destinado para invernadas

estaba sometido durante gran parte del año a constantes bajas temperaturas y nevadas. Huelga destacar que los resultados del informe fueron silenciados por la empresa y solo pudieron ser conocidos por la opinión pública en octubre de 1998 a través de una denuncia del diputado de la Bancada Verde, Alejandro Navarro (PS). Sin embargo, el poderoso lobby de Endesa fue más fuerte y rápidamente todas estas observaciones quedaron en el olvido. Ni al gobierno de Eduardo Frei, dicho sea de paso uno de los beneficiados por el holding español, ni a los propios pehuenche, maravillados por una «mejora» de última hora en la oferta de permuta de Endesa, les interesaba por aquellos días arruinar el negocio.

Pero el informe de este comité técnico no fue el único documento sobre su intervención en el Alto Bio-Bio que Endesa intentó mantener en reserva. En mayo de 1995, producto de las críticas de grupos ecologistas a la Fundación Pehuén -creada por Endesa para ayudar en teoría a los pehuenches afectados por la central Pangué-, la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad encargada de financiar esa central, contrató al antropólogo Theodore Downing para que evaluara el funcionamiento de la fundación. El acuerdo incluía informar de los resultados a todas las partes involucradas, incluidos los pehuenches. Downing viajó a Chile en octubre de 1995 y en mayo del año siguiente entregó su informe, el cual jamás llegó a manos de los pehuenches ni menos a la opinión pública. Endesa lo rechazó y amenazó a la IFC y al antropólogo con demandarlos si lo hacían público. De acuerdo a la Asociación Americana de Antropología, entidad a la cual Downing elevó los antecedentes para su investigación, «la entrega del informe hubiera perjudicado los esfuerzos de Endesa para que se aprobara Ralko».

En diciembre de 1997, cuando ya la Comisión Nacional del Medio Ambiente había aprobado con condiciones la construcción de Ralko, se autorizó a Downing a entregar su informe. Nadie ajeno a Endesa supo antes de su existencia, asegura hoy el diputado Alejandro Navarro, quien sostiene que tampoco se conoció el informe elaborado por el ecólogo Jay Hair, por petición del Banco Mundial, en mayo de 1997. Hair habría llegado a las mismas conclusiones que

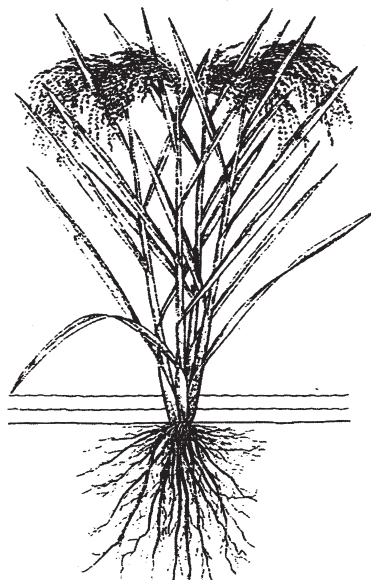
Downing, según consta en el informe final de la Asociación Americana de Antropología.

Originalmente el Fundo El Barco fue propuesto por Endesa como medida de mitigación ecológica por la pérdida de unas 3.000 hectáreas de bosque nativo que quedarían bajo inundación o serían afectadas por las obras del mega-proyecto. Para tal efecto, la empresa planteó un esquema de manejo similar y complementario al de la Reserva Nacional Ralko. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Endesa cambió su postura y abiertamente presentó el Fundo El Barco como espacio para la relocalización de las familias pehuenche afectadas por la inundación de sus tierras.

«Endesa sabía que estas tierras no eran aptas para vivir y nosotros de alguna forma también lo sabíamos. Pero confiamos en los apoyos que nos prometieron para el futuro, en los proyectos, en su Plan de Asistencia. Nosotros, creo yo, fuimos ingenuos y no supimos negociar... nos faltó asesoría, apoyo, saber más de estas cosas. Imagínese, muchos de quienes viven aquí son gente que no sabe leer, escribir... y

ellos llegaban con abogados, antropólogos, psicólogos, con un regimiento de gente para convencernos de permutar. «Van a tener progreso», nos decían. «Piensen en sus hijos». Ese era el discurso que traían. Yo me pregunto, adónde están ahora todos ellos... no están... nos dejaron solos», concluye el peñi Domingo.

Actualmente, la comunidad El Barco cuenta con una superficie total de 19.270 hectáreas, de las cuales menos de mil corresponden a terrenos aptos para algún tipo de actividad económica de subsistencia. Son 32 las familias que mal viven en estos inhóspitos parajes. A ellos se suman otras 34 familias que actualmente habitan el fundo El Huachi y que conforman la comunidad Ayinmapu, en las cercanías de la localidad de Santa Bárbara y quienes deben lidiar hoy con la cesantía y una progresiva pérdida de sus valores culturales. Son los modernos refugiados de Endesa, aquellos que no estuvieron presentes en los discursos del 27 de septiembre de 2004, sobre el muro de la flamante central hidroeléctrica Ralko.



LE MONDE



diplomatique

edición española

"IMPRESCINDIBLE PARA LA SUPERVIVENCIA..."
(M. VALDÍEZ MONTALEÁN)

LE MONDE
diplomatique
edición española

Una vez al mes le damos la vuelta al mundo.



Cuando todos los medios parecen dejarse llevar por la velocidad, la aceleración, la fascinación por la instantaneidad del "tiempo real", en Le Monde diplomatique declinamos que lo importante es, por el contrario, reducir la velocidad, frenar un poco, darse el tiempo necesario para analizar, dudar, reflexionar... No aceptar que la "actualidad" nos

sea defraudada por la televisión y los grandes medios, en función de intereses puramente dramáticos... Cuando triunfan por todas partes los expertos, los especialistas, los que saben "cada vez más sobre cada vez menos", tratamos de proponer una lectura pluridisciplinar, para ver cada problema a través del prisma de sus cinco dimensiones esenciales: política, económica, social, cultural y ecológica...

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

LE MONDE
diplomatique
edición española

TARIFA (1 año): Península y Baleares 6.000 Ptas.
Canarias 6.400 Ptas.
TARIFA (2 años): Península y Baleares 12.000 Ptas.
Canarias 12.800 Ptas.

Nombre y apellidos _____
Dirección _____
Población _____ Provincia _____ C.P. _____
Teléfono _____ Suscripción a partir del número (incluímos): _____

FORMA DE PAGO:

Adjunto saldo bancario Giro postal número _____

Pretransferencia Le Monde Diplomatique Ed. Española
Banco (depósito en: 9842 9030 44 0000021407)

Otros medios bancarios (completar nombre y número adjunto)

Cuenta de crédito _____ Fecha de caducidad _____ (Mes)

TARIFA DE SUSCRIPCIÓN EXTRANJERO: 4 años (la entrega América Latina: 12.000 - por 200 € IVA) / Unión Europea: 6.000 - por / Anglia, Marruecos, Tíbet: 8.000 - por

REMITIR A: "LE MONDE DIPLOMATIQUE" Ed. Española
Pta. Marina Española, 5-2º 28013 - MADRID - ESPAÑA

DIRECCIÓN DEL BANCO O CAJA DE AHORROS

Domicilio Agencia _____
Oficina _____ Círculo _____
Población _____
Provincia _____
Sujección _____
Código bancario completo: _____
Banco: _____ Agencia: _____ C.C.: _____ Nº de Cuenta Corriente _____

Reservados todos los derechos que no estén expresamente permitidos en concepto de suscripción contra el C.C.

(Mes)



Redes de resistencia

Foro por la Soberanía Alimentaria, nuevas alianzas

Esther Vivas

El conflicto en torno al puerto de Granadilla

Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza
y Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción

«Guerras del agua» en Suráfrica: movilizaciones contra la privatización

Josep M^a Antentas

Sentencia del tribunal permanente de los pueblos. Sesión Colombia

Foro por la Soberanía Alimentaria, nuevas alianzas

Esther Vivas*

La lucha por la soberanía alimentaria avanza. Mujeres, pescadores, consumidores, pastores, trabajadores inmigrantes, indígenas... se han sumado al movimiento campesino en la lucha por la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas agrícolas y alimentarias. Éste ha sido el principal logro del Foro por la Soberanía Alimentaria celebrado en la aldea de Sélingué, al sur-oeste de Malí, del 23 al 27 de febrero.

El encuentro, organizado por la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores y otras organizaciones, sumó a más de 500 delegadas y delegados de ochenta países de sectores como el campesino, la pesca, el consumo... El objetivo era llevar a cabo un debate estratégico sobre qué se entiende desde los movimientos sociales por soberanía alimentaria, qué propuestas concretas se reivindican y cómo llevarlas a cabo.

UN ESPACIO DE TRABAJO

El Foro por la Soberanía Alimentaria no consistía en un foro social al uso en la línea de los foros sociales internacionales y regionales, no se trataba de un foro abierto a todo el público sino que los delegados y delegadas asistentes habían sido invitados especialmente para el encuentro, manteniendo en todo momento un equilibrio en el número de participantes de todas las regiones y sectores. Se trataba de realizar un foro de trabajo donde poder acordar estrategias, líneas de



REDES DE RESISTENCIA

acción y no limitarse a ser un mero punto de encuentro y de intercambio.

La celebración del foro en uno de los países más pobres de África, así como su realización en el campo, fue una decisión política que tenía como objetivo el poder debatir sobre agricultura y alimentación en un marco rural que diera coherencia al encuentro y que permitiera mostrar un equilibrio entre las propuestas de soberanía alimentaria y los medios necesarios para conseguirla.

* *Xarxa de Consum Solidari (esther.vivas@pangea.org).*

Para lograr estos objetivos, el foro desarrolló una metodología concreta que permitía el debate por ejes y su aprobación a través de grupos sectoriales y regionales. En concreto los debates se llevaron a cabo en siete grupos temáticos: comercio internacional, conocimiento local, acceso a los recursos naturales, territorio, conflictos, migraciones y modelos de producción. Cada uno de estos grupos realizó la discusión partiendo de tres preguntas concretas: ¿Por qué luchamos? ¿Contra qué? ¿Qué podemos hacer?

LAS MUJERES, UNA PIEZA CENTRAL

Las mujeres tuvieron un papel central como dinamizadoras y participantes en el evento. Un día antes del inicio del foro se celebró, en el mismo recinto, un encuentro promovido por la Marcha Mundial de Mujeres con dos objetivos concretos: poner en común las opiniones de las mujeres sobre soberanía alimentaria y establecer aportaciones conjuntas al foro. Las mujeres reunidas reclamaron el mito de Nyéléni, una mujer campesina maliense que luchó por afirmarse como

mujer en un entorno desfavorable. De hecho, el Foro por la Soberanía Alimentaria recibió el sobrenombre de Nyéléni en homenaje a esta leyenda.

Delegadas de países de África, América, Europa, Asia y Oceanía, integrantes de distintos sectores y movimientos sociales, asistieron al encuentro y señalaron al sistema capitalista como responsable de las violaciones de los derechos de las mujeres. Como indicaron las mismas participantes en la declaración final: «El modelo industrial y las transnacionales amenazan la existencia de la agricultura campesina, de la pesca artesanal, de la economía pastoril y también de la elaboración artesanal y del comercio de alimentos a pequeña escala en zonas urbanas y rurales, sectores donde las mujeres juegan un rol importante».

Hay que tener en cuenta que en los países del Sur las mujeres producen hasta un 80% de los alimentos y que por lo tanto son las principales responsables del mantenimiento de la diversidad, de las semillas y en consecuencia son también las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas. Un ejemplo es el acceso a la tierra: en muchos países las leyes prohíben que las mujeres tengan derecho a





la tierra, y en aquellos donde legalmente tienen acceso las tradiciones y las prácticas se lo impiden.

MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El concepto de soberanía alimentaria se hizo público por primera vez en el año 1996 en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma a raíz de la propuesta de Vía Campesina. Una estrategia que significaba romper con las políticas agrícolas neoliberales impuestas por la OMC, el BM y el FMI.

Se trataba de un concepto que trascendía el término utilizado hasta entonces de seguridad alimentaria y colocaba en el centro del debate político a los productores agrícolas,

apoyándoles en su lucha por producir alimentos al margen de las condicionalidades impuestas por el mercado. Un principio que rompía con el mito de que sólo los mercados internacionales podrían resolver la cuestión de la inseguridad alimentaria y priorizaba los mercados locales y nacionales, fortaleciendo la agricultura, la pesca y la ganadería familiar y colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Si desde sus orígenes el concepto político de soberanía alimentaria había sido defendido principalmente por los colectivos campesinos, ahora nuevos sectores se han unido en su defensa. El Foro por la Soberanía Alimentaria abre una nueva etapa en la lucha de los pueblos por la soberanía alimentaria.



Declaración de Nyéléni

Declaración final del Foro por la Soberanía Alimentaria

Del 23 al 27 de febrero de 2007 Nyéléni, Selingue, Mali

Nosotros y nosotras, los más de 500 representantes de más de 80 países, de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos, nos hemos reunido en el pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí para fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria. Lo estamos haciendo, ladrillo por ladrillo, viviendo en cabañas construidas a mano según la tradición local y comiendo alimentos siendo producidos y preparados por la comunidad de Selingue... Hemos dado a nuestro trabajo el nombre de «Nyéléni,» como homenaje, inspirados en la leyenda campesina maliense que cultivó y alimentó a su gente.

La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos y estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como productores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad. Este particularmente el caso de mujeres y pueblos indígenas que son creadores de conocimiento ancestrales sobre alimentos y agricultura, y que son subvalorados. Pero esta herencia y esta capacidad para producir alimentos nutritivos, de calidad y en abundancia, se ven amenazada y socavada por el neoliberalismo y el capitalismo global. Frente a esto, la soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para producir alimentos.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y dismantlar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

En Nyéléni, gracias a los muchos debates y a la intensa interacción, estamos profundizando en nuestro concepto de soberanía alimentaria, y hemos intercambiado acerca de la realidad de las luchas de nuestros respectivos movimientos para conservar la autonomía y recuperar nuestro poder. Ahora entendemos mejor los instrumentos que necesitamos para crear un movimiento y promover nuestra visión colectiva.

¿En pos de qué luchamos?

Un mundo en el que ...

... todos los pueblos, naciones y estados puedan decidir sus propios sistemas alimentarios y políti-





cas que proporcionen a cada uno de nosotros y nosotras alimentos de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados;

... se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos y la representación de las mujeres en todo los órganos de toma de decisiones;

... todos los pueblos de cada uno de nuestros países puedan vivir con dignidad de su trabajo, y puedan tener la oportunidad de vivir en sus lugares de origen;

... la soberanía alimentaria sea considerada un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los pueblos, los estados y las instituciones internacionales;

... podamos conservar y rehabilitar los entornos rurales, zonas pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el ganado y biodiversidad;

... valoremos, reconozcamos y respetemos la diversidad de nuestro conocimiento, alimentación, lenguas y nuestras culturas tradicionales, y el modo en el que nos organizamos y nos expresamos;

... exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y ecosistemas, que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todo los trabajadores, y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para las mujeres y los hombres ...donde se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos;

... compartamos nuestros territorios en paz y de manera justa entre nuestros pueblos, ya seamos campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas u otros;

... si se viven catástrofes naturales y provocadas por las personas, y situaciones posteriores a los conflictos, la soberanía alimentaria actúe como una auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el impacto negativo. En el que se tenga presente que las comunidades afectadas desamparadas no son incapaces, y donde una sólida organización local para la recuperación por medios propios constituya la clave para la recuperación;

... se defienda el poder de los pueblos para decidir sobre sus herencias materiales, naturales y espirituales.

¿Contra qué luchamos?

El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos;

El dumping de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global;

El control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ganancias a las personas, la salud y el medioambiente;

Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria en el futuro, dañan el medioambiente y ponen en peligro nuestra salud. Éstas incluyen los cultivos y animales transgénicos, tecnología terminator, acuicultura industrial y prácticas pesqueras destructivas, la llamada «Revolución blanca» de las prácticas industriales en el sector lácteo, las llamadas «Nueva y vieja Revoluciones Verdes», y los «Desiertos Verdes» de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones;





La privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural;

Proyectos / modelos de desarrollo y industrias de extracción que desplazan a los pueblos y que destruyen nuestro medioambiente y nuestra herencia natural;

Guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de sus tierras, y todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; y los programas de reconstrucción tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro medioambiente y capacidades;

La criminalización de todos aquellos que luchan por proteger y defender nuestros derechos;

La ayuda alimentaria que encubre el dumping, introduce OGM en los entornos locales y los sistemas alimentarios y crea nuevos patrones de colonialismo;

La internacionalización y la globalización de los valores paternalistas y patriarcales que marginan las mujeres y las diversas comunidades agrícolas, indígenas, pastoriles y pesqueras en el mundo;

¿Qué podemos hacer y haremos al respecto?

De la misma manera en la que estamos trabajando con la comunidad de Selingue para crear un espacio de encuentro en Nyéléni, nos comprometemos a construir nuestro movimiento colectivo para la soberanía alimentaria, forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por la soberanía alimentaria, independientemente de en qué lugar del mundo se libere, es nuestra lucha.

Hemos acordado una serie de acciones colectivas para compartir nuestra visión de la soberanía alimentaria con todos los pueblos del mundo, que están detalladas en nuestro documento de síntesis. Llevaremos a cabo estas acciones en cada una de nuestras respectivas áreas locales y regiones, en nuestros propios movimientos y conjuntamente en solidaridad con otros movimientos. Compartiremos nuestra visión y nuestra agenda de acción para la soberanía alimentaria con aquellos que no hayan podido estar con nosotros en Nyéléni, para que el espíritu de Nyéléni se disemine en todo el mundo y se convierta en una poderosa fuerza que haga de la soberanía alimentaria una realidad para los pueblos de todo el mundo.

Por último, damos nuestro apoyo incondicional y absoluto a los movimientos campesinos de Mali y a ROPPA en su lucha para que la soberanía alimentaria se convierta en una realidad en Mali y por extensión en toda África.

¡Es hora de la soberanía alimentaria!



El conflicto en torno al puerto de Granadilla

**Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza*
y Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción***

Hace ya varios años que en Tenerife se ha planteado un conflicto con dimensiones de carácter económico, social y ambiental, entre un numeroso sector de la ciudadanía y los representantes políticos, que surge a raíz del proyecto de construcción de un puerto industrial en la zona sureste de la isla.

El Gobierno de Canarias afirma que la construcción del puerto de Granadilla generará riqueza y empleo, pero a partir del estudio «Impacto económico del tráfico de contenedores del Puerto Bahía de Algeciras (PBA)», dirigido por el prof. Daniel Coronado (Universidad de Cádiz), parece claro que el tráfico de trasbordo de contenedores no justifica la construcción del puerto.

Veamos los datos: el PBA movió, en 2003, un volumen de 2.517.318 TEUS.¹ De esta cifra, 2.369.033 fueron tráfico de trasbordo y 148.285 tráfico import/export. El empleo total generado no llegó a 5.000 personas, de las que 3.883 es el generado por el tráfico de trasbordo y 970 el generado por el tráfico import/export. La riqueza creada, en términos de valor añadido, es la siguiente: el tráfico import/export generó un valor añadido de 37,2 millones de euros, mientras que el tráfico de trasbordo generó un valor añadido de 196 millones de euros.

Los datos expuestos se refieren a un puerto, el PBA, que movió más de 2.500.000 de contenedores. ¿Podrá captar



alguna vez el proyectado puerto de Granadilla esos más de 2.500.000 de TEUS? ¿De dónde?

Se trata de preguntas muy relevantes, puesto que el tráfico de contenedores de los puertos del Oeste de África (datos oficiales para 2003 ofrecidos por D. Coronado), asciende a 3.273.727 TEUS, de los que los puertos de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria mueven ya, en la actualidad, un total de 1.537.437 TEUS. Al mismo tiempo, el tráfico de contenedores en la Región Comercial del Sur de África asciende a 2.339.401 TEUS. Además, en el Informe realizado por la Consultora TEMA para la autoridad portuaria de Tenerife en noviembre de 1997 se reconoce textualmente que «los tráficos norte-sur constituyen el mercado natural del nuevo puerto de Granadilla» y que «en el comercio Europa-África occidental y del Sur (...) existe, en estos momentos, un mercado estimable en 300.000 TEUS/año».

Por lo tanto, si ese es el mercado estimable, es suficiente con ampliar un poco el puerto de Santa Cruz. Téngase en

* atan@teide.net.

** rincon@benmagec.org.

¹ Twenty-foot equivalent units (TEUS): Unidad utilizada en el ámbito de los contenedores. Corresponde en unidades del sistema internacional a 6.10 m (largo) × 2.44 m (ancho) × 2.59 m (alto), es decir aproximadamente 38.5 m³.



cuenta que, según los datos de la autoridad portuaria de Tenerife, en el año 2004 se han movido en Santa Cruz algo menos de 400.000 TEUS, cuando su capacidad potencial es de 618.000 TEUS/año. Si añadimos que la ampliación, ya en marcha, de la Dársena del Este (en el mismo puerto de Santa Cruz), aumentará la superficie de carga y descarga en 205.000 m², lo que permitirá un movimiento adicional de más de 600.000 nuevos TEUS/año, y que el coste previsto de esta ampliación es de 14.000.000 de euros, cifra casi 10 veces menor que el presupuesto del dique de abrigo del puerto de Granadilla, la construcción del puerto de Granadilla queda sin justificación desde el punto de vista económico y social.

Más aún, se ha reconocido por técnicos de la Comunidad canaria, y también a nivel de la Unión Europea (UE), los graves impactos que su construcción produciría sobre dos Lugares de Importancia Comunitaria, un hábitat prioritario, una especie en peligro de extinción (*Atractylis preauxiana*) y una especie prioritaria (*Caretta caretta*), que se encuentran en las cercanías de la zona donde pretende construirse el puerto.

El Gobierno de Canarias, incapaz de contestar a estos argumentos, acordó, el 6 de mayo de 2002, considerar de interés público de primer orden para Canarias el proyecto denominado «Nuevo puerto de Granadilla de Abona» debido a: «el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones (Puerto de Santa Cruz) de las que depende

la economía insular», y «porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife que la prevista en Granadilla, no constituyendo una ampliación de las actuales instalaciones portuarias una alternativa posible».

Ante este atropello que ignora argumentos e impone decisiones autoritarias, los ciudadanos presentan quejas y denuncias ante la UE y recursos contencioso-administrativos contra diversos actos vinculados a la construcción del puerto. Pero la lucha también está en la calle: en noviembre de 2004 más de 100.000 personas se manifiestan contra la construcción del puerto de Granadilla, después de haber recogido más de 55.000 firmas para presentar al Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a la protección del litoral donde se encuentra Granadilla con fundamento en los valores ambientales presentes en la zona. A pesar de que se trata de la ILP que más apoyos ha recabado en la historia de la autonomía canaria, ni siquiera fue admitida a trámite.

Todavía esperábamos algo de la Unión Europea y en concreto de la Comisión. Sin embargo, el Dictamen elaborado el 6 de noviembre de 2006 nos ha dejado estupefactos. Entre los argumentos esgrimidos por la Comisión para decir que es inviable ampliar el puerto de Santa Cruz alude al impacto negativo que tendría sobre los habitantes de Santa Cruz la ampliación del puerto, olvidando que los ciudadanos de la capital llevan tres años padeciendo las obras de construcción de un tranvía en medio de la ciudad; añade que no dispondría de una cantera en las proximidades, ignorando que en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife se recoge la existencia de una cantera localizada en la zona portuaria-industrial de Santa Cruz, con volumen de recurso de unos 30.000.000 m³, suficiente para realizar los rellenos previstos en cualquiera de las alternativas de ampliación del puerto capitalino presentadas a la Comisión; afirma que no se dispondría del terreno necesario para el desarrollo de las actividades industriales y logísticas en las zonas conexas, cuando algunas de las alternativas presentadas igualan o superan las superficies útiles previstas en Granadilla; señalan que comprometería el plan de desarrollar una terminal de almacenamiento de gas natural, sin cuestionar siquiera la posibilidad de buscar fuentes de energía alternativas al gas

y sin plantear la hipótesis de construir esa misma terminal en el puerto de Santa Cruz.

Ante tales despropósitos, hemos acudido al Parlamento Europeo a través de la figura de las preguntas parlamentarias con el objeto de poner en tela de juicio las afirmaciones de la Comisión. Situadas en la balanza la protección medioambiental y la construcción de una infraestructura por ra-

zones de interés público de primer orden, debe prevalecer la primera sobre todo porque la noción de interés público se ha construido sobre bases falsas. Además, continuamos denunciando y recurriendo todos los actos relativos a la construcción del puerto, y no descartamos recurrir a la desobediencia civil en el caso de que comiencen a ejecutarse las obras.



«Guerras del agua» en Sudáfrica: movilizaciones contra la privatización

Josep Maria Antentas*

Sudáfrica, en el marco de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno, ha sido escenario de intensas políticas de privatización de los servicios públicos y del agua, en especial a través de la instalación de mecanismos de prepago por los servicios, en beneficio de multinacionales como Suez. El resultado ha sido un aumento del precio del agua y la falta de un acceso digno a la misma por parte de los sectores más pobres del país. Los procesos de mercantilización han desencadenado fuertes resistencias sociales protagonizadas por dichos sectores en áreas como Orange Farm y Phiri, en Johannesburg, en defensa del derecho al agua.

Las políticas neoliberales de mercantilización del agua han generado múltiples conflictos durante los últimos años a lo largo y ancho del planeta. Estos han tenido muchas expresiones: luchas contra la privatización, contra la construcción de presas, contra la extracción de agua para la exportación, en defensa de una gestión del agua ecológicamente responsable... (Barlow y Clarke, 2002). Sudáfrica ha sido uno de los lugares donde se han desarrollado algunas de estas verdaderas «guerras del agua». La privatización de la gestión del agua en Sudáfrica se enmarca en el programa económico neoliberal que el gobierno del Congreso Nacional Africano adoptó a partir de 1996, el llamado *Growth, Employment, and Redistribution Strategy (GEAR)*, cuyas consecuencias sociales han sido muy severas para el grueso de los sectores populares del país, golpeados por la pobreza y el desempleo.

Desde entonces, en el marco de unas políticas consideradas «modélicas» por parte del Banco Mundial, los servicios públicos han sido privatizados y se han guiado por

el principio de «recuperación de costes» (*cost recovery*) por el cual se pretende hacer pagar al consumidor los costes de la implementación y suministro de los servicios. Estas políticas provocaron un aumento de las tarifas de servicios básicos como el agua o la luz, y cortes masivos del suministro debido al impago de las facturas por parte de las familias pobres. Así, en el año 2001 se contabilizaban más de 10 millones de familias con cortes de agua y/o luz por esta razón. El impacto de estas políticas provocó desde finales de los años noventa la emergencia de crecientes resistencias sociales que experimentaron un período de auge imparable del año 2000 al 2003, para después contraerse parcialmente. Estas luchas por la supervivencia cotidiana han estado protagonizadas por los habitantes de las áreas

* Profesor del Departamento de Sociología de la UAB. Miembro de la redacción de la revista *Viento Sur* (www.vientosur.info), email: josepmaria.antentas@uab.es

urbanas más degradadas y por los sectores más pobres (Antentas, 2006).

Las luchas contra la privatización del agua aunque se han dado en varias regiones del país se han desarrollado con más fuerza sobretodo en el área de Johannesburg. La privatización del agua en la ciudad se enmarca en el plan de privatización municipal de los servicios públicos *iGoli 2002* aprobado a finales de los noventa. El plan conllevó la transferencia de la gestión cotidiana, vía proceso de subcontratación, de la compañía municipal de aguas *Johannesburg Water* a una filial de la multinacional francesa Suez, una de las grandes compañías que lideran el sector del agua a escala mundial. La privatización comportó un aumento sustancial de las tarifas, en particular entre la gente pobre de los *townships* y zonas degradadas, y un fuerte aumento de los cortes de suministro por impago.

Las políticas de privatización experimentaron un salto cualitativo en el año 2003 con la puesta en marcha de mecanismos de prepago en Orange Farm y Phiri (Soweto), dos áreas degradadas y pobres. La instalación de «contadores de prepago» no era, sin embargo, una experiencia inédita y de hecho había empezado en regiones como KwaZulu Natal en 2000, donde el proyecto fue cancelado después que estallara una epidemia de cólera debido a la utilización de aguas no potables por parte de las familias que no podían pagar el agua. El mecanismo del prepago consiste en la instalación en cada hogar de un contador individualizado. Cada hogar recibe gratis 6000 litros mensuales, cantidad que para una familia media de ambas localidades está por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera el mínimo para una existencia digna. A muchas familias esta cantidad se les agota en la segunda semana de cada mes. A partir de ahí, para obtener más agua, hay que pagarla por adelantado. Sólo quienes pueden hacerlo tienen el suministro. El sistema de los «contadores de prepago» permite un mayor control por parte de las compañías, que se ahorran tener que lidiar con los atrasos en el pago de los recibos muy habituales entre los barrios pobres, y se aseguran el cobro automático del servicio. Si el mecanismo tradicional de cortes de suministro sanciona al usuario a posteriori, debido al impago, el mecanismo del contador de prepago sanciona al usuario

antes de tener acceso al servicio. Las políticas de prepago suponen una profundización extrema de la mercantilización del agua y hacen responsable individualmente a cada persona de conseguir el acceso al agua. De hecho, como señalan Ngwane y Veriava (2004), el «contador de prepago» simboliza perfectamente la lógica neoliberal: la mercantilización de los bienes básicos públicos y el desarrollo de nuevas formas de control social.

La instalación de contadores de prepago levantó fuertes resistencias en Phiri y en Orange Farm. Éstas, con un protagonismo central de las mujeres, han incluido varias formas de lucha, como el bloqueo físico a la instalación de los contadores o la reconexión ilegal al suministro de agua de los hogares sin servicio. De las luchas emergieron en el año 2003 la *Coalition Against Water Privatization* y la *Orange Farm Water Crisis Committee* respectivamente, las cuales contaron con el apoyo del *Anti-Privatization Forum (APF)*, un espacio de coordinación de luchas contra la privatización creado en el año 2000. En la actualidad, la lucha contra la política de prepago sigue en pie. En julio de 2006 cinco residentes de Phiri, con el apoyo de la *Coalition Against Water Privatization*, presentaron formalmente una querrela contra *Johannesburg Water*, denunciando que la decisión unilateral de instalar contadores de prepago y limitar el suministro gratuito de agua a 6000 litros mensuales por familia es inconstitucional e ilegal.

Junto con la resistencia local, los activistas contra la privatización en Sudáfrica han buscado ligarse con luchas similares en otros países, en particular en el continente africano, donde en el marco de la última edición del Foro Social Mundial en Nairobi fue lanzada la *African Water Network* con el objetivo de favorecer la coordinación internacional de las luchas. Este es un paso más para reforzar las campañas internacionales en defensa del derecho al agua, que se han venido expresando en varios marcos como los Foros Sociales, las contra-cumbres durante los Encuentros de la OMC, o las movilizaciones paralelas durante el Foro Mundial del Agua, dominado por las multinacionales del sector y el Banco Mundial y cuya última edición se celebró en marzo del 2006 en Ciudad de México, atrayendo a más de 30.000 manifestantes (Bond, 2006).



REFERENCIAS

AA VV (2005), *Por una nueva cultura del agua*. El Viejo Topo, Barcelona.

ANTENTAS, J M. (2006), «Sudáfrica: resistencias al neoliberalismo», *Viento Sur* nº 85. p. 41-46.

BARLOW, M. y CLARKE, T. (2002), *Blue Gold*, LeftWord, Delhi.

Bond, P. (2006), «Water activists Turn On the Taps and Turn Up The Pressure», Zmag, www.zmag.org

NGWANE, T. y VERIAVA, N. (2004), «Strategies and Tactics: Movements in the Neoliberal Transition», *Development Update*, vol. 5 nº 2. p. 129-146.

Novedades Icaria



ISBN 978-84-7426-858-4
PP. 200 - PVP 18

ÁFRICA EN AUXILIO DE OCCIDENTE

Saber vivir, saber hacer

ANNE-CÉCILE ROBERT

¿Y si fuera Occidente y no África quien precisara de ayuda? ¿Y si fuera el continente africano el que tuviera que acudir en auxilio de Occidente? Mientras que el capitalismo globalizado está vulnerando peligrosamente al planeta, África podría, a partir de su patrimonio cultural, aportar una visión más armoniosa y más equilibrada de la relación entre los humanos y la naturaleza. Sin caer en la idealización de una África mítica, ni negar la dramática situación en la cual se encuentra a menudo el continente negro, el libro sugiere que el pretendido «retraso» de África no es más que la expresión de una enorme resistencia cultural ante un modelo económico devastador.

Anne-Cécile Robert es periodista de *Le Monde diplomatique* y profesora asociada del Institut d'Études Européennes de la Universidad de París VIII.



ISBN 978-84-7426-917-8
PP. 192 - PVP 16

SUPERMERCADOS, NO GRACIAS

Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas

XAVIER MONTAGUT y ESTHER VIVAS

La aparición, en el transcurso del siglo XX, de la llamada distribución moderna ha cambiado el dónde, el cómo y lo que consumimos, poniendo nuestro consumo al servicio de la lógica del mercado y de la maximización de sus beneficios. Con este libro queremos poner de relieve la cara oculta de estas grandes cadenas de distribución comercial, su lógica de funcionamiento y sus impactos en la agricultura, en los derechos de los trabajadores, en los países del Sur, en el medio ambiente y en el modelo de consumo.

Xavier Montagut es licenciado en economía y especialista en comercio internacional, consumo responsable y comercio justo. Es presidente de la Xarxa de Consum solidari

Esther Vivas es licenciada en periodismo y diplomada en estudios superiores de sociología. Coordina el área de sensibilización de la Xarxa de Consum Solidari.

Más información:

www.icariaeditorial.com - Blog Icaria: www.icarialibros.blogspot.com



Audiencia Preliminar Petrolera

Tribunal Permanente de los Pueblos

Sesión Colombia

Saravena, Arauca, diciembre 11 al 13 de 2006

Miembros de las Organizaciones Sociales de Arauca, del Observatorio Social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia, representantes de sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas, Indígenas, populares, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y, venidas de distintas regiones de Colombia y de otros pueblos del mundo, nos reunimos para dar inicio al proceso de enjuiciamiento de la política de las transnacionales petroleras presentes en el país y del estado colombiano que privatiza la empresa estatal petrolera y entrega el recurso natural a los consorcios internacionales.

Las gigantescas inversiones del capital transnacional por parte de Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y REPSOL principalmente, y la necesidad de garantizar la explotación del recurso natural, han sido el principal motivo de la militarización y puesta en marcha de la política de seguridad democrática en departamentos como Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare.

La militarización de la región, el asesinato selectivo, los bombardeos, las masacres, el desplazamiento y la persecución judicial y política contra las organizaciones sociales que se resisten a estos proyectos, ha sido el mecanismo utilizado por el estado y las transnacionales para debilitar y aniquilar las organizaciones sociales; todo esto con el apoyo en asesoría y recursos del gobierno estadounidense. Para los inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de resistencia popular que impida la explotación de los recursos y el libre tránsito de mercancías.

En el desarrollo del evento se evidenciaron permanentes violaciones a los derechos humanos y el beneficio obtenido por las transnacionales con la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como:

1. Su participación directa en el incremento de acciones bélicas con resultados atroces contra la población civil, pues han financiado y fortalecido batallones del ejército para que brinden seguridad a sus instalaciones y a sus intereses económicos y han tenido influencia directa en decisiones militares. El financiamiento de las Brigadas XVI en Yopal y la XVIII en Arauca; el bombardeo de Santo Domingo –Arauca; la ejecución del Plan escudo, el asesinato en Arauca de los líderes Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto y de

varios miembros de la Asociación ACDAINSU, en Casanare; la penetración de grupos paramilitares desde áreas «protegidas» por el ejército; el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares; las Masacres; las Detenciones Masivas de 2002, 2003 y 2006; las desapariciones, torturas y desplazamientos forzados de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, son algunos casos a resaltar. El gobierno norteamericano ha jugado un rol preponderante en esta estrategia y ha sido parte activa dentro del conflicto; los aportes económicos del gobierno estadounidense fueron de 188 millones de dólares entre 2003 y 2004, sin contar con los recursos del Plan Colombia.

2. Las actividades de exploración y explotación petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad y vida de la región. No existen controles institucionales de sus actividades ni del respeto de las normas ambientales colombianas. La desaparición del Ecosistema Geoestratégico de la Laguna de Lipa, sus humedales y Caño Limón, patrimonio de la cultura indígena; la destrucción de la cadena alimentaria, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, la modificación del régimen hidrológico regional en el departamento de Arauca, el secamiento de humedales con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos, son algunos de los casos más relevantes.
3. Además las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a pueblos indígenas. Entre los casos mas relevantes podemos resaltar: los Yarigüies en el Magdalena Medio por parte de la Standard Oil, de los Sikuanes en Arauca por la OXI, los Cofanes y Sionas en el Putumayo por parte de la Argosy, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo por la BP y de los Uwas en Boyacá y Arauca por la OXI.
4. Las tácticas de negocios de las empresas transnacionales petroleras han sido un factor de corrupción, desestabilización, manipulación y sometimiento del Estado y de los intereses de la nación. Históricamente decretos, leyes y artículos de la constitución vienen siendo redactados en favor de las transnacionales. Sonados casos reportan que las regalías petroleras han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado.
5. Todos estos crímenes ocultan intereses políticos y económicos que promueven el desmantelamiento generalizado de los movimientos sociales de estas regiones. Arauca es uno de los departamentos que ha tenido que soportar una de las arremetidas militares mas violentas del régimen de Uribe, enmarcada dentro de una extraña figura denominada «Zona de Rehabilitación» que pretende recuperar el «orden público», inmovilizar los grupos guerrilleros y destruir las organizaciones sociales. Sin embargo detrás de esta ofensiva estatal con abierta colaboración paramilitar, se busca brindar seguridad a las empresas transnacionales petroleras en una de las regiones con mayor importancia geopolítica del país, por su significado como uno de los mayores corredores viales entre Colombia y Venezuela; en el aseguramiento



de las reservas, la infraestructura y los intereses de dichas empresas; y controlar la frontera con un país en el que se consolida un proyecto político popular.

Ante todos estos hechos, las organizaciones participantes decidimos establecer los siguientes retos y estrategias de acción para la consolidación de la resistencia y del proyecto de vida de las comunidades afectadas en las regiones mencionadas:

1. Detener la exploración y explotación petrolera en territorios indígenas y hacer respetar sus derechos y de las comunidades para que su voluntad sea respetada por el Estado.
2. Detener la ofensiva militar y frenar la judicialización de los dirigentes sociales, en particular de Arauca, que se han opuesto a las medidas autoritarias estatales y a la irracional actividad petrolera en la región.
3. Implementar un proceso de difusión y denuncia a nivel nacional e internacional que visibilice las verdaderas razones de la miseria, represión e impunidad en que se encuentran sumidas las comunidades de las regiones de explotación desde la llegada de las multinacionales petroleras y por la implementación de megaproyectos.
4. Generar un proceso de investigación que desvele el impacto de la explotación petrolera en la vida de la población y el medio ambiente, su relación con la violación de derechos humanos y las políticas internacionales que le sirven de sustento y obligar a las empresas petroleras a reparar los daños cometidos en contra de la naturaleza y las comunidades.

En este sentido, nos comprometemos a:

1. Fortalecer la campaña petrolera «POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, LA CULTURA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO», como un símbolo de la resistencia de la población y sus organizaciones frente a la explotación petrolera.
2. Promover formas de justicia alternativa como el Tribunal Permanente de los Pueblos y activar la estrategia jurídica integral, que desvelen ante la humanidad los crímenes cometidos por y en beneficio de estas multinacionales y trazar un plan de exigibilidad de verdad, justicia y reparación integral y comprometernos en el desarrollo de las audiencias preliminares preparatorias de la Audiencia Petrolera prevista para los días 3, 4 y 5 de agosto de 2007 en Bogotá.
3. Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la región que han sufrido los embates de gobierno, el paramilitarismo y los mercenarios del petróleo, mediante la apertura de espacios participativos de formación en Derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y de recuperación de la memoria histórica.
4. Acompañar a las comunidades indígenas en la recuperación de su cultura ancestral mediante el fortalecimiento de sus rituales espirituales, la recuperación de su medicina tradicional y de su cultura alimentaria.



5. Contribuir a una discusión abierta sobre la irracionalidad del actual modelo de explotación petrolera protagonizado por las empresas petroleras y a la conquista de la autonomía y la soberanía de los pueblos, donde el petróleo no sea motivo de destrucción y muerte.
6. Visibilizar la situación de departamentos afectados por el accionar de las transnacionales petroleras.
7. Trabajar por la implementación y el respeto al Plan de Vida elaborado por las organizaciones de Arauca como su proyecto de pervivencia, y generar respaldo internacional que permita su sostenibilidad.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Sesión Colombia, agradece el interés y la participación de un buen número de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales, venidas de distintos rincones de Colombia y de las organizaciones internacionales que desde Estados Unidos, Europa y América Latina acompañan este importante proceso de lucha contra la impunidad.

Hubiéramos querido contar con la asistencia de las autoridades civiles de la región (Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander), pero la ausencia visibilizó su poco interés en la defensa de los derechos humanos de la población y en este tribunal como instrumento de búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la política de las transnacionales y del estado en Colombia.

Organizaciones participantes:

Organizaciones Internacionales: Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Accion Permanente por la Paz. Coordinadora Simon Bolivar de Venezuela. Canal Vive – Prensa Nacional de Venezuela. Askapena Euskal – Solidaridad Vasca con los Pueblos. Colombia Solidarity Campang. Comunidad Indígena Kichea del Pueblo Sarayaku del Ecuador. Asociación Paz con Dignidad. Red de Derechos Humanos de Montana. Berlin Colombia Campang. Red Internacional de Revistas de la Calle- Argentina.

Organizaciones Nacionales: Organizaciones Sociales de Arauca (Aduc, Asojer, Coagrosarare, Asojuntas, Cut, Ascatidar, Amar). Fundación Comité de Derechos Humanos «Joel Sierra». Asociación Indígena U`wa -asou'was-. Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia. Oset. Red de Hermandad – Colombia. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos. «Sinaltrainal». Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria. «Cospacc». Comité de Integración Social del Catatumbo «Cisca», Comité Operativo del TPP Sesión Colombia. Organización Nacional Indígena de Colombia -ONICMUISCA. UPIC. Red Estudiantil Antorcha. Red Jade. Colectivos de Abogados Jose Alvear Restrepo. Semillero de Investigación de la Fundación Universitaria. Monserrate. Unión Sindical Obrera Uso. Corporación Sembrar. Censat. Instituto Nacional Sindical –INCOORDINADOR. Nacional Agrario -CNAESTUDIANTES de la Universidad del Sur Colombia.

Revista de información para el consumo consciente, en castellano y en catalán



REDES DE RESISTENCIA

CRIC - Pl. Molina 8, 1er - 08006 Barcelona- www.opcions.org - e-mail:cric@pangea.org



Crítica de libros, informes y webs

Libros

Sobrevivir al desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa

Raíces económicas del deterioro ecológico y social

webs

GEO Data Portal

Mapas de petróleo de Oilwatch

Earth trends. Environmental information

World Mapper. The world as you've never seen before

Informes

La situación de los refugiados en el mundo

Informe sobre urbanismo español del parlamento europeo



Sobrevivir al desarrollo.

De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa

SERGE LATOUCHE

Editado por: Icaria editorial

Año: 2007

Colección Más Madera

110 pp.

Título original: *Survivre au développement. Publicado en Francia en 2004*

Crítico del libro

SÍLVIA CAÑELLAS

Serge Latouche, conocido últimamente por su rol en la difusión del concepto de «decrecimiento», plantea en este libro las bases de la crítica al concepto de desarrollo y a una visión economicista del progreso y de las sociedades. Enmarcado en la corriente intelectual del «posdesarrollo», la tesis principal del libro es la necesidad de superar el mito del desarrollo, que ha servido de justificación para imponer un sistema que no ha llevado una mejora del bienestar en todo el mundo sino que ha profundizado las desigualdades.

Para lograr la «descolonización del imaginario económico», como reza el subtítulo, el autor hace un repaso del significado, discursivo y en la práctica, que ha tenido el concepto de desarrollo a lo largo de la historia. Empieza recordando el origen del concepto, que sitúa en un discurso del presidente de Estados Unidos Harry S. Truman en el año 1949, en el cual calificó a gran parte del mundo como subdesarrollado, señalando que en EEUU el desarrollo se produjo con el aumento de la producción, y vinculando la actividad industrial con el aumento del nivel de vida. Así se identifica la *modernización occidental* y la industrialización como el camino del desarrollo, que se pretende implantar en todos los nuevos estados salidos de la colonización.

Así pues, el libro trata de desmitificar el desarrollo, que se basa en el crecimiento económico. El argumento central parte del cuestionamiento radical de la noción de desarro-

llo; que el autor sostiene que es un punto clave que divide al movimiento de crítica al capitalismo y la globalización entre aquellos que intentan salvar lo positivo del concepto, y aquellos que argumentan que hay que rechazarlo. Latouche se coloca en el grupo de los segundos, e intenta convencer al lector de que los primeros están engañados por el mito, pero que no se corresponde con la realidad. Así, en el segundo capítulo el autor expone cuál es el significado de desarrollo «en teoría», y «en la práctica», señalando que a veces son significados casi antagónicos: mientras que en el discurso sobre desarrollo se habla de mejoras para toda la sociedad, de bienestar, derechos, respeto a la tradición, a la historia, etc; en la práctica el desarrollo implica dominación exterior, mayores desigualdades, romper con las raíces, etc.

Para superar estas contradicciones, bienintencionadamente se le ha añadido al desarrollo apellidos para demarcar qué tipo de desarrollo, en qué debe centrarse (desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo sostenible, y hasta desarrollo alternativo, etc.). Para el autor esto ha servido para intentar «salvar» el concepto a nivel de discurso, pero en la práctica no ha funcionado, y critica fuertemente estos conceptos. Para Latouche, además, la globalización conlleva un agravamiento de las desigualdades, que hace más difícil el mantenimiento del mito. El concepto de desarrollo ha quedado ya totalmente obsoleto



en los últimos años, incluso para organizaciones como el Banco Mundial y el FMI.

Concluye, pues, que el desarrollo es una impostura conceptual, por su pretensión universalista, y una impostura práctica, por sus contradicciones profundas. A lo largo del libro Latouche expone numerosos y relevantes ejemplos basados en su extenso conocimiento de África. Como colofón a la argumentación del libro el autor utiliza una frase de Vandana Shiva que resume lo que sucede en realidad: «Bajo la máscara del crecimiento se disimula, de hecho, la creación de la penuria» (p. 63).

El último capítulo se dedica a las propuestas, que consisten en «salir del desarrollo». Esta es la parte menos desarrollada del libro y seguramente requiere y merece

muchos otros libros y discusiones que permitan crear un discurso sólido. Para Latouche el posdesarrollo se dibuja distinto en el Norte y en el Sur, y a diferencia del resto del libro se centra ahora en el Norte. Plantea la necesidad de un *decrecimiento*, necesario por razones ambientales (los recursos son limitados) y por justicia social, y que no debe significar menos bienestar, sino al contrario. Las propuestas son sugerentes y los retos, grandes; sobre todo si pensamos en cuál puede ser el camino para la mejora de las vidas de aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Aún así, me quedo con la conclusión de Latouche: debemos «descolonizar el imaginario colectivo», que todavía cree que el crecimiento económico mejorará directamente el bienestar de todos, y deseconomizar nuestras vidas.



¿Todavía no conoces *Ecología Política*?

Rellena el formulario siguiente y envíalo a Icaria Editorial destinado a:
fax (+34 93 295 49 16), **correo electrónico** (icaria@icariaeditorial.com) o
correo postal (Icaria Editorial, Arc de Sant Cristòfol, 11-23 Barcelona 08003 España).

Te enviaremos gratuitamente un número de *Ecología Política*

Quiero recibir gratuitamente un ejemplar de *Ecología Política* para:

Nombre y apellidos

Documento de identidad

Dirección

Ciudad Código Postal País

E-mail Teléfono





Raíces económicas del deterioro ecológico y social Más allá de los dogmas

JOSÉ MANUEL NAREDO

Editado por: Siglo XXI de España Editores, S.A.

Año: 2006

Idioma: español

Edición Bolsillo

288 pp.

Crítico del libro

MIQUEL ORTEGA CERDÀ

José Manuel Naredo es desde hace años una autor referencia en el ámbito de la economía ecológica. En este libro, publicado recientemente, expone una vez más algunas de las irracionalidades propias de las tendencias económicas actuales y demuestra su capacidad de capturar los aspectos fundamentales de la relación entre economía y medio ambiente.

El texto se divide en dos partes, la primera estudia como la naturaleza ha sido tratada desde el punto de vista de los estudios económicos. Para ello explica, a partir de una aproximación histórica, cómo la teoría económica fue relegando la naturaleza al exterior de su ámbito de trabajo hasta el punto de prácticamente ignorarla en su núcleo central de estudio, y cómo a partir de esta situación aparecen dos tendencias, la economía ambiental y economía ecológica que actualmente conviven. Posteriormente explica las principales características de lo que él denomina «desarrollismo ecológico» basado en proyectar una «imagen verde» y en mantener la «mitología del crecimiento económico». En la tercera sección de la primera parte aporta una visión de los principales problemas económicos a partir de un análisis basado en los flujos de materiales y en la inequidad en la distribución de los mismos. Finalmente establece una discusión sobre el comercio y las finanzas como fuentes de deterioro ecológico.

En la segunda parte trata de explicar por qué no se llevan a cabo las propuestas necesarias para solventar algunos de los problemas detectados en la primera sección, e incorpora algunas de las ideas en que últimamente ha trabajado el autor. Para ello realiza una reflexión sobre los mecanismos que gobiernan la selección de las ideas y dan credibilidad a las actualmente hegemónicas, aunque sean altamente conflictivas desde la perspectiva ambiental.

Este libro es excelente para aquellas personas que han oído conceptos como flujo de materiales, economía ecológica, problemáticas de distribución, relaciones sistema financiero-medio ambiente, etc. y buscan un documento de referencia que les aporte un marco general de pensamiento. También es adecuado para los que, formados en el marco de estudios económicos tradicionales, sientan una inquietud en la manera en que se les educó en la temática de la relación entre economía medio ambiente; el libro seguro que les va a enriquecer gracias a la visión integrada y completa que da el autor. Es un libro en general para personas acostumbradas a leer informes o documentos de reflexión. Para obtener el máximo provecho requiere un cierto nivel de atención, pero aquellos que lo mantengan seguro que acabaran la lectura habiendo sido ampliamente enriquecidos.

Sobre el autor:

José Manuel Naredo (1942) es doctor en Ciencias Económicas, Diplomado de la Escuela Superior de Estadística y miembro del cuerpo superior de Estadísticos Facultativos del Estado. Cuenta con una larga experiencia en estudios macroeconómicos e investigaciones que combinan reflexiones de fondo sobre los fundamentos de la ciencia económica con análisis concretos sobre el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales y su relación con los recursos naturales. Es socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Asociación para el Estudio de los Recursos Naturales y Ambientales. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000. Es autor de numerosos libros y publicaciones en español.

Crítica de páginas web

En este número centraremos este apartado en cuatro webs donde se puede encontrar información ambiental y socio-política geo-referenciada, o cuanto menos presentada en mapas, que pensamos que puede ser de vuestro interés. En posteriores números iremos incorporando otras fuentes de referencia; si queréis hacer alguna propuesta os invitamos a enviar un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica.info.

GEO Data Portal:

<http://geodata.grid.unep.ch/>

Esta web, gestionada por el programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, es una fuente muy interesante para encontrar información ambiental a escala global. La base de datos contiene más de 450 variables (energía, emisiones de CO₂, población, agua, desplazados, etc.) de las cuales dispone información en mapas, bases de datos, etc. a escala nacional, regional, etc. Para algunas variables dispone series temporales largas. El software utilizado facilita la manipulación de la información sin ser un experto en gestión informática, aspecto este muy importante para el usuario no experto.

Mapas de petróleo de Oilwatch:

<http://www.oilwatch.org/>

Oilwatch es una red de resistencias a las actividades petroleras en los países tropicales. Entre sus numerosas actividades destaca el proyecto de mapas de petróleo accesible a través su web. El proyecto aporta numerosos mapas relacionadas con esta temática. Lo más novedoso es que sobre los mapas podemos encontrar información no únicamente reservas o instalaciones petroleras, sino también sobre conflictos y resistencias que se producen. El único «pero» a esta web es que con la finalidad de

facilitar la visita vía web la definición de los gráficos es baja. En todo caso es la web de referencia en este tipo de material gráfico y petróleo a escala global.

Earth trends. Environmental information

<http://earthtrends.wri.org/>

Esta web, gestionada por el World Resource Institute, dispone de cientos de mapas que cubren diversos ámbitos de interés: costas, recursos de agua, contaminación atmosférica, población y bienestar, energía y recursos energéticos, biodiversidad y áreas protegidas, agricultura y alimentación, usos del suelo, pobreza, etc. La web destaca por disponer tanto de excelente información mediante mapas como documentos de texto relacionados con las temáticas. Es una web de muy fácil uso.

World Mapper. The world as you've never seen before

<http://www.worldmapper.org/>

Worldmapper es un proyecto realizado por miembros de la Universidad de Sheffield y Michigan. Consiste en una colección de mapas donde los territorios son redimensionados de acuerdo con la temática tratada. En estos momentos se encuentran disponibles 366 mapas, que cubren aspectos diversos entre los cuales encontramos algunos de tipo ambiental (usos del suelo, desastres ambientales, contaminación, explotación de recursos, huella ecológica, etc) así como económicos o sociales (pobreza, vivienda, educación, etc). Además de poder encontrar esta interesante información existe la posibilidad de generar automáticamente la información en formato póster (en .pdf), en estos casos junto al mapa se adjunta información estadística e información complementaria. La representación gráfica utilizada es especialmente útil para usos pedagógicos.

Crítica de informes



La situación de los refugiados en el mundo Desplazamientos humanos en el nuevo milenio

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)

Editado por: Icaria editorial

Año: diciembre 2006

Idioma: español

238 pp.

Crítico del informe

ICARIA EDITORIAL

La situación de los refugiados en el mundo: desplazamientos humanos en el nuevo milenio (2006) ofrece una visión general de recientes episodios cruciales relacionados con desplazamientos internos y fronterizos de personas en todo el mundo. Producido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el libro se centra en hechos acaecidos desde la última edición (2000).

En los últimos años hemos asistido a una disminución del número de refugiados, debida en parte a regresos a gran escala en países como Afganistán y Angola. No obstante, en la mayoría de las situaciones los refugiados siguen siendo de larga duración y sin tener perspectivas de solución duradera a la vista, como en el caso de los butaneses en Nepal, los saharauis en Argelia o los somalíes en varios países. Aunque la cifra de refugiados ha bajado, el número de desplazados dentro del propio país ha aumentado espectacularmente, por ejemplo en Colombia y Sudán. Al mismo tiempo, la protección internacional a los refugiados se ha visto debilitada por ciertas respuestas al cada vez más complejo nexo entre asilo y migraciones.

Este libro aborda críticamente la cambiante dinámica del desplazamiento forzoso y los desafíos afrontados por los países afectados y la comunidad internacional. De manera más específica, analiza hechos clave en las políticas y las

prácticas de asilo, busca soluciones realistas a las situaciones de refugiados de larga duración, examina de nuevo los debates sobre soluciones duraderas, y evalúa respuestas al desplazamiento interno.

Además de analizar cuestiones políticas relativas a los refugiados, los retornados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los apátridas, el libro incluye una gran cantidad de mapas, gráficos y tablas estadísticas.

En la temática de desplazados ambientales se puede encontrar alguna información de cómo se relacionan los conflictos armados con la obtención de los recursos naturales y éstos acaban produciendo desplazados. En el informe aparece como ejemplo el caso de la República Democrática del Congo y la lucha por el control de la minería.

El informe también incorpora un apartado breve dedicado a los desastres naturales y medioambientales, y otro a lo que el informe llama «desplazamientos inducidos por el desarrollo» y que probablemente debería haber llamado «desplazamientos inducidos por las megainfraestructuras».

El informe no está dedicado a los desplazados ambientales y por tanto éstos no ocupan un apartado central en el mismo, no obstante aporta valiosa información para todas las personas preocupadas por la problemática de los desplazados, sea cual sea su origen.



Urbanismo:

Documento de trabajo sobre la misión de investigación en Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía

Autor: Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Fecha de edición: 28 de marzo de 2007

26 pp

Crítica del informe

MARTA JOFRA SORA*

Este informe es el resultado de la misión de investigación que una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizó en España entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2007.

La visita no era la primera que realizaba la Comisión, y resultaba del alud de peticiones que recibió la Comisión por parte de grupos de ciudadanos afectados por el desarrollo urbanístico desenfrenado que está teniendo lugar en España (sobretudo en las comunidades costeras) en los últimos años; lo que la comisión bautiza como «enladrillamiento del litoral».

El objetivo de la visita no era otro que evaluar las peticiones recibidas y encontrarse con los responsables políticos de urbanismo de diversas localidades, así como de las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Andalucía, y del Gobierno Central.

La principal preocupación de la Comisión en referencia a este asunto es el poco respeto que se guarda en España a la propiedad privada y a las normas ambientales comunitarias, así como las irregularidades en la contratación pública en materia de urbanismo. Periódicamente salen a la luz escándalos relacionados con estas temáticas en los medios de comunicación (el caso reciente más flagrante es el del municipio de Marbella, en el que hasta 40 cargos políticos están imputados por corrupción urbanística).

Resultan flagrantes los casos citados en el documento, que principalmente hacen referencia a la vulneración del derecho de propiedad privada que sufren millares de ciudada-

nos (españoles y comunitarios) en España, que ven como su propiedad es arrasada sin aviso previo para la construcción de una promoción inmobiliaria, sin una justificación clara de utilidad pública y teniendo que asumir además el mismo propietario unos costes de urbanización excesivos.

Según la Comisión, «en ningún otro país de la Unión Europea se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos». Las razones que subyacerían a esta situación, según la Comisión, habría que buscarlas en la excesiva autonomía competencial de los ayuntamientos en materia de urbanismo, en el marco legal autonómico y la supervisión (o falta de supervisión, en este caso) de los planes urbanísticos por parte de las Comunidades Autónomas, y en la falta de observancia de la legislación comunitaria por parte del Gobierno estatal.

Un documento que vale la pena leer y que contiene datos tan interesantes como éste: «entre un 15 y un 20% de los municipios que componen la Comunidad Valenciana ha experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva, muchos de los cuales se han visto asociados a denuncias de corrupción durante los últimos años».

El informe se puede descargar de:

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551es.pdf

* *Secretariado técnico de la revista (secretariado@ecologiapolitica.info).*



ENTIDADES COLABORADORAS Y ORGANIZACIONES - FINANCIADORAS DE LA REVISTA

La revista Ecología Política quiere ampliar su difusión entre organizaciones y movimientos sociales, para así conseguir llegar a un público más amplio. Al mismo tiempo la revista espera ser un canal de difusión que permita apoyar a los colectivos y movimientos sociales interesados en «ecología política».

Por ello hemos creado la figura de ENTIDAD COLABORADORA DE LA REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA. Mediante esta figura las entidades colaboradoras se comprometen a distribuir la revista para todas las personas que estén interesadas y a cambio consiguen revistas a un precio reducido para su posterior distribución.

Si estáis interesados buscad información más detallada en www.ecologiapolitica.info o escribid un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica.info

ENTIDADES COLABORADORAS



CENSAT Agua Viva
<http://www.censat-org/>
Diagonal 24, nº 27 A-42 - Bogotá - Colombia



GOB, Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturaleza
<http://www.gobmallorca.com/>
Manuel Sanchis Guarner, 10 bajos, 07004 Palma de Mallorca - Mallorca - España



Gaia, grupo de Acção e Invenção Ambiental
<http://gaia.org.pt>
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL
- Edifício Departamental - sala 120. Quinta da Torre - 2829-516 Caparica - Almada, Portugal



Ent, medio ambiente y gestión
<http://www.ent-consulting.com>
C/Pàdua num, 31, baixos dreta. - 08800 - Vilanova i la Geltrú. España



Observatori del deute en la Globalització
<http://www.observatoriodedeuda.org>
C/Colom, 114. Edifici Vapor Universitari
08222-Terrassa - España



Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción
Calle Nicandro González Borges, nº 3,
38300 La Orotava
Islas Canarias. España



Veterinarios sin fronteras
<http://www.veterinariossinfronteras.org>
España



Xarxa de Consum Solidari
<http://www.xarxaconsum.net>
Pl. Sant Agustí Vell, 15 08003 Barcelona. España



Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
<http://www.coamb.org>
Av. Portal de l'Àngel 7, 4t Despatx
S/U 08002 Barcelona. España



Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
<http://www.olca.cl>
Providencia 365. Of. 41. Santiago, Chile



Ekologistak Martxan
<http://www.ekologistakmartxan.org/>
Ekoetxea c/ pelota 5, bajo. 48005.
Bilbao

ENTIDADES FINANCIADORAS DE LA REVISTA

Junto a los ingresos obtenidos por la venta de la revista Ecología Política cuenta también con un conjunto de organizaciones que la apoyan financieramente de manera puntual o regular.



Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès - Cataluña. España
<http://www.santcugatobert.net/>



Ministerio de cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades en España



Si todavía no estás suscrito a *Ecología Política*...

Puedes suscribirte desde la página web: <http://www.icariaeditorial.com/comprar.php>

o bien rellenando esta boleta y enviándola a Icaria Editorial por:

fax (+34 93 295 49 16), correo electrónico (icaria@icariaeditorial.com) o

correo postal (Icaria Editorial, Arc de Sant Cristòfol, 11-23 Barcelona 08003 España).

Suscripción anual 2 números

Nombre y apellidos

Documento de identidad

Dirección

Ciudad Código Postal País

E-mail Teléfono

Deseo suscribirme a dos números de *Ecología Política* por el importe de

España	22 €
Europa	25 €
Resto	30 €

Opciones de pago:

Contrarrembolso (sólo en España, gastos adicionales de correos: 3 €)

Envío talón bancario a Icaria Editorial
Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona

Tarjeta Visa N° tarjeta Fecha caducidad (Firma)
----- / -----

Transferencia bancaria BANCO POPULAR Entidad Oficina DC N° cuenta
0075 0002 20 0604486851

Envíe el resguardo de pago por fax al (+34) 93 317 82 42

Domiciliación bancaria

N° cuenta -----

Titular

Banco

Oficina n°

Dirección

Ciudad y CP

Señores: les agradeceré que con cargo a mi cuenta atiendan, hasta nueva orden, los recibos que Icaria les presentará para el pago de mi suscripción a los cuadernos *Ecología Política*

(Fecha y firma)

Si ya eres suscriptor...

Suscribe a un amigo tuyo y te obsequiamos con un libro*:

Nombre y apellidos

Deseo ordenar una suscripción a 2 números de *Ecología Política* para:

Nombre y apellidos

Documento de identidad

Dirección

Ciudad Código Postal País

E-mail Teléfono

Opciones de pago:

Contrarrembolso (sólo en España, gastos adicionales de correos: 3 €)

Envío talón bancario a Icaria Editorial
Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona

Tarjeta Visa N° tarjeta Fecha caducidad (Firma)
----- / -----

Transferencia bancaria BANCO POPULAR Entidad Oficina DC N° cuenta
0075 0002 20 0604486851

Envíe el resguardo de pago por fax al (+34) 93 317 82 42

Domiciliación bancaria

N° cuenta -----

Titular

Banco

Oficina n°

Dirección

Ciudad y CP

Señores: les agradeceré que con cargo a mi cuenta atiendan, hasta nueva orden, los recibos que Icaria les presentará para el pago de mi suscripción a los cuadernos *Ecología Política*

(Fecha y firma)

Por favor envíen el libro obsequiado a Mí mismo Mí amigo

*Promoción válida hasta el 31/12/2007. Seleccione un ejemplar entre los siguientes:

- Ética ecológica. Propuestas para una reorientación. JORGE RIECHAMANN.
- La ciencia posnormal. Ciencia con la gente. SILVIO O. FUNTOWICZ, JEROME R. RAVETZ.
- La semilla del futuro. La agricultura explicada a los ciudadanos. JOSÉ BOVÉ, FRANÇOIS DUFOUR.
- Las guerras del agua. Contaminación, privatización y negocio. VANDANA SHIVA.

